Memoria Académica
compartimos lo que sabemos
UNLP-FaHCE

Melón, Daiana

Estado, conflictos y resistencias socioterritoriales. El caso de los proyectos hidroeléctricos Garabí-Panambí e Inambari en el marco de IIRSA y de la expansión regional de Brasil (2003-2011)

Tesis presentada para la obtención del grado de Doctora en Ciencias Sociales

Director: Kan, Julián. Codirector: Féliz, Mariano

Melón, D. (2022). Estado, conflictos y resistencias socioterritoriales. El caso de los proyectos hidroeléctricos Garabí-Panambí e Inambari en el marco de IIRSA y de la expansión regional de Brasil (2003-2011). Tesis de posgrado. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.2307/te.2307.pdf

Información adicional en **www.memoria.fahce.unlp.edu.ar**

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

FAHCE
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Universidad Nacional de La Plata

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Secretaría de Posgrado

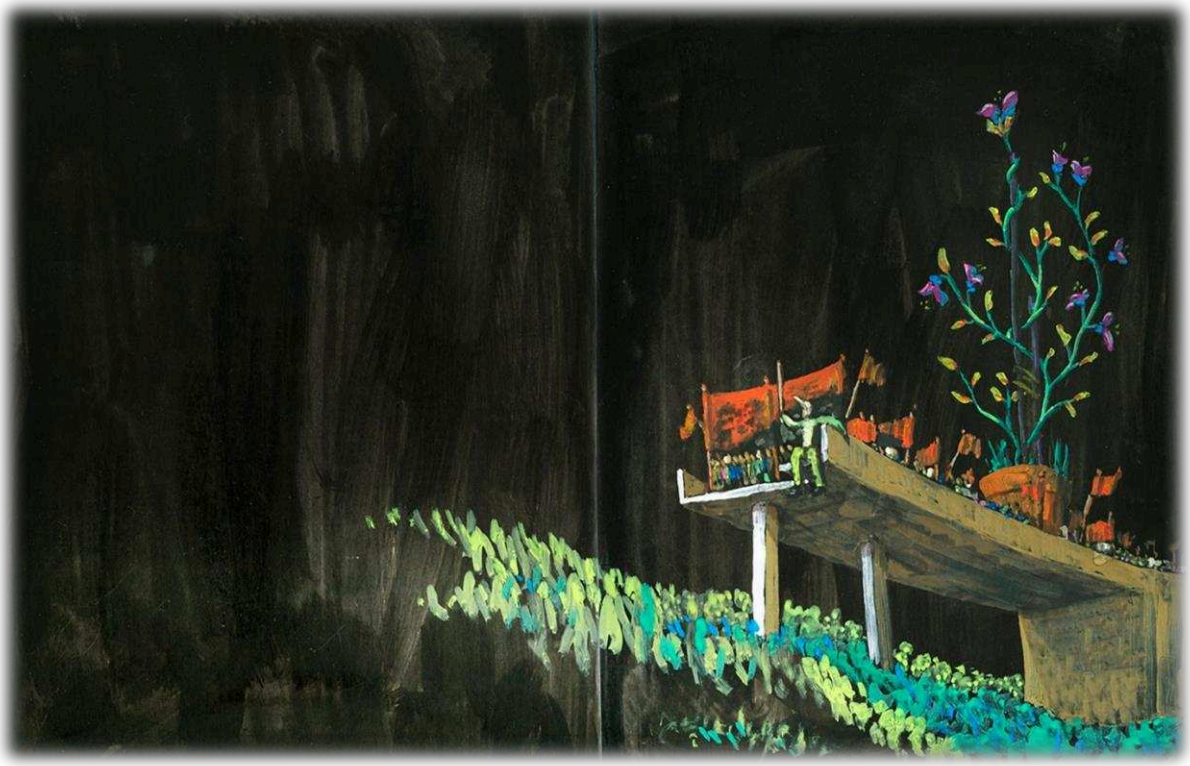
Estado, conflictos y resistencias socioterritoriales. El caso de los proyectos hidroeléctricos Garabí-Panambí e Inambari en el marco de IIRSA y de la expansión regional de Brasil (2003-2011)

Lic. Daiana E. Melón

Tesis para optar por el grado de Doctora en Ciencias Sociales

Director: Dr. Julián Kan
Co-director: Dr. Mariano Féliz

La Plata, de 2022



Descubrí lo que era la IIRSA en un encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) que se realizó en Santiago del Estero en el 2010. Allí aprendí las principales características de este "proyecto de integración", las consecuencias que acarrearía y las resistencias que se estaban tejiendo en los territorios. Ese espacio ha sido uno de los más formadores de mi experiencia como militante y, también, como parte de la comunidad científica. En mi opinión, si el quehacer científico no busca aportar herramientas a la transformación social carece de sentido. Nuestras preguntas de investigación son colectivas, políticas, y todo el proceso de producción de saberes también lo es. Por lo tanto, esta tesis está dedicada a todas aquellas personas que transforman la realidad, resisten en los territorios, ponen su cuerpo delante de las topadoras que habilitan el avance de la frontera agrícola o ante los camiones de las empresas mineras o hidrocarburíferas; aquellas personas que defienden comunidades, humedales, fuentes de agua y territorios. Muchas de ellas me formaron, acompañaron y enseñaron en este proceso y sin ellas esta tesis -y yo misma- no seríamos lo que somos.

Gracias por su alegre rebeldía.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS.....6
RESUMEN.....7
GLOSARIO DE SIGLAS.....10
INTRODUCCIÓN.....12
1. La llegada al tema de Investigación.....14
2. Estructura de la tesis.....15
CAPÍTULO 1. ENCUADRE TEÓRICO-METODOLÓGICO.....17
1. Encuadre metodológico.....19
2. Categorías de análisis.....26
2.1. Capitalismo, dependencia y sistema-mundo.....27
2.1.1. La relación centro-periferia.....28
2.1.2. La noción de Subimperialismo.....35
2.2. Dimensiones de las Relaciones Internacionales y de la Integración Regional.....37
2.2.1. Hegemonía, relaciones internacionales y orden mundial.....38
2.2.2. Regionalismos y liderazgos en disputa.....41
2.3. El Estado Capitalista.....44
2.3.1. El Estado en el centro.....44
2.3.2. El Estado en el contexto de la globalización.....49
2.3.3. El Estado en América Latina.....52
2.4. Territorio y Movimientos Socioterritoriales.....54
2.4.1. Territorio y espacio.....55
2.4.2. Flujos y redes transnacionales.....57
2.4.3. Conflictividad territorial.....58
2.4.4. Movimientos Socioterritoriales.....60
3. Para resumir.....60
CAPÍTULO 2. LA CONSTRUCCIÓN DEL GIGANTE SUDAMERICANO.....67
1. El Estado brasileño: bloque en el poder, dependencia y subimperialismo.....69
1.1. Del Estado nacional-desarrollista al logístico.....70
2. Genealogía de la política subimperial en Brasil.....76
2.1. El Golpe y un nuevo pacto de élites.....77
3. Democratización y neoliberalismo.....85

4. El modelo de desarrollo del PT: continuidades y rupturas.....90
4.1. El Estado como motor de la transnacionalización.....92
5. La política externa durante los gobiernos de Lula.....100
5.1. La imposición de la corriente autonomista.....100
5.2. Brasil como actor global.....104
5.2.1. Alianzas Sur-Sur.....105
5.2.2. La relación con China.....108
5.2.3. Estados Unidos: cooperación antagónica.....112
5.3. La mirada puesta en Sudamérica.....114
5.3.1. MERCOSUR.....117
5.3.2. De CSN a UNASUR.....118
6. Para resumir.....121
CAPÍTULO 3. LA EXPANSIÓN REGIONAL DESDE ARRIBA.....123
1. La infraestructura en el centro.....125
2. El nacimiento de la IIRSA-COSIPLAN.....128
2.1. Ejes de integración y Desarrollo.....131
2.2. Fuentes de financiamiento.....136
2.3. La IIRSA bajo la órbita de UNASUR.....138
3. Brasil y la IIRSA.....141
3.1. EIDs que atraviesan Brasil.....144
3.1.1. Amazonas.....145
3.1.2. Capricornio.....147
3.1.3. Escudo Guayanés.....150
3.1.4. Hidrovía Paraná-Paraguay.....152
3.1.5. Interoceánico Central.....154
3.1.6. MERCOSUR-Chile.....156
3.1.7. Perú-Bolivia-Brasil.....158
3.2. Financiamiento brasileño de la infraestructura.....160
4. Bloque en el poder: las empresas de ingeniería.....163
5. Para resumir.....168
CAPÍTULO 4. LA DIMENSIÓN ENERGÉTICA EN EL PROYECTO DE DESARROLLO BRASILEÑO.....171

1. La energía como uno de los motores del capitalismo……173
1.1. La apuesta por la energía hidroeléctrica……176
2. Proyectos de infraestructura energética en el marco de IIRSA……178
3. El rol de la energía en el proyecto de desarrollo nacional brasileño……181
3.1. El proceso de expansión de Eletrobras……182
4. Central hidroeléctrica Inambari……185
4.1. Características del proyecto……186
4.2. Genealogía del caso……193
5. Central Garabí-Panambí……206
5.1. Características del proyecto……206
5.2. Genealogía del caso……212
6. Para resumir……218
CAPÍTULO 5. LAS RESISTENCIAS DESDE ABAJO……222
1. Territorialidades en disputa en el marco de proyectos de infraestructura……223
2. Genealogía de la resistencia socioterritorial……226
2.1. Una historia signada por la lucha contra represas……227
2.2. Conflictividades territoriales en Madre de Dios, Cusco y Puno……232
3. Aquellxs que luchan……237
3.1. La lucha en ambas orillas……237
3.2. La articulación ante Inambari……242
4. Repertorios de acción colectiva……247
4.1. Ríos libres de represas……247
4.2. Lucha nacional contra represas……255
5. Para resumir……262
REFLEXIONES FINALES……268
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……276

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, quiero agradecerle a la Universidad Nacional de La Plata. No sólo por el financiamiento, sino también por convertirse en una segunda casa todos estos años. A lxs docentes del Doctorado en Ciencias Sociales por la formación.

A mis directores, Julián y Mariano, por el acompañamiento de todo este tiempo y nutrir las miradas en torno al tema.

A Álvaro Álvarez, por la solidaridad, el trabajo conjunto y por acompañar gran parte de este proceso.

A Amanda Barrenengoa, por las lecturas comprometidas, el compañerismo y el intercambio permanente.

A Martín Urtasun y Leandro Urquiza por las correcciones en los resúmenes. A Victoria Pasero por los grandes aportes en la etapa final.

A Chempes, por la hermosa ilustración que acompaña la dedicatoria.

A mis compañerxs de militancia, por aportar debates y construir esperanza.

A lxs radionauticxs, por las risas de cada miércoles y la inyección de harina y energía.

A mis compañerxs de Tinta Verde, por acompañarme a descubrir mundos y realidades. En especial a Flor, quien ha sabido ser amiga, compañera y maestra.

A mis compañerxs del Centro de Investigaciones Geográficas. En especial a lxs que se convirtieron en amigxs, Chris, Ali, Viole, Juli, Lucha y Mari, por los almuerzos en familia, los juegos de tiro al blanco y por reactualizar permanentemente la palabra compañerismo.

A mis amigxs. En especial a Alfon, De, Lean, Lu, Luci, Mari, Mechi y Sabri, quienes, a pesar de habitar mundos distintos, supieron tender puentes y acompañarme en este proceso.

A Tita Perales, por su silenciosa compañía y su ronroneo casual.

Al Tío Delmiro, por su amor áspero y su risa permanente.

A mi hermana, Gise, por ser amiga, compañera y oyente, por creer más en mí de lo que yo misma creo.

A mis viejos, Susi y Abel, por enseñarme las cosas más importantes de la vida, de esas que no se aprenden en una Universidad.

RESUMEN

En esta investigación, analizamos los intereses del Estado brasileño en el impulso a la infraestructura física sudamericana durante el período de gobierno de Lula da Silva (2003-2011), a partir de retomar los proyectos de construcción de represas hidroeléctricas Garabí-Panambí (sobre el río Uruguay, en Misiones y Corrientes, Argentina, y en Río Grande do Sul, en Brasil) e Inambari (en la región de Madre de Dios Cusco y Puno, en Perú). A su vez, indagamos en los conflictos y resistencias socioterritoriales que se dieron en los lugares donde estas obras se emplazarían.

En esta tesis pretendemos aportar a las investigaciones que buscan vincular la dimensión de la integración regional, con la política externa y el bloque en el poder. Además, buscamos contribuir a los estudios en torno a proyectos de infraestructura a gran escala, su conexión con los flujos y las cadenas globales de producción y valor, y las luchas que se tejen en los territorios ante las múltiples territorialidades en pugna.

Para ello, desarrollamos una investigación de tipo cualitativo, aplicando una estrategia de triangulación, en la que articulamos algunas teorías, métodos y fuentes de investigación. En el marco de este encuadre metodológico, realizamos, por un lado, una recopilación y análisis de documentos y fuentes oficiales con el objetivo de reponer los intereses del Estado brasileño en la integración de la infraestructura y, en especial, detrás del avance de nuestros casos de estudio, y su estrategia subimperialista y de expansión en la región sudamericana. Por otro lado, para reponer las resistencias y los conflictos socioterritoriales, llevamos adelante entrevistas en profundidad a algunas personas que integraron los movimientos sociales que lucharon contra estos proyectos.

PALABRAS CLAVE

Integración sudamericana – Estado Brasileño – IIRSA – Resistencias Socioterritoriales – Bloque en el poder

ABSTRACT

In this research, we analyse the interests of the Brazilian state in the promotion of South American physical infrastructure during the period of Lula da Silva's government (2003-2011), starting with the construction projects of the Garabí-Panambí hydroelectric dams (on the Uruguay River, in Misiones and Corrientes, Argentina, and in Rio Grande do Sul, Brazil) and Inambari (in Madre de Dios Cusco and Puno regions, in Peru). At the same time, we investigate the socio-territorial conflicts and resistance that took place in the areas where these works were to be located.

In this thesis we aim to contribute to a research that seeks to link the dimension of regional integration with foreign policy and the bloc in power. In addition, we seek to contribute to studies on large-scale infrastructure projects, their connection with global production and value chains and flows, and the struggles that are woven in the territories in the face of multiple competing territorialities.

To this end, we developed a qualitative type of research, applying a strategy of triangulation, in which we articulated a number of theories, methods and research sources. Within this methodological framework, we carried out, on the one hand, a compilation and analysis of documents and official sources with the aim of reconstructing the interests of the Brazilian state in the integration of infrastructure and, in particular, in particular, based on the advance of our case of studies, and its sub-imperialist strategy of expansion in the South American region. On the other hand, in order to recount resistance and socio-territorial conflicts, we conducted in-depth interviews with some of the people who were part of the social movements that fought against these projects.

KEY WORDS

South American integration – Brazilian State – IIRSA – Socio-territorial resistances – Bloc in power

RESUMO

Nesta investigação, analisamos os interesses do Estado brasileiro na promoção de infra-estruturas físicas sul-americanas durante o período do governo do Lula da Silva (2003-2011), começando com os projectos de construção das barragens hidrelétricas Garabí-Panambí (no rio Uruguai, em Misiones e Corrientes, Argentina, e no Rio Grande do Sul, Brasil) e Inambari (nas regiões de Madre de Dios Cusco e Puno, no Peru). Ao mesmo tempo, investigamos os conflitos sócio-territoriais e a resistência que tiveram lugar nos locais onde estas obras iriam ser localizadas.

Nesta tese nós pretendemos contribuir para estudos que procuram ligar a dimensão da integração regional à política externa e ao bloco no poder. Além disso, procuramos contribuir para estudos sobre projectos de infraestruturas de grande escala, a sua ligação com a produção global e as cadeias e fluxos de valor, assim como as lutas que são tecidas nos territórios face às múltiplas territorialidades em disputa.

Para isso, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa aplicando uma estratégia de triangulação, na qual articulamos uma série de teorias, métodos e fontes de investigação. Neste quadro metodológico, realizamos, em primeiro lugar, uma compilação e análise de documentos e fontes oficiais com o objetivo de reconstruir os interesses do Estado brasileiro na integração da infraestrutura e, em particular, no andamento dos casos que são nosso objeto de estudo, e da sua estratégia subimperialista de expansão na região da América do Sul. Por outro lado, a fim de recuperar a resistência e os conflitos sócio-territoriais, realizamos entrevistas em profundidade com algumas das pessoas que fizeram parte dos movimentos sociais que lutaram contra esses projetos.

PALAVRAS CHAVE

Integração sul-americana – Estado brasileiro – IIRSA – Resistências sócio-territoriais – Bloco no poder

GLOSARIO DE SIGLAS

Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial (ABDI)

Agencia Estatal de Promoción de Exportaciones e Inversiones (APEX)

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)

Alianza Renovadora Nacional (ARENA)

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)

Área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA)

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio de América Latina y el Caribe (ALALC)

Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

Banco de Desarrollo Económico y Social (BNDES)

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Brasil, Rusia, India y China (BRIC)

Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS)

Cámara de Comercio Exterior (CAMEX)

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras)

Centrais Eléctricas do Sul S.A. (ELETROSUL)

Central Única de los Trabajadores (CUT)

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)

Confederación Nacional de Agricultura (CNA)

Confederación Nacional de Industria (CNI)

Confederación Nacional de Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares (CONTAG)

Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC)

Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CNDI)

Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN)

Corporación Andina de Fomento (CAF)

Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR)

Emprendimientos Energéticos Binacionales (EBISA)

Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C (EGASUR)

Enfoque Estratégico Relacional (EER)

Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP)

Federación de Industrias del Estado de Río de Janeiro (FIRJAN)

Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)

Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM)

Grupo de los 20 (G-20)

IBSA (India, Brasil y Sudáfrica)

Inambari Geração de Energia (IGESA)

Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)

Inversión Extranjera Directa (IED)

Mercado Común del Sur (MERCOSUR)

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MDIC)

Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH)

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST)

Movimiento Democrático Brasileño (MDB)

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

Organización Mundial de Comercio (OMC)

Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB)

Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB)

Partido de los Trabajadores (PT)

Partido Democrático Social (PDS)

Partido Progresista (PP)

Política de Desarrollo Productivo (PDP)

Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE)

Producto Interno Bruto (PIB)

Programa de Financiamiento a la Exportación (PROEX)

Programa Brasil Mayor (PBM)

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC)

Sociedad Civil por la Construcción de la Interoceánica (SOCIT)

Reunión de Presidentes de América del Sur (IRPAS)

Teorías de la Dependencia (TD)

Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)

INTRODUCCIÓN

El problema de investigación de la tesis está centrado en la promoción de la infraestructura física sudamericana, en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), durante los primeros años del Siglo XXI. Particularmente, abordamos los intereses del Estado brasileño en el impulso dado a dicha infraestructura en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (entre 2003-2011) y las resistencias socioterritoriales a partir del estudio de dos casos: los proyectos hidroeléctricos de Garabí-Panambí (el cual se emplazaría sobre el río Uruguay, en Misiones y Corrientes, Argentina, y en Río Grande do Sul, Brasil) e Inambari (que se ubicaría en la región de Madre de Dios, Cusco y Puno, en Perú).

El punto de partida desde el cual pensamos el problema de investigación surgió a partir de dos interrogantes. En primer lugar, nos planteamos la pregunta en torno a los motivos por los que el Estado brasileño apostó a la integración de la infraestructura física en Sudamérica. En segundo lugar, quisimos indagar sobre cómo se desarrollaron las resistencias y los conflictos socioterritoriales vinculados al intento de avance de estas obras.

Frente a estas preguntas, dividimos al objetivo general en dos núcleos. Por un lado, nos planteamos analizar la relación existente entre la política exterior brasileña para América del Sur con la conformación del bloque en el poder (Poulantzas, 1978) -concepto que abordaremos en el siguiente capítulo- durante el período de estudio. En este marco, nos interesó profundizar en el impulso dado desde el Estado brasileño a la IIRSA, tomando los dos casos de estudio, indagando en torno a la estrategia subimperialista implementada por Brasil y las clases y fracciones de clase que buscó favorecer con el avance de estas obras. Por otro lado, para responder al segundo interrogante, nos propusimos analizar las resistencias de los movimientos socioterritoriales para frenar los procesos de avance de estos proyectos y la territorialización capitalista sobre estos espacios geográficos.

Para llevar adelante los objetivos planteados, realizamos una investigación cualitativa, llevando adelante una triangulación entre múltiples teorías, herramientas metodológicas y fuentes de análisis. El primer punto de este trabajo, fue reconocer las escalas que atraviesan nuestro objeto de estudio y determinar las categorías de análisis necesarias para el análisis.

A su vez, entendimos que el abordaje del problema debía ser tomado a partir de dos dimensiones centrales. Por un lado, las estrategias desarrolladas "desde arriba" para promover la integración de la infraestructura, teniendo en cuenta los sectores involucrados en la determinación de estas estrategias, es decir, el Estado brasileño, las empresas de ingeniería que fueron parte del frente neodesarrollista (Berringer, 2015) durante nuestro período de estudio, las compañías energéticas y las instituciones financieras internacionales involucradas en la IIRSA. Por otro lado, las motivaciones de las resistencias "desde abajo", que buscaron bloquear el avance de estos proyectos y las transformaciones socioterritoriales que llevarían adelante.

Algunas anticipaciones de sentido guiaron el desarrollo de esta tesis. Por un lado, considerar que la política exterior brasileña para Sudamérica, durante este período, tuvo como objetivo favorecer la transnacionalización de algunas empresas de ingeniería y de energía, valiéndose de los recursos del subcontinente y de establecer una división regional del trabajo al servicio de sus intereses. A su vez, que esta política se encontraba ligada al proyecto de desarrollo nacional de Brasil y a su intención de posicionarse como un actor de peso global.

Por otro lado, otra de las anticipaciones de sentido fue considerar que el avance de esta política subimperalista de Brasil no se llevó adelante sin resistencias por parte de las comunidades que se verían afectadas ante el impulso de estas obras de infraestructura física. Estos sectores sociales, a su vez, pusieron en cuestión las ideas de desarrollo e integración propuestas en la IIRSA.

A su vez, consideramos que es central cuestionar y analizar el modelo de regionalismo propuesto por la IIRSA. Si bien durante este período existieron algunas instancias de integración, como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que buscaron promover otro tipo de integración, entendemos que la IIRSA profundizó un modelo basado en el regionalismo abierto, impulsado décadas anteriores desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y centrado en el plano comercial.

Por otra parte, si bien reconocemos que el Estado posee una selectividad estructural (Poulantzas, 1978) que tiende a favorecer los intereses de algunas clases o fracciones de clase, consideramos que este posee una autonomía relativa, es decir, que no es un mero instrumento de las clases dominantes. Por eso se constituye como un espacio de disputa.

En este marco, la relación que se establece entre el Estado y los movimientos socioterritoriales es dialéctica y conflictiva.

1. LA LLEGADA AL TEMA DE INVESTIGACIÓN

Tal como planteamos en la dedicatoria de la tesis, el acercamiento a la temática de la IIRSA se dio durante un encuentro de la Unión de Asambleas de Comunidades[1] llevado adelante en Santiago del Estero, Argentina, en el 2010. Allí, se realizó un taller informativo sobre lo que implicaba este proyecto de integración, en un marco de desconocimiento generalizado y en un momento en el cual se empezaban a impulsar las primeras de obras de infraestructura física de la IIRSA.

En este taller, comunidades y asambleas socioambientales de diferentes puntos de Argentina, empezaron a plantear sus dudas e inquietudes alrededor de algunos proyectos y a la ligazón de estos con el avance del extractivismo tanto en Argentina, como en la región sudamericana. No sólo se trataba sólo de cuestionar la reconfiguración territorial que suponían las obras, sino también el modelo de desarrollo subyacente en la Iniciativa.

Tras este encuentro, nos surgió la inquietud de recabar más información en torno a la IIRSA y a las obras que se estaban impulsando. A medida que fuimos construyendo nuestro referente empírico, empezamos a ver cómo la temática se complejizaba más allá de la iniciativa. Se planteaba necesario entender el rol de Brasil en el avance de algunos proyectos y en la promoción de la integración de la infraestructura, las motivaciones de las instituciones financieras internacionales involucradas -el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF, actualmente conocido como Banco de Desarrollo de América Latina) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA)-, la participación de los Estados nacionales y la conexión con otras instancias regionales.

Para ese momento, el Comité Coordinador de la IIRSA recientemente había sido transferido desde el comando de las instituciones financieras hacia la órbita del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN) de UNASUR. Por ello, existían algunas dudas en torno a cómo este traslado impactaría en el planteo de las obras a realizarse en el marco de la IIRSA. Sin embargo, los proyectos delineados en años anteriores fueron mantenidos por el COSIPLAN.

[1] En ese momento, el nombre de este espacio era Unión de Asambleas Ciudadanas, pero, en 2019, cambió su nombre.

Por otro lado, el llamado *boom de las commodities*, es decir, el aumento de los precios y de la demanda de algunos productos primarios por los mercados internacionales, había comenzado un proceso de retroceso y retraimiento. Esta situación implicaba la menor disponibilidad de divisas por parte de algunos países de la región sudamericana.

Asimismo, desde nuestra llegada al tema de investigación hasta la actualidad, tanto la situación política-económica regional como la política de integración del subcontinente han sufrido grandes transformaciones. En primer lugar, a partir de 2015, se dio en la región un giro a la derecha, ante la victoria de algunos candidatos que impulsaban modelos alejados del neodesarrollismo de los años precedentes. En segundo lugar, tras la partida de seis países de la UNASUR, en 2017, esta se encuentra detenida y queda un interrogante en torno a cómo continuará el avance de la integración de la infraestructura.

2. ESTRUCTURA DE LA TESIS

Esta tesis está compuesta de cinco capítulos. En el capítulo 1, titulado *Encuadre teórico-metodológico*, consignamos las decisiones tomadas y los procesos desarrollados para la construcción del marco utilizado para poner las teorías de interpretación en acción y conectarlas con los métodos de recolección y el análisis de los materiales y fuentes. A su vez, recuperamos las categorías de análisis seleccionadas a fin de comprender las múltiples escalas implicadas en nuestro problema de investigación.

En el segundo capítulo, *La construcción del gigante sudamericano*, abordamos cómo se impulsó y desarrolló la estrategia subimperialista en Brasil, haciendo foco en la profundización de la misma a lo largo del período de gobierno de Lula da Silva. A su vez, analizamos cómo se fue reconfigurando el Estado brasileño, retomando el concepto de bloque en el poder, de Nicos Poulantzas (1978), para comprender las clases o fracciones de clase que se vieron beneficiadas con el impulso de una política de desarrollo nacional y de una política de expansión hacia Sudamérica durante nuestro período de estudio.

En el tercer capítulo, *La expansión regional desde arriba*, abordamos los intereses detrás del impulso de la IIRSA por parte del gobierno de Lula, teniendo en consideración el lugar que ocupa la infraestructura física en la etapa actual del capitalismo. Desde este ángulo, analizamos los sectores del bloque en el poder que se vieron beneficiados con la importancia otorgada a esta Iniciativa, así como las políticas y programas implementados por el Estado brasileño para favorecer la acumulación de algunas empresas de ingeniería de bandera nacional.

En el cuarto capítulo, *La dimensión energética en el proyecto de desarrollo brasileño*, abordamos el interés del Estado brasileño en el desarrollo de algunas obras de infraestructura e integración energética, llevadas adelante con el objetivo de garantizarse un potencial que le permita sostener los niveles de crecimiento experimentados por esos años, y su vínculo con la política de desarrollo nacional. Para analizar esta escala, introducimos nuestros casos de estudio: las represas hidroeléctricas de embalse Garabí-Panambí e Inambari, indagando en torno a los modos en los que operó la estrategia subimperialista brasileña en cada uno de estos proyectos.

En el quinto capítulo, *Las resistencias desde abajo*, recuperamos las luchas socioterritoriales que se tejieron en las regiones donde se emplazarían los proyectos que constituyen nuestro caso de estudio. Analizamos las territorialidades en pugna, los actores y grupos implicados en esas luchas, y los repertorios de acción colectiva implementados, dando cuenta de cómo estos sectores enfrentaron el avance de la territorialización capitalista.

Por último, en las *Reflexiones finales*, recuperamos los principales alcances y hallazgos de esta tesis. En este apartado, buscamos articular las múltiples dimensiones y escalas que atraviesan nuestro caso de estudio, y que fueron abordadas en los capítulos previos.

Presentamos, de esta forma, el producto de varios años de trabajo, discusión e investigación, esperando que pueda representar un aporte para repensar la integración sudamericana y el lugar que esta región ocupa en las cadenas globales de producción. A su vez, que pueda brindar herramientas a las resistencias de los movimientos socioterritoriales que se articulan para luchar contra el avance de estos proyectos a gran escala.

CAPÍTULO 1

ENCUADRE TEÓRICO-METODOLÓGICO

En esta tesis pretendemos aportar a las investigaciones sobre integración regional y la relación entre política externa, relación centro-periferia y bloque en el poder, haciendo hincapié en la etapa de gobierno de Lula da Silva. Además, buscamos contribuir a los estudios en torno a proyectos de infraestructura a gran escala, su conexión con los flujos y las cadenas globales de producción y valor, y las luchas que se tejen en los territorios ante las múltiples territorialidades en pugna.

Para realizar este análisis, creemos necesario partir de un enfoque multiescalar y multidimensional (Fernández y Dundas, 2008), entendiendo que nuestro objeto de estudio está atravesado por múltiples dimensiones y escalas. Para ello, es necesario incorporar diferentes teorías, herramientas metodológicas y fuentes de análisis que nos permitan abordar la complejidad de lo que nos proponemos indagar. Partiendo de esta base, el objetivo de este capítulo es reponer el encuadre metodológico realizado, así como también los principales conceptos teóricos utilizados para llevar adelante el análisis.

En primer lugar, planteamos el encuadre metodológico construido. Este comprende el conjunto de habilidades, presunciones y prácticas que se emplean para ir desde las perspectivas teóricas al mundo empírico (Vasilachis de Gialdino, 2006). Estas estrategias ponen a las teorías de interpretación en acción y nos conectan con los métodos de recolección y análisis de materiales. Así, en este marco, planteamos las principales decisiones llevadas adelante en términos epistemológicos, de recorte espacio-temporal, los casos seleccionados y su justificación, las herramientas metodológicas, las fuentes de datos y el marco teórico.

En segundo lugar, profundizamos en las categorías de análisis a partir de las cuales analizamos nuestro problema de investigación. Dentro de ellas, en un primer momento, retomamos algunas teorías que nos permiten nutrir una mirada sobre el capitalismo actual y el orden mundial. Por ello, reponemos la noción de imperialismo colectivo desarrollada por Samir Amin, así como también su postulado de que, en la actualidad, nos encontramos ante un nuevo estadio del capitalismo: el de los monopolios generalizados. A su vez, desarrollamos los principales postulados de la Teoría del sistema-mundo de Immanuel Wallerstein, con la finalidad de echar luz sobre el sistema capitalista actual, la división internacional del trabajo y el rol que ocupan los países centrales y periféricos al

interior de este sistema. Por último, para entender el lugar que ocupa la región en el marco del capitalismo mundial, recuperamos los aportes de la vertiente marxista de las Teorías de la Dependencia (TD), con el objeto de analizar la relación entre el centro y la periferia, y la dependencia a la que se encuentra subsumida la región sudamericana. A su vez, los conceptos planteados por Ruy Mauro Marini nos permiten comprender de qué forma se configuró una política subimperialista -en nuestro caso de estudio, Brasil- y la relación que la subpotencia establece con las potencias hegemónicas.

En un segundo momento, analizamos algunas dimensiones de la integración regional. Así, retomamos, por un lado, los desarrollos planteados por la Escuela Neogramsciana de Política Internacional, quienes, recuperando a Antonio Gramsci, plantean que las nociones de hegemonía y de bloque histórico pueden ser utilizadas para pensar el orden global, la política exterior, los procesos de integración y las relaciones internacionales como luchas hegemónicas con intereses de clase. Esto nos posibilita entender de qué forma un Estado puede impulsar un tipo de inserción regional e internacional buscando representar una forma de insertarse en el mundo de sus clases dominantes (Kan, 2014). A su vez, retomamos los debates sobre los diferentes regionalismos en pugna que se han dado en la región sudamericana, profundizando en el de regionalismo post-hegemónico, para comprender de qué forma, durante los primeros años del siglo XXI, diferentes tipos de regionalismo y de miradas en torno a la región sudamericana se encontraron en disputa.

En un tercer momento, recuperamos los aportes teóricos de algunas corrientes y escuelas que centran su atención en el Estado, en su poder y su forma. Con este recorrido, buscamos aportar herramientas que nos permitan echar luz sobre la configuración de los Estados, su capacidad selectivamente estratégica de favorecer o impulsar determinados intereses de clase, de canalizar y mediar en la lucha de clases para garantizar la reproducción del capital, sin por ello ser un mero instrumento de las clases dominantes. Retomaremos estas teorías para analizar el Estado brasileño, centrando nuestro análisis, sobre todo, en la etapa de gobierno de Lula da Silva. Entender el Estado nos permitirá analizar también por qué se promueven algunas instancias de regionalización, y los intereses de Brasil en impulsar determinadas instancias de integración en la región sudamericana.

En un cuarto momento, retomamos los aportes realizados desde la geografía crítica para analizar la dimensión del territorio, poniendo el foco en cómo se traducen en el espacio las cadenas globales de producción y las disputas que se generan en torno a los modos de uso y apropiación del espacio. Dado que consideramos que el territorio es el lugar en el que se espacializan las relaciones de poder y que en él conviven territorialidades en pugna, entendemos que los movimientos que se constituyen en defensa del mismo deben ser considerados socioterritoriales, por lo que recuperamos este concepto para analizar las resistencias que se tejieron y articularon en nuestros casos de estudio.

1. ENCUADRE METODOLÓGICO

Tal como plantea Ruth Sautu (2001), toda investigación es temporal-histórica, porque el modo de abordar la problemática se ve profundamente afectado por las circunstancias históricas. A su vez, es acotada y acumulativa, está sujeta a inexactitudes y, por ello, es parcial o totalmente refutable. Su sostén está dado por el andamiaje sobre el cual se construye, es decir, las teorías, los modelos de análisis y conceptos que estructuran el área de conocimiento, que plantean dudas, sugieren hipótesis y preguntas, porque "no hay observación sin teoría y porque ésta a su vez es reinterpretada y reconstruida a partir de la evidencia empírica" (p. 229).

Esta idea de Sautu me[2] habilita pensar en cómo la teoría estructuró y reestructuró el desarrollo de esta tesis y el lugar a partir del cual decidí abordar el problema de investigación, mediado por los referentes teóricos y por los espacios colectivos de construcción de conocimiento, pero también por los recorridos personales y colectivos. A su vez, me permite pensar los contextos que atravesaron no sólo la escritura, sino también la definición y delimitación del problema, la reconfiguración de los objetivos durante el proceso y los modos de abordarlos.

En un primer momento, el problema de investigación no incluía el rol que ocupó Brasil en la definición y orientación que tomó la política de integración de la infraestructura regional, sino que buscaba pensar en la IIRSA, en el rol de las entidades internacionales (el BID, la CAF y el FONPLATA) y los cambios introducidos a partir del traslado al

[2] A pesar de que el resto de la tesis está escrito en primera persona del plural, entendiendo que la investigación es un proceso colectivo, que incluye a lxs directorxs, a quienes nos leen, los grupos en los que participamos, lxs autorxs que retomamos y todas las instancias que representan un aporte a los modos de abordar la problemática, este apartado será enunciado en primera persona del singular. Esto se debe a que, más allá de reconocer todos estos aportes, entiendo que las decisiones metodológicas están atravesadas por mis recorridos, mi militancia y por la artesanalidad propia del proceso de investigación.

COSIPLAN. Sin embargo, fue la propia teoría y la construcción del referente empírico la que me llevó a tomar la determinación de incluir al Estado brasileño como una de las variables de análisis del objeto de investigación.

Tras incluir al Estado brasileño como parte del problema, tuve que tomar una decisión en términos del recorte temporal. Si bien la temporalidad de mis casos de investigación iba más allá del gobierno de Lula da Silva y atravesaba la primera parte del mandato de Dilma Rousseff, circunscribimos el análisis a las presidencias de Lula. Esta decisión estuvo ligada a entender que la política exterior y el bloque en el poder durante el primer tiempo de Rousseff en el poder mantuvo las estrategias del gobierno anterior, es decir, la trayectoria revisionista frente a las instituciones internacionales, la actuación como representante de los países del Sur y el liderazgo regional (Gomes Saraiva, 2012), y que los cambios que pudieron introducirse estuvieron vinculados a las transformaciones que se dieron en la coyuntura regional y mundial.

Por otro lado, la postura de Sautu me habilita analizar cómo los recorridos personales y colectivos influyeron en la definición del problema de investigación. Donna Haraway (1997) plantea el concepto de conocimiento situado al cual adjudica una doble dimensión. Por un lado, permite entender que las versiones del mundo que co-construimos en la investigación no se tratan de un discurso como cualquier otro; y, por otro lado, implica reconocer la imposibilidad de plantear que el conocimiento refleje una realidad de manera neutral (Cruz y otrxs[3], 2012). A su vez, en los últimos años, comenzaron a desarrollarse muchas investigaciones (Svampa, 2008; Hale, 2006; Hurtado, 2016) en torno a lo que implica la "investigación militante", las cuales abordan cómo se configura una investigación en la que quien indaga reconoce la actividad militante y la producción académica como prácticas convergentes. En este sentido, Sol Hurtado (2016: 92) afirma que poner en diálogo la militancia con la formación implica

> atrevernos a interrogar nuestra militancia desde nuestra formación profesional, desde el saber académico. De la misma forma, significa atrevernos a contrastar ese saber social, institucional y políticamente legitimado que es el saber académico, a poner a prueba su eficacia y su contextualidad y, si fuera necesario, a reformularlo, a partir de la valoración de la cotidianeidad que vivenciamos en nuestros ámbitos de militancia como recurso con estatus cognitivo.

[3] Asumimos el compromiso de hacer un uso inclusivo y no binario del lenguaje. Sin embargo, se mantendrá el universal masculino en dos ocasiones. La primera, cuando hagamos referencia a actores o roles monopolizados por masculinidades. La segunda, cuando se citen fragmentos que originalmente hayan utilizado el universal masculino, ya sean citas bibliográficas o fragmentos de las entrevistas realizadas.

Siguiendo esta línea, reconocer la influencia que tuvo la militancia en la definición del problema y en los modos de leer el conflicto social, así como también cómo fueron cambiando algunas posturas militantes producto de mi formación académica, implicó dos procesos simultáneos. Por un lado, tomar la decisión de incluir la dimensión de las resistencias socioterritoriales, reconociendo que esta determinación estuvo mediada por mi trayectoria como activista y por mis recorridos, lo que generó acceder fácilmente a algunos lugares, personas y debates, entre otras cuestiones. Por otro lado, un ejercicio, permanente, consciente y necesario, de extrañamiento en relación al problema de investigación, con la finalidad de no romantizar estas resistencias y reconocer las múltiples variables que atravesaron el resultado final de los proyectos.

Por último, la perspectiva de Sautu me permite pensar en los diferentes contextos políticos que atravesaron el proceso de producción de esta tesis. Por un lado, la construcción del marco teórico y del referente empírico se realizó en un momento cercano al recorte temporal que realicé: la UNASUR aún no había perdido su fuerza y la integración regional continuaba siendo un lugar de potencialidad. En cambio, la escritura de la tesis fue llevada adelante en un contexto marcado por la partida de seis naciones de la UNASUR y la incertidumbre que esto generó, por el encarcelamiento de Lula da Silva -por la causa denominada Operación Lava Jato-, y por el "giro a la derecha" de numerosos gobiernos sudamericanos. Estos contextos necesariamente signaron cada uno de estos períodos del proceso de investigación e implicaron la reconfiguración del objeto de estudio.

Así, para el desarrollo de este trabajo, partí desde una concepción transdisciplinar (Morin, 2000), que buscó reconocer las encrucijadas del conocimiento académico. En esta línea, aspiré a construir un conocimiento relacional, interseccional y complejo, que me permitiera abordar el problema a partir de diferentes aportes disciplinarios de manera integrada y articulada.

Para llevar adelante los objetivos planteados, me propuse emplear una estrategia de tipo cualitativa. Se trata de un tipo de investigación multiparadigmática y multimetódica (Herrera, 2017), que busca entender una situación social como un todo, teniendo en cuenta sus propiedades y su dinámica (Bernal, 2010).

Llevar adelante una investigación de estas características, implica algunas fases a tener en cuenta: 1) las unidades de análisis; 2) el tipo de muestra; 3) la accesibilidad al terreno;

4) las técnicas para recabar datos; 5) el tipo de análisis; 6) la ubicación del investigador en el proceso de investigación, a fin de evaluar su posición social en el estudio y el lugar de su mirada en el transcurso de la investigación; y 7) las limitaciones del estudio (Mendizábal, 2006).

Así, teniendo en cuenta la primera fase, en el marco de esta investigación, y como resultado del propio proceso de construcción del referente empírico, entendí que lo buscaba realizar era una triangulación metodológica. Esta es entendida como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos y métodos de investigación en el estudio de un fenómeno (Kimchi y otrxs, 1991).

Elegir realizar una triangulación respondía a la dimensión de la temática elegida, a sus múltiples aristas. La unidad de análisis no es únicamente la IIRSA y la integración que esta Iniciativa proponía, sino también las políticas del Estado brasileño para promover la integración de la infraestructura (con el objetivo de favorecer el proceso de acumulación de sus empresas y fortalecer su papel como actor global), el proceso que se dio desde arriba –desde los estamentos de poder- para el avance de las dos represas hidroeléctricas que tomé como casos de estudio y las resistencias socioterritoriales que se tejieron en los lugares donde las obras se emplazarían. De esta forma, para poder abordar todas estas escalas, fue necesario valerme de múltiples teorías y de varias herramientas metodológicas.

En la siguiente fase, se planteó la cuestión de decidir los casos que iba a recuperar para analizar la integración de la infraestructura regional, las políticas del Estado brasileño para favorecer al bloque en el poder durante los años de gobierno de Lula y las resistencias socioterritoriales. La primera determinación estuvo ligada a seleccionar la dimensión energética en el marco de los proyectos de infraestructura de la IIRSA, entendiendo que la energía era un elemento clave a considerar como motor de la acumulación.

Por otro lado, la decisión en torno a los casos específicos a abordar. Este recorte estuvo vinculado al hecho de la importancia que le atribuyó, el Estado brasileño, a la construcción de estas dos represas hidroeléctricas en particular (Garabí-Panambí e Inambari) y a la dimensión que adquirieron las luchas sociales llevadas adelante para frenar el avance de estas centrales.

En tercer lugar, determinar qué herramientas metodológicas iba a tomar para poder llevar adelante la investigación. De esta forma, entendí que mi problema de investigación tenía dos dimensiones globales que era necesario reponer. Por un lado, las estrategias e intereses "desde arriba", es decir, el Estado de Brasil –y, en menor medida, los de Argentina y Perú-, las entidades financieras, las instituciones internacionales que fueron parte de la IIRSA y las empresas de ingeniería y energía implicadas en el desarrollo de las obras. Por otro lado, las iniciativas "desde abajo", llevadas adelante por las poblaciones afectadas que resistieron ante el avance de estos proyectos.

En el marco de la tercera fase, es decir la accesibilidad al terreno, la coyuntura implicó que cambiase las estrategias de acercarme a los casos. Durante 2020, pensaba realizar una visita al campo para cada uno de los casos, de hecho, tenía el primer viaje programado a Misiones para abril de ese año. Sin embargo, la pandemia por COVID-19 reconfiguró esa decisión y tuve que realizar las entrevistas de forma virtual, contextualizándolas con notas periodísticas y mapas de la zona.

En torno a la cuarta y quinta fase de la investigación, es decir, las técnicas para recabar datos y los tipos de análisis, entendí que debía diferenciarlos en dos grupos. Un grupo para llevar adelante las estrategias implementadas "desde arriba". Otras herramientas para los análisis de las resistencias socioterritoriales "desde abajo".

De esta forma, para poder abordar las estrategias implementadas "desde arriba" decidí utilizar la técnica de revisión bibliográfica y documental (Valles, 1999). En el marco de esta herramienta, entendí que era necesario abordar tres fuentes principales. En primer lugar, las políticas, informes, estudios, investigaciones, programas y discursos realizados por los Estados, las entidades financieras, las instituciones internacionales y las empresas de ingeniería y energía, los cuales serían contrastados y puestos en relación con datos duros y mapas. En segundo lugar, artículos periodísticos, que brinden información en relación al contexto y a los debates que existían, buscando entender la postura política adoptada por los medios de comunicación y cómo esta postura permea los modos de plantear el tema. En tercer lugar, la bibliografía académica y los artículos de especialistas en la temática.

Por otro lado, para indagar en torno a las iniciativas "desde abajo", decidí realizar entrevistas en profundidad semi-estructuradas, que no tienen los niveles de planificación de un cuestionario o sondeo, pero esto no se traduce en que se trate de una práctica

totalmente anárquica (Piovani, 2007). Así, previamente a las entrevistas, planifiqué algunos núcleos centrales que era necesario abordar. Definí realizar un muestreo no probabilístico intencional, detectando las organizaciones, ONGs y asambleas que fueron claves en la lucha llevada adelante y, a cada unx de lxs entrevistadxs, les pregunté con quién más consideraban que debería hablar para obtener información relevante, es decir, implementando la técnica de bola de nieve. Esto fue guiando la muestra (aquí es importante plantear que no pude acceder a algunos actores clave, por ejemplo, las rondas campesinas de Puno). A su vez, los relatos recuperados en el marco de las entrevistas, fueron contrastados con documentos, políticas, artículos periodísticos y publicaciones en redes sociales, con el objetivo de brindar un contexto y más información en torno a lo que lxs entrevistadxs contaron.

Para cada caso llevé adelante tres entrevistas. Dado el contexto de pandemia por COVID-19, tuve que realizar la totalidad de ellas en formato virtual, ya sea a través de Zoom, Google Meet o llamada de WhatsApp, informándole a lxs entrevistadxs que la charla iba a ser grabada para que quede un registro. Así, pude acceder a:

- Aldo Santos (entrevista realizada en diciembre de 2019, duración 39 minutos). Periodista e integrante de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER). Esta asociación participó de la lucha contra Inambari y Aldo fue quien coordinó las acciones realizadas desde la institución. Esta organización fue fundada en 1980 "por un grupo de profesionales peruanos y agentes pastorales que decidieron apoyar los esfuerzos que realizaban campesinos organizados y equipos de promoción local en la defensa de sus derechos (…) Desde entonces, SER ha realizado múltiples actividades de capacitación, asesoría, promoción social y productiva y defensa de los derechos fundamentales de la población andina y amazónica en la perspectiva de construir democracia y desarrollo humano"[4]. Cuenta con oficinas en Cajamarca, Ayacucho y Puno, y con tres líneas de trabajo: Agua y Saneamiento; Gobernabilidad Democrática y Descentralización; y Posicionamiento Institucional.
- Eduardo Luján (entrevista realizada en octubre del 2020, duración una hora cuatro minutos). Jubilado e integrante de la Mesa provincial No a las represas de Misiones, espacio que participó en la lucha contra Garabí-Panambí. La Mesa "es un colectivo de ciudadanos y organizaciones que realizan distintas acciones para evitar que, en la zona

[4] Página web oficial de SER. Disponible en https://ser.org.pe/historia/

de Misiones, en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina y en el corazón del Acuífero Guaraní, se realicen nuevas Mega-Represas"[5]. A su vez, integran la Unión de Asambleas de Comunidades, un espacio de articulación de asambleas socioambientales de Argentina.

- Mariana Zabot (entrevista realizada en marzo del 2021, duración 41 minutos). Ingeniera agrónoma e integrante del Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). Este movimiento neació en la década del ochenta "a través de experiencias de organización local y regional, frente a las amenazas y agresiones sufridas en la ejecución de proyectos hidroeléctricos. Más tarde se transformó en una organización nacional y hoy, además de luchar por los derechos de los afectados, reclama un Proyecto Popular de Energía para cambiar de raíz todas las estructuras injustas de esta sociedad"[6].

- María Rosario Linares Valderrama (entrevista realizada en abril del 2020, duración una hora 48 minutos). Ingeniera e integrante de la Sociedad Civil por la Construcción de la Interoceánica (SOCIT) de Puno. Organización que, desde inicios de siglo, venía luchando por la construcción de la carretera Interoceánica que conecte la región con Brasil. Al conocer que la central de Inambari inundaría dos tramos de esta vía de conexión se incorporaron en la lucha contra la represa hidroeléctrica.

- Sergio Álvez (entrevista realizada en abril del 2020, duración 44 minutos). Periodista e integrante de la Mesa provincial No a las represas de Misiones. Esta organización está conformada por los siguientes espacios: Ríos De Vida, de 25 De Mayo; Misiones Sin Represas, de Oberá; la Asociación De Trabajadores Del Estado, de carácter provincial; la Central De Trabajadores Del Estado, de carácter provincial; el Servicio De Paz y Justicia, de carácter nacional; la Asociación Civil Nativos, de Puerto Rico; el Instituto Nacional De Estudios Sociales, de San Pedro; Barrios De Pie, de Posadas; la Asociación de Comunidades Del Pueblo Guaraní, de San Ignacio; el Grupo Ecologista Cuñá Pirú, de Aristóbulo Del Valle; Autoconvocados De Puerto Azara, de Puerto Azara; el Centro De Estudios Municipales y Provinciales, de carácter provincial; Jóvenes Del Alto Uruguay, de El Soberbio; la Red De Agricultura Orgánica de Misiones, de carácter provincial; Justicia, Paz e Integridad De La Creación, de carácter provincial; la Asamblea Ciudadana

[5] Facebook oficial de la Mesa. Disponible en https://www.facebook.com/MesaProvincialNoALasRepresas/about/?ref=page_internal
[6] Página web oficial del MAB. Disponible en https://mab.org.br/quem-somos/

Misionera, de carácter provincial; la Asociación Nee Porá, de San Ignacio; y Madre Tierra, de El dorado.

- Vanessa Cueto La Rosa (entrevista realizada en marzo de 2020, duración 39 minutos). Abogada y coordinadora del programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), que participó de las campañas realizadas contra el avance de Inambari. Fundada en el 2004, es una organización sin fines de lucro enfocada en temáticas como "política y legislación ambiental, bosques, pueblos indígenas, inversiones en infraestructura y extractivas (excepto minería, pesca), cambio climático, y buena gobernanza, entre otros. Además, articula e integra la escala nacional con la escala local y la escala internacional a través de tres enfoques transversales: Sostenibilidad, Gobernanza y Derechos Humanos"[7].

Por último, el marco teórico se fue enriqueciendo y construyendo a medida que fui pensando las dimensiones y escalas del problema. De esta forma, definí las principales categorías analíticas que era necesario tomar y desarrollar para poder abordar el problema de investigación. Así, entendí que era necesario plantear el lugar desde el cual entendía la etapa actual del capitalismo y el orden mundial, entendiéndolo desde múltiples teorías y posturas. En segundo lugar, la integración regional y los regionalismos, con el objetivo de analizar cómo se configura la hegemonía en el plano mundial y los regionalismos que se despliegan a partir de ello. En tercer lugar, cómo se configura el Estado capitalista, a partir de entender los conceptos de bloque en el poder, autonomía relativa y selectividad estructural. Por último, la dimensión del territorio y los movimientos socioterritoriales, con el objetivo de comprender las conflictividades que se desataron en nuestros casos de estudio. Estas categorías se desarrollan a continuación.

2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

En este apartado vamos a reponer las principales categorías que utilizamos para llevar adelante el análisis de nuestro problema de investigación. Entendemos que, dado que el objeto de estudio está atravesado por múltiples escalas, es necesario recuperar varias dimensiones de indagación que permitan abordarlas. Para ello, nos valemos de algunas teorías que, luego, serán puestas en diálogo con nuestro referente empírico.

[7] Página web oficial de DAR. Disponible en https://dar.org.pe/quienes-somos/

2.1. Capitalismo, dependencia y sistema-mundo

Para poder analizar los intereses y objetivos detrás de los proyectos de infraestructura que se enmarcaron en la IIRSA-COSIPLAN resulta fundamental plantear nuestra mirada en torno al momento actual del capitalismo y del orden mundial. En este marco, es necesario especificar el rol que ocupa América del Sur en la división internacional del trabajo y su lugar en las cadenas globales de producción, así como también cómo se configura esta división al interior de la región sudamericana.

El economista egipcio Samir Amin (2004) plantea la noción de imperialismo colectivo para graficar la situación actual de las cadenas globales de valor, cuyo origen está ligado a la transformación de las condiciones de competencia. Según el autor, hace cincuenta años las empresas transnacionales comenzaban a constituirse como tales y necesitaban un centenar de millones de clientxs potenciales. Sin embargo, en la actualidad, las grandes transnacionales necesitan un mercado potencial de 600 millones de consumidorxs. Esta situación fue creando las condiciones para el establecimiento de un acceso abierto para este puñado de empresas al mercado mundial, lo cual se ha transformado en la base para la construcción del imperialismo colectivo (Marco, 2004). Amin (2004) entiende que el imperialismo no es un mero estadio del capitalismo, sino su carácter permanente.

En esta línea, Amin (2018) desarrolla la idea de que nos encontramos ante una nueva etapa del capitalismo: el de los monopolios generalizados, considerando que éstas ya no son más islas en un océano de empresas relativamente autónomas y sin un sistema integrado. En la actualidad, según el autor egipcio, los monopolios controlan todos los sistemas productivos.

La globalización es el nombre que los monopolios le han dado al conjunto de exigencias a través de las cuales ejercen control sobre los sistemas productivos de los países periféricos del capitalismo global. El proceso de acumulación del capital es comandado por la maximización de la renta monopolítistica/imperialista, extraída de la masa de plusvalía que el capital obtiene de la explotación del trabajo y de la naturaleza. Al operar estos monopolios en las periferias del sistema, esta renta se convierte en imperialista. La centralización de poderes, más pronunciada que la concentración de capitales, refuerza la interpenetración de los poderes económicos y políticos.

Por su parte, Immanuel Wallerstein (2012) afirma que lo que define a un sistema social es la división del trabajo que en ella existe, de forma que los distintos sectores o áreas

dependen del intercambio económico recíproco para la satisfacción continua de sus necesidades. Este intercambio puede darse sin una estructura política común. Según el autor, el único tipo de sistema social existente es un sistema-mundo, que puede definirse como unidad con una única división del trabajo y múltiples sistemas culturales.

El sistema-mundo moderno nació de la consolidación de una economía-mundo, la cual él mismo define como "una gran zona geográfica dentro de la cual existe una división del trabajo y, por lo tanto, un importante intercambio interno de bienes básicos o esenciales, así como flujos de capital y mano de obra" (Wallerstein, 2004: 23). En esta zona no existe una estructura política unitaria, sino que hay múltiples unidades políticas unificadas por una división de trabajo que se constituye dentro de la economía-mundo.

Las principales instituciones del sistema-mundo moderno son el mercado, las compañías que compiten, el Estado o sistema interestatal, las unidades domésticas, las clases, entre otros (Osorio, 2015). A su vez, Wallerstein subraya la permanente ampliación del sistema mundial a partir de la incorporación de áreas externas de una estructura segmentada entre las economías centrales y los países exportadores de materia prima. Este autor entiende que las jerarquías se reproducen a través de una cadena de productos, la cual conecta a las economías en un mismo circuito y refuerza el predominio de algunas zonas centrales a través del intercambio desigual y del flujo polarizado del comercio. A su vez, este sistema funciona como una estructura política que reproduce la posición ocupada por cada país y región, a través del desarrollo de los Estados nacionales, necesarios para externalizar los costos de las inversiones e impulsar políticas de protección o liberalización comercial (Katz, 2016a).

Este análisis del sistema-mundo, cuestiona el mito que postula que se puede alcanzar el bienestar con la mera expansión del capitalismo. Esta teoría entiende que la especialización a la que queda sujeta la periferia obstruye su desarrollo y los declives de los beneficios en la periferia se compensan a partir de la explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza. A su vez, Wallerstein plantea una división de la economía-mundo en tres partes: la periferia, el centro y la semiperiferia (que sería la que desarrolló formas intermedias).

2.1.1. *La relación centro-periferia*

Al igual que los postulados del sistema-mundo que desarrolla Wallerstein, las Teorías de la Dependencia (TD) cuestionan el mito que sostiene que se puede alcanzar el bienestar

con la mera expansión del capitalismo. Ambas posturas teóricas entienden que la especialización a la que queda sujeta la periferia obstruye su desarrollo; así como también que la forma en que se compensan los declives de los beneficios en la periferia se da a partir de la explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza.

Ambas teorías, al igual que los desarrollos de Amin, realizan un análisis de la relación existente entre el centro y la periferia. La principal diferencia que existe entre sus desarrollos es el lugar desde el que se sitúan para analizarlo: Wallerstein coloca el tema en el marco de una conceptualización del capitalismo histórico y pone el eje en lógicas globales, por lo cual no logra detectar características específicas del capitalismo dependiente; por su parte, Amin analiza este vínculo desde Asia y África; y lxs dependentistas lo hacen desde la realidad latinoamericana, realizando una distinción entre capitalismo central, países dependientes y socialismo, y analizando la interacción dialéctica entre las economías centrales y la periferia (Dos Santos, 1998b).

Las TD[8] surgieron en los años sesenta buscando comprender las limitaciones del desarrollo económico. Desde fines de los cuarenta, el desarrollo se constituyó como uno de los ejes centrales de debate de la economía internacional. Así, en el plano internacional, fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien comandó estos debates, impulsando la creación de comisiones económicas regionales que abordasen la temática. Es por ello por lo que, en 1948, se constituyó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)[9].

En este contexto, comenzó a ganar fuerza en Latinoamérica el patrón de reproducción del capital industrial, en manos de una burguesía débil que necesitaba el apoyo del Estado para impulsarse. Las propuestas impulsadas en el marco de la CEPAL se convirtieron en el proyecto de esa fracción y, desde el Estado, en el proyecto de nación de los países más

[8] Numerosxs autorxs han realizado críticas a las TD. Consideramos que las más interesantes son las que realiza Agustín Cueva (2008) quien plantea que, al indagar en cuáles son los obstáculos para el desarrollo económico de los países periféricos, lxs dependentistas invisibilizan la explotación de clase y reducen el problema al desarrollo indeterminado de las fuerzas productivas. Por otro lado, según Cueva (ibíd.), a pesar de que considera los desarrollos de Marini como los más sólidos dentro de las TD, cree que su trabajo es cuestionable al momento en que Marini intenta establecer una relación directa entre la articulación de países industrializados y dependientes, y el desarrollo interno de cada una de esas economías que se deriva de dicha relación. Bambirra (1978) cuestionó las críticas de Cueva, dado que para la autora el fenómeno de la superexplotación de la fuerza del trabajo, si bien puede ocurrir en los países desarrollados, en los dependientes ocurre de forma permanente.

[9] Las otras cuatro comisiones son: Comisión económica y social para África (con sede en Addis Abeba), Comisión económica y social para Asia y Pacífico (Bangkok), Comisión económica para Europa (Ginebra) y Comisión económica y social para Asia Occidental (Beirut).

desarrollados de la región (Osorio, 2009). Una de las tesis centrales que se impulsó desde la Comisión fue la noción de que la causa del subdesarrollo latinoamericano radicaba en la manera en que la región se insertaba en la economía mundial. Uno de los principales teóricos cepalinos, Raúl Prebisch, estudió las características que adoptaban los ciclos económicos de las economías latinoamericanas. Por un lado, analizó que, a diferencia de lo que sucedía en las economías centrales industrializadas, las cuales ante una situación de crisis podían recurrir al gasto fiscal o adoptar una política monetaria expansiva, en las economías dependientes se hacía patente la restricción externa que obligaba a devaluar el tipo de cambio o a establecer restricciones al comercio exterior (Zeolla y Telechea, 2014). Por otra parte, Prebisch (1949) sostenía que los países periféricos sufrían un deterioro creciente de los precios de sus exportaciones primarias, frente a los precios de los bienes industriales que debían importar de los países centrales, por ello, según este autor, se hacía patente que el comercio internacional entre centro y periferia no conllevaría al desarrollo de las zonas periféricas, tal como postulaban las teorías ortodoxas.

En este contexto, las TD surgieron intentando brindar una respuesta a los planteos en torno al desarrollo que la CEPAL había instalado en el marco de los estudios sociales. Lxs dependentistas entendieron que los postulados cepalinos cristalizaban las aspiraciones de la burguesía latinoamericana de un desarrollo nacional autónomo (Astarita, 2010).

Desde su surgimiento se han suscitado debates en torno a si las TD pueden ser considerada una teoría como tal o simplemente un "haz de interrogantes común" (Castel, 2001). Fernanda Beigel (2006) postula la idea de que no es posible hablar de una teoría de la dependencia, ya que esto implicaría un marco conceptual homogéneo y unitario, sino que es necesario reconocer los múltiples aportes que se cobijaron bajo las teorías de la dependencia. Por su parte, Blomström y Hettne (en Dos Santos, 1998a) identificaron cuatro ideas que integraron a las diversas vertientes de las TD: en primer lugar, entienden que el subdesarrollo está ligado con la expansión de los países centrales; en segundo lugar, consideran que el desarrollo y el subdesarrollo son aspectos del mismo proceso; en tercer lugar, infieren que el subdesarrollo no puede ser considerado como la primera etapa de un proceso evolutivo; y, por último, comprenden que la dependencia es un fenómeno externo que se manifiesta en diferentes formas en la estructura interna. A su vez, lxs integrantes de las teorías de la dependencia plantean objeciones a aquellas

nociones que postulan al Estado como un artífice del crecimiento ajeno a las limitaciones y presiones de las clases dominantes (Katz, 2018).

En el marco de las TD, André Gunder Frank llevó adelante un análisis partiendo de la caracterización de la metrópoli-satélite, entendiendo que el capitalismo condenaba a una situación de subdesarrollo a la periferia del sistema mundial. La tesis central de este autor plantea que cuando los países se vinculan al mercado mundial se acrecientan las diferencias entre las economías centrales y las periféricas como resultado de la transferencia de excedentes de un país a otro (Astarita, 2010). En su concepción, Frank (1967) postula que, en el encadenamiento a la acumulación global, una metrópoli logra someter a satélites periféricos a través de la mediación de otros países, que se articulan, a su vez, en satélites de la potencia hegemónica. A diferencia de las concepciones adoptadas por la corriente marxista, este autor, al estudiar la polarización absoluta entre la periferia y las metrópolis, conceptualiza a las economías latinoamericanas como una totalidad uniforme, mientras que lxs teóricxs de la rama marxista de las TD analizan las diferencias existentes entre algunos países al interior de la periferia (Katz, 2018). A su vez, Frank sostiene que América Latina, desde el dominio colonial, ha sido organizada para la exportación de materias primas.

Las vertientes marxistas de las TD surgieron impulsadas por las esperanzas que se abrían con la revolución cubana y, a su vez, sus postulados se vieron influidos por la idea, promovida desde la CEPAL, que relacionaba el retraso de la periferia con el deterioro de los términos de intercambio (Katz, 2018). Lxs teóricxs dependentistas entienden que, al colocar a América Latina como proveedor de materias primas, los países centrales fortalecieron la transición hacia formas de explotación centradas en modelos de plusvalía relativa, quedando América Latina presa de una modalidad de desarrollo basado en formas de plusvalía absoluta, es decir, aquella que se obtiene por el incremento de tasa de explotación laboral.

Theotônio Dos Santos (1986) entiende que la dependencia es una situación en la que un cúmulo de países ve su economía condicionada por el desarrollo y la expansión de otras economías, como causa del predominio tecnológico, comercial, de capital y sociopolítico de los países dominantes, lo cual les permite imponer condiciones de explotación a los países periféricos y extraer excedentes producidos a nivel interno. Según Dos Santos, la

dependencia se funda en el tipo de división internacional del trabajo que rige y que implica el desarrollo industrial de algunos países, al mismo tiempo que limita el de otros.

> La división internacional del trabajo entre los productores de materias primas y productos agrícolas y los productores de manufacturas es un resultado típico del desarrollo capitalista que asume la forma necesaria de la desigualdad combinada entre los varios países. Esta forma desigual es una consecuencia del carácter de la acumulación del capital en que el crecimiento de la economía se basa en la explotación de muchos por pocos y en la concentración de los recursos del desarrollo económico social en manos de esta minoría (ibíd.: 304).

Por su parte, Vânia Bambirra (1999) realiza una tipología de países dependientes. En ella distingue entre, por un lado, los países que comenzaron un proceso de industrialización previo a la posguerra y posteriormente, como parte del proceso de integración con el capitalismo hegemónico y de la expansión de los consorcios multinacionales, estas economías poseían una estructura diversificada, a pesar de que predominaba el sector primario exportador; y, por el otro, aquellos que no habían iniciado un proceso de industrialización al momento en que Bambirra desarrolla su tipología. Con esta caracterización, la autora busca caracterizar las diversas etapas, los momentos de cambio y de transiciones, sin caer en el desarrollo de un modelo evolucionista. Dentro del primer grupo de países, Bambirra incluye a Argentina, México, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia, y, dentro de los que comenzaron su proceso de industrialización tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, incorpora a Perú, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Cuba (Rada Aragol, 2014).

Por otra parte, Bambirra (1978) entiende que para poder llevar adelante un proceso de industrialización y sobrevivir, las burguesías de los países dependientes se ven obligadas a asociarse, en la condición de socio menor, al capital extranjero. Esto refuerza la condición de dependencia de muchos países en la región.

Uno de los principales referentes de la vertiente marxista de las TD, Ruy Mauro Marini, si bien coincide con algunos diagnósticos de Prebisch sobre el origen del subdesarrollo, rechaza la idea de que la solución a los desequilibrios existentes puede darse a partir de la implementación de políticas burguesas de modernización. A su vez, profundiza en torno a la función central cumplida por la periferia en el proceso de acumulación de las economías centrales y que, por ello, el subdesarrollo no puede superarse con políticas correctivas o dosis mayores de inversión. Entiende que la dependencia se verifica al momento en que ciertos países condicionan el desarrollo de otros. Para este autor, el

principal rasgo distintivo de las economías periféricas industrializadas está dado en que, con el objeto de compensar las pérdidas vinculadas al lugar dependiente que ocupa la región en el mercado mundial, las burguesías de la periferia llevan a cabo un proceso de superexplotación de la fuerza de trabajo, específicamente en aquellos lugares donde existen grandes excedentes de mano de obra (Katz, 2018).

El economista brasileño retoma los postulados de Rosa Luxemburgo (1913), quien entiende que la principal causa de la brecha de desarrollo de países centrales y periféricos radica en la realización de plusvalía que los países desarrollados no logran alcanzar por la estrechez de los mercados, lo cual resuelven colocando los excedentes en las colonias para así poder desagotar esa acumulación. De esta forma, los países periféricos sufren una acumulación primitiva permanente al servicio de las economías centrales, que corresponde no sólo a la génesis, sino a la continuidad del capitalismo. Marini recupera las nociones desarrolladas por la teórica polaca para describir las tendencias expansivas de grandes empresas afectadas por la estrechez del mercado interno y las políticas adoptadas por algunos gobiernos para favorecer la incursión en las economías de países vecinos.

Por otro lado, los desarrollos teóricos de Marini pueden ligarse con la noción de imperialismo colectivo de Amin. Esto se puede dar en tres planos: la creciente asociación de capitales a nivel mundial, la función capitalista protectora ejercida por el Pentágono y el nuevo rol de custodios regionales asociados con Estados Unidos, que Marini conceptualiza como subimperialismo (Katz, 2018).

Tal como desarrolla Marini (1977), siempre han existido exportaciones de capital, lo novedoso del contexto en el que escribe sus desarrollos es la escala que alcanzaron las inversiones fuera del país de origen, presentándose en forma de inversión directa, préstamos y financiamientos. Para poder llevar adelante estas exportaciones de capital, fue necesario modificar la estructura de las empresas para adecuarlas a las características propias del capitalismo contemporáneo. Así, se dio un proceso de transnacionalización[10] de las empresas[11].

[10] Las empresas transnacionales son aquellas que tienen 25% o más de su inversión, producción, empleo o ventas en el exterior (Chapoy, 2012).

[11] Según Alma Chapoy (2012), el término multinacional implica que la empresa opera en diferentes países, los cuales son copartícipes en la propiedad y manejo. En realidad, en las empresas hoy llamadas multinacionales "los países huéspedes sólo participan de manera marginal y las decisiones se adoptan en

Por su parte, América Latina ingresó a esta nueva etapa del desarrollo capitalista en condiciones relativamente favorables. Las economías de mayor desarrollo relativo, durante el período de entreguerras, lograron impulsar un proceso de industrialización. Sin embargo, tal como plantea Marini, las transferencias de valor y recursos hacia los países centrales eran resultado de la dinámica objetiva de la acumulación a escala mundial.

Así, entre las décadas del veinte y cuarenta, la industria latinoamericana llevó adelante un proceso de sustitución de importaciones, que consistió en "un aumento de la participación de la producción nacional en un mercado ya constituido, y constituido precisamente con un carácter internacionalizado" (Marini, 1977: 5). En la posguerra, se abrió un período de reconquista del mercado por el capital extranjero ya no desde el comercio, sino desde la producción, lo cual derivó en un proceso de internacionalización del sistema productivo nacional. Algunas transnacionales se asociaron con empresas locales. En otros casos, si bien la propiedad de la empresa era nacional, se encontraba ligada a grupos multinacionales por lazos tecnológicos o financieros. Esta internacionalización generó la acentuación del proceso de concentración del capital.

Luego de que las TD se abandonaran durante la década de los ochenta y los noventa, a la luz de los procesos que se iniciaron a comienzos del nuevo siglo, estas teorías fueron recuperadas y actualizadas con el fin de analizar y brindar visiones sobre la situación de la región en este nuevo período. Atilio Borón (1998) plantea que, en la actualidad, los países de la región sudamericana son mucho más dependientes que en el pasado, por lo que las TD han alcanzado una vigencia mayor que en la década del sesenta.

Uno de los autores que ha actualizado las vertientes marxistas de las TD es Jaime Osorio (2007a), quien analiza la nueva división internacional del trabajo. Esta ha sido propiciada ya sea por la acción del capital financiero, el cual despliega numerosas formas de reproducirse, acrecentando la apropiación de riqueza y trabajo desde los países dependientes a los centros imperiales; o por el accionar del capital industrial, el cual tiende a segmentar los procesos productivos y a establecer cadenas en variados rincones. En este marco, se agudiza un proceso de explotación redoblada, la cual, estructuralmente arraigada en las regiones dependientes, se extiende hacia sectores de las economías

función casi exclusivamente de los intereses de la corporación" (ibíd.: 118), por esta razón la autora sostiene que es más adecuado usar el término transnacional.

centrales. Osorio (2009: 109) define a la dependencia como "una forma particular de desarrollo capitalista caracterizada por rasgos estructurales específicos del modo en que se reproduce el capital, en particular la explotación redoblada o superexplotación y la ruptura en el ciclo del capital".

Así, para abordar nuestro objeto de estudio, retomamos las vertientes marxistas para analizar la relación entre el centro y la periferia, así como también para caracterizar las diferencias entre países al interior de la región sudamericana. Por otro lado, recuperamos el concepto de subimperialismo, desarrollado por Marini, para analizar el caso brasileño y su vínculo con los restantes países de la subregión.

2.1.2. *La noción de Subimperialismo*

Para llevar adelante su noción de subimperialismo, Marini reformula una tesis desarrollada por Luxemburgo. La marxista polaca, para explicar de qué forma las principales economías europeas hacían frente a la estrechez de los mercados internos, señala que las potencias adoptaron medidas imperialistas de expansión hacia las colonias para contrarrestar estas limitaciones (Katz, 2018).

Siguiendo estos planteos, Marini postula la idea que, en el marco de la dependencia, algún país puede conseguir superar algunos umbrales, sin salir de su condición dependiente, a partir de la superexplotación de su propia fuerza de trabajo y de imponer una división del trabajo a escala subregional en función de los intereses de su burguesía. Esta formación social alcanza, de esta forma, la categoría de potencia subimperialista. Marini entiende que solo Brasil en Latinoamérica alcanzó este nivel.

De esta forma, Marini (1993: 112-113) caracteriza al subimperialismo como

> la expresión perversa de un fenómeno resultante de la diferenciación de la economía mundial, con base en la internacionalización del capital -que llevó a la superación de la relación centro-periferia, tematizada por la CEPAL y basada en la división simple del trabajo (producción primaria versus industria)- reemplazada por un sistema mucho más complejo, en el cual las economías se jerarquizan, en forma piramidal, según el grado de su desarrollo económico y donde la difusión de la industria manufacturera, elevando la composición orgánica media del capital, es decir, la relación entre medios de producción y fuerza de trabajo, da lugar a subcentros económicos (y políticos) dotados de relativa autonomía aunque permanezcan subordinados a la dinámica global impuesta por los grandes centros.

Según el economista brasileño, para que un país adopte una política subimperialista son necesarios dos componentes: por un lado, poseer una composición orgánica media en la escala mundial de los aparatos productivos nacionales, y, por el otro, ejercer una política expansionista relativamente autónoma, que está dada por una mayor integración al

sistema productivo imperialista mientras se mantiene en el marco de la hegemonía practicada por el imperialismo a escala internacional (Marini, 1977). Por su parte, Bambirra plantea que el principal objetivo detrás del desarrollo de una política subimperialista radica en impedir la gestación de un escenario poscapitalista a escala regional (Katz, 2018).

En los últimos años, numerosxs autorxs han comenzado a recuperar la noción de subimperialismo para analizar la situación de inicios del siglo XXI. En una relectura de Marini, Carlos Eduardo Martins (2013) entiende que el subimperialismo presenta dos dimensiones: la económica y la política. En el plano económico, se transforma en la alternativa más dinámica para la realización de las mercancías, en el momento en que la composición orgánica del capital en algún país dependiente alcanza un nivel intermedio a partir del desarrollo de la industria de bienes de consumo durables. El aumento de las escalas productivas se topa con límites de realización propios de una formación social cuya base es la superexplotación. El subimperialismo, según Martins, se caracteriza "por el alto dinamismo de las exportaciones –en particular, las manufacturas–, por la exportación de capital y por el control regional de materias-primas y abastecimiento energético" (ibíd.: 39). En este marco, el despliegue internacional de una formación social subimperialista estaría orientado en dirección a otros países dependientes, para los cuales el primero se presentaría como un subcentro integrador. En el plano político, la afirmación del subimperialismo estaría ligada al impulso de una política estatal que logre potenciar las posibilidades brindadas, en el plano internacional, por el pasaje de una situación de unipolaridad hacia otra de integración jerarquizada.

Sin embargo, Martins (ibíd.) entiende que se sucedieron varios factores que, sin eliminarlo, restringieron las posibilidades del subimperialismo: el apoyo de algunos sectores del capital internacional a los procesos de redemocratización en Latinoamérica; la centralización financiera mundial promovida por Estados Unidos en los ochenta, la cual ha socavado la base financiera de los proyectos de modernización latinoamericanos, así como también su intención de internalizar la industria pesada; y, por último, la internacionalización de procesos productivos y mercados internos con el advenimiento del neoliberalismo.

Por su parte, el modelo del subimperialismo fue teorizado por Jaime Osorio como un patrón de reproducción de ciertos países subdesarrollados (Katz, 2018). Osorio (2014: 87) plantea que existe un patrón de reproducción cuando

> en espacios geoeconómicos y en períodos históricos determinados, el capital ha trazado (descubierto) un camino específico para reproducirse y valorizarse, el cual tiende a repetirse en sus procesos fundamentales, a) en términos de los valores de uso en los que encarna el valor, b) de las características que presentan las esferas de la producción y de la circulación y de los vínculos que establecen, y c) de los procesos de subordinación y dependencia de los capitales locales frente a los capitales de las economías imperialistas (esto se cumple en particular en las economías dependientes).

Por otra parte, Marini (1992) plantea que no puede considerarse al subimperialismo como un fenómeno específicamente brasileño, ni tampoco se corresponde con a una evolución del capitalismo dependiente. Por el contrario, este concepto es una expresión política y económica de la integración de los sistemas de producción de los países dependientes a la etapa de los monopolios de la economía de los centros imperialistas (Bueno y Seabra, 2010).

La noción de subimperialismo ha sido recuperada también para leer la posición de otros países en el plano regional. Tal es el caso del desarrollo teórico de Patrick Bond (2005) para el caso sudafricano y su alianza con Estados Unidos; Elif Çağlı (2009) para el caso de Turquía; Raimo Väyrynen y Luis Herrera (2014) para analizar el rol iraní; Bruno De Cordier (2016) para abordar Arabia Saudita; entre otros. Por otro lado, el propio Marini cataloga a Israel como un subimperio. Sin embargo, otros autores lo entienden no como un país subimperial, sino como una "provincia externa", en términos de Samir Amin (2013), como un "imperialismo secundario" como planteó Patrick Bond (2015), o como "mini-imperio" en palabras de James Petras (2014). Este mismo análisis se aplica a los casos de Canadá y Australia (Katz, 2018).

2.2. Dimensiones de las Relaciones Internacionales y de la Integración Regional

Para abordar un proyecto como la IIRSA, es necesario plantear el lugar desde el que entendemos a los procesos de integración regional en el contexto del capitalismo actual. Por otro lado, consideramos central analizar las olas de regionalismo que se dieron en Sudamérica durante los primeros años del nuevo siglo, dado que es fundamental contextualizar los proyectos de integración en pugna que coexistieron con la IIRSA.

Si bien los procesos de integración y regionalización comenzaron a gestarse hace muchas décadas, desde inicios de los noventa, los procesos de regionalización y globalización comenzaron a caracterizar el período que se abría con la caída de la Unión Soviética

(Bernal-Meza, 2009). En este marco, la integración regional y los procesos de regionalismo comenzaron a cobrar un lugar central en la agenda política de los países, en el contexto de un capitalismo globalizado.

2.2.1. *Hegemonía, relaciones internacionales y orden mundial*

En el área de las Relaciones Internacionales, han existido dos grandes teorías en los análisis en torno a integración regional y política exterior: por un lado, la visión liberal y, por el otro, la realista. Ambas surgieron a comienzos del siglo XX y se consolidaron con la emergencia del proceso europeo. Sin embargo, estas dos escuelas no tienen en cuenta la relación existente entre la política exterior, los procesos de integración regional y las relaciones internacionales, así como tampoco con las relaciones sociales en un plano más general, con los intereses o posicionamientos de los grupos sociales. Estas posturas asumen al Estado como un sujeto autónomo, interactuando con otros Estados con capacidad de agencia y es esta capacidad lo que impulsa la posibilidad de que estos Estados deseen integrarse con otros (Kan, 2014).

Realizando una profunda crítica a las visiones liberales y realistas, en la década del ochenta surgió la perspectiva neogramsciana de política internacional de la mano de los trabajos de Robert Cox. Este enfoque recupera los aportes de Antonio Gramsci en torno a la noción de hegemonía, de orden mundial y de cambio histórico para desarrollar una teoría crítica. Cox se pregunta por cómo emerge, se mantiene y transforma el orden social y los órdenes mundiales, cómo estos devienen en órdenes hegemónicos y qué fuerzas contrahegemónicas tienen el potencial de transformarlos (Sanahuja, 2015).

Según el enfoque neogramsciano, la hegemonía aparece como expresión de un amplio consentimiento, centrado en la aceptación de las ideas y apoyado por capacidades materiales e instituciones (Bieler y Morton, 2013). Existen dos clases de ideas: por un lado, las nociones compartidas de la naturaleza de las relaciones sociales que tienden a reproducir hábitos y expectativas de conducta; y, por el otro, las imágenes colectivas de orden social que poseen diversos grupos. Por su parte, las capacidades materiales existen como capacidades tecnológicas y organizativas. Por último, las instituciones reflejan las relaciones de poder, son la cristalización de ideas y poder material (Cox, 1993).

Dentro de una estructura histórica, la hegemonía se constituye en tres esferas de actividad: por un lado, las fuerzas sociales generadas por el proceso de producción; por otro, las formas de Estado derivadas del estudio de Estado/sociedad civil; y, por último,

los órdenes mundiales. Los cambios en la organización de la producción impulsan nuevas fuerzas sociales, las cuales producen cambios en la estructura de los Estados, y la generalización de los cambios altera la problemática del orden mundial (ibíd.).

El poder en las relaciones sociales de producción puede dar origen a determinadas fuerzas sociales, estas últimas pueden convertirse en las bases del poder en ciertas formas de Estado, y esto puede dar forma al orden mundial. De esta forma, la hegemonía puede entenderse como una forma de dominación de clase vinculada a fuerzas sociales, las cuales han sido generadas por las relaciones sociales de producción (Bieler y Morton, 2013).

Las diferentes formas de Estado son principalmente distinguidas por las características de sus bloques históricos. Este hace referencia al modo en el cual las fuerzas sociales dirigentes al interior de un Estado establecen una relación por sobre las fuerzas sociales en pugna. Implica la integración de intereses diversos de clase, que se propagan a lo largo de la sociedad creando una unidad intelectual y moral. De esta forma, el Estado es concebido como una relación social a través de la cual se expresan el capitalismo y la hegemonía (ibíd.). Para Cox (1992), el Estado se convirtió en un cinturón de transmisión para el neoliberalismo y para la lógica de competencia capitalista desde el plano global al local.

En el plano internacional, al igual que en el doméstico, la hegemonía es un modo de dominación por consentimiento, en el cual las instituciones internacionales juegan un rol clave, a través de diversos mecanismos: a) estas instituciones encarnan las reglas que favorecen la expansión de los órdenes hegemónicos; b) son, a su vez, producto del orden hegemónico vigente; c) legitiman las normas del orden mundial en el plano ideológico; d) cooptan a las élites de países periféricos; y e) absorben ideas contrahegemónicas (Sanahuja, 2015).

Frente a esto, la hegemonía permite pensar las relaciones internacionales en términos de lucha hegemónica con intereses de clase (Kan, 2014). Siguiendo a Cox (1996: 137),

> La hegemonía a nivel internacional, por lo tanto, no es simplemente un orden entre los estados. Es un orden dentro de una economía mundial con un modo de producción dominante que penetra en todos los países y enlaza con otros modos de producción subordinados. También es un complejo de relaciones internacionales que conectan las clases sociales de los diferentes países (...) además, se expresa en normas, instituciones y mecanismos universales que establecen reglas generales de comportamiento para los estados y para esas fuerzas de la sociedad civil que actúan a través de las fronteras nacionales, reglas que apoyan el modo de producción dominante.

Por otro lado, en el marco del Marxismo Abierto y desde una mirada crítica a la escuela neogramsciana, Peter Burnham se plantea indagar al Estado como componente de un sistema internacional de Estados. Para ello, atraviesa diferentes niveles de abstracción, desde la forma Estado capitalista en general, pasando por los Estados nación particulares y el manejo político de los circuitos globales de capital propios de los Estados en el marco de la globalización (Míguez, 2017).

Para Burnham (ibíd.), las corporaciones transnacionales han favorecido el sistema interestatal fundado sobre la rivalidad entre Estados, promoviendo esta competencia para acrecentar su poder. Además, los Estados no sólo garantizan la implementación de políticas domésticas que beneficien la movilidad del capital, sino también esquemas institucionales para asegurar los derechos de propiedad -como base para la continua expansión del capital-, así como también la reproducción de una clase trabajadora obediente. Para este autor, la internacionalización del capital no ha reducido la importancia de los Estados.

Por su parte, Andreas Bieler y Adam David Morton (2013) toman como punto de partida las relaciones sociales de producción para pensar el orden mundial y la forma en que estas relaciones engendran configuraciones de fuerzas sociales. Así, entienden al Estado como un aspecto de las relaciones sociales de producción. A su vez, plantean que el capital no está totalmente libre más allá del poder del Estado, sino que está representado por clases y fracciones de clase dentro de la propia constitución del Estado. La transnacionalización de la producción impulsa la reproducción del capital al interior de diferentes Estados, mediante un proceso de internacionalización entre varias fracciones de clase dentro de los Estados.

A su vez, retomando la obra de Poulantzas, consideran que la hegemonía no se limita a las experiencias nacionales, sino a las circunstancias internacionales, combinando así el énfasis en el punto de partida nacional con el foco en las emergentes fuerzas sociales transnacionales sin el punto de vista exclusivo de la internacionalización del Estado, distanciándose así del Marxismo Abierto. Para ellos, la internacionalización del capital no es la expansión de diferentes capitales fuera del Estado, sino la expansión de diferentes fracciones de clases en diferentes Estados (Míguez, 2017).

Para poder llevar adelante nuestro análisis, recuperamos, principalmente, dos de los postulados de quienes repensaron los desarrollos de la Escuela Neogramsciana de

Política Internacional. Por un lado, la idea de Burnham de que las corporaciones transnacionales favorecieron el sistema interestatal, dado que son los Estados los que garantizan la adopción de las políticas que favorecen la movilidad del capital. Por otro lado, retomamos los desarrollos de Bieler y Morton para entender cómo se configura el orden mundial a partir de las relaciones sociales de producción y cómo la transnacionalización de la producción –y de algunas fracciones de clase- promueve la reproducción del capital al interior de los Estados.

Tal como plantea Julián Kan (2015), los planteos impulsados desde la perspectiva neogramsciana nos permiten entender que, si bien las iniciativas de integración son concretadas a través de acuerdos entre gobiernos, no son obra exclusiva de la acción gubernamental, sino que diversos grupos contribuyen a la redefinición de dichas iniciativas. Es decir, estas instancias no son ajenas a las luchas de fuerza entre las clases sociales. Estas visiones son recuperadas para entender no sólo los regionalismos en pugna al interior de la región sudamericana durante los primeros años del nuevo siglo, sino también la política exterior brasileña para el subcontinente durante los años de gobierno de Lula da Silva.

2.2.2. *Regionalismos y liderazgos en disputa*

Siguiendo a Raúl Bernal-Meza (2009), el concepto regionalismo puede hacer referencia a tres cosas. Por un lado, en vinculación con las relaciones internacionales, implica la constitución, expansión o integración a un subsistema. Por otro lado, en relación a la economía política, implica algún nivel de integración económico-comercial al interior de un área geográfica común o al mundo. Por último, al hacer referencia a la política exterior, puede estar conectada con un paradigma que apunta elementos de una determinada política externa, de carácter Estado-nacional o común, o armonizada.

Pía Riggirozzi y Diana Tussie (2018) sostienen que, en Sudamérica, se dieron tres olas de regionalismo. La primera ola se dio a mediados del siglo pasado, como resultado de la pérdida de mercados de exportación con la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957. En este marco, la propuesta estuvo centrada en impulsar un capitalismo nacional en el que los acuerdos de comercio tenían como objetivo extender la sustitución de importaciones a un plano regional. Así, en 1960 se da la creación de la Asociación

Latinoamericana de Libre Comercio de América Latina y el Caribe (ALALC)[12]. La escasa sustentabilidad que demostraron los proyectos nacionalistas de desarrollo y la represión estatal afectaron el espíritu de este regionalismo de base comercial conducido por un activismo estatal. Las economías nacionales, golpeadas por crisis de endeudamiento, no tuvieron otra opción que acercarse a Estados Unidos, principal impulsor de los mercados desregulados y del regionalismo abierto.

La segunda ola de regionalismo se abrió al finalizar la Guerra Fría, al igual que la primera se centró en el comercio y la inversión, pero no ya desde la defensa de los mercados nacionales con protección arancelaria, sino desde aceptar la "realidad inevitable" de la globalización. Las empresas transnacionales necesitaban de la creación de un mercado regional, por lo que el regionalismo era clave para un mercado global en manos de estas compañías. Hacia finales de la década del noventa, este tipo de regionalismo comenzó a ser cuestionado desde algunos sectores de la sociedad civil organizada, cuyas voces comenzaron a permear la agenda de las nuevas generaciones de líderes. Frente a este descontento, las ideas impulsadas desde el regionalismo abierto comenzaron a perder vigencia. La agenda de integración propuesta desde el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se fue desgranando, razón por la que Estados Unidos debió recurrir a acuerdos bilaterales. Así, surgió un nuevo regionalismo, al que las autoras denominan "post-hegemónico" que se construye desde lo nacional a lo regional.

Así, en la región, hasta los años 2000, los procesos de integración estuvieron signados por los preceptos del regionalismo abierto promovido desde la CEPAL. Esta institución definió a este regionalismo como

> un proceso de creciente interdependencia económica a nivel regional, impulsado tanto por acuerdos preferenciales de integración como por otras políticas en un contexto de apertura y desreglamentación, con el objeto de aumentar la competitividad de los países de la región y de constituir, en lo posible, un cimiento para una economía internacional más abierta y transparente (CEPAL, 1994: 8).

De esta forma, la CEPAL entendía la integración como un proceso comercial vinculado a las rebajas arancelarias y a la apertura de los mercados al exterior como un paso necesario para insertarse mejor en la globalización (Gudynas, 2006). Amado Luiz Cervo (2001) plantea que las principales características de este tipo de regionalismo son el endeudamiento para sostener la estabilidad monetaria centrada en la captación por parte

[12] La ALALC fue un organismo latinoamericano existente entre las décadas del sesenta y el ochenta, creado el 18 de febrero de 1960 por el Tratado de Montevideo. El 12 de agosto de 1980 fue sustituido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

del Estado de los capitales especulativos, la venta de empresas públicas para hacer frente a compromisos financieros, la caída de la actividad productiva interna producto de las reducciones tarifarias, y una transferencia creciente de la renta hacia el exterior.

Durante la década del 2000, el regionalismo comenzó a ser repensado, en el marco de las transformaciones que se dieron a partir de los primeros años del nuevo milenio: la llegada al poder de gobiernos neodesarrollistas y las transformaciones globales que se iniciaron con la caída de las torres gemelas (Briceño Ruiz, 2014a). El nuevo diseño que se impulsó a partir de este momento ha sido denominado de diferentes formas: post-liberal (Da Motta y Ríos, 2007; Motta Veiga, 2007), post-neoliberal (Sanahuja, 2011), post-comercial (Tussie y Trucco, 2010) y post-hegemónico (Tussie y Riggirozzi, 2012; Briceño Ruiz, 2014b).

Más allá de dónde pone el foco cada uno de estos conceptos para analizar el regionalismo que se abrió durante esta década, consideramos que el más acertado para analizar los diversos procesos de integración en pugna es el post-hegemónico. Riggirozzi y Tussie (2012: 12) sostienen que en estos años en Sudamérica se constituyeron

> estructuras regionales caracterizadas por prácticas híbridas como resultado de un desplazamiento parcial de las formas dominantes de gobierno neoliberal liderado por Estados Unidos en el reconocimiento de otras formas políticas de organización y gestión económica de bienes regionales (comunes).

Así, esta noción da cuenta de la existencia de diversos procesos de integración en pugna por estos años, los cuales convivieron en el marco del nuevo regionalismo que se abría. A su vez, la noción de post-hegemonía hace referencia al debilitamiento del poderío estadounidense, es decir, a un momento en el que existen múltiples focos de poder.

Más allá de las diferentes caracterizaciones que realizan lxs autorxs, siguiendo a José Antonio Sanahuja (2012), las principales características de este nuevo regionalismo son (a) el retorno de la política a las relaciones exteriores y de las políticas de desarrollo; (b) la presencia del Estado en términos de política externa; (c) la persecución de mayor autonomía frente al mercado y el distanciamiento de Estados Unidos; (d) el impulso de proyectos de integración que buscan crear instituciones y políticas comunes, profundizando la cooperación en términos no comerciales y el desarrollo de infraestructura regional con el objeto de reducir las asimetrías y la pobreza; y, por último, (e) la búsqueda de dinámicas que incorporen la participación de actores no estatales.

En este marco, comenzaron a surgir nuevos liderazgos que buscaban conducir el nuevo regionalismo en Latinoamérica. Frente a la alternativa histórica entre una tendencia de

integración liderada por los Estados Unidos y otra articulada en conjunto por los países de la región, comenzó a consolidarse una suerte de "tercera vía" que era la que impulsaba Brasil, de carácter sudamericano (Bernal-Meza 2009), con la estrategia de

> mejorar su inserción en la estructura de poder económico y político mundial, dado el papel instrumental que ese país le asignó en el pasado a la integración regional sudamericana. Ese papel estaba asociado a la expansión de los mercados como mecanismo de profundización del desarrollo industrial y de apertura gradual de la economía nacional a la economía mundial (Bernal-Meza 2013: 6).

Esta tendencia daría cuenta de lo que Marini (1970) caracterizó como subimperialismo brasileño en la región.

2.3. El Estado Capitalista

Para poder llevar adelante la investigación que nos proponemos es necesario realizar un planteo sobre el lugar desde el cual entendemos la configuración del Estado. Si bien no coincidimos con las teorías clásicas de las Relaciones Internacionales que analizan al Estado como un sujeto autónomo interactuando con otros Estados con capacidad de agencia y que es esa capacidad la que los impulsa a integrarse entre sí, consideramos central entender cómo operan los Estados, su carácter selectivamente estratégico, y su tendencia a beneficiar algunos intereses de clase o fracciones de clase. Esto nos permitirá analizar de qué forma se llevan adelante las decisiones en relación a la política exterior, a impulsar determinados procesos e instancias de integración regional y qué sectores se busca beneficiar mediante dichas decisiones, específicamente en el caso de Brasil durante la etapa de gobierno de Lula da Silva.

En el prólogo del libro de Bob Jessop (2016: 13), Juan Carlos Monedero plantea que "Enfrentar una teoría del Estado es heroico porque es una operación suicida". El autor español sostiene esta afirmación porque no se puede buscar la "esencia" del Estado, sino que simplemente se pueden desarrollar herramientas teóricas y metodológicas útiles para estudiar su funcionamiento. Por ello, decidimos hacer un recorrido teórico -sabiendo que no es posible agotar las referencias- que nos permita pensar algunas herramientas para entender los Estados, cómo estos se configuran y por qué impulsan determinadas políticas exteriores y domésticas.

2.3.1. *El Estado en el centro*

A principios del siglo XX, Antonio Gramsci estudió las modalidades del poder del Estado, buscando comprender cómo se construye la dominación política, la cual no podía deberse sólo a la coerción. Así, entendió al Estado como "sociedad política+sociedad civil", dado

que este reside también en los organismos privados que producen consenso (ibíd.). Jessop reescribió esta definición planteando que puede considerarse al Estado como "el gobierno+la gobernanza a la sombra de la jerarquía" (en Prieto y Monedero, 2017).

A finales de la década del setenta la cuestión del Estado recuperó centralidad producto del trabajo de teóricxs que buscaban analizar su rol en el marco de la recomposición del capitalismo en la segunda posguerra (Míguez, 2010). En la nueva etapa del capitalismo monopolista, el Estado no tendría otra opción que ponerse al servicio de los intereses del sector monopólico del capital.

En este contexto, el desarrollo teórico reciente en relación al Estado tuvo una primera ola a finales de los sesenta, comandada por autorxs marxistas que centraron su mirada en analizar la forma y las funciones del Estado capitalista. Estxs entendieron que la forma del Estado capitalista minaba su funcionalidad para la acumulación del capital y la dominación política de clase. A su vez, abandonaron la idea del aparato del Estado como una cosa, sino que comenzaron a analizar su poder como una relación social compleja (Jessop, 1999a).

Así, surgieron dos enfoques que provenían de diferentes supuestos teóricos: por un lado, la visión instrumentalista, cuyo referente fue Ralph Miliband, y, por el otro, la estructuralista, cuyo principal teórico fue Nicos Poulantzas. La primera visión consideraba que el Estado estaba casi completamente controlado por la clase capitalista. A raíz del poder económico con el que ésta cuenta puede disponer del Estado como su instrumento de dominación (Míguez, 2010).

Desde una perspectiva estructuralista, Poulantzas desarrolló un enfoque relacional sobre la materialidad institucional del Estado. Sostuvo que la dominación política de una clase está vinculada con la organización material y las instituciones del sistema de Estado, y que la materialidad de este se basa en las relaciones de producción y en la división social del trabajo en las sociedades capitalistas.

A su vez, el teórico griego afirmó que el proceso de producción se centra en la unidad del proceso de trabajo y en las relaciones de producción organizadas bajo el predominio de este último. Estas relaciones no son exclusivamente de carácter económico, sino que también incluyen momentos políticos e ideológicos específicos. El poder de cada clase está dado por las posiciones contrastantes ocupadas en la división social del trabajo, así como también, y más preponderantemente, por los modos de organización y sus

estrategias en los diferentes campos de la lucha de clases. El proceso de producción está encarnado y reproducido por relaciones de dominación y subordinación políticas. De esta forma, las relaciones de producción se expresan en determinados poderes de clase orgánicamente articulados a las relaciones ideológicas y políticas que lo concretizan y lo legitiman (Jessop, 1999b).

En la actualidad, lxs teóricxs del Estado entienden que existen dos momentos en el desarrollo de Poulantzas. En el primer momento, el marxista griego afirmó que la función del Estado es asegurar o mantener la cohesión de la sociedad con el objetivo de que la acumulación capitalista pueda desarrollarse libremente; el Estado mantiene con la clase dominante una relación objetiva articulada por los aparatos ideológicos del Estado. En un segundo momento, el cual se da a partir de ciertos cuestionamientos que le realizaron algunxs teóricxs a sus primeras obras, se cristalizó con la publicación de *Estado, poder y socialismo* (1979). En esta obra, el autor afirmó que el Estado no debe ser considerado como una unidad intrínseca, sino como "la condensación *material* y *específica* de una relación de fuerza entre clases y fracciones de clase" (p. 155). Esta condensación está dada por la conexión del Estado con las relaciones de producción y la división social del trabajo (Míguez, 2010).

Uno de los ejes centrales del desarrollo de Poulantzas fue su consideración en torno a la autonomía relativa del Estado. El teórico griego desarrolló este punto en contraposición a las visiones instrumentalistas que negaban al Estado cualquier autonomía, y las concepciones que consideraban al Estado como sujeto autónomo de la sociedad. La autonomía relativa es un rasgo constitutivo del Estado capitalista que le permite que pueda instaurar a las clases dominantes como tales y conformar su unidad política en el poder (Pimmer, 2016). Para Poulantzas, esta autonomía deviene en una selectividad estructural, la cual implica que el Estado ejerce su capacidad a partir de los agentes que las controlan, pero esta capacidad se moldea a través de elementos de la dinámica capitalista (Stoessel, 2017).

Otro de los aportes centrales de Poulantzas (1978: 302-303), ligado a su desarrollo en torno a la autonomía del Estado, es la noción de bloque en el poder, la cual es definida como "la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase dominante en su relación con una forma particular del Estado capitalista". Este concepto permite entender que la dominación en sociedades capitalistas no es exclusiva de una

determinada clase social, sino producto de las relaciones que se tejen entre diversos grupos y clases sociales. En este punto, Poulantzas entiende que es central la noción de hegemonía.

En la década del setenta y producto de los debates que plantearon estxs autorxs, se impulsaron nuevos enfoques en torno al Estado, su forma y función. En Alemania, surgió la escuela de la derivación, que buscaba derivar lógicamente del modo de producción capitalista la forma general del Estado y sus funciones. Para lxs autorxs reunidos en esta corriente, el análisis del Estado debía poder dar cuenta de las formas cambiantes de la explotación y de las limitaciones que le impone al accionar del Estado (Míguez, 2010).

En el marco de la derivación, Joachim Hirsch (1978) planteó que el punto de inicio para el análisis del Estado debía ser el examen de la anatomía de la "sociedad burguesa", que es el modo capitalista del trabajo social, la apropiación de plusvalía y las leyes de reproducción de la formación social. Esta anatomía se inscribe en las características de la relación de explotación capitalista (Bonnet, 2015). Hirsch (1978) sostuvo que el Estado burgués es una forma social que el capital debe crear para su propia reproducción y, necesariamente, el aparato estatal debe asumir una existencia formalmente separada de la clase dominante. El autor entendió que el Estado "refleja en su estructura concreta relaciones de fuerzas sociales, pero simultáneamente también las moldea y estabiliza" (Hirsch, 2005: 170).

Hirsch comprendió que los aparatos del Estado representan relaciones con todas las clases, pero lo realizan de manera altamente diferenciada y selectiva en el sentido de favorecer e imponer intereses. Estos vínculos no son estables; dado que el Estado es un "Estado de clases", pero no es un instrumento de una clase, su autonomía relativa frente a las fuerzas sociales en lucha posibilita que se establezca como ámbito de mediación, necesario para el desarrollo y la reproducción de una sociedad capitalista (ibíd.).

Por otra parte, se desarrolló la teoría de la regulación a la economía política, cuyo principal planteo fue considerar que las economías están socialmente incorporadas y son reguladas socialmente. En este marco, el sistema estatal juega un papel clave en la reproducción y la regulación de la acumulación de capital (Galindo Hernández, 2007). Un régimen de acumulación, según lxs teóricxs de este enfoque, implica una transformación histórica de las relaciones de producción y un desarrollo correspondiente de las formas de valor. La estabilidad del régimen de acumulación debe estar asegurada por los modos

de formas societales. La mediación social y política correspondiente a la acumulación se denomina modo de regulación. Este hace referencia al conjunto de formas institucionales, redes y normas que garantizan la compatibilidad del comportamiento que adopta el mercado dentro de un régimen de acumulación en relación con el patrón de las relaciones sociales (Bonefeld, 1992). El Estado es el centro de la regulación, porque él concentra institucionalmente las relaciones sociales y de clases, y estabiliza los conflictos sociales; sin embargo, no es independiente, porque en él se materializan institucionalmente las relaciones de clase (Hirsch, 1995).

A partir del descenso que sufrió el debate de la derivación del Estado durante los setenta y retomando la dirección metodológica del enfoque de la regulación, surgió la reformulación de la teoría del Estado, de la mano de Hirsch, Bob Jessop, John Holloway, Werner Bonefeld, Simón Clarke, entre otrxs. Este enfoque analiza el desarrollo histórico de las formas y funciones del Estado, las cuales se conceptualizan como correspondiendo a un régimen de acumulación. Al interior del Estado es donde se condensan las formas regulativas, es el Estado el que guía hacia formas apropiadas en las cuales se canaliza la lucha de clases de forma conveniente para la reproducción del capital. Las formas regulativas son los modos de mediación que aseguran la reproducción capitalista, dado que el capital por sí mismo sería estructuralmente incapaz de organizarlas. Para lxs teóricxs de la reformulación una teoría del Estado debe estar basada en una teoría de la crisis. Para ellxs, la crisis es entendida como la forma que adopta el capital para transformar sus contradicciones (Bonefeld, 1992).

Por su parte, Bob Jessop (1999a) entiende el poder del Estado como un efecto complejo y contradictorio de la lucha de clases, mediado a través y condicionado por el sistema institucional. El ejercicio y la eficacia de dicho poder es producto de cambios en el equilibrio de las fuerzas políticas situadas dentro y fuera del Estado. Este equilibrio está condicionado por la estructura institucional y los procedimientos del aparato estatal. El Estado no puede ejercer el poder, dado que no es un sujeto real; es un conjunto de centros de poder que brindan oportunidades desiguales a diferentes fuerzas dentro y fuera del Estado. Los poderes del Estado se activan a través de la agencia de las fuerzas políticas vinculadas a coyunturas específicas (Jessop, 1999b).

Combinando las definiciones de Estado adoptadas por Poulantzas y Gramsci, Jessop (2002) entiende al poder del Estado como el equilibrio de fuerzas predominante,

mediado por el aparato estatal con su selectividad estratégica inscrita estructuralmente. En este sentido, el Estado puede definirse como un conjunto relativamente unificado de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades socialmente incrustadas y reguladas, y selectivas estratégicamente, organizadas en torno a la toma de decisiones importantes para una comunidad política imaginada.

La selectividad estructural del Estado consiste en "en un conjunto complejo de mecanismos institucionales y prácticas políticas que sirven para avanzar (u obstruir) particulares intereses fraccionales o de clase" (Jessop, 1999b: 57). De esta forma, la selectividad estructural es la cristalización de estrategias políticas pasadas y presentes en una forma institucional del Estado, operando selectivamente, pero de un modo cambiante, reactivo al entorno y a las diversas estrategias de los agentes (Simón González, 2004).

Tanto el Estado como el sistema político "son partes de series de relaciones sociales más amplias" (Jessop, 2016: 59) y no pueden ser analizadas sin recuperar su integración en estructuras más vastas. En este marco, tanto el capitalismo -como un todo- como la relación capital-trabajo no pueden reproducirse exclusivamente a través de las relaciones de mercado, sino que requieren de modos complementarios de reproducción, regulación y gobernanza, los cuales, en parte, se derivan de la actuación del Estado. A su vez, a medida que el capital se expande en una escala cada vez más global, su dinámica se vuelve más dominante en la configuración de la evolución de los sistemas sociales (Jessop, 2002).

2.3.2. *El Estado en el contexto de la globalización*

No existe un consenso al datar el proceso de globalización. Göran Therborn (2012) afirma que existen seis olas de globalización: la primera va desde el 400 a.C. hasta el 800 a.C., subrayando que este período no es propiamente global; una segunda ola se abre en el 1500 y se extiende hasta 1700, la cual coincide con la conquista de América y el primer colonialismo; la tercera desde 1750 hasta 1815, con las guerras napoleónicas; la cuarta de 1830 a 1918, con un segundo momento de colonialismo europeo; la quinta de 1945 a 1989, que abarca el período de Guerra Fría; y, por último, la que se inicia a partir de 1990. En el anterior período al que se abre en la década de los noventa, tras la posguerra, la estabilidad relativa del capital cimentó las bases para la constitución de un cierto tipo de relación entre los Estados y el capital global, nutriendo la imagen de un mundo

compuesto de economías nacionales. El rápido crecimiento de los mercados mundiales de dinero que se dio durante los setenta y ochenta, así como el aumento en la velocidad en la que puede girar el dinero, intensificó aún más la competencia entre Estados, obligando a cada uno de ellos a encontrar formas novedosas de hacerse atractivos para el capital y lo que se necesitaba para atraer el flujo de dinero global era una nueva organización del trabajo, una nueva flexibilidad y una forma de aprender a someterse.

Tal como señalan Martin Carnoy y Manuel Castells (en Thwaites Rey, 2010), sin la intervención estatal la globalización no habría tenido lugar. Esto se debe a que la desregulación, la liberalización y la privatización constituyeron las bases que abrieron el camino para las estrategias de negocios de alcance global.

La última corriente de globalización se dio en las décadas del setenta y el ochenta y, si bien existen múltiples continuidades con respecto a anteriores fases de integración, la principal diferencia en el contexto actual -y la principal presión que sienten los gestores estatales- está vinculada con la condensación temporal que implicó esta nueva etapa del capitalismo. Ante la creciente integración del mercado mundial y la interdependencia de la sociedad mundial, la soberanía de los Estados-nación asociados con las economías capitalistas está más constreñida. Esto es aún mayor en el caso de los países dependientes (Jessop, 2016).

Hirsch (1997) plantea que la globalización actual se refiere en esencia a un proceso económico, cuya principal característica es la liberación del tráfico de mercancías, servicios, dinero y capitales, la internacionalización de la producción y la posición cada vez más dominante de las empresas transnacionales. En este contexto, los Estados, en muchos casos, promocionan activa o aceptan pasivamente la integración del mercado mundial.

La integración del mercado mundial potencia el poder económico y político del capital, teniendo en cuenta que debilita la capacidad de lxs trabajadorxs para resistir la explotación y socava el poder de los Estados para regular las actividades económicas en contextos nacionales. Esto obliga a los Estados a intentar gestionar la tensión entre el interés del capital de reducir su dependencia espacial y librarse de las restricciones temporales, y el interés del propio Estado de fijar el capital en su propio territorio y compatibilizar los ritmos y horizontes temporales del capital con las temporalidades y

tendencias a las crisis estatales. Jessop (2016) plantea que una respuesta a estas presiones es el desarrollo de Estados competitivos.

Por su parte, Hirsch (1999) sostiene que, a partir de las transformaciones que se dieron en las últimas décadas del siglo pasado, se pasó de un Estado de seguridad a uno nacional competitivo. El teórico alemán afirma que, con las transformaciones acaecidas producto de la globalización, el Estado ha perdido "una parte esencial de su instrumentario intervencionista, y el `asegurar el posicionamiento´, es decir la creación de condiciones óptimas de valorización para el capital internacional, en la competencia interestatal, se ha convertido en la máxima política principal" (p. 78).

Siguiendo a Saskia Sassen (2004: 223), a pesar de considerar que el transnacionalismo ha reducido el rol que adopta el Estado en el "gobierno de los procesos económicos", éste aparece como garante de los derechos del capital, representando una capacidad administrativa que, por el momento, no puede ser garantizada por ningún otro acuerdo institucional. La desregulación está vinculada con la formación de regímenes transnacionales que operan en territorios nacionales y es justamente el Estado quien ocupa un rol fundamental en la producción de la legalidad en relación a las nuevas formas de actividad económica.

En este contexto, tal como plantea Manuel Castells (1999), el Estado no desaparece, sino que se transforma, estableciendo alianzas estratégicas, como lo son la Unión Europea (UE) o el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). De esta forma, si bien se rescinde soberanía, se construyen esferas de poder compartido que posibilitan acrecentar la capacidad de negociación e intervención de los Estados en relación con los flujos globales.

En la misma línea, pero distanciándose de lxs dependentistas, Holloway (1993) afirma que el antagonismo entre los Estados nacionales no es expresión de la explotación de los Estados periféricos por los Estados centrales, sino que representa la competencia entre éstos para atraer o retener dentro de sus territorios el flujo de capital. A diferencia de lo que se planteó desde las TD, para el politólogo irlandés la explotación no es de países ricos a países pobres, sino del trabajo global por parte del capital global. Sin embargo, disentimos con la caracterización de Holloway, dado que entendemos que la competencia entre Estados es, también, producto de la dependencia que sufren los países de la periferia.

2.3.3. *El Estado en América Latina*

En muchos casos suele considerarse a América Latina como un todo uniforme. José Aricó planteó que este sector del continente puede analizarse como una "unidad problemática", dado que, si bien existe un sustrato compartido independiente de las especificidades de cada nación, estas particularidades han obturado la posibilidad de constituir un pueblo-continente (en Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

Para poder comprender tanto lo específico como lo común de los Estados latinoamericanos, René Zavaleta (2009) desarrolló dos conceptos. Por un lado, el de *forma primordial*, que sería la combinatoria propia de la formación económico-social; y, por el otro, la *determinación dependiente*, que serían los condicionamientos externos. Tal como plantea este autor, el carácter de la dependencia "está dado por las circunstancias de la emisión, pero también por el modo de recepción por la historia nacional, es decir, por el compuesto primordial. En otros términos, cada formación social o país elabora un tipo particular de dependencia" (p. 310).

En línea con lo planteado por Zavaleta, se pueden establecer generalidades en el marco de las especificidades de cada uno de los Estados de América Latina. En la mayoría de los países latinoamericanos, tras los procesos de independencia que se dieron en América Latina, se configuraron, sobre las bases organizativas heredadas, modelos político-estatales importados de Francia y Estados Unidos (Thwaites Rey y Ouviña, 2012).

El principal rasgo común que poseen dichos Estados es su origen como espacios de acumulación dependientes del mercado mundial, ligado al rol asignado al continente en la división internacional del trabajo. Esto generó que fuera el Estado el que se hiciera cargo del desarrollo capitalista (ibíd.).

Por su parte, Agustín Cueva (1979) planteó que el desarrollo del capitalismo en Latinoamérica posee especificidades que devienen de dos órdenes de hechos históricos: por un lado, la presencia de una heterogénea matriz estructural que, en un primer momento, se caracteriza por el desarrollo desigual del capitalismo y por la presencia de modos de producción precapitalistas; y, por otro lado, los continuos reajustes que ha tenido y tiene que sufrir esa matriz dada su inserción en el sistema capitalista mundial. Estas características del proceso de desarrollo del capitalismo en América Latina han determinado la fisonomía que ha adquirido el Estado, así como también la naturaleza de la sociedad civil ha impuesto una sobrecarga de tareas a la instancia política que tiene en

sus manos asegurar la cohesión y reproducción. En este contexto, las tareas del Estado han sido

> Garantizar el sistema de dominación del que tal Estado es expresión, pero tratando al mismo tiempo de superar las profundas brechas que la acentuada heterogeneidad estructural producía en la propia clase o bloque de clases dominantes; forjar las condiciones necesarias para el establecimiento y vigencia del "pacto" neocolonial y, simultáneamente, buscar la manera de "regular" las fisuras, desigualdades y desfasamientos internos que el mismo "pacto" acentuaba; (...) tratar, en fin, de sentar desde arriba las bases de una hegemonía que la sociedad civil era incapaz de generar por su propia heterogeneidad, pero sin dejar de recurrir constantemente a la "fuerza de la ley" y las más veces a la ley de la fuerza, para evitar que las múltiples "discontinuidades" (incluso culturales) y contradicciones acumuladas devengan verdaderas rupturas revolucionarias (ibíd.: 34).

Más recientemente, Jaime Osorio (2014) desarrolló las características propias que tienen los Estados dependientes. Por un lado, poseen soberanías restringidas, dado que el ejercicio de la soberanía en el sistema mundial es desigual. El autor plantea que la condición subsoberana de los Estados dependientes no es más que la otra cara de la moneda de la dependencia a la que se encuentran subsumidas sus economías. En este marco es donde encuentran su reproducción las clases dominantes locales, supeditadas al capital imperialista, lo que conlleva la reproducción de la dependencia y la subordinación. Otra de las características está vinculada a la explotación en las sociedades dependientes, sostenida en la superexplotación del trabajo. Esto necesariamente entraña el desarrollo de un capitalismo que exacerba los elementos de barbarie, incitando de forma permanente los recortes de la lucha de clases. A su vez, necesariamente conlleva reducir el campo de las clases dominantes para instaurar modalidades de dominio sostenidas en formas estables de consenso. Por último, es fundamental la ruptura de los lazos sociales, imponiéndose tendencias desintegradoras.

Durante las últimas décadas, las políticas implementadas de la mano de la globalización produjeron "la pérdida de entidad de los Estados nacionales en el contexto del mercado mundial" (Thwaites Rey, 2010: 23). La nueva dinámica de acumulación implicó transformaciones a nivel estatal, dado que éstos han perdido capacidad de regulación y son cada vez más permeables a un capitalismo transnacionalizado, en un contexto de ampliación del peso no sólo de las empresas transnacionales, sino también de los organismos multilaterales y las agencias globales (Bringel y Falero, 2016).

Desde una visión latinoamericana y a la luz de las transformaciones que se dieron en las últimas décadas, Mabel Thwaites Rey (2004: 73) concibe al Estado

> como expresivo del poder social dominante, pero, a la vez, entendemos que como el estado es garante -no neutral- de una relación social contradictoria y conflictiva, las forma en que se materializa esta relación de poder en los aparatos está constantemente atravesada por las luchas sociales fundamentales.

Thwaites Rey (2010) plantea que, con el resquebrajamiento del neoliberalismo, comenzó a impulsarse la idea de que la especificidad de los Estados en el marco del capital global es ganar grados de libertad a través de dos vías: por un lado, mediante la gestión propia de una porción del excedente local, proveniente de la renta de recursos estratégicos; y, por el otro, es el intento de que una parte de la masa de capital que circula en la región se desconecte del ciclo del capital local, sobre todo a través de la promoción de instancias supranacionales, tales como el MERCOSUR o la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Todo el repaso teórico en relación al Estado, nos permite construir el marco a partir del cual entender cómo operan los Estados –en nuestro caso de estudio, Brasil- en el contexto de la globalización y tras la expansión de las cadenas globales de producción, pero signados por su condición dependiente del mercado internacional. Es decir, más allá de su carácter subimperial, Brasil no ha podido escaparse de su condición dependiente, lo cual determina la forma de Estado. Por otra parte, consideramos central recuperar las nociones de bloque en el poder, autonomía relativa y selectividad estructural, para comprender la adopción de una política de desarrollo y exterior durante el período de Lula da Silva con el objetivo de favorecer a determinadas clases y fracciones de clase, lo cual desarrollaremos en el marco de esta tesis.

2.4. Territorio y Movimientos Socioterritoriales

Analizar la dimensión de la conflictividad en torno a los dos proyectos de construcción de represas hidroeléctricas, Garabí-Panambí e Inambari, hace necesario problematizar la dimensión del territorio. En este marco, es importante entender cómo se traducen en el espacio las cadenas globales de valor y las disputas que se generan en torno a los modos de producción de dicho territorio.

Así, el territorio se configura como un espacio de lucha, como el lugar en el que se espacializan las relaciones de poder. De esta forma, conviven diferentes lenguajes de valoración en torno al ambiente, modos de apropiación del territorio, identidades, entre otros. Por ello, entendemos que los movimientos que se constituyen en defensa del mismo deben ser considerados socioterritoriales, dado que la disputa en torno al

territorio y los proyectos de desarrollo que lo reconfiguran se establecen con su núcleo central.

2.4.1. *Territorio y espacio*

El espacio y el territorio no pueden ser considerados sinónimos, sino que el primero debe entenderse como el conjunto en el que participan cierta disposición de objetos geográficos, naturales y sociales, así como también la "sociedad en movimiento", es decir, el contenido de la sociedad no es independiente de la forma (los objetos geográficos) y cada una de estas contienen fracciones de la sociedad (Santos, 1996: 28). Siguiendo a Milton Santos (1986), en un territorio existen un conjunto de objetos geográficos, a los cuales los *procesos* sociales –resueltos en *funciones*-, representativos de una sociedad en un determinado momento, dan vida. A su vez, esos procesos se realizan a través de *formas*, las cuales pueden no ser originariamente geográficas, pero terminan por adquirir una expresión territorial. La sociedad, a través de las funciones y procesos, no se realizaría sin las formas. Dado que las formas geográficas contienen fracciones de lo social, son *formas-contenido*. Por ello, están siempre cambiando de significado dado que el movimiento social les atribuye, en cada momento, fracciones diferentes del todo social. Gracias al movimiento social, al movimiento dialéctico entre forma y contenido, cada lugar está siempre cambiando de significado.

De esta forma, el concepto de territorio está ligado a la organización, al desarrollo y al funcionamiento social, especialmente con los procesos de producción y reproducción social (Mançano Fernandes, 2010), y el mismo es producido a partir de las relaciones sociales (Lefebvre, 1974). Así, tal como señala Mabel Manzanal (2007), el territorio sintetiza relaciones de poder espacializadas, que la producción social del espacio es el resultado del ejercicio de las relaciones de poder[13].

Por su parte, Fernanda Torres (2011) afirma que el concepto de territorio habilita introducir la variable política, pensar el espacio construido como producto de relaciones de poder, de dominación y resistencia. El ejercicio de poder sobre el espacio geográfico se vincula a las diferentes formas de apropiación del mismo (Porto Gonçalves, 2003).

Rogerio Haesbaert (2004: 93-94) plantea que en el territorio se presentan dos dimensiones:

[13] Aquí se entiende al poder desde una visión amplia, considerando que toda relación social es una relación de poder, y que este no sólo represivo, sino también productivo (Foucault, 2008; Haesbaert, 2016).

> una dimensión simbólica, cultural, a través de una identidad territorial atribuida por los grupos sociales, como forma de 'control simbólico' sobre el espacio donde viven (siendo también por tanto una forma de apropiación), y una dimensión más concreta, de carácter político disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como forma de dominio y disciplinamiento de los individuos.

Frente a esto, la transformación de un espacio en territorio se da a través de la conflictividad, del enfrentamiento entre fuerzas políticas que buscan crear, conquistar y controlar sus territorios. Así, son las relaciones sociales las que transforman un espacio en territorio y viceversa. De igual modo que el espacio y el territorio son fundamentales para la realización de las relaciones sociales, estas producen permanentemente espacios y territorios de formas contradictorias, solidarias y conflictivas (Mançano Fernandes, 2005).

Bernardo Mançano Fernandes (2008) establece una tipografía de tres diferentes tipos de territorios. El primer tipo son los espacios de gobernanza. Por otro lado, el segundo es la propiedad, ya sea privada o comunitaria, donde se dan dos formas de disputa territorial: por la desterritorialización o por el control de las formas de uso y acceso a los territorios. El tercero es el espacio relacional considerado a partir de las conflictividades y las relaciones sociales entre las clases, grupos sociales, la sociedad y el Estado, y está relacionado con las formas de uso de los territorios, por lo tanto, con las territorialidades. Por su parte, Haesbaert (2011) define a la territorialización como el proceso de producción del territorio a partir de la apropiación o dominio del espacio por los grupos humanos en un ejercicio de poder, son acciones como la expansión o creación de territorios. A su vez, define a la desterritorialización como el movimiento a través del cual se abandona el territorio. El capitalismo avanza sobre los territorios transformando aspectos del territorio anterior, es decir, territorializándose. Esta territorialización produce dos procesos: por un lado, la desterritorialización del territorio transformado y reemplazado por la territorialidad capitalista; y, por el otro, la reterritorialización. Así, la territorialización, la desterritorialización y la reterritorialización son procesos concomitantes, fundamentales para entender las prácticas humanas (Lasso González, 2019). Haesbaert (2013) plantea que la desterritorialización es un mito, dado que no existen sujetos desterritorializados, por lo que plantea el concepto de multiterritorialidad.

> El gran dilema de la reconfiguración territorial en nuestros días no es la desterritorialización, sino el refuerzo simultáneo de la multiterritorialidad segura para unos pocos —para la elite globalizada—, y la precarización y/o contención territorial para muchos —los "sin tierra", los "sin techo"—, en su resistencia y lucha

> por un territorio mínimo cotidiano, su mínima e indispensable seguridad al mismo tiempo funcional y afectiva en este mundo (ibíd.: 40).

De esta forma, para entender la producción de territorio es fundamental analizar el modo en que las relaciones de poder interactúan entre espacios y escalas, es decir, lo que Doren Massey (1993: 66) define como la 'geometría del poder', el sistema en red de producción de territorios. De esta forma, las escalas geográficas son producto de las dinámicas del capitalismo y se configuran a través de las redes y relaciones entre actores; las dinámicas y relaciones a nivel global configuran y trastocan las escalas locales (Lasso González, 2019).

2.4.2. *Flujos y redes transnacionales*

Tal como plantea Henri Lefebvre (1974: 223), "es en el espacio y por el espacio donde se reproducen las relaciones de producción capitalista, y en este sentido el espacio (y el territorio) deviene cada vez más en un espacio instrumental". Así, en la década del setenta se llevó adelante un proceso de transformación de los territorios nacionales en espacios de la economía internacional, generándose la profundización de la especialización productiva a nivel del espacio (Santos, 1993). De esta forma, el mundo actual se organiza en subespacios articulados dentro de una lógica global, configurándose circuitos espaciales de producción (Santos, 1996).

Frente a ello, las empresas transnacionales y grupos capitalistas se interesan por el control de los flujos y las redes, más que de áreas o regiones. De esta forma, la lógica territorial de estos sectores es multi (o "trans") territorial, dado que "se estructura su poder mediante la organización de una inmensa articulación de territorios, desde los territorios–zona en que construyen la infraestructura de sus bases productivas y/o de circulación hasta la conexión en red alrededor del mundo" (Haesbaert, 2016: 123). Así, se trata "una multiterritorialidad dentro de una misma lógica funcional, globalmente estandarizada" (ibíd.: 123). Esta multiterritorialidad se realiza por la sucesión de territorios-zona articulados, constituyendo, así, territorios-red donde el control más importante ocurre sobre flujos y puntos de conexión, los cuales, combinados, forman las redes transnacionales (ibíd).

Así, el capitalismo se hipermaterializa tejiendo redes de redes, en contrapunto con los discursos fantasiosos de la desmaterialización de la economía (Barreda, 2005). De esta forma, dado que el mundo está integrando todas las redes, éstas tienden a centralizarse

y a organizarse en corredores, es decir, "ejes centrales que coordinan las grandes regiones del mundo" (ibíd.).

Por su parte, Mónica Arroyo (1999) plantea que los circuitos espaciales de producción aumentan su escala más allá de las fronteras nacionales, generando jerarquías y selectividades creadas en el territorio. Así, la "superposición cada vez más compleja, diferenciada y asimétrica de estas redes globales muestra que el proceso de desarrollo desigual continúa. Aumenta la diferenciación de los lugares con nuevas formas de fragmentación y marginalización" (p.: 8).

2.4.3. *Conflictividad territorial*

Tal como plantea Milson Betancourt (2021), un conflicto ambiental no es sólo ambiental, del mismo modo que uno económico no es únicamente económico, ni uno social no es sólo social. Por ello, este autor sostiene que la noción de conflictividad territorial permite comprender la conjunción de conflictividades que confluyen actualmente.

En las últimas décadas, observamos el tránsito en América Latina desde el Consenso de Washington, centrado en la valorización financiera, hacia el Consenso de las *Commodities*, basado en la exportación de bienes primarios a gran escala (Svampa y Viale, 2014). Esta nueva etapa, implicó la profundización de la dinámica de desposesión (Harvey, 2004), cuya característica principal es el despojo y concentración de tierras, recursos y territorios por parte de los grandes capitales transnacionales. Los elementos comunes de este modelo son la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a los monocultivos, la limitada diversificación económica y la implantación de una lógica de ocupación de los territorios destructiva, que tiende a consolidar enclaves de exportación. En este marco, América Latina se confirma como una "economía adaptativa" en relación con los diferentes núcleos de acumulación, lo cual tiende a la aceptación del lugar que esta región ocupa en la división internacional del trabajo, colocando al Estado como productor y regulador (Svampa y Viale, 2014) y transformándolo en garante de la reproducción del capital.

Así, para entender el momento actual del *sistema-mundo* y de la *economía-mundo*, fuertemente ligado a prácticas y actividades extractivistas, recuperamos la noción de despojo para la acumulación (Rodríguez Wallenius, 2019), entendida como una de las modalidades desarrolladas por los grupos económicos con el objetivo de apropiarse de bienes naturales y comunitarios (suelos, bosques, agua, fuentes de energía, entre otros),

así como también de bienes públicos (a través de la privatización de servicios, infraestructuras, salud, educación, entre otros). Esto permite a los grupos capitalistas obtener ganancias extraordinarias al momento en que estos bienes son incorporados y valorizados como mercancías en los mercados internacionales, para lo cual los flujos y redes transnacionales, que antes hacíamos mención, son elementos clave.

En la misma línea, recuperamos el concepto de colonialidad territorial (Betancourt, 2021), el cual da cuenta de que la devastación/dominación/explotación social, económica, política, ambiental y cultural está ligada a una matriz de subalternización de personas y territorios de manera diferenciada. El avance del extractivismo y la dominación sobre los territorios afecta con mayor fuerza y violencia a los sectores y regiones más vulnerables, aquellos que menos aportan al capitalismo global. Esta matriz de subalternización se ha aplicado no sólo a muchas personas, sino también a la naturaleza y sus elementos esenciales. Así, el concepto de colonialidad territorial nos permite vincular las múltiples resistencias de lxs que luchan desde abajo, quienes comprenden la necesidad de tejer nuevas "r-existencias territoriales", partiendo de existencias propias y diferenciadas, materializadas en contextos territoriales que permiten imaginar otros universos y horizontes de sentido. Esta noción se puede ligar a la de racismo ambiental, esbozada por Laura Pulido (1996), que plantea la idea de que las personas de color o los grupos de bajos ingresos se encuentran desproporcionadamente expuestos a contaminación ambiental.

Por su parte, Patrice Melé (2016) plantea la noción de productividad social de los conflictos con el fin de estudiar los efectos que las disputas generan y las dimensiones de dichos efectos. De esta forma, afirma que existen tres dimensiones de la productividad de los conflictos: la territorial, la jurídica y la política. La primera dimensión permite abordar los efectos, en relación con la producción de representación, que revalorizan el espacio y que establecen lazos sociales entre los colectivos movilizados y el territorio que habitan; se exponen socialmente los desacuerdos vinculados con el uso adecuado del espacio y se pueden generar transformaciones en los modos de control territorial (Azuela y Mussetta, 2015). La dimensión jurídica está conectada con el proceso mediante el cual un determinado conflicto se transforma en un litigio ante instancias públicas que deben actuar conforme a derecho. Por último, la política permite analizar las dinámicas de transacción entre los movimientos socioterritoriales y los poderes públicos que derivan

en una especie de cierre, aunque quizás provisoria, del conflicto (Merlinsky y otrxs, 2018).

2.4.4. *Movimientos Socioterritoriales*

En Sudamérica, los conflictos socioterritoriales se agudizaron con la implementación de un sistema económico de matriz neoliberal. Esta clase de conflictos están ligados con la expansión del capital, la cual conlleva un constante deterioro social y ambiental y un aumento creciente en los niveles de extracción y explotación de bienes comunes, destruyendo los modos de vida comunitarios y algunas economías regionales.

Frente a esto, numerosos movimientos socioterritoriales comenzaron a surgir. Sam Halvorsen, Bernardo Mançano Fernandes y Fernanda Torres (2019) afirman que la razón de ser de los movimientos socioterritoriales es el territorio, que es multidimensional y escalar, entendido como un proceso dinámico y relacional, como un espacio apropiado por una relación social que lo produce y mantiene a través de una forma de poder.

Estos movimientos se originan en la búsqueda de apropiación del espacio y sus acciones configuran un proceso de disputa territorial basada en la territorialización, desterritorialización y reterritorialización (Sobreiro Filho, 2016). Así, los movimientos llevan consigo sus territorialidades, sus identidades territoriales, constituyendo, de este modo, una pluriterritorialidad (Mançano Fernandes, 2005).

Así, estos movimientos transforman al espacio en territorio a través de la conflictividad entre fuerzas políticas que buscan controlar el territorio. Esta conflictividad está dada "por el estado permanente de conflictos en el enfrentamiento entre las fuerzas políticas que intentan crear, conquistar y controlar sus territorios" (ibíd.: 7).

Teniendo en cuenta esto, realizar un análisis geográfico de estos movimientos implica poner el foco no sólo en las formas, acciones y relaciones, sino también en los espacios y territorios producidos por los movimientos, los cuales se concretizan en espacios múltiples (Mançano Fernandes, 2005). De esta forma, los movimientos socioterritoriales configuran espacios políticos, se espacializan y promueven otro tipo de territorio.

3. PARA RESUMIR

En este capítulo, presentamos, en primer lugar, el encuadre metodológico construido. Nos proponemos realizar una investigación de tipo cualitativo, en el marco de la cual llevamos adelante un proceso de triangulación, tomando varias teorías, fuentes y métodos para poder abordar las múltiples escalas de nuestro problema de investigación. En este marco,

repusimos las principales decisiones que realizamos durante el proceso de investigación al momento de construir nuestro enfoque epistemológico y metodológico.

En segundo lugar, presentamos las categorías analíticas a partir de las cuales analizamos nuestro problema de investigación. Dentro de ellas, en un primer momento, retomamos algunas teorías y postulados marxistas que nutren nuestro entendimiento en torno a la etapa actual del capitalismo. Los desarrollos de Amin y Wallerstein nos permiten comprender cómo se constituye la actual división internacional del trabajo al interior del sistema-mundo. Amin plantea que la noción de imperialismo colectivo puede explicar la situación de las cadenas globales de valor. Los monopolios controlan todos los sistemas productivos, impulsando una serie de exigencias a través de las cuales ejercen control sobre estos sistemas productivos en las regiones dependientes.

En la misma línea, Wallerstein sostiene que el sistema-mundo actual nació de una economía-mundo. En ella las jerarquías se reproducen a través de las cadenas de producción, que conectan a las economías en un mismo circuito y refuerzan el predominio de unas zonas sobre otras a través del intercambio desigual y del flujo polarizado del comercio. Este sistema funciona como una estructura política que reproduce la posición ocupada por cada país y región, a través del desarrollo de los Estados nacionales.

La teoría del sistema-mundo cuestiona el mito de que se puede alcanzar el bienestar con la mera expansión del capitalismo. Entiende que la especialización a la que queda sujeta la periferia obstruye su desarrollo y los declives de los beneficios en la periferia se compensan a partir de la explotación de la fuerza de trabajo.

En la misma línea, las vertientes marxistas de las TD analizan la relación dialéctica entre los países centrales y la periferia, indagando también en torno a las diferencias existentes al interior de las regiones periféricas. Tal como estxs autorxs plantean, los países centrales colocaron a América Latina como proveedor de materias primas, dejándola presa de una modalidad de desarrollo basado en formas de plusvalía absoluta.

Tal como afirma Marini, en el marco de la dependencia, algún país puede conseguir superar algunos umbrales, sin salir de su condición dependiente, a partir de la superexplotación de su propia fuerza de trabajo y de imponer una división del trabajo a escala subregional en función de los intereses de su burguesía. Esta formación social

alcanza, de esta forma, la categoría de potencia subimperialista. Marini entiende que, en Latinoamérica, solo Brasil alcanzó este nivel.

Así, el subimperialismo presenta dos dimensiones: la económica y la política. En el primer plano, se caracteriza por el alto dinamismo de las exportaciones, por la exportación de capital y por el control regional de materias primas y abastecimiento energético. En este marco, el despliegue internacional de una formación social subimperialista estaría orientado en dirección a otros países dependientes. En la dimensión política, la afirmación del subimperialismo estaría ligada al impulso de una política estatal que logre potenciar las posibilidades brindadas, en el plano internacional, por el pasaje de una situación de unipolaridad hacia otra de integración jerarquizada (Martins, 2013).

Por otro lado, analizamos algunas dimensiones claves de los procesos de integración regional. Los postulados de lxs neogramscianxs sostienen que, dentro de una estructura histórica, la hegemonía se constituye en tres esferas de actividad: por un lado, las fuerzas sociales generadas por el proceso de producción; por otro, las formas de Estado derivadas del estudio de Estado/sociedad civil; y, por último, los órdenes mundiales. Los cambios en la organización de la producción impulsan nuevas fuerzas sociales, las cuales producen cambios en la estructura de los Estados, y la generalización de los cambios altera la problemática del orden mundial. Así, la hegemonía permite pensar las relaciones internacionales en términos de lucha hegemónica con intereses de clase (Kan, 2014).

A su vez, para analizar nuestro problema de investigación es fundamental la idea de Burnham de que las corporaciones transnacionales favorecieron el sistema interestatal, dado que son los Estados los que garantizan la adopción de las políticas que favorecen la movilidad del capital. Por otro lado, retomamos los desarrollos de Bieler y Morton para entender cómo se configura el orden mundial a partir de las relaciones sociales de producción, y cómo la transnacionalización de la producción –y de algunas fracciones de clase- promueve la reproducción del capital al interior de los Estados.

Estos planteos nos permiten entender que, si bien las iniciativas de integración son concretadas a través de acuerdos entre gobiernos, no son obra exclusiva de la acción gubernamental, sino que diversos grupos contribuyen a la redefinición de dichas iniciativas. Es decir, estas instancias no son ajenas a las luchas de fuerza entre las clases sociales (Kan, 2015).

En este marco, durante los primeros años del siglo XXI, surgió un nuevo tipo de regionalismo, denominado post-hegemónico, dado que, por esos años, se impulsaron estructuras regionales caracterizadas por prácticas híbridas. Estas instancias de integración, insertas en un contexto de múltiples focos de poder en el plano internacional, se encontraron, en muchos casos, en pugna entre sí.

En el marco de este regionalismo, comenzaron a surgir nuevos liderazgos. Frente a la alternativa histórica entre una tendencia de integración liderada por los Estados Unidos y otra articulada en conjunto por los países de la región, comenzó a consolidarse una tercera vía, impulsada por Brasil, de características netamente sudamericana.

Otra categoría de análisis clave en el marco de nuestro problema de investigación es la noción de Estado. Retomamos los desarrollos teóricos de Poulantzas, quien entiende que el Estado tiene que ser comprendido como la condensación material y específica de una relación de fuerza entre clases y fracciones de clase. Esta condensación está dada por la conexión del Estado con las relaciones de producción y la división social del trabajo.

En este marco, entendemos que el Estado tiene una autonomía relativa, la cual le permite que pueda instaurar a las clases dominantes como tales y conformar su unidad política en el poder. Esta autonomía -la cual posibilita que el Estado se establezca como ámbito de mediación- deviene en una selectividad estructural, la cual implica que el Estado ejerce su capacidad a partir de los agentes que las controlan, pero esta capacidad se moldea a través de elementos de la dinámica capitalista. En este sentido, el Estado puede definirse como un conjunto relativamente unificado de instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades socialmente incrustadas y reguladas, y selectivas estratégicamente, organizadas en torno a la toma de decisiones importantes para una comunidad política imaginada. Su selectividad estratégica puede entenderse como un conjunto complejo de mecanismos institucionales y prácticas políticas que sirven para avanzar (u obstruir) particulares intereses fraccionales o de clase.

A su vez, retomamos el concepto poulantziano de bloque en el poder. Este puede ser entendido como la unidad contradictoria particular de las clases o fracciones de clase dominantes en su relación con una forma particular del Estado capitalista. Esto nos habilita pensar que la dominación en sociedades capitalistas no es exclusiva de una determinada clase social, sino producto de las relaciones que se tejen entre diversos grupos y clases sociales.

De esta forma, el Estado burgués es una forma social que el capital debe crear para su propia reproducción y, necesariamente, el aparato estatal debe asumir una existencia formalmente separada de la clase dominante. En su estructura se reflejan relaciones de fuerzas sociales, pero es el Estado quien también las moldea y estabiliza. Así, los aparatos del Estado representan relaciones con todas las clases, pero lo realizan de manera altamente diferenciada y selectiva en el sentido de favorecer e imponer intereses.

En el marco de la globalización, la integración del mercado mundial potencia el poder económico y político del capital, teniendo en cuenta que debilita la capacidad de lxs trabajadorxs para resistir la explotación y socava el poder de los Estados para regular las actividades económicas en contextos nacionales. En este contexto, la soberanía de los Estados asociados con las economías capitalistas está más constreñida. Esto es aún mayor en el caso de los países dependientes.

De esta forma, en Latinoamérica, para poder comprender tanto lo específico como lo común de los Estados, retomamos dos conceptos de Zabaleta (2009). Por un lado, el de forma primordial, que sería la combinatoria propia de la formación económico-social; y, por el otro, la determinación dependiente, que serían los condicionamientos externos.

Teniendo en cuenta esto, el primer rasgo común que poseen estos Estados es su origen como espacios de acumulación dependiente del mercado mundial, ligado al rol que tienen asignados en la división internacional del trabajo, lo que generó que fueran los Estados los que se hicieran cargo del desarrollo capitalista. Por otro lado, estos Estados poseen soberanías restringidas, que es la otra cara de la dependencia a la que se encuentran subsumidas sus economías. A su vez, las clases dominantes locales, supeditadas al capital imperialista, obtienen sus ganancias a partir de la superexplotación del trabajo.

Por último, para analizar la dimensión de la conflictividad en torno a los dos proyectos de construcción de represas hidroeléctricas, es necesario problematizar la dimensión del territorio. Además, es indispensable comprender cómo se traducen en el espacio las cadenas globales de valor y las disputas que se generan en torno a los modos de producción de dicho territorio.

El territorio está ligado a la organización, al desarrollo y al funcionamiento social, especialmente con los procesos de producción y reproducción social. El espacio geográfico es construido por relaciones de poder, de dominación y resistencia, es decir, en él se sintetizan relaciones de poder espacializadas. El ejercicio de poder sobre el

espacio geográfico se vincula a las diferentes formas de apropiación del mismo. Así, la conflictividad transforma un espacio en territorio. Dicha conflictividad surge por el enfrentamiento entre fuerzas políticas que buscan crear, conquistar y controlar los territorios.

En este marco, podemos entender a la territorialización como el proceso de producción del territorio a partir de la apropiación o dominio del espacio por los grupos humanos en un ejercicio de poder. El capitalismo avanza sobre los territorios transformando aspectos del territorio anterior, es decir, territorializándose. Esta territorialización produce dos procesos: por un lado, la desterritorialización del territorio transformado y reemplazado por la territorialidad capitalista; y, por el otro, la reterritorialización. Estos tres procesos se dan de forma concomitante.

En el marco de la producción de territorio, las relaciones de poder interactúan entre espacios y escalas, creando un sistema en red de producción de territorios. En el contexto actual del capitalismo, tras la transformación de los territorios nacionales en espacios de la economía internacional, el mundo se organiza en subespacios articulados dentro de una lógica global, configurándose circuitos espaciales de producción, donde se produce una profundización de la especialización productiva.

Así, los grupos capitalistas se interesan por el control de estas redes y los flujos que se crean. La lógica territorial de estos sectores es multi (o "trans") territorial, dado que su poder se estructura mediante la organización de una inmensa articulación de territorios. En este marco, el capitalismo se hipermaterializa tejiendo redes de redes, las cuales tienden a centralizarse y a organizarse en corredores, que coordinan las diversas regiones. Por ello, las conflictividades que surgen ante el avance de la territorialización capitalista pueden considerarse territoriales.

En Sudamérica, el avance de esta territorialidad capitalista se lleva adelante mediante un proceso de despojo para la acumulación. Este proceso se traduce en las modalidades desarrolladas por los grupos económicos con el objetivo de apropiarse de bienes naturales y comunitarios, así como también de bienes públicos, lo cual les permite obtener ganancias extraordinarias cuando estos bienes son valorizados como mercancías en los mercados internacionales. Así, podemos plantear el componente racial del capitalismo, ya que existe una matriz de subalternización de personas y territorios de manera diferenciada.

En este contexto, surgen movimientos territoriales que buscan disputar la apropiación y uso del territorio. Estos movimientos se originan en la búsqueda de apropiación del espacio y sus acciones configuran un proceso de disputa territorial basada en la territorialización, desterritorialización y reterritorialización. De esta forma, se da un conflicto entre las diferentes territorialidades en pugna.

CAPÍTULO 2

LA CONSTRUCCIÓN DEL GIGANTE SUDAMERICANO

El objetivo de este capítulo es indagar cómo se configuró la política subimperialista en Brasil y cómo ésta fue profundizada durante la etapa de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (que corresponde a nuestro período de estudio). A su vez, analizaremos cómo se estructuró, durante este período, el bloque en el poder (Poulantzas, 1978) y cómo esto se tradujo en la política externa para la región sudamericana que se implementó durante estos años.

Para poder llevar adelante los objetivos planteados, retomaremos algunos de los conceptos planteados en el capítulo anterior. Así, los aportes de las corrientes marxistas que se encargan del estudio del Estado capitalista, nos permitirán analizar la configuración que adoptó el Estado brasileño y cómo éste moldea y es moldeado por las relaciones entre las fuerzas sociales en pugna, su selectividad estratégica, su autonomía relativa y cómo se constituyó y se fue reconfigurando el bloque en el poder durante nuestro período de estudio.

A su vez, los desarrollos de las Teorías de la Dependencia (TD), específicamente de las vertientes marxistas, y del sistema-mundo nos brindan herramientas para entender la configuración del Estado en el marco de la subordinación a los mercados internacionales y la forma en que los países dependientes, como Brasil, se insertan en las cadenas globales de producción y en la división internacional del trabajo. Además, nos permiten comprender cómo se configuró la política subimperialista brasileña y su relación de cooperación antagónica (Luce, 2011) con los países centrales.

Por otra parte, las nociones incorporadas en el marco de la escuela neogramsciana de política internacional nos habilitan comprender cómo opera la hegemonía en el orden mundial. Por otro lado, nos ayudan a entender cómo está se articula con la política exterior y la forma en que se impulsan determinadas inserciones regionales e internacionales al servicio de los intereses de algunas fracciones de las clases dominantes.

El capítulo estará organizado de la siguiente forma. En primer lugar, analizamos la configuración y fisonomía del Estado brasileño. Reconocemos la complejidad que existe al interior de un Estado, que no es un todo uniforme, que es un espacio de disputa y en su interior conviven contradicciones, oposiciones, diversas líneas y posturas. Ante esto,

centramos la mirada en torno a los sectores hegemónicos a la hora de fijar, sobre todo, la política exterior, que no sólo puede circunscribirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que trascendió esta institución, incorporando a otros organismos y entidades públicas, involucrados en impulsar una determina inserción de Brasil en la región y en el mundo. De esta forma, a partir de la recuperación de las nociones de bloque en el poder y autonomía relativa (Poulantzas, 1978), buscamos entender no sólo cómo se configuró el Estado, sino también cómo este se fue reconfigurando y su selectividad estructural (Jessop, 1999b) para favorecer intereses de determinadas fracciones de clase desde una perspectiva histórica, con especial énfasis desde la dictadura de 1964 en adelante, hasta llegar a la época lulista, que es objeto de este estudio.

En segundo lugar, realizamos una genealogía de la política subimperialista adoptada por el Estado brasileño, la forma en la cual esta política se implantó y se fue reconfigurando en el tiempo. Tal como planteamos en el capítulo anterior, podemos entender al subimperialismo como la capacidad de un país que, habiendo alcanzado una composición orgánica media en la escala mundial de los aparatos productivos nacionales, logra superar algunos umbrales, a partir de la superxplotación de la fuerza de trabajo y de imponer una división del trabajo a escala subregional en función de los intereses de su burguesía (Marini, 1993). Así, analizamos cómo Brasil fue impulsando transformaciones, políticas y programas para poder alcanzar y sostener su nivel de desarrollo económico.

En tercer lugar, abordamos los años de implementación e implantación del neoliberalismo, que se dio durante parte de la década del ochenta y los noventa. Entender los cambios que se introdujeron en esta etapa, nos permitirá analizar el desencanto de la burguesía en relación a la política de liberalización y privatización propia de esos años, que condujo, en parte, a la apuesta y apoyo de otros modos de inserción de Brasil en las cadenas globales de producción.

El cuarto punto de este capítulo aborda el modelo de desarrollo delineado por el Partido de los Trabajadores[14] (PT) durante los años de gobierno lulista, buscando analizar las continuidades existentes con las políticas de la etapa previa y las rupturas que se introdujeron, a partir de entender las tensiones en pugna al interior del Estado. A su vez, analizamos de qué forma y a través de qué instrumentos el gobierno impulsó una estrategia para favorecer a las empresas denominadas “Campeones Nacionales”. Esta

[14] Partido dos Trabalhadores.

estrategia tuvo un rol fundamental en la política exterior adoptada por Brasil en relación a América del Sur y África.

En el quinto bloque, recuperando la noción poulantziana de bloque en el poder y los aportes realizados por la escuela neogramsciana de política internacional, analizamos la política exterior impulsada durante el gobierno lulista. En este marco, es importante apuntar a las múltiples instancias multilaterales de las cuales participó Brasil a nivel internacional, el vínculo que estableció con los países centrales, así como hacer foco en la creación de instancias sudamericanas a la medida de los intereses de su burguesía. Las medidas adoptadas en el plano internacional tuvieron la finalidad de ubicar a Brasil como *global player*, es decir, como un actor de peso global.

1. El Estado Brasileño: bloque en el poder, dependencia y subimperialismo

Más allá de las diferencias existentes entre los Estados latinoamericanos, la condición de dependencia en la que se encuentran los países periféricos ha condicionado la fisionomía que han adquirido dichos Estados, es decir, su determinación dependiente (Zavaleta, 2009). Marcelo Dias Carcanholo y Alexis Saludjian (2013) plantean que es posible detectar dos condicionantes histórico-culturales de la dependencia: por un lado, el mecanismo de intercambio desigual, y, por el otro, la remesa de excedentes de países dependientes hacia los centrales, bajo la forma de intereses, ganancias, amortizaciones, dividendos y *royalties*. Para estos autores,

> la condición dependiente se caracteriza por el hecho de que, estructuralmente, esas economías producen un valor excedente que, crecientemente, no forma parte de la apropiación/acumulación interna de capital, pero una fracción de este valor excedente es transferida para las economías centrales y es parte de la dinámica capitalista de éstas, y no de aquellas (ibíd.: 46).

A su vez, esta dependencia tiene un aspecto técnico, el cual se expresa en el territorio y el espacio a través de la imposición de macrosistemas de transporte, energía y comunicaciones (tales como la IIRSA). Estos responden a las necesidades y requerimientos de las economías centrales, profundizando la dependencia y la especialización, cristalizando, a su vez, el lugar al que las regiones dependientes fueron relegadas en el sistema-mundo (Álvarez, 2019).

Así, el Estado dependiente en América Latina tiene como característica principal su débil capacidad para fracturar la relación global de capital (Oliver, 2018). Por ello, en el contexto de la dependencia al mercado mundial, son los Estados los que se hicieron cargo del desarrollo capitalista (Thwaites Rey y Ouviña, 2012), sin poder escapar de las

relaciones dependientes con los países centrales en las que se ven inmersos. En Brasil, "la intervención del Estado en el dominio económico fue sostén esencial en la constitución del capitalismo" (De Souza Telles, 2008). Es decir, su función no se circunscribió a garantizar los requerimientos necesarios para la producción y reproducción política de este sistema, sino que llevó adelante el papel de gestor, promotor y productor directo con el objeto de organizar la acumulación.

En esta línea, para analizar la configuración del Estado brasileño es necesario recuperar dos nociones desarrolladas por Nicos Poulantzas (1978). Por un lado, el concepto de bloque en el poder, definido como la unidad contradictoria particular de clases o fracciones de clases en relación con una forma particular de Estado. Por el otro, los desarrollos en torno a la selectividad estructural del Estado, entendida como la cristalización de estrategias políticas presentes y pasadas en una forma institucional del Estado, operando selectivamente, de un modo cambiante, en relación al entorno y a las estrategias de los agentes (Simón González, 2004). Es decir, se trata de un conjunto de mecanismos institucionales y prácticas políticas que habilitan el avance u obstruyen particulares intereses de clases o fracciones de clases (Jessop, 1999b).

Partiendo de esta base, para analizar el caso de Brasil es necesario tener en cuenta que, desde su constitución como República independiente, el Estado capitalista brasileño se fue configurando en relación con los pactos entre las élites (Sader, 1999), con las tensiones y acuerdos entre facciones de la burguesía. Así, este expresa el proyecto de desarrollo capitalista nacional de las clases burguesas que se establecieron como clases dirigentes a través de un Estado fuerte.

De esta forma, en Brasil "los órganos públicos de representación y las leyes de orden político fueron hechos y sostenidos por las élites históricas tradicionales como un espacio de poder para controlar y en casos extremos bloquear las políticas del poder ejecutivo" (Oliver, 2018: 277). Así, se dio forma a una ideología nacional desarrollista del Estado, el cual albergó el proyecto capitalista de burguesías "que se hicieron nacionales en y con el Estado y, por medio de él, construyeron sendos proyectos de modernización nacional" (Oliver, 2009: 120).

1.1. Del Estado nacional-desarrollista al logístico

Lucio Oliver (2018) plantea que con la llegada de Lula da Silva al poder y con sus políticas centradas en la conciliación de clases y en la inclusión económica de algunos sectores de

la población, se alcanzó una situación de empate hegemónico. La situación de crecimiento e inclusión se dio en el marco de una economía dominada por la acumulación capitalista transnacional y una dirección política público-privada. A su vez, se consolidó un modelo de acumulación centrado en la exportación, el extractivismo y la producción interna de empresas transnacionalizadas. Las políticas implementadas estuvieron orientadas a otorgar un apoyo al agronegocio de exportación, a la concentración de capitales en empresas transnacionalizadas y al capital financiero.

Amado Luiz Cervo (2012) considera que el nuevo Estado que se configuró a principios del nuevo siglo podría denominarse logístico. Este no se redujo a prestar servicios, como lo hacía en la etapa desarrollista, sino que recuperó el planeamiento estratégico del desarrollo y ejerció el papel de apoyo y sustento de las iniciativas de otros actores económicos y sociales, a quienes traspasó responsabilidades y poder.

El modelo nacional-desarrollista se articuló entre 1945 y 1961 y contó con un amplio soporte social, que incluyó fuerzas políticas de centro izquierda, sindicatos, militares nacionalistas y sectores de la intelectualidad. En este marco, la burguesía industrial nacional se atribuyó un papel relevante en la red de alianzas para el fortalecimiento del capitalismo industrial. En ese momento, se consideraba que una alianza con este sector industrial era un pre-requisito para romper la hegemonía de las oligarquías agrarias. En esta fase, se dio un crecimiento económico de un 7% anual, sobre todo ligado al sector industrial, producto de políticas y programas que favorecían la industrialización (Diniz, 2010).

En el marco de la expansión imperialista mundial que se dio durante la posguerra, tuvo lugar en Brasil una expansión compleja, desigual y contradictoria del conjunto de relaciones sociales capitalistas. Este proceso no puede circunscribirse únicamente al desarrollo industrial o a la concentración de capital, sino que es necesario incorporar en el análisis otros factores como el avance de las expropiaciones originales, las cuales se profundizaron en la segunda mitad del siglo XX; la ocupación de las fronteras internas del capital, a través de la apropiación de territorios por parte de los grandes propietarios y el desplazamiento de poblaciones, sectores que, en muchos casos, se transformaron en mano de obra para grandes empresas; y una nueva sociabilidad de carácter comercial (Fontes, 2010).

Este período fue transformándose con la crisis política de 1963-1964, que estableció las condiciones políticas de una redefinición del poder dentro de la lógica capitalista bajo la conducción de la dictadura militar. Los actores empresarios se integraron al pacto autoritario que apoyó el golpe de Estado de 1964. En este contexto, se profundizó un proceso de industrialización centrado en el llamado modelo de trípode: empresa nacional, empresa extranjera y un fuerte sector estatal. La tasa de crecimiento anual en relación a la industria alcanzó un 12,2%. Durante estos años, no sólo se produjeron *lobbies* y contactos informales sobre las burocracias públicas, sino también lo que Fernando Henrique Cardoso (1975) denominó "anillos burocráticos", que serían estructuras no institucionalizadas que reunían a representantes de las grandes empresas privadas y sectores importantes de las burocracias públicas (empresas estatales, ministerios, consejos burocráticos, comisiones gubernamentales y partes del aparato militar), en torno a una cuestión específica, garantizando así la presencia en el proceso decisorio de fracciones de clases dominantes (Codato y otrxs, 2018).

A su vez, la dictadura militar sentó las bases para la adopción de una política subimperial, la cual se ha traducido en la fisonomía de su Estado. El subimperialismo brasileño no es sólo producto de un fenómeno económico, sino que también es parte del proceso de la lucha de clases y del proyecto político implementado por el régimen tecnocrático-militar que asumió el poder en 1964.

Incluso antes de que se diera el golpe de Estado, habían comenzado a gestarse las reformas necesarias para atraer el flujo de dinero disponible en el plano internacional y su asociación con empresas de bandera nacional. Así, el Estado intervino activamente en asegurar la circulación del capital invertido. Lo hizo creando o subsidiando la demanda interna y externa para la producción, así como también asegurando campos de inversión en el exterior, a través de operaciones de empresas estatales, créditos intergubernamentales o garantías a operaciones privadas en países latinoamericanos y africanos (Marini, 1977). De esta forma, en Brasil se dieron los dos componentes –el político y el económico- para la adopción de una política subimperial (ibíd.; Martins, 2013).

A su vez, la burguesía nacional, para poder negociar con el capital internacional de forma provechosa, optó por el fortalecimiento del Estado como instrumento de intermediación. Sin embargo, esto no representó el avasallamiento completo del Estado por el capital,

sino que el hecho de que el Estado fuera el encargado de arbitrar y ordenar la vida económica acentuaba su autonomía relativa ante los distintos grupos capitalistas.

Tras la crisis del petróleo, comenzó a desestructurarse el pacto que sostenía al gobierno militar. En este período, los empresarios impulsaron una campaña contra la estatización de la economía, cuestionando el Estado-empresario y el poder discrecional de la cúpula burocrática. Sus principales demandas se centraron en la retirada del Estado de la economía. Así, el empresariado se integró al proceso de liberalización política.

Tras el proceso de redemocratización, se dio, en Brasil, en 1988 y 1989, una nueva forma de Estado Capitalista, bajo el precepto de que este se convertiría en un nuevo Estado moderno capitalista con un núcleo democrático liberal y de derechos sociales. De esta forma, en 1988 se convocó a una Asamblea Constituyente y, hacia finales de ese año, se aprobó una nueva constitución. Esto conllevó elementos de continuidad, como el predominio del Estado sobre la sociedad y el mantenimiento de instituciones autoritarias.

Fue en la década del noventa cuando efectivamente se dio un corte con el nacional-desarrollismo y una gran parte del empresariado se alineó tras una postura neoliberal, pero realizando algunos cuestionamientos a su agenda, sobre todo en relación a la forma y el ritmo de implementación de la privatización y la liberalización comercial. A su vez, apuntalaron por la defensa de algún tipo de proteccionismo, la utilización de subsidios, la concesión de tratamiento especial para algunos sectores y la participación de lxs empresarixs en el proceso de decisión.

Con la aplicación de las medidas neoliberales el sector industrial se vio duramente afectado, con un proceso de desnacionalización de la economía. En este contexto, la reacción del empresariado no fue uniforme, sino que tuvo un carácter cíclico, alternando entre fases de apoyo y de cuestionamiento. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, las principales entidades de clase –como la Confederación Nacional de Industria[15] (CNI), o la Federación de Industrias del Estado de San Pablo[16] (FIESP) y la de Río de Janeiro[17] (FIRJAN)- mostraron una postura de cooperación. Hacia finales del noventa, se registró una ruptura con las políticas neoliberales, cuestionando la forma que asumió la apertura económica, el tratamiento privilegiado para las empresas extranjeras y la ausencia de una

[15] Confederação Nacional da Indústria.
[16] Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.
[17] Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.

política industrial. Incluso estas críticas fueron realizadas por parte de las entidades que agrupan al sector empresarial (Diniz, 2010).

En los años 2000, se produjo la consolidación de una nueva fracción de la burguesía nacional brasileña ligada al mercado internacional no sólo por medio de la exportación de mercancías, sino también a través de capitales en la forma de inversiones directas. Esta situación trajo aparejada la expansión de las empresas trasnacionales (Bueno y Seabra, 2010).

A partir de los efectos negativos del neoliberalismo, la burguesía interna se aglutinó. En este contexto, las políticas social, externa y económica, implementadas durante la época neodesarrollista que se inauguró con la llegada del PT al gobierno, impulsaron el desplazamiento de la hegemonía del capital financiero internacional dentro del bloque en el poder. De esta forma, se buscó favorecer los intereses de la burguesía interna: empresas de capitales predominantemente nacionales, estatales y algunas multinacionales ligadas a la minería, construcción civil, agronegocio, construcción naval, entre otros (Berringer, 2015).

Eli Diniz (2010) realiza un análisis de la trayectoria política de la burguesía industrial desde los años treinta hasta la época del lulismo. La autora sostiene que este sector de la burguesía posee una alta capacidad de movilización, de participación política para la defensa de sus intereses y un pragmatismo doctrinario-ideológico, caracterizado por su adaptación a posturas de mayor o menor alineamiento con un papel más activo del Estado. Este sector apoyó la llegada de Lula al poder, descontentos con los resultados de las políticas neoliberales adoptadas en la década anterior.

La posición política de una clase está ligada a los intereses de las clases y fracciones de clase frente a la política estatal y a las relaciones y conflictos sociales existentes. Siguiendo a Poulantzas (1977), existen tres tipos diferentes de burguesías en los Estados dependientes, caracterizados por su posición política e ideológica en relación al imperialismo y al origen del capital. Por un lado, la burguesía compradora, que es aquella que procede como agente o intermediaria del capital imperialista, subordinando sus intereses a este. Por otro lado, la burguesía nacional, que cuenta con una base de acumulación propia al interior de una formación social nacional, por lo que posee una autonomía política e ideológica frente al capital imperialista. Por último, la burguesía interna que ocupa una posición intermedia entre los dos sectores previamente

descriptos, manteniendo relaciones complejas con el capital imperialista, dado que, si bien posee una base de acumulación propia, es, al mismo tiempo, dependiente del capital externo. Durante el gobierno de Lula, la burguesía interna industrial y agraria mejoraron su posición al interior del bloque en el poder. Esta situación se observa más claramente en la política de exportación, la cual tuvo grandes saldos positivos en la balanza comercial del país en gran medida gracias al accionar y las políticas que se implementaron en estos años. Sin embargo, este desplazamiento de la relación se dio con el gran capital, dado que gran parte de las empresas medianas y pequeñas mantuvieron la posición subordinada que ocupaban durante los noventa (Boito, 2006).

A diferencia de lo que ocurrió durante la época neoliberal, la gran burguesía no cuestionó la intervención del Estado en la economía. Esto se dio a causa de que a este sector le interesaba la forma en que el Estado favoreció el aumento del crédito, la expansión de la inversión en infraestructura, la conquista de nuevos mercados para la exportación y el apoyo y el financiamiento a la internacionalización de sus empresas (Berringer, 2015).

Es en este marco que se consolidó el Estado Logístico (Cervo, 2012). Esto se dio a causa de tres factores principales: por un lado, que la sociedad se encontraba en un nivel avanzado de organización, con federaciones de clase articuladas sectorialmente; por otro lado, por la estabilidad económica y política; y, por último, por el nivel avanzado de los agentes económicos y sociales en términos de organización empresarial y competitividad sistémica.

Este Estado Logístico tuvo como principales características la implementación del liberalismo a nivel internacional, mientras que al interior del país se impulsó una política desarrollista. En este marco, se retomó la autonomía decisoria en términos de política internacional, pero en un mundo fuertemente interdependiente. En este punto, el objetivo central era el disminuir la dependencia tecnológica y financiera, promoviendo, a su vez, la innovación productiva y la mejoría en términos económicos. El elemento central de este tipo de Estado fue dar apoyo logístico a las empresas de capitales nacionales para su proyección internacional. Esta expansión hacia afuera se dio a través de dos vías: por un lado, la inclusión de la producción local en emprendimientos internacionales, y, por el otro, mediante el crecimiento de las inversiones en el exterior, sobre todo en países vecinos (Calcagno y Masera, 2012).

Las políticas externa, económica y social contribuyeron al dislocamiento de la hegemonía del gran capital financiero internacional y de la burguesía importadora en el bloque en el poder. Estas políticas atendieron a los intereses de la gran burguesía interna brasileña, que reunía a las empresas de capital predominantemente nacional, algunas estatales y, de forma periférica, a algunas multinacionales instaladas en el país (Berringer, 2015).

Frente a esto, el tipo de Estado que se configuró durante la época de gobierno de Lula y las políticas implementadas, sobre todo la externa -la cual es objeto de análisis en el marco de esta tesis-, tuvieron como objetivo favorecer a estos sectores que se constituyeron como bloque en el poder durante esos años. Esto se dio con el objetivo de colocar a Brasil como un actor de peso global. Para ello, se recuperaron no sólo algunas políticas implementadas durante la época desarrollista, sino también su carácter como potencia subimperial, a través de la implementación de políticas nacionales, pero sobre todo a partir de las relaciones que se establecieron con otros países, tanto de Sudamérica como de otras regiones.

En síntesis, analizar las características del Estado brasileño, desde el golpe de Estado de 1964, nos permite entender cómo se fue configurando el tipo de Estado subimperial en Brasil, que comandó el desarrollo capitalista y buscó favorecer al bloque en el poder. Así, durante la época de Lula da Silva, este tipo de Estado se configuró con un bloque en el poder compuesto por la burguesía interna, lo que puede ligarse con la orientación que cobraron tanto la política interna como la externa, las cuales, en algunos casos, entraron en contradicción con los intereses de los sectores populares que conformaron el frente neodesarrollista (Berringer, 2015) que apoyó al PT.

2. GENEALOGÍA DE LA POLÍTICA SUBIMPERIAL EN BRASIL

Tal como desarrolla Marini (1969), la historia de Brasil durante la primera parte del siglo XX puede dividirse en dos fases. La primera, que abarca desde 1922 a 1937, se caracteriza por la agitación social y la revolución que se dio en 1930. Como consecuencia de este período se dio el surgimiento de una nueva clase media: la burguesía industrial vinculada al mercado interno, lo que sucedió en concatenación con la emergencia de un proletariado que presionaba a las clases dominantes para obtener un espacio propio en la sociedad política. Este período de luchas trajo como resultado el compromiso con el cual la burguesía se estabilizó en el poder, en conjunto con los terratenientes y con los viejos grupos comerciantes.

La fase que se inauguró posteriormente estuvo signada por luchas políticas, desencadenadas por los esfuerzos de la burguesía industrial de poner a su servicio el aparato del Estado y sus recursos económicos, así como también por la oposición entre el sector industrial y las actividades agroexportadoras que se desataron como resultado del crecimiento del sector industrial. Los conflictos que se abrieron condujeron al golpe de Estado de 1964.

2.1. El Golpe y un nuevo pacto de élites

Hacia 1960, el deterioro de las relaciones comerciales y la caída de las inversiones extranjeras reforzaron las tensiones entre la burguesía nacional y los monopolios norteamericanos. En este contexto, un sector de la burguesía brasileña se había asociado al capital extranjero. Las compañías estadounidenses vieron en Brasil un mercado al cual exportar equipos, maquinarias y técnicas que se volvían obsoletas. Por su parte, la burguesía local se benefició de las fuentes de crédito, aumentando su plusvalía relativa y su capacidad competitiva en el mercado interno. Esta asociación implicó la absorción y quiebra de las unidades más débiles, concentrando el capital en pocas empresas.

A inicios de la década del sesenta, en un contexto inflacionario, se produjo una transferencia de recursos desde la industria hacia la agricultura, al mismo tiempo que se dio un aumento de los costos de producción y, como resultado, la caída de las inversiones. En este marco, los capitales extranjeros comenzaron a presionar para exportar sus utilidades, lo que produjo una crisis cambiaria, que tuvo un impacto sustancial en el sector industrial.

La agudización de la lucha de clases y la crisis del proceso de industrialización produjeron tensiones disruptivas en el seno del capitalismo brasileño, las cuales derivaron en el golpe de Estado de 1964, de la mano de Humberto de Alencar Castelo Branco (Luce, 2008). Estos años fueron la génesis de los análisis de Marini en torno a la constitución y fortalecimiento del subimperialismo brasileño.

El golpe de Estado representó una revalidación del compromiso entre la burguesía y la oligarquía latifundista-mercantil, y constituyó el instrumento y el resultado del desarrollo de un tipo de Estado capitalista con características subimperialistas. La dictadura representó, por un lado, el factor que garantizó una acumulación de capital centrada en la superexplotación de lxs trabajadorxs, y, por el otro, la expresión de la

hegemonía alcanzada por los monopolios industriales y por el capital financiero en el plano nacional e internacional (Marini, 1971).

Este golpe de Estado se diferenciaba de los anteriores que se sucedieron durante el siglo XX, dado que estos tenían por objetivo resolver los conflictos surgidos entre las clases dominantes. Sin embargo, el gobierno de facto planteó un esquema económico-político, que buscaba consagrar definitivamente la fusión entre los intereses de los sectores dominantes nacionales y los del gran capital, estableciendo así las bases de una política subimperialista (ibíd.). Esta política buscaba superar algunos umbrales a partir de la superexplotación de su propia fuerza de trabajo y de establecer una división del trabajo a escala subregional en función de los intereses de su burguesía.

En este marco, una de las principales políticas que implementó la élite militar en el gobierno fue la reforma agraria, la cual no cuestionaba el régimen de propiedad de la tierra, sino que buscaba crear mejores condiciones para el desarrollo agrícola. A su vez, los militares ejercieron un control férreo sobre los precios agrícolas, con el objetivo de mantenerlos en un nivel tolerable para el sector industrial.

Por otra parte, implementaron un programa de estímulo a las inversiones, derogando la reglamentación de exportación de utilidades, y la firma de un convenio que otorgaba garantías a compañías estadounidenses. En 1965, modificaron la ley de Capitales Extranjeros, ampliando el régimen brindado al capital foráneo y profundizando las ventajas que le otorgaban, abriendo la posibilidad a la contratación de préstamos entre empresas extranjeras y locales. A partir de 1967, el gobierno militar adoptó medidas para permitir a bancos comerciales y de inversión tomar y traspasar a empresas radicadas en Brasil créditos para financiar su capital fijo y de giro. Así, la inversión extranjera pasó de 1028 millones de dólares en el período 1966-70, a 2319 millones en 1971 y 4788 millones en 1972 (Marini, 1977).

De esta forma, se impulsó la integración de la economía brasileña a la norteamericana, lo cual acarreó dos consecuencias principales. Por un lado, aumentó la capacidad productiva gracias a las inversiones extranjeras y a la racionalización tecnológica, y, por el otro, acrecentó el desequilibrio entre el crecimiento de la industria y la constitución de empleos por parte de este sector. Ante esta situación, la creación de mercado interno dinámico se tornó imposible, lo cual se tradujo en una expansión de la economía brasileña hacia el exterior, principalmente hacia Latinoamérica.

El capitalismo brasileño no había logrado generar un cambio en la economía nacional y se encontraba en una situación de dependencia creciente frente a las economías centrales, por lo cual

> al revés de lo que pasa con las economías capitalistas centrales, el subimperialismo brasileño no puede convertir la expoliación que pretende realizar en el exterior en un factor de elevación del nivel de vida interno, capaz de amortiguar el ímpetu de la lucha de clases; por el contrario, por la necesidad que experimenta de proporcionar un sobrelucro a su socio mayor norteamericano, tiene que agravar violentamente la explotación del trabajo en el marco de la economía nacional, en un esfuerzo por reducir sus costos de producción (Marini, 1969: 115-116).

Así, la dictadura representó, además, la contención del movimiento de masas, utilizando la fuerza para frenar los reclamos y para fijar, de esta forma, los límites a los reajustes salariales. Tal como plantean algunos autorxs marxistas que teorizan sobre el Estado (Hirsch, Bonefeld, Holloway, Clarke, entre otrxs), fue el propio Estado el que canalizó las formas de mediación entre el capital y el trabajo, las cuales aseguraron la reproducción del capital.

Como resultado de las medidas implementadas a partir de 1964, Brasil ocupó el primer puesto en la recepción de inversión, tanto pública como privada, impulsadas desde algunos programas de la Alianza para el Progreso[18]. Sin embargo, el capital extranjero se negó a promover algunos sectores reservados a las economías avanzadas, como el sector aeronáutico y nuclear.

Durante los gobiernos que se sucedieron en el marco del gobierno militar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, conocido como Itamaraty, fue el menos golpeado en términos de purgas, perdiendo solamente 34 diplomáticxs de carrera, en comparación con otros ministerios. De hecho, la mayor parte de los cancilleres que fueron nombrados durante el período dictatorial fueron miembros del cuerpo profesional de Itamaraty, con excepción de Juracy Magalhães (1966-1967) y José de Magalhães Pinto (1967-1969) (Ely, 1987).

En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Castelo Branco colocó a Vasco Leitão da Cunha, quien impulsó una nueva doctrina en la que planteaba que, por su posición geográfica, Brasil no podía escapar de la influencia estadounidense, por lo que debía aceptar la

[18] Programa de ayuda económica y política de Estados Unidos para América Latina llevado adelante entre 1961 y 1970. Se proyectaron millonarias inversiones por parte de las agencias de ayuda del gobierno estadounidense, las agencias financieras multilaterales y el sector privado, canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo.

misión de asociarse a la política estadounidense en el Atlántico Sur. A su vez, Estados Unidos reconocería el "casi monopólico" dominio ejercido por Brasil en el área.

Durante la década de los sesenta y setenta, la política estadounidense para América Latina estuvo centrada en lo que se denominó la Doctrina de Seguridad Nacional, cuya idea central fue que garantizando la seguridad del Estado se aseguraba la de la sociedad, y que, para alcanzar este objetivo, era necesario el control militar del Estado. A su vez, se sustituyó el enemigo externo por el interno, en su intento de erradicar, en cada uno de los países dependientes, la amenaza comunista (Leal Buitrago, 2003), a raíz de la Revolución Cubana y la oleada de radicalización política que generó. La implementación de esta doctrina posibilitó que Brasil impulsara una ofensiva sobre América del Sur y África, con el objetivo de asegurar zonas de influencia y mercados. De esta forma, se inauguraba la política externa de cooperación antagónica (Bueno y Seabra, 2010).

La posición intermedia de la economía brasilera en la división internacional del trabajo impulsó al Estado brasileño a establecer una relación de cooperación antagónica con la potencia dominante, con el objetivo de propulsar una política expansionista relativamente autónoma. Si bien estableció una relación de estrecha dependencia con su centro antagónico, Brasil buscó moldear una división regional del trabajo en la cual compraba a los países vecinos materias primas y les vendía manufacturas. Es decir, esta política expansionista era autónoma en el sentido de crear una esfera de influencia regional propia, respondiendo a los intereses de las fracciones nacionales del capital (Luce, 2007).

Tras llegar al poder, Castelo Branco implementó el Plan Trienal 1964-1966, elaborado por su ministro de Planificación, Roberto Oliveira Campos, el cual tenía por objetivo reactivar el crecimiento del producto interno bruto y contener el aumento de precios. A su vez, el plan otorgaba un papel estratégico al capital extranjero y beneficiaba a las grandes empresas, especialmente las vinculadas a la industria pesada, exponiendo la intención del régimen de consolidar la industria de bienes intermedios.

En este marco, fue la industria de bienes intermedios la cual impulsó al capitalismo brasileño a su etapa subimperialista, considerando que este era el único camino posible para continuar con su desarrollo (Marini, 1969). El plan creó una simbiosis entre los intereses de la gran industria y los sueños hegemónicos de la elite militar, dado que impulsó el desarrollo de la industria bélica.

La política externa de Castelo Branco se caracterizó por colaborar activamente con la expansión imperialista. La integración de la economía brasileña a la norteamericana tenía como objetivo, además de asegurar el liderazgo brasileño en la región sur del continente, dar respuesta a los problemas económicos que debía enfrentar la burguesía nacional. Por su parte, la economía estadounidense se vio beneficiada con esta política dado que necesitaba colocar los equipos que la evolución tecnológica volvía obsoletos, así como también desarrollar sectores con cierto nivel de industrialización que llevasen adelante las primeras fases de elaboración de materias primas.

De esta forma, el régimen impulsó una política de ampliación de mercado externo, que pudiese absorber los excedentes que se producían. Si bien esta política no era novedosa, dado que los gobiernos de Jânio Quadros (31 de enero-25 de agosto de 1961) y João Goulart (1961-1964) buscaron garantizar una reserva externa de mercado para la expansión brasileña en África y Sudamérica, la diferencia radicó en que la expansión comercial al exterior dejaba de ser una solución complementaria a la política reformista y se convertía en la alternativa de las reformas estructurales (Marini, 1969).

Ante la política del régimen de rebaja forzosa del precio de la fuerza de trabajo, los sectores medios y pequeños de la burguesía apoyaron abiertamente al gobierno militar, dado que eran los más afectados por los costos laborales, a causa de que empleaban tecnología más atrasada y, por lo tanto, mayor cantidad de trabajadorxs. Pero la rebaja de los salarios trajo aparejado un debilitamiento del consumo popular, lo cual se tradujo en una reducción del mercado de los sectores medios y pequeños. El régimen, a su vez, había restringido el crédito disponible para estas fracciones de la burguesía, al mismo tiempo que les exigía la renovación de sus maquinarias, dado que para expandirse hacia el exterior era necesaria una industria moderna de alto poder competitivo; esto implicó su quiebra o la absorción por grupos más poderosos.

Estos sectores sociales, al tratarse de una fracción amplia y emplear la mayor cantidad de mano de obra, disponían de una considerable capacidad de resistencia, por lo cual comenzaron a obstaculizar la política fiscal y crediticia del gobierno militar. Por su parte, la gran burguesía no se movilizó en defensa del gobierno, dados los lentos progresos de la política subimperialista. El gobierno de Castelo Branco debió ceder su lugar al de Artur da Costa e Silva, quien asumió el 15 de marzo de 1967.

En el plano de las relaciones internacionales, el régimen militar llevó adelante una política subimperialista, de unión con los centros imperiales, con el fin de transformar al país en un centro intermedio de poder. El gobierno de da Costa e Silva siguió los lineamientos basados en la afirmación de la soberanía y la promoción del desarrollo.

Durante su mandato, propuso la realización de una reunión extraordinaria de la Comisión Especial de Coordinación Latino-Americana (CECLA)[19], con la finalidad de reforzar la unidad entre los países de la región. El resultado de esta iniciativa fue la aprobación del Consenso de Viña del Mar, en el que se plasmaron las reivindicaciones en materia de cooperación (Khalil, 2012). A su vez, plantearon aspiraciones en materia de comercio internacional, transportes, financiamiento, inversiones, desarrollo científico y tecnológico, cooperación técnica y desarrollo social, a ser discutida con Estados Unidos para "un avance sólido en la cooperación interamericana" (CECLA, 1969: 408).

Sin embargo, hacia 1968, las tensiones entre Brasil y Estados Unidos comenzaron a surgir. Esto quedó evidenciado en las restricciones americanas a la exportación de café soluble, en el veto de la potencia a la intención brasileña de invadir Uruguay, en el bloqueo de las aspiraciones brasileñas de dominio de tecnología nuclear, entre otras cosas (Marini, 1993).

Luego de que da Costa e Silva sufriera un derrame cerebral en 1969 y abandonara la presidencia, la cúpula militar llegó al consenso de que Emílio Garrastazu Médici quede a cargo de la presidencia. Si bien al asumir habló de la necesidad de democratización, fue el presidente que lideró con más brutalidad la represión social y la contención de la protesta.

Durante el mandato de Médici, se dio lo que se conoce como el "milagro económico", dado que, entre 1970 y 1973, la economía creció en torno a un 10%. Se consolidó un trípode económico: las empresas estatales se encargaron de la infraestructura, de la energía y de las industrias de bienes de capital; las transnacionales producían los bienes de consumo durable; y el capital privado nacional se volcó hacia la producción de insumos y bienes de consumo. La exacerbación del autoritarismo sirvió para mantener elevada la tasa de apropiación del excedente económico, intensificando la acumulación de capital del gobierno y de las empresas nacionales y extranjeras (de Moura Fernandes, 2007).

[19] Grupo ad hoc, creado en 1963, con el objetivo de coordinar las actitudes de los países latinoamericanos en los temas que tratarían en la primera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Culminó con el Consenso de Viña del Mar de 1969.

Frente a la situación de brutal represión que el gobierno de Médici estaba llevando adelante, la iglesia católica y la Orden de los Abogados se manifestaron contra la dureza de esta política. Este hecho, en conjunto con los debates acerca de los derechos humanos y la necesidad de revisión del modelo político, condujo a que se llamara a elecciones en 1974 (Valverde Da Silva, 2016). Sin embargo, estas no fueron elecciones democráticas, sino que se realizaron por votación indirecta, a través de un colegio electoral. En ellas, Ernesto Beckmann Geisel, de la Alianza Renovadora Nacional[20] (ARENA) -partido armado por el gobierno dictatorial- se impuso con 400 votos a favor por sobre Ulysses Guimarães. Así, el gobierno del general Ernesto Geisel implementó la política externa denominada "pragmatismo responsable". Ésta estrechaba las relaciones brasileñas con otros centros mundiales de poder, como Europa occidental, Japón y la Unión Soviética, al mismo tiempo que se realizaban esfuerzos por colocar a Brasil en lugares destacados en el marco de instancias que agrupaban a países periféricos. Esta política tenía por objetivo la afirmación de la autonomía estratégica de Brasil para tomar decisiones e impulsar iniciativas estratégicas en su entorno prioritario que era América del Sur, el Atlántico Sur y el cono sur africano (Vitelli, 2015).

La política de desarrollo industrial implementada por el gobierno dictatorial implicó un crecimiento económico de Brasil superior al de la región sudamericana. En este marco, los niveles de inversión en sectores industriales, entre 1969 y 1979, aumentaron significativamente: en el sector metalúrgico pasó de 53.1 millones de dólares en 1969 a 1160.5 en 1979; el mecánico pasó de 18.8 a 122.7; el de material eléctrico y comunicaciones de 19.9 a 174.5; el de materiales de transporte de 131.4 a 567.1; y el de productos químicos de 72.2 a 723.4; concluyendo que el total de la inversión en manufacturas pasó de 544.1 a 3861.8 millones de dólares (Aguiar de Medeiros, 1988). A su vez, mientras que en el resto de los países de la región sudamericana el porcentaje de exportación de manufacturas en las exportaciones totales, entre 1965 y 1985, se mantuvo constante (no superando ningún país los 10 puntos), en Brasil este porcentaje pasó de 2.1 en 1965 a 28.4 en 1985 (Fajnzylber, 1990).

En un contexto internacional de crisis, en 1975, comenzó a avizorarse una profunda retracción que se tradujo en una caída de la producción en un 4% y un aumento de la tasa de inflación que trepó al 20.5%. El déficit comercial fue de 3500 millones de dólares,

[20] Aliança Renovadora Nacional.

mientras que el déficit de la balanza de pagos fue de 1500 millones de dólares pagados por las reservas financieras del país. A su vez, la deuda se incrementó a 22 mil millones de dólares.

En este marco, las medidas que implementó el gobierno tuvieron como eje la disminución de las importaciones de las empresas públicas, la limitación de importaciones de productos secundarios y la restricción a la salida de dólares. Esta situación, sumada al descontento social producto de las altas tasas de analfabetismo, pobreza extrema en algunas regiones y el deterioro de los servicios sociales, generó masivas movilizaciones sociales.

Las elecciones municipales de 1976 mostraron la falta de legitimidad con la que contaba ARENA. En estos comicios gran parte de lxs votantes optaron por elegir al Movimiento Democrático Brasileño[21] (MDB) -el partido de oposición consentido, dirigido en su mayoría por viejos políticos, aceptados por los militares-, así como también se dio un amplio margen de voto en blanco o nulo.

En este contexto, la cúpula militar comenzó a pensar la transición hacia la democracia. En 1977, el gobierno comprendió que, para garantizar que no se diera un cambio de rumbo en la política económica e industrial, era necesaria una intervención en el Colegio Electoral, órgano encargado de elegir al presidente. A su vez, para asegurar la mayoría en los parlamentos, se intervino el proceso electoral, se restringió la propaganda política y se llevaron a cabo depuraciones.

En los últimos años del período dictatorial, comenzó una escalada de lucha social, la cual derivó en la creación de partidos políticos y movimientos sociales que reunían, por primera vez en la historia del país, diferentes sectores de la clase trabajadora en instancias de carácter nacional (Fontes, 2010). Esto se vio posibilitado porque el gobierno de facto permitió la formación de partidos políticos independientes.

Así, en 1981, se fundó el PT, que reunió a activistas de izquierda, a sectores católicos cercanos a la teología de la liberación, a intelectuales moderados y a líderes de movimientos sindicales y sociales (Samuels, 2004). En 1983, se constituyó la Central Única de los Trabajadores[22] (CUT), cercana al PT y de alcance nacional. Por otro lado, dentro de los movimientos sociales creados por estos años el que más importancia tuvo,

[21] Movimento Democrático Brasileiro.
[22] Central Única dos Trabalhadores.

por su presencia nacional, fue el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra[23] (MST), instaurado en 1984, cuyo principal reclamo se centraba en el impulso de una reforma agraria, que desconcentre la tenencia de la tierra para así reducir la pobreza ligada a sectores rurales. En este contexto, se inició el proceso de retorno a la democracia. De esta forma y mediante las políticas implementadas durante parte de los sesenta y los setenta, fue que el gobierno militar sentó las bases para la adopción de una política subimperialista en Brasil. Si bien la misma fue relegada durante la década de los noventa, fue retomada y profundizada durante la época lulista, recuperando también, y reactualizando, algunas visiones de la época desarrollista.

3. Democratización y Neoliberalismo

En 1985, con la salida del gobierno dictatorial, un colegio electoral eligió presidente a Tancredo Neves, quien se enfermó gravemente antes de asumir el cargo, quedando en manos de su vicepresidente, José Sarney. Esta elección no se realizó por voto universal, porque la oposición no consiguió los dos tercios de los sufragios necesarios en el Congreso (Sader, 1999). Por ello, fue el colegio Electoral el que se encargó de designar al Poder Ejecutivo y la victoria de la oposición sólo fue posible a través de una alianza con fuerzas ligadas al régimen dictatorial saliente. Así, el nuevo gobierno nacía de un nuevo pacto de élites, restableciendo derechos civiles sin realizar ninguna reforma de las estructuras económicas que constituían la base del poder de los sectores de las burguesías.

El gobierno de Sarney se inició un mes antes de la muerte de Neves. Si bien le correspondía asumir la presidencia a Ulysses Guimarães por ser el presidente de la Cámara de Diputados, éste renunció en favor de Sarney. Luego de la muerte de Neves el día 21 de abril, Sarney fue investido como presidente titular otorgándole un mandato sexenal.

En 1984, se había formado una coalición denominada Alianza Democrática[24], integrada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño[25] (PMDB) y por el Frente Liberal, sector disidente del Partido Democrático Social (PDS). En el lanzamiento de la boleta que este sector presentó ante el colegio electoral, encabezada por la fórmula Neves-Sarney,

[23] Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra.
[24] Aliança Democrática.
[25] Partido do Movimento Democrático Brasileiro.

difundieron un documento titulado “Compromisso com a nação”, en el que presentaban los principios y objetivos que perseguirían al hacerse cargo del gobierno. Los compromisos fundamentales eran: la democratización de las instituciones, la lucha contra la inflación, el desempleo y el problema de la deuda externa, la reforma agraria y la introducción de cambios en las áreas de impuestos, seguridad social, vivienda, política exterior, educación y cultura, y medio ambiente. Durante su gobierno, Sarney no alteró los principios planteados en el documento. Su presidencia estuvo ligada a la crisis económica que venía arrastrándose desde la década del setenta. Frente a esta situación, se dio un proceso de ascensión del movimiento sindical y una escalada de huelgas (Maciel, 2008).

En términos de política exterior, las prioridades del gobierno de Sarney estuvieron ligadas a la idea de implementar políticas apropiadas para un desarrollo nacional más autónomo. Por ello, la relación con Estados Unidos osciló entre dos polos: por un lado, la inestabilidad que se dio en las negociaciones multilaterales de comercio, y, por el otro, la iniciativa de Brasil de acercarse a los países latinoamericanos como instrumento de inserción internacional. A su vez, Brasil buscó asociaciones estratégicas fuera de la región con países de Europa occidental, África subsahariana, Oriente Medio, Asia y Europa del Este. Sin embargo, la orientación de la política exterior brasileña se vio condicionada u orientada por el contexto internacional (Figueiredo Barros do Prado y Miyamoto, 2010).

El 30 de noviembre de 1985, Sarney y el por entonces presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, firmaron la Declaración de Iguazú, que enfatizaba la unión de esfuerzos en la defensa conjunta de los intereses de ambos países en los foros internacionales y el aprovechamiento de los recursos comunes. Algo inédito que se inauguró con esta declaración fue la creación de un organismo, la Comisión Mixta, cuyo objetivo fue acompañar y gerenciar la cooperación entre ambos países, coordinada por los ministros de relaciones exteriores e integrada por representantes gubernamentales y empresariales. Uno de los objetivos centrales que se impulsaron desde esta comisión fue la de crear una unión aduanera (Pasquariello Mariano, 2015).

Durante la década de los ochenta y noventa, con el cambio de la política imperial estadounidense en relación a América Latina, Brasil relegó su estrategia subimperialista. Con la llegada al poder en Estados Unidos de Ronald Reagan en 1981, se aplicó una política de cariz nacionalista, que planteaba la necesidad de reconquistar la hegemonía

internacional. Para ello, con el objetivo de restablecer una división internacional del trabajo que garantizara la circulación de mercancías y capitales, impulsó un proceso de reconversión productiva que respetase la especialización vigente según las ventajas comparativas, al mismo tiempo que ampliase el espacio al libre juego del capital al reducir la capacidad de intervención del Estado. Tal como expuso Marini (2007: 3):

> En la perspectiva de ese proyecto neoliberal, comienza a diseñarse el futuro que el capitalismo internacional reserva a la región: una América Latina integrada aún más estrechamente a la economía mundial, mediante su transformación en economía exportadora de nuevo tipo, es decir, una economía que, al lado de la explotación más intensiva de sus riquezas naturales, refuncionalice su industria para volverla competitiva en el mercado exterior.

Tras la imposición de las medidas de reconversión productiva, en 1989, se impulsó una política para América Latina que se cristalizó bajo los preceptos impulsados por el Consenso de Washington. Este planteaba reformas económicas basadas en una lógica de mercado cuyas características centrales eran la apertura, la disciplina macroeconómica, la privatización de empresas estatales y la desregulación (Martínez Rangel y Soto Reyes, 2012).

En este marco, la política exterior brasileña se encuadró en el marco de los preceptos del regionalismo abierto cepalino. Tal como planteamos en el capítulo anterior, éste era entendido como un proceso comercial vinculado a las rebajas arancelarias y a la apertura de los mercados nacionales al exterior como un paso necesario para insertarse mejor en la globalización.

En este contexto, en Brasil, el bloque en el poder sostuvo el proyecto de reconversión, cuya base ideológica estaba ligada al Consenso de Washington. En esta década se diferenciaron dos fracciones dentro de la burguesía nacional: por un lado, aquella fracción que estableció vínculos con el mercado financiero internacional, a través del acceso a empréstitos externos e inversiones en el exterior; y, por otro lado, un sector ligado a los servicios públicos que previamente estaban en manos del Estado. Estas fracciones no presentaban intereses inmediatos de conquistar mercados externos, sino que buscaban estrechar alianzas con el capital internacional en el espacio nacional (Bueno y Seabra, 2010).

Así, con la llegada a la presidencia de Fernando Collor de Mello, en marzo de 1990, se dio forma al primer proyecto neoliberal conscientemente articulado. Collor estableció el déficit estatal como el principal eje de los problemas brasileños a ser atacados (Sader, 1999).

Durante el último tiempo de la década de los ochenta, Uruguay y Paraguay habían demostrado interés en sumarse a la instancia de integración impulsada por Argentina y Brasil, por lo que, en 1990, fueron invitados a participar de dicha instancia. Con la entrada de estos dos países, en 1991, se firmó el Tratado de Asunción, el cual fue el puntapié inicial para la constitución del MERCOSUR.

En diciembre de 1992, Collor de Mello fue destituido por "delitos morales", quedando en el cargo su vicepresidente Itamar Franco. En ese momento, Brasil atravesaba una crisis no sólo política, sino también económica. Para hacer frente a la situación, Franco eligió para la cartera de Economía a quien ocupaba en ese momento el ministerio de Relaciones Exteriores, el sociólogo y teórico de la vertiente extructuralista de las TD, Fernando Henrique Cardoso.

Cardoso estableció un programa neoliberal centrado en el combate de la inflación y la estabilización monetaria, responsabilizando al Estado por el descontrol inflacionario e impulsando políticas de restricción al gasto público, en la privatización de empresas estatales, la apertura de la economía al exterior y la desregulación general de la economía (Sader, 1999). A su vez, promovió lo que se conoció como el Plan Real, el cual adoptó medidas en dos etapas. En la primera, se propulsaron políticas de recorte del gasto público, el aumento de impuestos y una mayor centralización de los recursos por el gobierno federal, con el objetivo de aumentar la recaudación y, de esta forma, equilibrar sus cuentas. En la segunda etapa, se implementó una nueva moneda, el real, y, con la finalidad de contener la inflación, se impulsaron políticas de sobrevalorización cambiaria y elevados tipos de interés (Kraychete, 1995). Este plan representó un nuevo pacto de élites, ya que se transfirió la carga del problema inflacionario a los sectores populares, a pesar de que el proceso inflacionario, en gran medida, había sido producido por el financiamiento público de la inversión privada (Sader, 1999).

Algunos éxitos inmediatos del Plan en relación al combate a la inflación jugaron un papel central en la victoria de Fernando Henrique Cardoso en las elecciones presidenciales de 1995. Cardoso reunificó a la derecha brasileña con un discurso de modernización liberal de prácticas de privatización del Estado, además de llevar adelante un papel central de combate de partidos de izquierda, movimientos sociales y sindicatos (Sader, 1999).

La política exterior implementada por el breve gobierno de Collor de Melo había intensificado una división al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores, más

conocido como Itamaraty (Gomes Saraiva, 2011). Esto llevó a la formación de dos grupos políticos al interior del ministerio. Por un lado, lxs institucionalistas pragmáticxs, quienes se caracterizaban por otorgar mayor preponderancia al apoyo del país a las instancias internacionales vigentes e impulsaban una identificación más fuerte con Occidente, entendiendo que esto favorecería el desarrollo económico brasileño. Por otro lado, lxs autónomxs (sector que se consolidó con el arribo de Lula da Silva al poder), quienes propulsaban una proyección más autónoma y proactiva de Brasil en la política internacional (Gomes Saraiva, 2012). Durante la presidencia de Cardoso el primer grupo se vio fortalecido.

Por su parte, la política externa llevada a cabo por el gobierno de Cardoso fue uno de los principales planos de consolidación del neoliberalismo ortodoxo en Brasil. Ésta estuvo centrada en el retorno de la alianza con los Estados Unidos, a diferencia de la política anterior de cooperación antagónica, con el objetivo de obtener préstamos, captar inversión extranjera y atender los deseos del capital financiero nacional e internacional (Berringer, 2014).

En los últimos años del siglo pasado, el gobierno de Cardoso impulsó un conjunto de medidas para beneficiar a los sectores ligados a la exportación. Por un lado, para mejorar la coordinación de las políticas de exportación, creó de la Cámara de Comercio Exterior[26] (CAMEX). A su vez, propulsó estímulos fiscales para las exportaciones, restituyó mecanismos para la financiación de importaciones y moldeó la organización institucional de sus ministerios para mejorar su capacidad de negociación internacional (Andrade, 2010).

Más allá del alineamiento con los Estados Unidos, impulsado durante los primeros años de la gestión Cardoso, hacia finales del siglo, comenzaron a surgir divergencias. Estos conflictos se intensificaron a causa de la presión ejercida por la burguesía interna brasileña en relación a no aceptar los acuerdos del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)[27], instancia de integración promovida por Estados Unidos. Este distanciamiento quedó evidenciado cuando, en la instauración de su segundo mandato,

[26] Câmara de Comércio Exterior.

[27] Lanzado en 1991, ALCA es el nombre contemporáneo con que se denominó la ambición imperialista de construir una unión panamericana, que tuvo numerosos intentos durante el siglo XX (Katz, 2006).

en enero de 1999, Cardoso apuntó a sus pares sudamericanos a actuar conjuntamente para evitar los riesgos de una "globalización asimétrica"[28].

Para la burguesía industrial brasileña, Sudamérica representaba el espacio privilegiado para la posible reversión de la recesión económica. Esta fue la principal razón por la que el Estado brasileño buscó profundizar la integración sudamericana (Berringer, 2014). Así, en el marco de la primera Reunión Cumbre de Presidentes Sudamericanos, que se realizó en Brasilia en el 2000, Cardoso sentó las bases para impulsar un proyecto de integración que excluya a México, su principal competidor por el liderazgo regional. Para Cardoso, la integración debía centrarse en tres pilares principales: el comercio, la infraestructura física y la energía. En el marco de este encuentro, fue presentada la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (Giacalone, 2006). De esta forma, se gestaron ideas y proyectos que fueron retomados y profundizados durante la década posterior.

Tras más de una década de implementación de un modelo de corte neoliberal, los efectos negativos impactaron en aquellos sectores que habían apoyado las reformas. Frente a ello, comenzó a acrecentarse el descontento de algunos sectores de la burguesía interna con las políticas neoliberales de apertura y desregulación –las cuales tuvieron un impacto negativo en términos económicos para este sector-. Esta fue una de las causas –aunque no la única- que condujo al cambio político que se experimentó a comienzos del siglo XXI. El bloque en el poder se reconfiguró por esos años y el Estado volvió a tomar el control en relación a la política de desarrollo subimperial. Esto se tradujo en un viraje en torno a la política exterior, tensionado no sólo por los sectores de las elites, sino también por los sectores populares que se encontraban al interior del gobierno.

4. El modelo de desarrollo del PT: continuidades y rupturas

A inicios del 2000, se dio una crisis del modelo neoliberal en la región sudamericana. Los desequilibrios generados por este modelo, en conjunto con la primacía del sector exportador por sobre el desarrollo interno y la concentración de las actividades más rentables en unas pocas empresas, quedaron evidenciados. Las políticas de ajuste y apertura deterioraron los ingresos populares, y resintieron la industria local. A su vez, se acentuó la vulnerabilidad de las economías locales ante la salida de capitales externos. En

[28] La Nación, "Cardoso alerta por la globalización", 5/01/1999. Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/economia/cardoso-alerta-por-la-globalizacion-nid123551/

este marco, los países dependientes no pudieron respaldar las reservas, ni controlar el tipo de cambio o el nivel de inflación (Katz, 2016b).

Con la crisis del neoliberalismo en la región, se dieron tres grandes procesos nacionales diferenciados. En primer lugar, aquellos países en los que fuerzas populares desarticuladas y débiles no consiguieron forzar una crisis del sistema de dominación que lograra romper la hegemonía neoliberal; estos casos son el de Colombia, Perú y Chile. En segundo lugar, países en los cuales las luchas sociales, si bien pudieron forzar una crisis en el proyecto neoliberal, no fueron capaces de desplazar del control político a las fracciones del capital que habían conseguido alcanzar un lugar hegemónico en el período neoliberal; esta situación se dio en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Por último, países como Venezuela, Bolivia y Ecuador, quienes atravesaron las crisis alcanzando una reconfiguración de la hegemonía política (Féliz, 2013). En este contexto subcontinental fue que en Brasil comenzó a conformarse un proyecto centrado en el desarrollo, recuperando las visiones tradicionales del desarrollismo[29] y rearticulándolas a la luz de la situación del sistema mundial actual.

Mariano Féliz (2011: 81) plantea que el neodesarrollismo "se constituyó en la forma posneoliberal del desarrollo capitalista (...) y que esa nueva forma de desarrollo es la continuidad –en la ruptura– del neoliberalismo". Tal como sostiene este autor, a pesar de que se han dado algunos cambios en el proceso de valorización y las políticas públicas vinculadas, el contenido continúa dentro de los lineamientos establecidos durante la etapa neoliberal. El modelo que se constituyó se apoyó en las condiciones estructurales, como son la superexplotación de la fuerza del trabajo y el saqueo de los bienes comunes, creadas durante las décadas anteriores. A su vez, no sólo se motorizó la recuperación del papel del Estado como promotor del desarrollo, sino también como medio para canalizar los conflictos sociales (Féliz, 2013).

A su vez, el combustible del neodesarrollismo se halla en la superexplotación de la fuerza de trabajo (Traspadini, 2017). En la actualidad, ésta funciona como una doble condición:

[29] El desarrollismo surgió en la década de 1940 y tuvo su impulso en América Latina de la mano de la CEPAL y con el desarrollo teórico de autores como Prebisch y Furtado. En el plano de los países dependientes, su principal objetivo era desarrollar un proceso de industrialización que transformara las estructuras de la sociedad. Desde esta visión, la condición de subdesarrollo sólo podía superarse a través de la adopción de una estrategia nacional de desarrollo dirigido por el Estado. Esta visión defendió la protección a la producción nacional para viabilizar el modelo de industrialización basado en la sustitución de importaciones (Bresser-Pereira, 2017).

por un lado, permite que los capitales transnacionales ocupen los territorios nacionales y constituyan un tipo de producción destructora de los derechos sociales conquistados, y, por el otro, implica el sostenimiento, en niveles más intensos, de la partida neta de ganancia.

Los proyectos neodesarrollistas que se articularon tras la crisis del neoliberalismo tuvieron como uno de los ejes principales resolver productivamente el dilema que genera la "maldición de los recursos naturales", que viene dada por la presencia de bienes comunes a bajo costo de extracción (Féliz, 2013). Así, en los países sudamericanos se da un proceso de acumulación por desposesión (Harvey, 2004), que implica la acumulación de capital basada en la depredación, el fraude y la violencia. A diferencia de los planteos de otrxs autorxs marxistas, David Harvey no los circunscribe a una etapa originaria, sino a un proceso permanente y continuo. En este marco, y tal como veremos al abordar nuestros casos de estudio –los proyectos hidroeléctricos de Inambari y Garabí-Panambí-, se dan situaciones de alta conflictividad socioterritorial ante el avance de modelos y actividades extractivas, y es el Estado quien gestiona y resuelve estos conflictos ligados al avance y desarrollo del capitalismo.

En este contexto, frente la división internacional del trabajo que relegó, en la mayor parte de los casos, a los países sudamericanos a la exportación de materias primas y *commodities*, la infraestructura para interconectar la región comenzó a ocupar un lugar central en las agendas políticas. Por su parte, en Brasil, mientras se articulaba un proyecto político-económico centrado en el desarrollo nacional y en el posicionamiento de este país como actor global, se clarificaba la necesidad de avanzar en obras de infraestructura que facilitarán la salida de sus exportaciones, así como también que redujeran los altos costos logísticos que implica el traslado de mercancías. Este último fue uno de los principales planteos de algunos de los sectores que integraron el bloque en el poder durante el gobierno de Lula da Silva.

4.1. El Estado como motor de la transnacionalización

Durante los primeros años del primer mandato de Lula da Silva, no se introdujeron grandes transformaciones en la política económica heredada del gobierno anterior. La continuidad socioliberal inicial fue siendo sustituida lentamente por medidas de intervención orientadas a contrarrestar la erosión generada por la ortodoxia monetarista. Con el paso del tiempo, las corrientes neodesarrollistas que se encontraban

al interior del gobierno fueron ganando terreno frente a las vertientes monetaristas (Katz, 2016b).

De esta forma, se pueden establecer dos períodos en relación a la política económica de los gobiernos de Lula. Una primera etapa, que abarca desde 2003 hasta 2005, en la que se mantuvieron las políticas liberales en el plano monetario. La segunda, desde 2006 hasta el final de su segundo mandato, en la que se impulsaron medidas con una orientación más desarrollista, centradas en el desarrollo económico y social a partir de la implementación de algunas políticas públicas clave: la de Campeones Nacionales, el Programa de Aceleración del Crecimiento[30] (PAC), la Política de Desarrollo Productivo[31] (PDP), el impulso al desarrollo de infraestructura y el aumento del financiamiento a través de bancos públicos (Barrenengoa, 2020; Diniz y Boschi, 2013).

El PT llegó al gobierno como resultado de un proceso de integración sistémica al espacio de los partidos del orden y lo hizo con el apoyo explícito de grandes grupos capitalistas. A pesar de tener una constitución sindical y estar ligado a sectores de centroizquierda, este cedió terreno en lo ideológico y político. El sistema político existente en Brasil hace necesaria la conformación de coaliciones para poder gobernar. Frente a esto, el PT logró acceder al gobierno mediante una coalición con el PMDB y el Partido Progresista (PP), un partido de centroderecha cuyos principales cuadros provienen del régimen militar. La realización de este frente político redujo el espacio del Partido de los Trabajadores al interior del gobierno (Palermo, 2004).

Desde su lugar en el gobierno federal y con poder institucional en varias jurisdicciones estaduales y municipales, el PT asumió la tarea de fortalecer la posición del capital brasileño como potencia expansionista en la región, concibiéndola como un área de influencia para consolidar su rol como actor global (Féliz y Melón, 2018). Así, el lulismo buscó favorecer a las fracciones de la burguesía que disputaban con el capital financiero (Katz, 2016b).

En una etapa caracterizada por los monopolios generalizados (Amin, 2018), para obtener mayores cuotas de mercado internacional es fundamental que existan empresas de suficiente tamaño y grado de internacionalización (Bachiller Cabria, 2014). En este marco, el gobierno lulista cohesionó a los dos polos de la sociedad: por un lado, favoreció

[30] Programa de Aceleração do Crescimento.
[31] Política de Desenvolvimento Produtivo.

a fracciones del capital local y trasnacional, sobre todo del sector industrial, del agronegocio, financieras y comerciales; y, por el otro, impulsó una política de redistribución, pero sin cuestionar los fundamentos centrales de la economía dependiente (Ríos Vera, 2018).

Para poder posicionarse como potencia subregional, el gobierno petista tenía que integrar algunas fracciones populares dentro del ciclo de producción y reproducción local del capital. Para ello, llevó adelante un proceso de integración parcial de algunos sectores de los movimientos sociales. Contener las demandas de los sectores más movilizados era fundamental por dos motivos principales. En primer lugar, era necesario hacerlo para garantizar la expansión del capital extractivista por el territorio. Así, entre 2003 y 2014, las industrias extractivas (mineras, agroindustrias, petroleras y energéticas) incrementaron un 68% su peso en la economía, pasando del 2,2% al 3,7% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que las manufactureras cayeron del 16,9% al 12%. A pesar de ello, este sector no avanzó sin resistencias de los movimientos socioterritoriales (Halvorsen, Fernandes y Torres, 2019), comunidades, organizaciones sociales, ecologistas e indígenas, quienes tejieron luchas denunciando las consecuencias del modelo centrado en el saqueo y la expoliación de los ecosistemas. En segundo lugar, era necesario dar garantías de confianza al capital financiero internacional, dado que la gobernabilidad era clave para sostener la acumulación ampliada (Féliz y Melón, 2018).

Por otra parte, el PT desarrolló una batería de políticas y medidas con el objetivo de favorecer a la burguesía interna brasileña, que incluía sectores del agronegocio, de la construcción, de la industria naval, comercial y bancos (Berringer, 2015). Algunos de estos sectores son los que se vieron favorecidos ante el impulso que se les dio a algunas obras enmarcadas en la IIRSA.

Una de las primeras medidas que impulsó Lula, en 2003, fue la creación de la Agencia Estatal de Promoción de Exportaciones e Inversiones[32] (APEX), la cual tuvo como objetivo acrecentar las exportaciones e impulsar las inversiones en el país, llevando adelante asesorías técnicas a diversas empresas. Esta agencia funcionó como apoyo a la política de internacionalización de compañías de bandera nacional llevada adelante por el PT (Barrenengoa, 2019).

[32] Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Por otro lado, una de las políticas centrales fue el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC). Lanzado en enero de 2007, el PAC englobaba un conjunto de políticas económicas cuyo objetivo era acelerar el crecimiento económico, planteando una inversión de 503900 millones de reales para llevar adelante obras de infraestructura vinculadas al transporte, energía, vivienda y recursos hídricos, entre otros, así como también medidas para estimular el crédito y la financiación.

Esta política buscó canalizar las demandas del sector industrial, que enfatizaba en los costos extras que les implicaba el déficit de infraestructura existente. En un informe, la FIESP (2012) sostuvo que las industrias brasileñas tienen un gasto extra anual de 17 mil millones de reales vinculados a la situación de infraestructura ligada al sector logístico, como resultado del precario estado de carreteras y puertos, la burocracia excesiva y la falta de capacidad ferroviaria. Así, en el marco de la PAC, muchas de las inversiones realizadas desde las arcas estatales tuvieron por finalidad eliminar los cuellos de botella logísticos, reducir los costos y aumentar la productividad con el objetivo de estimular la inversión privada y el desarrollo regional (Coleti y otrxs, 2015).

De esta forma, la PAC estuvo vinculada a una estrategia de las elites brasileñas de expansión y modernización de la economía de Brasil (Verdum, 2008). A su vez, esta política se enmarcó dentro de una estrategia, denominada "Campeones Nacionales", la cual se centró en favorecer a algunos sectores de la gran burguesía local. Estas compañías se vieron beneficiadas con la promoción de algunas políticas por parte del Estado brasileño (Clemente, 2017a). Esto se llevó adelante con la convicción de que una economía globalizada necesita de la existencia de empresas nacionales que posean un mayor tamaño y poder de mercado para competir en el plano internacional, lo cual lleva a la constitución de firmas semi-monopólicas en el plano interno (Clemente, 2017b). En palabras de Raúl Zibechi (2012: 137), durante los años de gobierno de Lula, las medidas impulsadas no pueden ser entendidas como un mero "apoyo a la gestión empresarial sino de un Estado convertido en actor de fusiones y megaoperaciones y, por lo tanto, en socio activo de las mayores empresas del país".

Una de las principales medidas que se implementaron para favorecer a estas empresas fueron los cambios de reglamentaciones y las normas adoptadas por el Banco de

Desarrollo Económico y Social[33] (BNDES), organismo que se constituyó como un actor clave en la creación de las "Campeones Nacionales" (Clemente, 2017b). Hasta mediados de 2002, los financiamientos de esta institución estaban restringidos a los realizados mediante operaciones de renta variable, en los que el incentivo a las inversiones en el exterior sucedía de forma indirecta.

En octubre de 2002, mediante el decreto presidencial 4418 -impulsado por Cardoso tras la creación de la IIRSA en el 2000-, el reglamento del BNDES fue modificado. En el artículo 9 de dicha reglamentación se le otorgó a la institución la posibilidad de: (1) financiar la adquisición de activos e inversiones realizadas por empresas de capital nacional en el exterior; (2) financiar y fomentar la exportación de productos y servicios; (3) contratar estudios técnicos y prestar apoyo financiero y técnico para la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo económico y social del país y su integración con América Latina; y (4) utilizar recursos captados en el mercado externo para financiar la adquisición de activos y la realización de proyectos e inversiones en el exterior por empresas de capitales brasileños (Santos, 2015b).

Como resultado de la expansión de su crédito por parte del gobierno, el BNDES se transformó en uno de los mayores prestamistas, convirtiéndose, en 2010, en el mayor banco de desarrollo del mundo, superando incluso al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo (Clemente, 2017a). Entre 2004 y 2014, sus desembolsos pasaron de 39.8 a 187.8 billones de reales (Santos, 2015a).

Durante el período de gobierno de Lula da Silva, uno de los principales sectores a los que el BNDES ha orientado su financiamiento fueron las obras de infraestructura. Los desembolsos para costear estas obras saltaron de 120,8 millones de dólares en 2003, a 951.7 millones de dólares en 2014. Los desembolsos totales, entre 2003 y 2014, fueron de 9.7 billones de dólares, de los cuales 5.3 billones tuvieron como destino América Latina y 3.4 billones África. Por otra parte, entre 2007 y 2014 las exportaciones de bienes y servicios de ingeniería implicaron desembolsos por un total de 11.4 billones de dólares, siendo las principales empresas beneficiadas Odebrecht (7.7 billones), Andrade Gutierrez (2.6 billones), Queiroz Galvão (389 millones), OAS (354 millones) y Camargo Corrêa (259 millones) (ibíd.). Además del financiamiento por parte del BNDES, otros bancos como el

[33] Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Creado en 1952 por Getúlio Vargas, con el objetivo de financiar los proyectos de desarrollo nacional (Santos, 2015a).

Banco de Brasil y los fondos de pensión de empresas públicas también estuvieron vinculados al financiamiento a las empresas Campeones Nacionales (Bachiller Cabria, 2014).

Financiamientos del BNDES en el área de exportación a las principales contratistas brasileñas (1998-2015)

Empresa	Total financiado
Odebrecht	R$ 9.778.411.902,00
Andrade Gutierrez	R$ 2.875.354.488,00
Camargo Corrêa	R$ 627.719.298,00
Queiroz Galvão	R$ 533.846.458,00
OAS	R$ 216.256.636,00
Total	R$ 14.031.588.782,00

Fuente: Rodríguez, 2017[34].

Tal como se observa en el cuadro anterior, estas empresas constructoras recibieron grandes desembolsos por parte del BNDES para el desarrollo de obras de ingeniería. Muchos de los desembolsos a estas compañías estuvieron ligados al desarrollo de proyectos de infraestructura física en países de Sudamérica, de las cuales gran parte integraban la IIRSA.

A su vez, esta apuesta por la transnacionalización de las empresas a través del financiamiento (Clemente, 2017b) ha sido potenciada a través del impulso de algunos programas y la constitución de instituciones que los motoricen. Uno de los principales programas que se impulsaron en el marco de esta estrategia fue la Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior (PITCE), llevada adelante entre 2003 y 2007. Esta medida buscó crear un mecanismo de coordinación de acciones del gobierno y las empresas para el avance en cambios tecnológicos que motorizaran la mayor inserción de Brasil en el comercio internacional. Las líneas de acción que se plantearon en el marco de la PITCE fueron: Innovación y desarrollo tecnológico; Inserción externa; Modernización industrial; Capacidad y escala productiva; y Opciones estratégicas.

[34] P. Rodriguez, "BNDES financiou R$ 14 bi para empreiteiras realizarem obras no exterior", *Poder 360*, 30/01/2017.

En el marco de la PITCE se buscaba la coordinación de políticas y programas de diferentes instituciones con el objetivo de aprovechar "el potencial para mejorar la imagen del país en el exterior y ayudar a crear la `marca Brasil´". Por ello, en 2005, se crearon dos instancias gubernamentales para motorizar y coordinar estas políticas: la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial[35] (ABDI), la cual tenía como objetivo articular los instrumentos y medidas adoptadas para favorecer el desarrollo tecnológico y promover la inserción externa; y el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial[36] (CNDI), presidido por el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior e integrado por otrxs 12 ministrxs, el presidente del BNDES y representantes del sector privado y de lxs trabajadorxs. La ABDI fue creada como instancia coordinadora, pero tuvo problemas para llevar adelante dicha tarea, por no tener poder de convocatoria sobre otras instituciones, y fue dificultoso investir a su directorio, compuesto por representantes del ministerio de Hacienda, Planificación, Presupuesto y Gestión, y Ciencia y Tecnología (Suzigan y Furtado, 2006). A su vez, estos sectores del gobierno se sumaron a la gestión en conjunto con el Consejo de Desarrollo Económico y Social[37], creado en el 2003 e integrado por un consejo de asesorxs que incluye a presidentes y CEOs de empresas y sindicatos, académicxs e investigadorxs.

Otra de las políticas centrales en la motorización de la internacionalización de empresas fue la Política de Desarrollo Productivo[38] (PDP), ejecutada entre 2008 y 2010. A diferencia de la PITCE, que abarcaba cuatro sectores (software, bienes de capital, farmacéuticos y componentes electrónicos), la PDP amplió a veinticinco el número de sectores involucrados. La coordinación general del programa quedó en manos del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio[39] (MDIC) y la secretaría ejecutiva fue formada por el ABDI, el BNDES y el Ministerio de Hacienda[40]. A su vez, se crearon comités ejecutivos para todos los programas y un Consejo de Gestión a nivel ministerial, presidido por el MDIC, e integrado por el resto de los ministerios involucrados (Casa Civil[41], Finanzas, Planificación y Ciencia y Tecnología). LA PDP incluía una exención tributaria de 21.4 mil millones de reales con incentivos a la inversión, Investigación y Desarrollo, y

[35] Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial.
[36] Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial.
[37] Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.
[38] Política de Desenvolvimento Produtivo.
[39] Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.
[40] Ministério da Fazenda.
[41] Gabinete presidencial.

exportaciones y financiamiento para la modernización e innovación por un monto de 210.4 mil millones de reales que partirían de las arcas del BNDES.

Uno de los puntos centrales planteados en el marco de la PDP era la construcción de infraestructura física, energética y de comunicaciones como uno de los requisitos indispensables para la profundización de la integración productiva. Esto permitiría el aprovechamiento de los recursos y promovería las inversiones brasileñas y el acceso de los productos nacionales a los mercados sudamericanos (Franco Cerqueira, 2014).

Estas políticas y programas tenían por objetivo impulsar la transnacionalización de las empresas de bandera brasileña, proceso que fue comandado por el Estado y para el cual se realizó un trabajo conjunto entre Itamaraty y otros organismos estatales. Para poder impulsar la transnacionalización fue clave la presencia de estas compañías en países sudamericanos y africanos, valiéndose del desarrollo de obras de infraestructura para poder llevar adelante dicho proceso. Así, la política subimperial brasileña se profundizaba en un momento de alto crecimiento económico de Brasil, en el que este país se posicionaba como una economía emergente.

En este marco, 885 empresas brasileñas invirtieron en 52 países diferentes. La preferencia de estas multinacionales por expandirse por América del Sur y África estaba ligada al hecho de que en estas regiones no existían empresas lo suficientemente fuertes para hacer frente a las multinacionales brasileñas. Sin embargo, la estrategia de promover las empresas Campeones Nacionales, a través de la implementación de las políticas aquí enunciadas, en conjunto con el impulso dado a la IIRSA, ha tenido varios efectos negativos. Por un lado, provocó una alta concentración de capitales y la creación de semi-monopolios. Por otro lado, muchos de los fondos que fueron destinados para promover a estas compañías fueron desviados de su inicial función de intervención anticíclica en la economía. La concentración económica es problemática en términos de creación de puestos de trabajo y en relación a la salida de la posición periférica del país en la economía mundial. Por último, las medidas englobadas en esta estrategia se concentraron en promover los sectores ligados a la industria extractiva (minerales, petróleo, agronegocios), de bajo nivel de valor agregado, que promueven grandes pasivos socioambientales y que profundizan la vulnerabilidad económica, producto de la reprimarización de la economía (Clemente, 2017a).

Así, la política interna llevada adelante durante la época lulista buscó favorecer la transnacionalización de las empresas denominadas "Campeones Nacionales". Estas políticas se combinaron con la política externa que impulsó el PT, la cual tuvo como objetivo favorecer el ingreso de estas compañías, sobre todo, en los mercados sudamericanos y en países dependientes, bajo la idea de que su rol subimperial en la región le permitiría a Brasil posicionarse como un actor de peso global.

5. LA POLÍTICA EXTERNA DURANTE LOS GOBIERNOS DE LULA

Consideramos que los conceptos gramscianos de hegemonía y bloque histórico nos permiten pensar el orden global, la política exterior, los procesos de integración y las relaciones internacionales como luchas hegemónicas con intereses de clase (Kan, 2013). Partiendo de este lugar, entendemos que la política exterior impulsada por el gobierno de Lula da Silva está vinculada al modelo de desarrollo implementado y a los intereses de los sectores que conformaron el bloque en el poder durante estos años, es decir, la burguesía interna.

Siguiendo a Tatiana Berringer (2015), la política externa tiene que ser comprendida en el marco de las transformaciones ocurridas durante la época petista en Brasil, es decir, su política interna vinculada al escenario internacional. En primer lugar, teniendo en cuenta la conformación del bloque en el poder que se dio a partir del ascenso de la burguesía interna. En segundo lugar, en relación con la nueva presencia política de las clases populares en la política nacional con algún poder de incidencia, a pesar de la selectividad estructural propia del Estado capitalista (Jessop, 1999).

En este marco, el mismo discurso que colocó al Estado en el rol de líder del proceso de desarrollo, movilizando y rearticulando empresas estatales y bancos públicos, llevó a la búsqueda de una nueva inserción en el escenario internacional, al servicio del proyecto de desarrollo nacional (Romano Schutte, 2012). A su vez, el gobierno petista consideraba que este proyecto garantizaría los recursos y la credibilidad necesaria para ampliar la presencia de Brasil en el plano internacional.

5.1. La imposición de la corriente autonomista

La política exterior brasileña desde 1946 ha estado centrada en la permanente búsqueda de autonomía, pero adaptando esta idea a los diferentes contextos y momentos. Durante la Guerra Fría, Brasil apostó por una "autonomía a través de la distancia" en su vínculo con los países centrales y con rivales regionales. En este marco, si bien Brasil aceptaba la

demanda de alineamiento a los Estados Unidos, trató de utilizar este alineamiento para obtener ventajas económicas. En cambio, la década del noventa tuvo como base una "autonomía a través de la participación" que se dio en instituciones internacionales y organizaciones regionales. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores buscaron moldear la agenda internacional con los valores tradicionales de su diplomacia, la cual tenía cuatro características principales: multilateralismo, legalismo, pacifismo y no intervencionismo (Amorim Neto y Malamud, 2015). Con la llegada de Lula al poder, la política exterior cobró un tono revisionista, transformándose en lo que Tullo Vigevani y Haroldo Ramanzini Júnior (2011) denominan "autonomía a través de la diversificación", dada la ligazón a las normas internacionales a través de alianzas Sur-Sur y regionales con el objetivo de reducir las desigualdades existentes en relación a los países desarrollados. La política externa implementada en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva se desarrolló en medio de una pugna entre la tradición de Itamaraty y las posiciones defendidas por algunos sectores que se encontraban al interior del PT (Alves do Carmo, 2012). Itamaraty posee una estructura burocrática propia, conectada con el legado del Barón de Río Branco[42], con un grado de autonomía de la política adoptada por los gobiernos de turno. Esto ha implicado que se pueda constituir a la política exterior como una política de Estado. Por esta razón, durante los años en los que Lula estuvo al frente del gobierno emergieron tensiones entre los sectores corporativos de la diplomacia y algunos sectores petistas, producto de decisiones tomadas desde el Poder Ejecutivo (Barrenengoa, 2019).

Las principales diferencias con la política exterior impulsada por Cardoso fueron: (i) la creación y participación del Estado en coaliciones Sur-Sur, las cuales representaron la recuperación de las iniciativas tercermundistas de los años setenta y ochenta con un nuevo cariz; (ii) la reedición de las críticas a la estructura de poder de organizaciones internacionales; (iii) la recuperación del neodesarrollismo como meta central de la inserción internacional; (iv) la adopción de una subordinación conflictiva con países centrales -caracterizada por la presencia de diferencias ocasionales entre el Estado

[42] José Maria da Silva Paranhos Junior, más conocido como el Barón de Río Branco, fue Ministro de Relaciones Exteriores entre 1902 y 1912. Además de impulsar una profesionalización de la cartera, le otorgó una visión pragmática a la política exterior, centrada en la apuesta por la resolución pacífica y arbitrada de los conflictos, el mantenimiento de buenas relaciones con los Estados de la región, la salvaguarda del territorio brasileño y el no intervencionismo en asuntos internos de otros países (Caballero Santos, 2011).

dependiente y el imperialismo- y la inserción que estos impulsan, frente a una posición de subordinación pasiva impulsada en la década anterior; (v) y la prioridad puesta en América del Sur (Berringer, 2015).

Durante el gobierno de Lula, al interior de Itamaraty se consolidó la corriente autonomista, que defiende una transformación de la dinámica propia de las instituciones multilaterales, con el objetivo de crear espacios de acción para Brasil. Sus principales objetivos fueron construir un liderazgo regional entre los países del sur y el ascenso brasileño al lugar de potencia global. Estos sectores defendían un modelo de desarrollo en el que el Estado se encuentre activamente involucrado en la política industrial y adopte un compromiso con la proyección internacional de las industrias nacionales de punta. Lxs autonomistas entendían a la integración como un instrumento para acceder a mercados y como un mecanismo para el fortalecimiento del país en el marco de las negociaciones internacionales (Gomes Saraiva, 2012).

En el marco de las disputas al interior de Itamaraty, la política externa de Lula se centró en: (i) la subordinación de la política exterior a los dictámenes del desarrollo; (ii) la reafirmación de la soberanía y del interés nacional; (iii) la centralidad del comercio exterior como herramienta para el desarrollo; (iv) el impulso a alianzas e instancias en el plano regional y global, en pos de objetivos identificados con el desarrollo económico y social; y (v) la acción en favor de la promoción de un orden político y económico más democrático, justo y equitativo entre las naciones (Costa Vaz, 2003).

De esta forma, durante los años de gobierno de Lula, Brasil no sólo participó de múltiples espacios de articulación a nivel regional e internacional, sino también impulsó la constitución de algunas instancias. Estos bloques y uniones aduaneras han potenciado la vocación subimperial de los Estados, como el brasileño, que albergan empresas transnacionales (Osorio, 2007b). Así, el Estado brasileño comandó el proceso de expansión de los capitales y monopolios nacionales hacia los países de Sudamérica y África, ampliando el control que poseía sobre las materias primas y la fuerza de trabajo en países de estas regiones, y propulsando una integración subimperialista de sectores de la producción a las cadenas productivas brasileñas (Vuyk, 2013).

Tal como planteamos previamente, consideramos que la política exterior implementada durante el lulismo puede ser entendida en el marco de las transformaciones que se dieron a inicios del 2000 y de la apuesta del gobierno por medidas que recuperen algunas de las

ideas del desarrollismo adaptándolas a los nuevos tiempos. En este marco, el ascenso de la burguesía interna en el bloque en el poder fue un elemento central.

En el momento previo a las elecciones de 2002 y ante el descontento de la burguesía interna frente al déficit de las cuentas externas, con bajos índices de crecimiento económico y con el aumento de la vulnerabilidad externa de la economía brasileña (Berringer, 2014), la Confederación Nacional de Industria –CNI- (2002: 33) difundió un documento, en el que planteó: "la política de comercio exterior debe jugar un papel destacado como eje de la política industrial y las estrategias de Brasil en las mesas de negociaciones comerciales internacionales deben ser compatible con estos objetivos". En este documento sostenían que era necesario aumentar la competitividad de la industria a través de la inversión en educación, conocimiento e infraestructura, y la reducción del llamado "Costo Brasil", vinculado a los costos logísticos. A su vez, la CNI subrayó la necesidad de desburocratizar la aduana, de reducir los costos portuarios y de aumentar el crédito para la exportación (Berringer, 2015), y planteó:

> Brasil debe ser agresivo en la búsqueda de acuerdos comerciales regionales o bilaterales involucrando a los países en desarrollo, en particular dentro de América del Sur. Las estrategias de negociación del país deben apuntar a la eliminación amplia de barreras a las exportaciones brasileñas y avanzar en la integración física del subcontinente (CNI, 2002: 49).

Estos sectores de la burguesía interna brasileña, nucleados en federaciones como la CNI, la FIESP y la FIRJAN, se constituyeron como clases dominantes con gran poder de agencia en relación a las políticas implementadas. Además de las instancias formales de diálogo implementadas por el gobierno, muchxs empresarixs participaron de viajes internacionales, con el objetivo de acrecentar las exportaciones y su presencia en el plano de las regiones dependientes. A su vez, en el marco de las políticas de integración regional, la burguesía interna ligada a la ingeniería, si bien ya tenía un peso importante, durante la etapa lulista, experimentó un período de inédita expansión (Barrenengoa, 2020).

Estos sectores no sólo participaron de las instancias de diálogo a nivel nacional, sino que también pasaron a acompañar las negociaciones internacionales a través de secretarías y departamentos de comercio exterior de las asociaciones nacionales y federaciones estaduales. Estos sectores fueron claves en negociaciones en torno al ALCA, en el marco del MERCOSUR, la UNASUR y de encuentros de la Organización Mundial del Comercio

(OMC)[43]. Por ejemplo, la CNI pasó a integrar los sectores que desarrollaron los estudios que acompañaban las negociaciones internacionales más relevantes. Por otro lado, las entidades ligadas al agronegocio participaron de las Rondas de Doha de la OMC realizadas durante el 2008 (Berringer, 2015). Así, estos sectores se convirtieron en actores clave de la reorientación en el plano internacional que adoptó la política exterior de Brasil durante la etapa Lula.

5.2. Brasil como actor global

El 26 de enero de 2003, en la 33ª edición del Foro Económico Mundial realizado en Davos, Suiza, Lula afirmó: "Queremos libre comercio, pero libre comercio que se caracterice por la reciprocidad"[44]. De esta forma, a inicios del nuevo siglo, Brasil propulsaba una estrategia de inserción global centrada en la participación en diversos foros y en la construcción de alianzas internacionales, a la cual Amado Luiz Cervo y Clodoaldo Bueno (2008) denominaron multilateralismo de la reciprocidad.

Esta estrategia se centró, sobre todo, en el comercio y la seguridad, pero se extendió a todas las áreas de las relaciones internacionales (ibíd.). Esta orientación de la política exterior implicaba dos supuestos principales: la existencia de reglas en el marco del ordenamiento internacional, sin las cuales la diferencia de poder beneficiaría a las grandes potencias, y la elaboración conjunta de estas reglas, con la finalidad de garantizar la reciprocidad de los efectos. Partiendo de esta visión, el Brasil petista centró el eje en establecer relaciones y participar de instancias multilaterales a través de las cuales no sólo poder profundizar su rol de actor global, sino también buscar aliados que potencien su desarrollo y su expansión por las regiones dependientes.

En este marco, para el análisis de la política exterior brasileña es clave entender la participación y apuesta de Brasil por el establecimiento de alianzas en el marco de las regiones dependientes, así como también las relaciones que estableció con las dos principales economías del sistema-mundo, es decir, China y Estados Unidos. Esto nos permitirá analizar la forma en que Brasil intentó posicionarse como un actor de peso global. Su participación en instancias de integración y comercio estuvieron ligadas a este

[43] En 1994, la OMC remplazó al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por su sigla en inglés) fundado en 1947 para negociar aranceles. El objetivo principal de la OMC es liberalizar el comercio mundial, estableciendo pautas generales (Kan, 2013).

[44] Folha de São Paulo, "Veja a íntegra do discurso de Lula em Davos", 26/01/2003.

objetivo, así como a beneficiar a los sectores que integraron el bloque en el poder durante los años de gobierno de Lula da Silva.

5.2.1. *Alianzas Sur-Sur*

En el marco de la "autonomía a través de la diversificación" (Vigevani y Ramanzini Júnior, 2011), Brasil buscó participar e impulsar la integración y el establecimiento de alianzas en diferentes regiones, que resultasen provechosas para posicionarse como actor global. Una de las estrategias implementadas fue la búsqueda de alianzas con los países del sur global.

La estrategia de cooperación Sur-Sur se inauguró, en 2003, con la creación del Foro IBSA, que incluía a India, Brasil y Sudáfrica. Esta se gestó bajo la apreciación de que los Estados periféricos podían aunar su poder como mayoría en el sistema internacional para reforzar su capacidad de negociación con los países centrales (Delgado Caicedo y Sáenz Peñas, 2010). Esta política de reciprocidad fue determinada por la trayectoria de ascenso político de la burguesía interna y por el apoyo recibido desde organizaciones populares y sindicales.

Esta iniciativa tenía como eje central tres tópicos: la cooperación para el desarrollo, la lucha contra la pobreza y la defensa del multilateralismo. A su vez, este Foro tuvo como uno de sus puntos centrales la lucha por la democratización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por otro lado, se firmaron acuerdos bilaterales y trilaterales, que impulsaron el aumento de intercambios en los primeros tres años, pasando de 1980 millones en el 2003 a 4310 millones de dólares en 2006, así como el intercambio en términos de tecnología de la información, aeronáutica y transporte (Giusiano, 2013).

A su vez, en el marco del foro IBSA se creó un Consejo Empresarial, al cual se incorporaron múltiples sectores de la burguesía interna brasileña, quienes percibían a este bloque como una oportunidad de comercio e inversión, sobre todo en los sectores de minería, energía, infraestructura y logística. Desde este consejo se impulsó la idea de establecer un acuerdo de libre comercio entre los Estados integrantes (Berringer, 2015). De esta forma, se institucionalizaba la participación de los sectores que formaban parte del bloque en el poder en el marco de los acuerdos internacionales.

Otra coalición importante, creada en agosto del 2003, fue el Grupo de los 20 países en desarrollo (G-20), la cual fue presentada en el marco de la reunión de la Ronda de

Desarrollo de Doha de la OMC, llevada adelante en Cancún en septiembre de ese mismo año. El G-20 reunía a los principales Estados dependientes[45], liderados por Brasil. El principal objetivo de este grupo fue fortalecer la lucha de los Estados que lo integraban frente a las potencias centrales en lo relacionado con las prácticas desiguales en el comercio internacional, en especial la implementación de políticas de proteccionismo agrícola por parte de Estados Unidos y la Unión Europea (UE).

Al interior del G-20 existían dos posturas diferentes. Una más ofensiva, dentro de la que se incluye a Brasil, quienes defendían la disminución de los subsidios internos y la apertura comercial. La otra, más defensiva, sostenida por China e India, que planteaba la salvaguarda especial para los países en desarrollo y el tratamiento diferenciado para algunos productos (Berringer, 2015).

En el marco del G-20 se obtuvieron tres grandes victorias. Por un lado, la aprobación de un acuerdo en 2004 que impulsaba la retirada de las cuestiones de inversiones y compras gubernamentales. Por otro lado, la incorporación de la fórmula de bandas, que sostenía la propuesta de un tratamiento diferenciado a los Estados dependientes. Por último, el mecanismo de salvaguarda especial, que garantizaba la posibilidad de establecimiento de barreras cuando las importaciones agrícolas aumentasen de forma repentina causando daños a productores locales (ibíd.).

En este marco, el gobierno brasileño creó un grupo técnico, compuesto por empresarios, sindicatos, funcionarixs del Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Agrario, de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Industrial y Comercio Exterior, de la Confederación Nacional de Agricultura[46] (CNA) y de la Confederación Nacional de Trabajadores Rurales Agricultores y Agricultoras Familiares[47] (CONTAG), con el objetivo de debatir propuestas que serían defendidas en el marco de los acuerdos del G-20. Este grupo constituyó un paso más en la institucionalización de las relaciones entre algunos sectores de la burguesía interna con el gobierno petista, y la incidencia de estos sectores en términos de la política exterior implementada por esos años.

Así, la postura adoptada por Brasil estuvo vinculada a la presión ejercida por su burguesía interna, defendiendo la liberalización del comercio agrícola, para favorecer al sector del

[45] Además de Brasil, lo integraban Argentina, Bolivia, Chile, la República Popular China, Colombia, Cuba, Ecuador, Egipto, Filipinas, Guatemala, India, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tanzania, Tailandia, Uruguay, Venezuela y Zimbabue.

[46] Confederação Nacional da Agricultura.

[47] Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares.

agronegocio, así como también la protección del mercado interno y de pequeñxs agricultorxs y asalariadxs. Sin embargo, se dio una disputa entre el sector del agronegocio y el asalariado, lo que generó tensiones al interior del grupo técnico (Berringer, 2015). Finalmente, presionado por el sector del agronegocio, el gobierno brasileño decidió aceptar el paquete de medidas propuesto por el entonces presidente de la OMC, Pascal Lamy, lo que representó el alejamiento de Brasil del G-20 comercial. Este paquete establecía un aumento gradual de la liberalización de productos agrícolas en la UE y Estados Unidos, y los recortes arancelarios para los productos industriales (Valladão de Carvalho, 2010).

Por otro lado, en el 2001, el por entonces jefe de investigación económica global de la sede de Londres de la banca de inversiones Golman Sachs, Jim O'Neill, emitió un informe[48] en el que desarrolló el acrónimo BRIC (Brasil, Rusia, India y China)[49] para hacer referencia a cuatro países emergentes. O'Neill consideró que, dadas sus proyecciones de crecimiento, estas cuatro naciones estarían, hacia el 2050, entre las cuatro mayores economías del mundo.

Para realizar esta caracterización, O'Neill se basó en la estimación de que estos países reunían condiciones de alto crecimiento, vinculadas a la combinación de factores institucionales (reformas pro-mercado), económicos y demográficos (gran cantidad de población joven ingresando al mercado de consumo mediante el aumento de la renta) (Sorj y Fausto, 2013). A su vez, estas naciones en conjunto representaban el 30% del territorio y el 42% de la población mundial, y, en ese momento, todas se encontraban entre las once economías más grandes. Este informe tuvo como objetivo detectar nuevos mercados para sus grupos financieros e impulsar inversiones que impliquen mayores tasas de ganancia (Schulz, 2020). De esta forma, Brasil se posicionaba como un actor de peso relativo en el plano internacional.

La primera cumbre de presidentes de los países del BRIC se llevó adelante en junio de 2009 en la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia. En el documento que se difundió tras la

[48] Jim O'Neill, "Building Better Global Economic BRICs", Global Economics Paper No. 66, 30/11/2001.

[49] En 2011, en la Cumbre realizada en Sanya, China, se anunció la incorporación de Sudáfrica, y el acrónimo pasó a ser BRICS. Si bien el país africano se encontraba comparativamente lejos de los restantes países del bloque en términos de PBI, crecimiento económico y extensión territorial, su afiliación estaba ligada a estrategias geopolíticas. Además de tener vínculos estrechos con algunos países miembros, Sudáfrica se había involucrado en temáticas globales, compartía la idea de la necesidad de reformular las estructuras de gobernanza global (Morasso, 2013) y posee una ubicación geográfica estratégica, lo que implica que su actividad en relación a las políticas de defensa se extiende hacia los océanos que la rodean (Dupuy y otrxs, 2014).

reunión, los mandatarios de estas naciones subrayaron su compromiso de avanzar en reformas de las instituciones financieras internacionales, estableciendo nuevas reglas de juego y criticando el orden mundial unipolar, centrado en la especulación financiera y el sometimiento de los países centrales a los periféricos (Schulz, 2020). En la misma línea, el documento *Brasil 2022*, desarrollado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos[50] (2010: 15), planteó:

> Debe variar el grado de multipolaridad del sistema político militar, lo que dependerá en gran medida del suceso de la evolución política, económica y militar de Rusia, de India y, en especial, de China y de otros grandes Estados de la periferia, así como su capacidad para articularse entre sí para reformar el sistema internacional y hacerlo menos arbitrario y oligárquico y menos sujeto a los intentos por la fuerza de imponer a los estados más débiles la voluntad de los poderosos.

De esta forma, y mediante su participación en el BRICS, Brasil buscaba tener un rol más activo en la definición de las reglas del juego a nivel global. Para el país sudamericano, la participación en el bloque BRICS representó un instrumento fundamental de proyección internacional como potencia emergente (Sorj y Fausto, 2013) y para reducir las vulnerabilidades económicas, tecnológicas y políticas, a través del reforzamiento de nuevos centros de poder y reglas más favorable ante las restricciones existentes. Tal como planteó el ex embajador brasileño Marcos Azambuja, "Brasil no es un país emergente lo suficientemente grande como para empujar la puerta de acceso a la mesa principal. Tiene una mejor chance de acceso empujándola junto con los BRICS" (Sotero, 2013: 7).

5.2.2. *La relación con China*

El estrechamiento de los lazos entre Brasil y China se profundizó con la participación en el G-20 y en el BRICS. Sin embargo, el establecimiento de las relaciones entre estos países data de 1974, cuando Brasil buscaba nuevos caminos para una mayor autonomía frente a los Estados Unidos. Tal como lo definió el por entonces canciller de Brasil, Azaredo da Silveira, se trataba de una política de "pragmatismo responsable", centrado en una posición más "tercermundista" por parte de la diplomacia brasileña. Desde ese año, las relaciones comerciales fueron creciendo, aunque no estaban en la agenda estratégica de ninguno de los dos países (Cordeiro Pires, 2015).

[50] Secretaria de Assuntos Estratégicos. Creada en el 2008, con rango de ministerio, su objetivo era formular políticas públicas de largo plazo centradas en el desarrollo económico y social. Fue disuelta en el marco de la reforma ministerial de octubre de 2015.

En 1993, Brasil y China firmaron un acuerdo de colaboración en materia de investigación y desarrollo en el plano de la ciencia espacial. Sin embargo, este acercamiento no fue clave en la política de desarrollo de Brasil por esos años. Fue a partir de 2001 cuando se dio una mayor intensificación en la relación sino-brasileña. Ese año, en una visita de Estado que realizó el presidente chino, Jiang Zemin, se firmaron acuerdos entre empresas y se establecieron asociaciones entre compañías, tal como fue el caso de Embraer y Avic, y Vale y Shanghai Baosteel (ibíd.).

Con la llegada del PT al gobierno, la relación se profundizó aún más, realizando, a lo largo de la primera década del siglo XXI, numerosas visitas de Estado, más allá de los encuentros en el marco de foros e instancias multilaterales. El primer viaje del presidente chino Hu Jintao a Brasil durante la era Lula implicó la profundización de la colaboración entre ambos países. De esta forma, la petrolera china Sinopec estableció una cooperación con Petrobras, lo que dejó en evidencia el interés chino en profundizar las importaciones de petróleo, así como el de Brasil de avanzar en el desarrollo de este sector (Christensen, 2012).

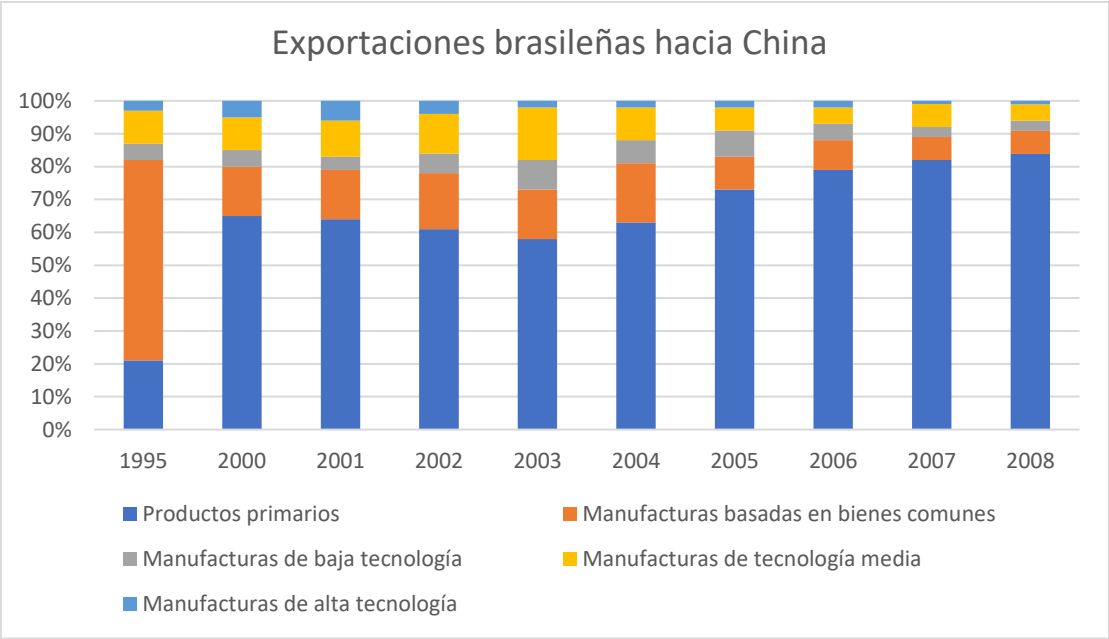
En 2004, se dio la primera visita de Estado de Brasil hacia China. En el marco de ese viaje, Lula da Silva fue acompañado de un contingente de 400 empresarixs interesadxs en establecer una alianza estratégica con el gigante asiático. Tras esta visita, el país sudamericano decidió reconocer a China como una economía de mercado. Se trataba de una estrategia brasileña para obtener el apoyo chino para la candidatura de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU[51]. Aunque esta reforma no fue llevada adelante, fue parte de la estrategia brasileña de asumir mayores responsabilidades en la gobernanza global[52].

En 2004, empresas de los sectores de minería, construcción, alimentos, energía, papel y celulosa crearon el Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC). El objetivo central de este Consejo era aumentar las exportaciones hacia China y la actuación directa de las filiales de sus empresas en territorio chino (Berringer, 2015).

[51] China es uno de los miembros permanentes del Consejo, en conjunto con Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los restantes 10 asientos son votados regularmente con el objetivo de representar las diferentes regiones.

[52] Esta estrategia se plasmó también en la decisión brasileña de asumir el comando militar de la Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití (MINUSTAH) en el 2004 (Sorj y Fausto, 2013). Esta Misión se dio luego de las insurrecciones populares iniciadas en la ciudad de Gonaïves en contra de la prolongada transición política impuesta en 1994 con la ocupación estadounidense. Las tropas brasileñas se retiraron a mediados de 2017 (Féliz y Melón, 2018).

Desde inicios de la era Lula, las relaciones comerciales comenzaron a intensificarse, a tal punto que Brasil se transformó en el mayor socio comercial de China en la región. A su vez, en 2009, el país asiático desbancó a Estados Unidos como principal socio comercial brasileño, tras 80 años de permanencia en ese lugar. Así, las exportaciones brasileñas a China pasaron de 2347.23 millones de dólares en 2001 a 52386.75 en 2011, mientras que, durante el mismo período las importaciones desde el gigante asiático se acrecentaron de 1350.93 millones de dólares a 31836.69 en 2011 (Nedal en Sorj y Fausto, 2013).



Fuente: Bruckmann, 2015.

Tal como demuestra el gráfico anterior, las exportaciones brasileñas hacia el gigante asiático se centraban fundamentalmente en productos primarios, sobre todo hierro, petróleo y soja, lo cual implicó grandes críticas por parte de sectores brasileños que planteaban la necesidad de exportar bienes intermedios e industriales (Cornejo y Navarro García, 2010). A su vez, las importaciones desde China poseían un mayor valor agregado, dado que se concentraban en el sector electrónico, textil, de productos químicos y de juguetes.

Por otro lado, la relación comercial con China también implicó una disputa al interior de la burguesía interna. Un importante sector brasileño consideraba al país asiático no sólo como una amenaza al interior del mercado interno, sino también por el hecho de que las importaciones de productos chinos hacia mercados sudamericanos perjudicaban las

exportaciones brasileñas para esos países. Durante los primeros años del nuevo siglo, no sólo la relación sino-brasileña se había profundizado, sino también las relaciones de muchos países sudamericanos con el gigante asiático, dado que, en muchos casos, era más económico comprar algunos insumos a China que a algún país vecino. Por otro lado, los sectores brasileños ligados a la agricultura y la minería presionaron para impulsar mayores compromisos entre los Estados, apoyando el acuerdo bilateral firmado en 2009 (Berringer, 2015), entendiendo que este acuerdo aumentaría sus exportaciones.

Por otra parte, el gobierno brasileño recibió presiones por parte de algunos sectores de su industria manufacturera para que se adoptasen medidas frente la creciente competencia china, no sólo en otros mercados, como el estadounidense y los sudamericanos, sino también al interior del país. Frente a ello, el gobierno brasileño decidió aplicar algunas medidas anti-*dumping*[53] en aquellos sectores en los que se corría el riesgo de perder considerable cantidad de empleos (Christensen, 2012), sobre todo en la industria ligada a la producción de llantas, calzados y textiles.

A su vez, China ha tenido un rol preponderante en términos de financiamiento de proyectos, sobre todo a través del Banco de Desarrollo y el Banco Ex-Im de China. En 2014, el nivel de financiación para proyectos en América Latina fue de 22100 millones de dólares, de los cuales 8600 millones de dólares se destinaron a Brasil. Esta estrategia de inversión perseguía algunas razones: (i) garantizar fuentes de materias primas; (ii) la búsqueda de nuevos mercados para avanzar en la competitividad de productos manufacturados; (iii) la necesidad de adquirir conocimientos de carácter tecnológico en el exterior; y (iv) el incremento de la influencia política en el exterior (Hiratuka, 2018). Las inversiones chinas se concentraron, sobre todo, en el sector de servicios, de la industria y de la agricultura.

Por otro lado, a partir de la profundización de las relaciones con China, Brasil comenzó a impulsar, en el marco de la IIRSA, obras de infraestructura que favorezcan su salida hacia el océano Pacífico. A su vez, China tenía un claro interés en financiar este tipo de obras, dado que las mismas reducirían los costos logísticos y facilitarían la importación de algunos productos que el gigante asiático necesitaba comprar en el exterior para poder orientar su industria hacia algunos sectores más rentables, como el complejo tecnológico.

[53] Son aquellas que consisten en la defensa comercial que se aplica cuando un exportador ofrece un bien o servicio a un precio inferior al precio corriente de mercado.

5.2.3. *Estados Unidos: cooperación antagónica*

La política subimperial implementada en Brasil en la década del sesenta fue de la mano de la de cooperación antagónica establecida con el imperialismo dominante "cuando las capacidades de composición orgánica media fueron movilizadas para proyectar a Brasil hegemónicamente en América del Sur y, con eso, afirmar una autonomía relativa en la arena internacional" (Luce, 2007: 33). Durante los ochenta y noventa, con el impulso de los preceptos del Consenso de Washington, se imprimió a la política exterior en los marcos del modelo de integración jerárquica vertical.

Con la llegada de Lula al poder, la inserción internacional de Brasil dejó de estar tan subordinada a la agenda de los países dominantes, especialmente de Estados Unidos, pero siguió manteniendo una posición subordinada, aunque conflictiva. Esta orientación quedo plasmada en el hecho de que, más allá de que se dieron algunos enfrentamientos puntuales con algunas potencias, las relaciones con los países centrales se mantuvieron estables. Esto estaba vinculado con el fortalecimiento de la burguesía interna en el bloque en el poder, la cual no permitió una ruptura de los lazos con el capital externo, ni aceptó un enfrentamiento mayor con el imperialismo (Berringer, 2015).

La política externa implementada durante el gobierno de Lula estuvo ligada a servir a los intereses nacionales, enfrentando el poder de Estados Unidos mediante el aumento de la influencia de la política exterior y buscando establecer una "asociación madura", tal como la definieron los formuladores de política exterior (ibíd.). La relación con Estados Unidos fue más distante como resultado, entre otros puntos, de la crítica que realizó Brasil frente a la invasión de Irak y su postura en relación al ALCA. La designación al frente de la secretaría general de Itamaraty de Samuel Pinheiro Guimarães, quien, durante el gobierno de Cardoso, fue desvinculado del Instituto de Investigaciones en Relaciones Internacionales tras realizar críticas a la adhesión de Brasil al ALCA, dio indicios de la orientación que adoptaría el gobierno petista en el marco de las negociaciones continentales (de Oliveira Ribas, 2006).

Con la llegada de Lula a la presidencia, el gobierno comenzó a participar de forma más pragmática en las negociaciones del ALCA, cuestionando aspectos esenciales del formato del acuerdo y buscando mayor equilibrio en la agenda de negociación (Batista Jr., 2005). Desde la visión de Pinheiro Guimarães, este tratado continental no era más que el intento de constituir un área de libre comercio entre Brasil y Estados Unidos, dada la acotada

dimensión económica del resto de los países que lo integraban. Por ello, para el secretario general de Itamaraty este pacto implicaría un enfrentamiento entre dos economías con potenciales competitivos marcadamente desiguales (Vigevani y Passini Mariano, 2005).

A su vez, para algunos sectores al interior del gobierno, el ALCA iba a tener impactos negativos en algunos de los instrumentos de promoción del desarrollo, por lo que no consideraban adecuado avanzar en un tratado que implicara una integración asimétrica. Esta visión era compartida por algunos movimientos sociales y organizaciones populares brasileños, quienes realizaron importantes movilizaciones durante los años en los que se negoció el acuerdo.

A su vez, algunos sectores de la industria brasileña adoptaron una posición contraria al acuerdo, dado que entendían que el ingreso de productos manufacturados provenientes de Estados Unidos los afectaría. El por entonces presidente de la FIESP, Lafer Piva, afirmaba: "para algunos sectores que no están preparados, el ALCA será absolutamente mortal (...) el país tiene una necesidad absoluta de reducir sus asimetrías en relación a los países desarrollados" (Vigevani y Passini Mariano, 2005: 16). De esta forma, el bloqueo que se dio "por arriba", es decir, desde sectores de los gobiernos progresistas y de la burguesía, se entrelazó con las resistencias populares "por abajo", impulsados por movimientos sociales y políticos, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil (Kan y Pascual, 2011).

Las principales discusiones que era necesario saldar para Brasil en torno al ALCA estaban centradas en los subsidios agrícolas y en las reglas anti-*dumping*, pero Estados Unidos consideraba que esos eran debates para mantener en la OMC y no en el contexto del acuerdo. En este marco, desde Itamaraty se presentó una propuesta, a fines de 2003, llamada "ALCA *light*", en la que se establecía un acuerdo con reglas más flexibles, en el que cada país integrante podría definir el nivel de compromiso que estaría dispuesto a asumir.

El bloqueo de las negociaciones en la Cumbre de las Américas de 2005, realizada en la ciudad argentina de Mar del Plata, implicó el entierro del ALCA como proyecto continental. Sin embargo, Estados Unidos lanzó una contraofensiva con el reforzamiento de tratados de libre comercio ya existentes, la ratificación de algunos nuevos y la negociación de otros acuerdos. Estos acuerdos incorporaron nuevas obligaciones,

ampliaron los derechos de propiedad intelectual a otros sectores e integraron temas soslayados en convenios anteriores (Katz, 2006).

Así, más allá de algunos desacuerdos con Estados Unidos, Lula mantuvo una postura de no alejarse del país norteamericano, aunque ello no implicaba subordinarse a los intereses estadounidenses. Sin embargo, la derrota del ALCA, en tanto acuerdo continental, implicó el alejamiento de Estados Unidos de la región. Esta situación posibilitó que Brasil consolidara su liderazgo en Sudamérica, así como también generó un espacio político para la proliferación de nuevas instancias de integración (Kan, 2009).

5.3. La mirada puesta en Sudamérica

"El futuro de Brasil depende de América del Sur
y el futuro de América del Sur depende de Brasil"
S. Pinheiro Guimarães[54].

Sin lugar a dudas, Sudamérica ocupó un lugar central en la política exterior brasileña durante la época petista. Esto puede ser explicado por dos motivos: por un lado, por la idea de que la integración regional es el mejor instrumento para el fortalecimiento de la posición política y económica de la región en el ámbito internacional y, en especial, de Brasil; y, por otro lado, por los beneficios económicos que la burguesía interna podría obtener con el incremento de las exportaciones de productos y capital (Berringer, 2015). Así, la política exterior adoptada durante estos años estuvo ligada a la actualización y profundización de la orientación subimperial, la cual le adjudicó a la integración regional un papel instrumental vinculado a la expansión de los mercados para la profundización del desarrollo industrial y de apertura gradual de la economía nacional a la economía mundial (Bernal-Meza, 2013).

La búsqueda de la integración de la totalidad de los países que conforman el subcontinente sudamericano llevaba ya décadas, dado que desde el gobierno de João Figueiredo en adelante todos los presidentes brasileños tuvieron en su agenda proyectos que contemplaban iniciativas de cooperación o integración para América del Sur. Durante la presidencia de Itamar Franco, cuando propuso la conformación del Área de Libre Comercio de Sudamérica (ALCSA), quedó evidenciada la intención de abarcar la totalidad del subcontinente. Por su parte, Cardoso impulsó la Reunión de Presidentes de América del Sur (IRPAS), con el objetivo de ir constituyendo alguna instancia de integración,

[54] S. Pinheiro Guimarães, "A América do Sul em 2022", *Carta Maior*, 26/07/2010.

considerando que ésta debía apoyarse en tres pilares: comercio, infraestructura física y energía (Giacalone, 2006).

En un contexto regional signado por lo que Pía Riggirozzi y Diana Tussie (2018) denominan "regionalismo post-hegemónico", donde coexistieron y se solaparon varios modelos de integración diferentes, Brasil postulaba un tipo de integración opuesto a la idea panamericana liderada por Estados Unidos y a otra que abarcase a toda la región latinoamericana. Este nuevo regionalismo buscaba posicionar su liderazgo excluyendo al país hegemónico a nivel continental y a México, su adversario latinoamericano (Bernal-Meza, 2009). Sin embargo, si bien se intentó establecer un claro liderazgo brasileño en la región, en muchos casos el gobierno petista debió relegar porciones de ese liderazgo y permitir la proliferación de instancias contradictorias con sus propios intereses (Kan, 2013).

Además de fortalecer o crear iniciativas, el gobierno de Lula buscó profundizar lazos económicos, públicos y privados, con los países de la región, lo cual les otorgó a sectores empresariales un rol preponderante en la integración regional (Hirst, 2006). Tal como planteó Samuel Pinheiro Guimarães[55], secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2009[56]:

> las dimensiones de la economía brasileña dieron lugar a empresas de mayor dimensión, en comparación con las empresas de los países vecinos. Esas empresas brasileñas, muy competitivas en su expansión natural para el exterior, se dirigen primero a los países vecinos, realizando nuevas inversiones o adquiriendo empresas locales y, así, tienden a asumir una importancia cada vez mayor en la economía de cada Estado vecino.

Tal como podemos observar en el fragmento citado, la política externa en el período Lula buscó priorizar la región sudamericana, valiéndose del liderazgo brasileño entre los países de la región. Pinheiro Guimarães era uno de los exponentes principales de la corriente autonomista al interior de Itamaraty, la cual se impuso durante esta etapa, y una de las figuras más importante del plano de la política exterior durante el gobierno petista, en conjunto con Celso Amorim, quien fue ministro de Relaciones Exteriores entre 2003 y 2011, y Marco Aurelio García, asesor de Asuntos Exteriores de la Presidencia entre 2003 y 2016 (Barrenengoa, 2019).

Por otro lado, el fragmento citado, nos permite pensar cómo opera la hegemonía en el plano internacional, es decir, como lucha hegemónica con intereses de clase (Kan, 2014).

[55] S. Pinheiro Guimarães, "A América do Sul em 2022", *Carta Maior*, 26/07/2010.

[56] Luego, pasó a ser Ministro Jefe de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República.

A su vez, da cuenta de la recuperación y la profundización de la política subimperial por parte de Brasil, al buscar establecer pautas a nivel regional al servicio de los intereses de su burguesía, operando el carácter selectivamente estratégico (Jessop, 1999) que posee el Estado para favorecer algunos intereses de clase o fracciones de clase.

Esta idea de establecerse como líder regional estuvo sustentada por ser la mayor economía de la región. Tal como podemos observar en el siguiente cuadro, Brasil no sólo posee el mayor PIB de la región, sino también algunos de sus estados tienen mayor PIB que muchos países vecinos. En 2007, sus exportaciones alcanzaron los 160 billones de dólares y sus importaciones los 120 billones. A su vez, obtuvo la calificación de *investment grade*[57], lo cual le permitió atraer inversiones. Por otro lado, la presencia brasileña en la región creció exponencialmente llegando a concentrar el 50% de la inversión en la industria cárnica en Uruguay, el 95% de la soja en Paraguay y el 40% de la actividad de refinación de petróleo y gas en Bolivia (Kan, 2010).

PIB total, PIB por habitante, superficie y población de regiones, países y territorios de América Latina y el Caribe en el 2010

	PIB dólares corrientes (En millones de dólares)	PIB Latinoamericano (En porcentajes)	PIB por habitante (En dólares corrientes)	Superficie (km^2)	Superficie del total de AL y C (En porcentajes)	Población (En número de personas)
América Latina y el Caribe	4 945 076	100,0	7 993	20 345 037	100,0	618 705 774
América Latina	4 885 913	98,8	8 410	19 745 735	97,1	580 993 304
Brasil	2 143 034	43,3	10 981	8 464 861	41,6	192 040 996
México	1 049 925	21,2	9 106	1 957 801	9,6	112 336 538
São Paulo	688 427	13,9	16 274	248 209	1,2	42 302 467
Argentina	370 263	7,5	9 172	2 780 092	13,7	40 117 096
Colombia	287 018	5,8	6 179	1 146 309	5,6	45 509 584
Venezuela (República Bolivariana de)	239 620	4,8	8 252	916 445	4,5	29 038 758
Rio de Janeiro	228 705	4,6	14 362	43 696	0,2	15 924 410
Chile	217 556	4,4	12 686	756 102	3,7	17 094 275
Minas Gerais	204 440	4,1	10 237	586 528	2,9	19 971 397
Distrito Federal	178 975	3,6	20 221	1 479	0,0	8 851 080
Perú	157 324	3,2	5 375	1 272 465	6,3	29 461 933
Rio Grande do Sul	145 461	2,9	12 983	281 748	1,4	11 203 504
Paraná	124 353	2,5	11 684	199 314	1,0	10 642 691
Provincia de Buenos Aires	121 025	2,4	7 746	307 571	1,5	15 625 084
Región Metropolitana de Santiago	104 216	2,1	15 140	15 403	0,1	6 883 563
México	98 295	2,0	6 477	21 355	0,1	15 175 862
Bahia	90 108	1,8	6 330	564 692	2,8	14 234 209
Distrito Federal	88 476	1,8	35 577	5 801	0,0	2 486 861
Santa Catarina	86 738	1,8	14 116	95 346	0,5	6 144 783
Ciudad de Buenos Aires	85 050	1,7	29 427	200	0,0	2 890 151
Lima	76 348	1,5	7 593	34 948	0,2	10 054 952
Nuevo León	75 054	1,5	16 129	64 924	0,3	4 653 458
Bogotá D. C.	73 175	1,5	9 937	1 605	0,0	7 363 782
Ecuador	69 555	1,4	4 631	256 978	1,3	14 204 900
Jalisco	66 030	1,3	8 983	80 386	0,4	7 350 682

Fuente: CEPAL, 2015.

[57] El grado de inversión se refiere a la calidad del crédito de un país.

Frente al peso que posee en relación a los países de la región (plasmados en el cuadro anterior), Brasil ocupó un rol preponderante en el proceso de rediseño regional que se inició a comienzos del nuevo siglo. Esto se tradujo en la reconfiguración de proyectos ya existentes o en la proliferación de nuevas instancias de integración regional.

5.3.1. *MERCOSUR*

Si bien su objetivo era constituirse como mercado común, el MERCOSUR se estableció como una unión aduanera, lo que implica un acuerdo en términos arancelarios a ser cobrados por terceros estados (Ghiotto, 2005). En su nacimiento contó con el auspicio de empresas multinacionales y capitalistas sudamericanos, y las grandes beneficiarias fueron las corporaciones de Brasil y Argentina, que entendían que un acuerdo de estas características les permitiría la expansión de la escala de producción y la dimensión de los mercados. Así, tal como plantea Claudio Katz (2006), se estableció un "MERCOSUR de los negocios" en los sectores más rentables de la región. Así este acuerdo quedó reducido al 20% del territorio y a 14 ciudades de los cuatro países que en ese momento lo integraban[58] (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), donde se concentraba un sector que duplicaba el promedio regional del PIB per cápita. Así, la institucionalidad creada por MERCOSUR reflejó las relaciones de poder existentes al interior de la subregión, es decir, en palabras de Robert Cox (1993), la cristalización del poder material.

Durante la segunda mitad de la década de los noventa, el MERCOSUR entró en crisis como consecuencia del período de recesión que azotó a la región. En ese contexto, algunos sectores de la burguesía brasileña y argentina cuestionaron las restricciones que imponía esta instancia para comerciar con otros países, lo que implicó un debilitamiento de este acuerdo (Katz, 2006).

Tras la crisis de finales de los noventa y principios de los 2000, el MERCOSUR recobró fuerzas con el apoyo de las burguesías brasileñas y argentinas que se oponían a la integración que planteaba el ALCA. Esta etapa de "rediseño regional" estuvo vinculada a los cambios que se produjeron en numerosos países con la llegada al poder de gobiernos neodesarrollistas, cuyas ideas permearon en esta instancia.

[58] En 2006, Venezuela pasó a ser un estado miembro, pero, en 2017, fue suspendida bajo el fundamento de que en este país se había dado un proceso de interrupción del orden democrático. Por otra parte, Bolivia se encuentra en proceso de adhesión, y Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam lo integran como Estados asociados.

En el marco del proceso de rediseño, se constituyeron varias instancias con el objetivo de ampliar los límites del MERCOSUR. Entre ellos, se creó, en 2004, el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR (FOCEM), con la finalidad de impulsar medidas que busquen atacar las desigualdades existentes al interior del bloque. Brasil contribuyó con el 70% de los recursos comprometidos en el FOCEM. Esto se inscribió en el marco de la estrategia brasileña centrada en aumentar las inversiones directas en los países vecinos (Pereira Carneiro y Meneghetti Bruhn, 2017).

Por otro lado, en numerosas ocasiones, Lula da Silva enfatizó en la necesidad de profundizar la integración del MERCOSUR. Sin embargo, existían dos debilidades que no fueron revertidas a pesar del rediseño: por un lado, la brecha entre los discursos presidenciales en torno a la integración y las medidas realmente implementadas; y, por el otro, la subordinación de la agenda regional a las agendas domésticas en situaciones en que existiese un conflicto entre ambas (Caballero Santos, 2011).

Para poder ocupar el rol de *global player* y, sobre todo, conseguir un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, Brasil se tenía que establecer como líder regional, así como también demostrar que poseía la capacidad de control efectivo sobre la región (Katz, 2006). Por ello, no sólo se mantuvo activo en el MERCOSUR, sino que también buscó la proliferación de instancias que integraran a una mayor cantidad de países de la región.

5.3.2. *De CSN a UNASUR*

Las dos reuniones de Presidentes de América del Sur, realizadas en 2000 y 2002, fueron el preámbulo de la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)[59], la cual fue formalmente creada en el marco del encuentro llevado adelante en la ciudad peruana de Cusco en 2004. El establecimiento de esta instancia, la cual se trató de una iniciativa brasileña, respondió al objetivo de conformar un bloque regional que pudiera hacer frente a los peligros y los desafíos que impone la globalización, así como también lograr la inserción de estos países en las discusiones políticas internacionales. Entre los puntos centrales a abordar se enumeraban la integración económica y social, el entendimiento político, la integración energética, el desarrollo de infraestructura y la instauración de una zona de libre comercio (Luchetti, 2012). En abril de 2007, en el marco

[59] Integrada por los doce países de América del Sur: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y Guyana.

de la Primera Cumbre Energética Sudamericana, la CSN cambió de nombre para comenzar a llamarse UNASUR.

Sin embargo, la creación de UNASUR no sólo puede explicarse por las ideas que se impulsaban desde Brasil, ni tampoco únicamente por la coincidencia entre gobiernos de tipo neodesarrollista al comando de varios países sudamericanos, sino que también un factor importante a considerar fueron las luchas populares contra la ofensiva capitalista neoliberal. De esta forma, la UNASUR podría entenderse como la cristalización de esas resistencias, las cuales se resolvieron a través de las transformaciones operadas en el nivel de los Estados y, por ende, de las instancias internacionales en las que ellos participan.

> la UNASUR se erige sobre las ruinas de las luchas contra el capitalismo neoliberal que, con sus prácticas prefigurativas, no solo erosionaron el poder soberano estatal sino que, también, superaron la especificidad de la territorialidad estatal desestabilizando a toda la institucionalidad regional y hemisférica. La UNASUR, entonces, es indicadora del carácter regional de aquel ciclo de luchas y de su capacidad de erosionar los poderes constituidos del conjunto de los países (Pascual, 2013: 227).

En este marco, la UNASUR adoptó un perfil claramente político. De esta forma, buscó incorporar temáticas y problemáticas para abordarlas regionalmente, muchas de las cuales en el pasado se habían circunscrito a los ámbitos nacionales. Así, bajo la órbita de la UNASUR se constituyeron diferentes Consejos, vinculados a la salud, a lo electoral, a la dimensión energética, la ciencia, la cultura, la educación, entre otros. Dentro de estos, se creó específicamente un Consejo de Defensa, del cual Lula fue el principal impulsor, entendiendo que éste potenciaba la capacidad brasileña de jugar un rol como actor global, apostando por un sistema de seguridad colectivo que le otorgase un papel principal en términos de liderazgo (Serbin, 2011).

Los objetivos brasileños tras la creación del Consejo de Defensa fueron varios. Por un lado, con la intención de generar un contrapeso para la presencia estadounidense en América del Sur, especialmente en la región andina. Por otro lado, frenar el crecimiento de la incidencia de la industria de defensa rusa en el subcontinente, la cual se había potenciado tras el fortalecimiento del vínculo entre los países integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP)[60] con Rusia. En tercer lugar, con el objetivo de brindarle un impulso a la

[60] Fundada en 2004 e integrada por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Venezuela.

industria brasileña de defensa, la cual en los ochenta se encontraba entre las diez mayores del mundo y, a partir de 1990, perdió parte de su peso. En cuarto lugar, la creación del Consejo estaba ligada al esfuerzo para asociar los objetivos de reducción de la pobreza y las desigualdades sociales con la des-securitización[61] de algunos desafíos enfrentados por los países. Por último, en la búsqueda de construcción de instrumentos que permitan una mayor confianza en las relaciones entre los propios países, fortaleciendo la idea de la seguridad regional en conjunto con la preservación de la autonomía de los Estados (Ramanzini Júnior y otrxs, 2014).

Por otra parte, se creó el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), el cual pasó a estar a cargo en 2010 del Comité Coordinador de la IIRSA, trabajando en conjunto con los organismos internacionales que la integraban hasta ese momento: el BID, la Corporación Andina de Fomento (CAF) –actual Banco de Desarrollo de América Latina- y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA). De esta forma, el principal órgano decisor de la IIRSA pasó a encontrarse bajo la órbita de la UNASUR.

Desde hacía muchos años, la infraestructura regional era un tema central para Brasil, dado que consideraba que la precariedad de la conexión física con otros países tenía un impacto negativo para el desarrollo nacional. Además, la profundización de los lazos comerciales con los países del sudeste asiático hacía necesaria la mejora de la salida de las mercaderías brasileñas hacia el océano Pacífico.

Desde el COSIPLAN se privilegió el avance de proyectos ligados al transporte, la energía y las comunicaciones. Desde este Consejo, se priorizó el imperativo de la integración regional, de fomento e incremento de intercambios comerciales al interior del bloque, y de una nueva estructura desarrollista (Ramanzini Júnior y otrxs, 2014).

De esta forma, con la creación del COSIPLAN, la IIRSA cobró un nuevo impulso. Desde este Consejo, se impulsaron obras de infraestructura que facilitaron la circulación de bienes al interior de la región y, sobre todo, la salida de las mercancías brasileñas hacia los mercados asiáticos. Así, la prioridad no estaba puesta en la integración, sino en la

[61] La des-securitización "corresponde a los esfuerzos retóricos para eliminar un objeto particular de la lógica de emergencia, con el fin de tratarlo mediante la política normal" (Ramanzini Júnior y otrxs, 2014: 9).

interconexión física entre regiones sudamericanas, sorteando las "barreras naturales" que perjudicaban la circulación.

Para concluir, podemos decir que el camino tomado por la UNASUR no responde únicamente a las ideas de Itamaraty. Tras las luchas llevadas a cabo en la región contra el modelo neoliberal, se transformó en necesaria la búsqueda de apoyos regionales y la construcción de instancias regionales. Así, la UNASUR puede pensarse como "un intento de coordinación regional de conducción del antagonismo social de clase" (Pascual, 2013: 249). Es decir, este mecanismo supranacional actuó como un mecanismo conciliador de la lucha de clases.

6. PARA RESUMIR

Más allá de las diferentes configuraciones que se han dado a lo largo del tiempo, el Estado desarrollista brasileño es la forma histórica que adquirió el poder capitalista en Brasil. Durante la época de gobierno de Lula da Silva, éste expresó el proyecto de desarrollo capitalista que impulsó la burguesía interna que se estableció como bloque en el poder: empresas de capitales predominantemente nacionales, estatales y algunas multinacionales ligadas a la minería, construcción civil, agronegocio, construcción naval, entre otros.

Históricamente, y más allá de su determinación dependiente -la cual, tal como plantea Lucio Oliver (2018), establece una débil capacidad para fracturar la relación global de capital-, en Brasil se configuró un Estado fuerte. Durante el período de estudio, su función no se centró únicamente en garantizar la producción y reproducción política del sistema capitalista, sino que adoptó el papel de gestor, promotor y productor con el objetivo central de organizar la acumulación capitalista, adoptando una configuración de "Estado logístico" (Cervo, 2012).

Otra característica central del Estado en Brasil es la adopción de una política subimperial, durante la Dictadura Militar de 1964, la cual reconfiguró el tipo de Estado capitalista. Si bien durante la etapa neoliberal, esta estrategia fue relegada, a comienzos del nuevo siglo la política subimperial fue retomada y profundizada en el marco de una coyuntura favorable para Brasil y que se caracterizó por un contexto internacional de alza en los precios de las *commodities*.

En este contexto, durante la época de gobierno de Lula da Silva, la política de desarrollo nacional y la externa estuvieron ligadas a favorecer la transnacionalización de algunas

compañías de capitales brasileños que integraron el bloque en el poder durante esos años. En el marco de la política interna, se impulsaron algunas medidas y programas para favorecer la acumulación de estas compañías, tales como la de Campeones Nacionales, el PAC, la PDP y la PITCE.

En el plano de la política exterior, el gobierno brasileño buscó una "autonomía a través de la diversificación", profundizando su participación en instancias de articulación internacional. En este marco, se priorizó el despliegue de una estrategia de alianza Sur-Sur. Esta se tradujo en la participación de múltiples instancias multilaterales, no sólo al interior de Sudamérica, sino también con otros bloques y países de otras regiones, sobre todo con China, nación que pasó a ser un socio estratégico para Brasil. Esta situación generó que Brasil buscará impulsar, al interior de la IIRSA, obras y proyectos que favorezcan su salida hacia el Pacífico.

En este marco, el Estado ocupó un lugar clave en la transnacionalización de las empresas consideradas "Campeones Nacionales", favoreciendo su inserción en otros países –sobre todo en los sudamericanos y africanos- y ocupando un rol activo en la búsqueda de nuevos mercados. Estos sectores no sólo se vieron beneficiados con algunas políticas internas, sino que tuvieron un rol activo en la definición de la política exterior implementada por el gobierno brasileño.

Así, la política exterior brasileña, durante la época petista, tuvo por objetivo no sólo favorecer al bloque en el poder, sino también posicionar al país como *global player*. En este marco, la política exterior para la región sudamericana tuvo un papel instrumental ligado a la expansión de los mercados para la profundización del desarrollo industrial. A su vez, la misma tenía otro objetivo centrado en la apertura gradual de la economía nacional a la economía mundial. Esta política logró ampliar el control que Brasil poseía sobre las materias primas y la fuerza de trabajo en otros países, así como también impulsó una integración subimperialista de sectores de la producción a las cadenas productivas brasileñas.

CAPÍTULO 3

LA EXPANSIÓN REGIONAL DESDE ARRIBA

El objetivo de este capítulo es analizar las razones por las cuales el Estado brasileño, durante el período de gobierno de Lula da Silva, decidió darle un fuerte impulso a la IIRSA, teniendo en cuenta la importancia que la infraestructura física posee en la etapa actual del capitalismo. A su vez, buscamos indagar acerca de las clases y fracciones de clase que se vieron beneficiadas con el avance de esta Iniciativa, y las políticas y programas implementados por el gobierno brasileño para favorecer la acumulación de capital de las empresas de ingeniería que fueron parte del bloque en el poder (Poulantzas, 1978) durante los primeros años del nuevo siglo.

Para ello, retomamos algunas ideas desarrolladas en los capítulos anteriores. Por un lado, recuperamos los desarrollos de la corriente marxista de las Teorías de la Dependencia, los planteos de imperialismo colectivo y de sistema-mundo, los cuales nos habilitan pensar la relación existente entre los países centrales y los periféricos. A su vez, estos nos permiten entender el rol que posee la infraestructura física en las cadenas globales de producción y valor, al igual que los modos en los que se traducen los flujos y las redes globales de producción en los territorios.

A su vez, retomamos algunos conceptos planteados en el marco de la Escuela Neogramsciana de Política Internacional, para pensar los modos en los cuales la hegemonía se tradujo en el plano sudamericano. En la misma línea, los desarrollos en torno a la política subimperial nos permiten analizar el vínculo establecido por Brasil con la región sudamericana. Esta estrategia subimperial, si bien fue relegada durante algunas décadas, se retomó y profundizó a partir de los primeros años del nuevo siglo con la llegada del PT al gobierno. A su vez, esta política permeó en algunas de las iniciativas que el gobierno de Lula da Silva impulsó en el contexto sudamericano, entre ellas, en el cariz que fue tomando la IIRSA.

Por otro lado, retomamos la constitución del Estado brasileño durante el período de estudio y el bloque en el poder que se constituyó como parte del frente neodesarrollista. Esto nos permitirá analizar las clases y fracciones de clase que el gobierno brasileño buscó favorecer con el avance de la IIRSA, sobre todo, las empresas de ingeniería de bandera nacional (Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa). A su vez, recuperamos cómo la política de las empresas "Campeones Nacionales" permeó

en la política exterior para la región sudamericana, y cómo se conjugó con algunos programas y políticas interiores implementadas durante los años de gobierno de Lula.

Por otra parte, retomamos el impacto que tuvo el estrecho vínculo que Brasil estableció con China en relación a las obras que el Estado brasileño buscó impulsar en el marco de IIRSA. Por último, recuperamos los desarrollos en torno a cómo el gobierno de Lula da Silva pensó la integración a nivel sudamericano y cómo este regionalismo se articuló con el avance y profundización de la IIRSA.

El capítulo estará organizado de la siguiente forma. En primer lugar, analizamos la centralidad e importancia que tiene en la fase actual del capitalismo la dimensión de la infraestructura física en relación con las cadenas globales de valor y con el lugar que ocupa la región sudamericana en la división internacional del trabajo. A su vez, esbozamos las principales características que poseen este tipo de proyectos de gran escala.

En segundo lugar, desarrollamos cómo se dio el surgimiento de la IIRSA, así como también los objetivos de interconexión detrás de los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) que se plantearon. A su vez, analizamos el rol de las instituciones financieras internacionales involucradas en la Iniciativa: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

En tercer lugar, indagamos en torno al traspaso de IIRSA a la órbita de la UNASUR, bajo comando del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN). En este marco, analizamos los cambios y continuidades en torno a la etapa precedente de la Iniciativa, y cómo la IIRSA se articuló con el tipo de regionalismo post-hegemónico (Riggirozzi y Tussie, 2018) que se impulsó en la etapa en estudio.

En cuarto lugar, observamos cómo el gobierno brasileño, durante los años de comando de Lula, buscó favorecer el impulso de la IIRSA, no sólo desde las oficinas de Itamaraty, sino también desde otras áreas del Estado. A su vez, analizamos el financiamiento de obras de infraestructura a realizarse en el marco de la IIRSA por parte de Brasil, mediante la participación del BNDES y de algunos programas del Estado Nacional. Además, indagamos en torno a los EIDs que atraviesan territorio brasileño, así como las principales actividades económicas que se emplazan en estas porciones de territorio.

En quinto lugar, analizamos las empresas de ingeniería favorecidas con el avance de las obras a realizarse en el marco de IIRSA. Estos sectores, que habían comenzado décadas atrás su proceso de internacionalización, integraron el bloque en el poder durante la etapa de gobierno de Lula y fueron beneficiarias de préstamos realizados por parte del BNDES, que jugó un rol clave en la profundización del proceso de internacionalización de dichas compañías.

1. La infraestructura en el Centro

Históricamente, el desarrollo de infraestructura física en la región sudamericana ha estado ligado a las formas de inserción internacional. A comienzos del siglo XX, cuando la división internacional del trabajo colocó a la región como agroexportadora, se impulsó la creación del tendido del ferrocarril y puertos. Décadas más tarde, durante el período de sustitución de importaciones, la infraestructura permaneció ligada a la actividad agroexportadora y se avanzó en aquella necesaria para la industrialización y la urbanización. Durante la etapa neoliberal, momento en el que se llevó adelante un proceso de desindustrialización y avance de las actividades extractivas, los gobiernos de la región desarrollaron políticas de infraestructura vinculadas a la privatización y extranjerización (Álvarez, 2019).

Tal como desarrolla Amin (2018), en la actualidad nos encontramos ante una nueva etapa del capitalismo a la cual el autor denomina de los monopolios generalizados, dado que considera que los monopolios ya no son más islas en un océano de empresas relativamente autónomas y sin un sistema integrado. Estos monopolios han promovido un sistema basado en un conjunto de exigencias a través de las cuales ejercen control sobre los sistemas productivos de los países periféricos del capitalismo global. En este sentido, Burnham (2013), afirma que se ha favorecido el sistema interestatal, centrado en la rivalidad entre Estados, con el objetivo de acrecentar el poder de estos monopolios, dado que son los Estados los que garantizan la implementación de políticas que favorecen la movilidad del capital, aseguran los derechos de propiedad y la reproducción de una clase trabajadora obediente.

En la misma línea, Wallerstein (2004) afirma que el establecimiento del actual sistema-mundo se dio a través de la consolidación de una economía-mundo. En este sistema existe una división del trabajo, así como también un importante intercambio de bienes básicos, flujos de capital y mano de obra. Esta economía-mundo está estrechamente conectada

con los flujos y redes de producción que se plasman en los territorios a partir del avance de la territorialización capitalista.

En este contexto, y tal como plantea Cox (1996), la hegemonía, en el plano internacional, se configura en un orden dentro de la economía mundial con un modo de producción dominante que penetra en los países y que se expresa en normas, instituciones y mecanismos que establecen las reglas de actuación para los Estados, las cuales actúan como sustento del modo de producción. De esta forma, la transnacionalización de la producción –y de algunas fracciones de clase- promueve la reproducción del capital al interior de los Estados (Bieler y Morton, 2013).

Así, tras el proceso de expansión de las cadenas globales de producción, que se dio a partir de la década del setenta, la infraestructura física ha comenzado a ocupar un lugar central en el desarrollo del capitalismo global. Ésta se ha asociado a la posibilidad de proliferación, inserción y consolidación de las economías nacionales en la economía internacional (Álvarez, 2018). De esta forma, comprender la dinámica de estos flujos transfronterizos permite entender el lugar que los territorios regionales ocupan en la economía internacional, así como también los centros que se convierten en estratégicos y a los que se dota de infraestructura, permitiendo la movilidad del capital transnacional (Álvarez, 2019).

El BID (2000) definió a la infraestructura como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones sobre las cuales se basa la prestación de servicios necesarios para el desarrollo económico y social. A su vez, este organismo plantea que el impacto efectivo no está dado por la construcción de las obras, sino por diversos factores: por un lado, que los servicios que se brinden busquen dar respuestas a demandas efectivas; por otro lado, que la provisión se conecte con una adecuada gestión; en tercer lugar, que las obras sean acompañadas de políticas sectoriales que consoliden su demanda; y, por último, que el avance de infraestructura de diversos tipos habilite aprovechar las sinergias que puedan generarse entre ellas.

Por su parte, Gustavo Lins Ribeiro (1985) plantea el concepto de proyectos de gran escala para hablar de grandes obras de infraestructura, ya que para él nombrarlas como proyectos de desarrollo aluden a una idea de un desarrollo que es discutible. Para este autor existen dos características centrales de este tipo de proyectos: por un lado, se trata de sistemas discretos, lo que implica que son un conjunto organizado de relaciones las

cuales tienen una lógica particular, pero están insertas en un sistema mayor que es fuente de sus principales características estructurales; y, por otro lado, son sistemas recurrentes, dado que existe una cierta similitud entre los diversos proyectos de gran escala.

A su vez, Lins Ribeiro delinea tres dimensiones que deben estar presentes para que un proyecto pueda considerarse de gran escala:

(1) por un lado, el gigantismo, el cual para el autor no está centrado únicamente en las dimensiones físicas de la obra, sino también en que implican grandes movimientos de capital y de mano de obra, además de introducir grandes cambios, por lo cual son tratados, en general, como asuntos geopolíticos de alcance regional, nacional o internacional. A su vez, se promueven mecanismos de legitimación que impulsen la idea de que la dimensión del proyecto es positiva, en términos de que implicará la creación de oportunidades para miles de personas o que redimirá a una región de su atraso. Esta idea es denominada por el autor como ideología de la redención, la cual está vinculada a las nociones de progreso;

(2) por otro lado, el aislamiento, el cual es definido a partir de las necesidades de los proyectos, especialmente a los aspectos socioeconómicos (carencia de infraestructura, desarrollo de fuerzas productivas locales, entre otros) y geográficos (el aislamiento físico de la región en la que se construye la obra). Esta característica promueve el establecimiento de un territorio controlado en el cual rigen las lógicas de producción del proyecto y el poder de la corporación que la lleva adelante sustituye virtualmente al Estado. El territorio en el que se emplaza el proyecto puede considerarse como una zona de enclave cuya característica principal es que el Estado evita de forma deliberada suplir los servicios institucionales habituales (Álvarez Mullally y otrxs, 2017);

(3) por último, el carácter temporario, dado que se trata de sistemas identificables cerrados en el tiempo, es decir, que se puede detectar y establecer su comienzo y fin.

De esta forma, las obras de infraestructura se caracterizan por la conformación de redes. Estas constituyen un elemento clave para la integración del sistema económico y territorial de un país, posibilitando las transacciones al interior de un espacio geográfico y económico determinado, así como también la conexión con los mercados internacionales. Por ello, son un elemento vertebrador de la estructura económica de los países y sus mercados, y de la articulación de las economías nacionales con la economía

mundial (Rozas y Sánchez, 2004). Estas ponen en juego lógicas transterritoriales (Haesbaert, 2016), dado que implican una organización a partir de una inmensa articulación de territorios. Se trata de una multiterritorialidad dentro de una lógica funcional globalmente estandarizada. En estas redes de redes es donde el capitalismo se hipermaterializa (Barreda, 2005).

Por su parte, David Herrera Santana (2019) plantea el concepto de "poder infraestructural" para referirse a estos proyectos de gran escala. El autor sostiene que estas obras poseen un sentido fuertemente geopolítico, dado que permiten articular logísticamente lo que se encuentra fragmentado, así como también la apropiación territorial de áreas o regiones de alto valor estratégico por parte de diversos capitales para su reproducción. De esta forma, la infraestructura física es considerada un medio para la materialización, en el largo plazo, de otros aspectos de la integración económica regional (Wegner, 2018).

Teniendo en cuenta estas definiciones en torno a infraestructura y su vínculo con los modelos de desarrollo y con la reproducción del capitalismo internacional, a comienzos del nuevo siglo se delineó la IIRSA, una instancia de integración en el subcontinente sudamericano que tenía por objetivo llevar adelante todo un andamiaje de obras de conexión, de producción e interconexión energética, y de telecomunicaciones. Esta estructura tenía como fin último facilitar la salida de *commodities* y bienes intermedios e industriales hacia los principales mercados centrales con vías de conexión hacia los dos océanos y sostener los niveles de crecimiento y desarrollo de algunos países de la región, en especial de Brasil. De esta forma, los lineamientos y proyectos de la IIRSA consolidaron y profundizaron el lugar que el mercado mundial había delegado a la región sudamericana en el sistema-mundo.

2. EL NACIMIENTO DE LA IIRSA-COSIPLAN

Desde la década del noventa, Brasil había planteado que la infraestructura y la energía eran puntos clave para pensar y reconfigurar la integración regional sudamericana. Frente a ello, durante la primera Reunión de Presidentes de América del Sur realizada el 30 de agosto y el 1ero. de septiembre de 2000 en Brasilia, el por entonces presidente del BID, Enrique Iglesias, presentó un documento que había desarrollado –con aportes de la CAF- a pedido de Fernando Henrique Cardoso en el que se abordaban los principales déficits de la infraestructura regional. En su discurso, Iglesias planteó: "nuestros

gobiernos deben encontrar respuestas eficaces para gestionar y ampliar la infraestructura, evitando que las limitaciones de la infraestructura física se conviertan en barreras para el desarrollo, la integración y una participación más efectiva en el proceso de globalización". Tal como se puede leer en el discurso de Iglesias, la infraestructura física estaba siendo repensada al servicio de la integración de las economías sudamericanas a la economía mundial.

A su vez, en el marco de este encuentro, se subrayó la necesidad de establecer una cooperación en términos de mejoramiento de infraestructura. Por esta razón, los gobiernos sudamericanos decidieron convocar, para diciembre de ese mismo año, una reunión ministerial para evaluar las sugerencias y propuestas esbozadas en el Plan de Acción presentado por el BID. En este documento se planteaba como central identificar los "cuellos de botella" tanto físicos como normativos (BID, 2000) para la integración de la infraestructura.

Así, en diciembre de 2000, se realizó la reunión de ministrxs de transporte, telecomunicaciones y energía de América del Sur. En este encuentro se estableció un instrumento para viabilizar las propuestas presentadas en el marco del Plan de Acción, compuesto por un Comité de Dirección Ejecutiva (CDE), un Comité de Coordinación Técnica (CCT), Coordinaciones nacionales y grupos técnicos ejecutivos. De esta forma, surgía la IIRSA, con el objetivo de motorizar megaproyectos de infraestructura tales como carreteras, oleoductos, gasoductos, hidrovías, puertos marítimos y fluviales, represas hidroeléctricas, tendidos eléctricos y de fibra óptica, integrando a la totalidad de los países pertenecientes a América del Sur[62].

Entre sus objetivos fundamentales se subrayaba el impulsar una red de infraestructura que proveyera servicios eficientes y a costos competitivos en los sectores de energía, telecomunicaciones y transporte. A su vez, se planteaba el impulso de políticas sectoriales e integrales que capitalicen la sinergia que podía generarse entre las obras (Álvarez, 2018). El tipo de integración que impulsaba la IIRSA se inscribe dentro de los parámetros del regionalismo abierto cepalino, centrados en una integración al servicio de la economía internacional y el aumento de la competitividad de los países de la región.

[62] La IIRSA integraban el área que abarca los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

El CCT –que también ocupó el rol de la Secretaría Técnica del CDE- fue conformado por el BID[63], la CAF[64] y el FONPLATA[65], y tenía como rol central encargarse de la constitución de la cartera de proyectos a llevar adelante, detectando aquellos que se consideraban prioritarios. A su vez, otras de sus tareas han sido: el impulso a la participación del sector privado en la ejecución y financiamiento de las obras, y la construcción de instrumentos de carácter público-privados. Estas instituciones financieras internacionales se describían a sí mismas como socias estratégicas de la IIRSA mediante diferentes mecanismos e instrumentos: donaciones, garantías, préstamos, asistencia técnica, entre otros. Así, tuvieron un rol fundamental en la determinación de las directrices adoptadas en el marco de la IIRSA no sólo en la definición de los proyectos considerados centrales, sino también en la promoción de mecanismos de financiación (Molina y otrxs, 2015).

Por su parte, el CDE estaba integrado por representantes designadxs por los gobiernos sudamericanos. Su función se centró en delinear las visiones, directrices e iniciativas fundamentales en el marco de la IIRSA, coordinando los planes de inversión, los marcos regulatorios y de financiamiento.

A su vez, las Coordinaciones Nacionales son el punto focal de la IIRSA en cada uno de los países integrantes. Su función se centralizó en coordinar el intercambio entre las coordinaciones y la participación de los organismos gubernamentales.

Por último, la institucionalidad de la IIRSA se completaba con el establecimiento de los grupos técnicos, los cuales fueron conformados por funcionarixs y expertxs elegidxs por los gobiernos. Estxs estarían encargados de analizar cuestiones vinculadas al Plan de Trabajo, los Ejes de Integración, las Metodologías de Planificación y los Procesos Sectoriales de Integración.

Así, con el auspicio y la coordinación de estas instituciones financieras internacionales, se estableció una Iniciativa que dividía al subcontinente en ejes. Estos tenían por objetivo

[63] El BID surgió en 1959 con el apoyo de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA). Se estableció como la principal fuente de crédito para la integración física. Opera como brazo del Banco Mundial en América Latina. De los 47 países miembros, 26 pertenecen a la región. Estados Unidos posee el 30% del capital, lo que le otorga un peso fundamental en las decisiones, dado que el mecanismo de voto está ligado a los aportes a la cartera por parte del Banco (Álvarez, 2018).

[64] Ahora llamado Banco de Desarrollo de América Latina, aunque conserva la sigla. Fue creada en 1966, con el objetivo de resolver los limites vinculados a la restricción externa, la deuda y la ausencia de financiamiento para los países que pertenecen a la región andina. Ha sido un organismo central en el financiamiento de infraestructura de integración.

[65] Creada por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en 1977. Su finalidad es financiar la realización de estudios, proyectos, programas y obras vinculadas a la integración física de la Cuenca del Plata (Álvarez, 2018).

detectar las principales vías de conexión de lugares estratégicos con los mercados internacionales, entre las que se destacaba la vinculación con China a través de las obras de infraestructura que derivaban en el océano Pacífico. De esta forma, tal como planteaba un documento del FONPLATA, el objetivo de la IIRSA era "construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, sustentado sobre los requerimientos de la demanda" (en Ceceña, Aguilar y Motto, 2007: 17).

Si bien en los textos constitutivos de la IIRSA se proponía como uno de los ejes centrales avanzar en la integración física de los países del subcontinente, el análisis de las obras y el desarrollo de la Iniciativa muestra que, en realidad, se impulsaba una mayor interconexión entre los centros productivos. La mayor parte de las obras se orientaron para favorecer las vías de salida hacia los mercados internacionales. Es por ello que no consideramos que la IIRSA abonase a una real integración de la región sudamericana y de sus pueblos, salvo en algunos casos excepcionales[66], sino que se trataba de una expansión comandada desde arriba. Sus objetivos centrales eran, por un lado, la expansión de la división regional de la producción, coordinada por Brasil, y, por el otro, la profundización del lugar que ocupa Sudamérica en las cadenas globales de valor.

2.1. Ejes de integración y Desarrollo

En el marco de la IIRSA, se establecieron Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs), los cuales fueron entendidos como

> una franja multinacional de territorio que incluye una cierta dotación de recursos naturales, asentamientos humanos, áreas productivas y servicios logísticos. Esta franja es articulada por la infraestructura de transporte, energía y comunicaciones que facilita el flujo de bienes y servicios, de personas y de información tanto dentro de su propio territorio como hacia y desde el resto del mundo.

De esta forma, se establecieron 12 ejes de desarrollo a lo largo del subcontinente, muchos de los cuales se solapaban entre sí, es decir, un mismo territorio podía ser atravesado por más de un eje. Estos cubrían el 97% del espacio geográfico sudamericano. Dentro de cada uno de ellos, se delinearon los principales proyectos a impulsar que favorecieran la circulación e interconexión de los principales centros comerciales con los puntos de salida hacia los mercados internacionales. Por otro lado, se planteó la construcción de obras de infraestructura energética que tuvieran la capacidad de abastecer a los

[66] Por ejemplo, la Carretera Interoceánica que se vincula al caso de Inambari. Tal como veremos más adelante, esta vía de conexión logró acercar algunas zonas de Perú con regiones de su Amazonía.

principales centros, interconectando energéticamente regiones, lo cual permitiría el sostenimiento del crecimiento económico de algunos países, sobre todo de Brasil.

Ejes de Integración y Desarrollo de la IIRSA

Fuente: IIRSA, 2017

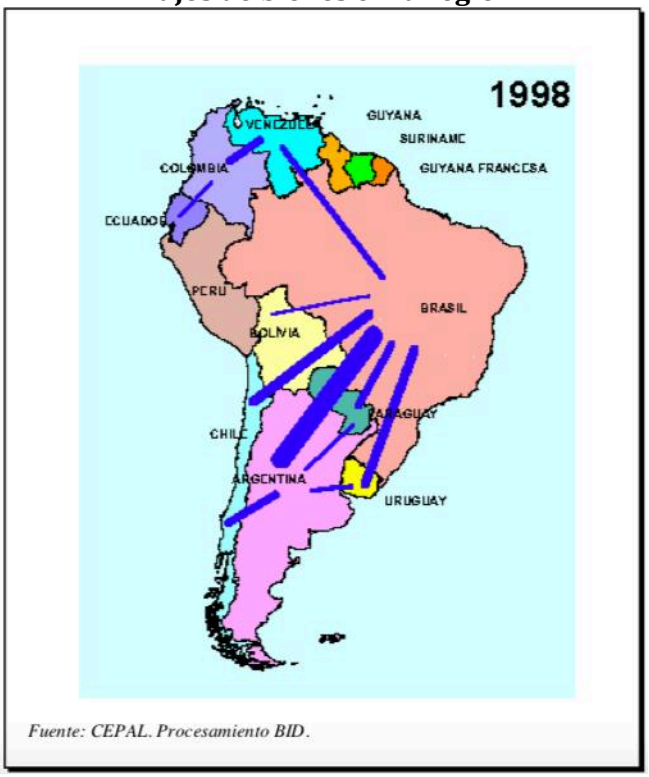
En el marco de la Iniciativa, se delinearon los ejes que se observan en el mapa anterior, los cuales tenían por objetivo "resolver las barreras naturales" que existen en la región (Zibechi, 2006), y que se consideraban como un bloqueo o traba para la circulación de las mercancías al interior de Sudamérica. De esta forma, se entendía al subcontinente como la suma de cinco "islas" -las cuales podemos apreciar en la imagen que se encuentra a continuación- que debían ser conectadas entre sí para favorecer, así, la exportación de bienes y *commodities* hacia los mercados centrales. Estas eran: la plataforma del Caribe,

la cornisa andina, la plataforma atlántica, el enclave amazónico central y el enclave amazónico sur.

Fuente: Fundación M'Biguá, 2009.

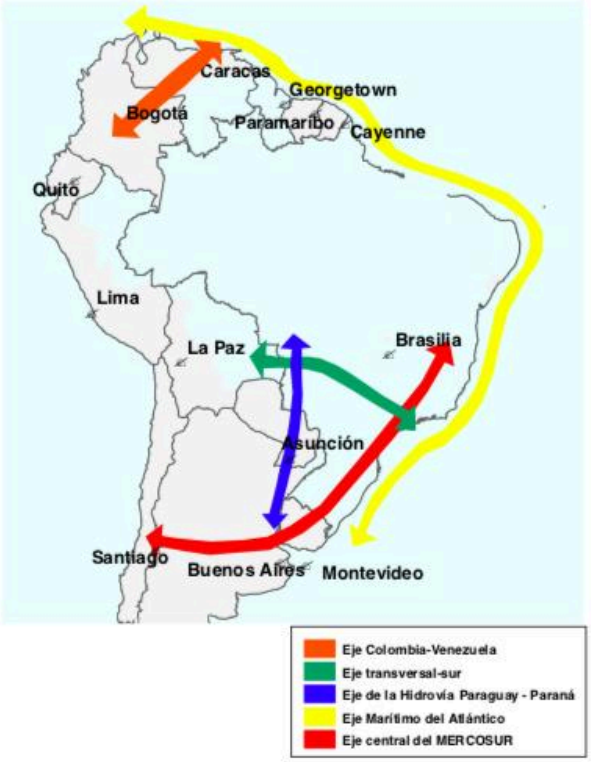
En el documento que presentó el BID (2000) y que se utilizó como puntapié inicial para la creación de la IIRSA, se realizó un análisis de los flujos al interior del subcontinente (que podemos observar en la imagen que se ubica a continuación), buscando identificar las problemáticas vinculadas a los déficits regulatorios y de infraestructura, y potenciar la profundización de estos flujos (como podemos ver en el segundo mapa de la próxima página). Si bien el Banco Interamericano de Desarrollo planteaba como argumento central, en la definición de los EIDs y en la construcción de los corredores, la necesidad de favorecer las relaciones existentes al interior de la región, el comercio internacional y los flujos de exportación hacia los mercados internacionales tuvieron un peso central (Álvarez, 2018).

Flujos de bienes en la región



Fuente: BID, 2020

Ejes de intercambio actual con un significativo potencial de crecimiento en América del Sur



Fuente: BID, 2020.

Tal como podemos analizar a partir de los dos mapas anteriores, el BID realizó varios análisis en torno a las redes de comercio que existían al interior de la región, las cuales, tal como planteaban, debían ser potenciadas. Así, estas investigaciones fueron tomadas como punto de partida para el desarrollo de los ejes de integración y para la definición de los proyectos prioritarios a realizar en el marco de la IIRSA. En el cuadro que se encuentra a continuación, se desglosan los grupos de proyectos al interior de cada EID, haciendo una estimación de la inversión que cada conjunto de obras implicaría.

IIRSA-COSIPLAN: caracterización de los ejes de integración y desarrollo (EID)

Ejes	Grupos de proyectos	Nro. de Proyectos	Porcentaje en relación a la totalidad de los proyectos	Inversión (en millones de US$)	Porcentaje en relación a la inversión totales	Nro. API[67]
Amazonas	8	72	12.4	27	14.1	27
Andino	9	66	11.3	28	14.3	13
Capricornio	5	81	13.9	17	8.7	18
Sur	2	47	8.1	4.5	2.3	0
Escudo Guayanés	4	20	3.4	4.6	2.4	6
Hidrovía Paraná-Paraguay	5	89	15.3	66	3.4	16
Interoceánico Central	5	63	10.8	11.5	6	7
MERCOSUR-Chile	6	120	20.6	61	31.8	15
Perú-Brasil-Bolivia	3	24	4.1	32	16.7	1
Total	47	581	100	192	100	103

Fuente: SIP IIRSA-COSIPLAN.

Tal como sostiene Bernardo Mançano Fernandes (2008), los Ejes de Integración que se establecieron en el marco de la IIRSA pueden considerarse como transterritorios, los cuales se entienden como conjuntos de territorios comprendidos como espacios de gobernanza en diversas escalas. Así, estos establecen una "integración para la exclusión, que también podría ser vista como una integración desde arriba para una exclusión/desintegración de los de abajo" (Betancourt, 2014: 448).

[67] La Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API) consiste en un conjunto de 31 proyectos estructurados, de carácter estratégico y de alto impacto para la integración física y el desarrollo socio-económico regional.

En línea con lo planteado con Mançano Fernandes y Milson Betancourt, podemos sostener que, al interior de estos espacios, existen otro tipo de territorios y territorialidades, que entran en tensión con los planes de desarrollo e infraestructura planteados "desde arriba". De esta forma, los conflictos que se desatan surgen por la tensión entre territorialidades contrapuestas: por un lado, territorialidades de dominación (Ceceña, 2007), y, por el otro, territorialidades de resistencia.

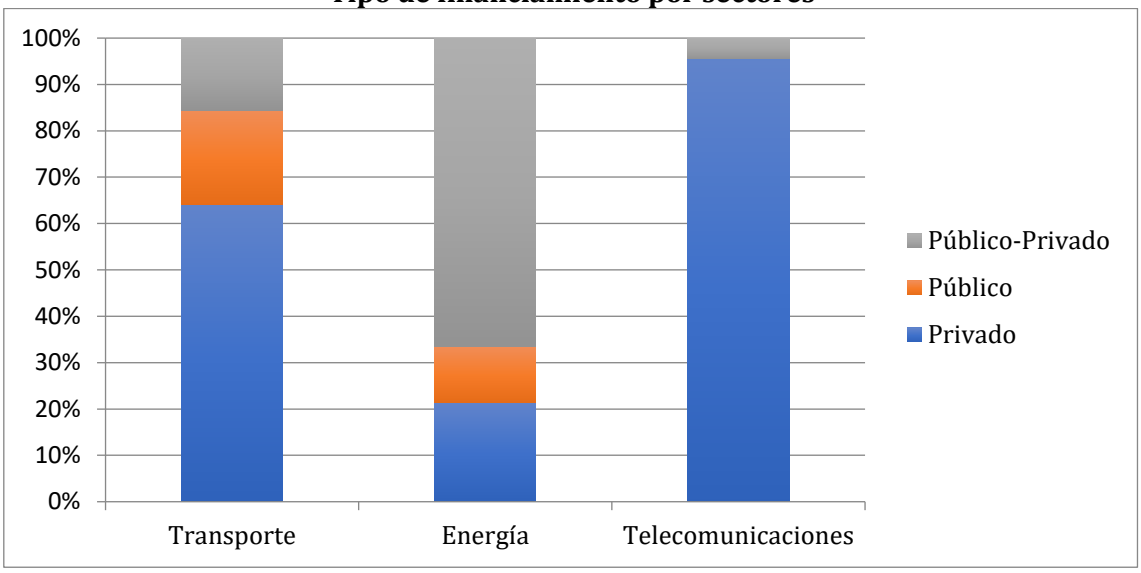
Así, estos Ejes no pueden considerarse como cargados de infraestructuras "neutras", ya que se constituyen como dispositivos espaciales del capitalismo moderno y de la penetración del capitalismo global en los territorios periféricos. Tal como veremos en capítulos posteriores, estas territorialidades de resistencia se pusieron de manifiesto en los casos de estudio, cuando las poblaciones advirtieron que, a pesar de los discursos oficiales que buscaban enfatizar en los beneficios que acarrearían, las obras de infraestructura a realizarse en el marco de la IIRSA tendrían impactos negativos en las comunidades, en las economías regionales y en las poblaciones allí asentadas.

2.2. Fuentes de financiamiento

Por otro lado, las principales fuentes de financiamiento que se platearon para poder llevar adelante los proyectos de infraestructura fueron el BID, la CAF y el FONPLATA, así como también bancos públicos –tal como el BNDES- y privados, y fondos públicos de los propios Estados. Así, para 2015, de las obras concluidas, el 73% fue financiado por fondos públicos, el 8% por consorcios público-privados y el 19% por el sector privado (Barrenengoa, 2019).

Tal como podemos observar en el siguiente cuadro, se combinaron fuentes de financiamiento privadas y públicas. Estas fueron diferenciadas según la rama: en el sector transporte la mayor parte del financiamiento fue de carácter privado; en el de energía se dio una combinación de recursos públicos y privados; y en las telecomunicaciones el 95% fue de carácter privado.

Tipo de financiamiento por sectores



Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización, 2012.

Por otra parte, en el marco de las líneas de financiamiento, desde la IIRSA se apostaba al impulso de la Participación Público-Privada. Ésta era definida no como la mera financiación de la infraestructura por parte de sectores privados, sino como "herramientas que forman parte de procesos de connotaciones mucho más complejas, como son los usualmente denominados procesos de 'reforma del Estado'" (CAF, 2003: 14-15). Estos procesos iban desde la implementación de programas que tiendan a redefinir nuevos roles del Estado, a establecer un régimen de *accountability*[68] para funcionarixs de la administración pública, e instaurar marcos jurídicos-institucionales para los procesos de participación.

Sin embargo, tal como se detalla en la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010, tras los encuentros y desarrollos dados en los primeros años, luego del 2003, la temática del financiamiento dejó de ser uno de los tópicos centrales al interior de la IIRSA y éste empezó a provenir de las Instituciones Financieras involucradas en la Iniciativa, de bancos privados –sobre todo del BNDES- y del tesoro nacional. Esto se dio en el marco de un proceso de crecimiento significativo de los precios internacionales de las materias primas y los bienes de consumo, los cuales eran cada vez más demandados por países

[68] El término *accountability* se deriva de *accountable*, "que presenta dos campos semánticos: el de las expectativas de dar cuenta de las propias acciones (referido a un sujeto social) y el de la capacidad de ser explicado (un acto o acción particular); es decir, de asumir una responsabilidad o elaborar un acto social de manera tal que se expresen sus motivaciones o agentes causales" (Aguirre Sala y Infante Bonfiglio, 2018). Para algunxs autorxs, la *accountability* es un elemento esencial para evaluar la calidad de la democracia (Berg-Schlosser, 2004; O'Donnell, 2001).

centrales y emergentes, lo que implicó la disponibilidad de divisas al interior de la región sudamericana.

El cambio de reglamentación del BNDES, en el 2002, fue clave para avanzar en el financiamiento de obras de la IIRSA. Esta modificación permitió el desembolso de dinero por parte de este Banco en territorios externos a los límites brasileños, pero establecía como condición necesaria la participación de empresas de capitales nacionales. A través de estos desembolsos, el Estado brasileño buscó impulsar obras consideradas centrales para favorecer la acumulación de capital y la internacionalización de algunas de sus compañías transnacionales, tanto públicas como privadas.

Durante los primeros años del siglo XXI, el mapa geopolítico mundial se fue reconfigurando, lo que impactó con fuerza en la región. China comenzó a ocupar un lugar central como socio comercial de los países sudamericanos, entre ellos Brasil. De hecho, el país asiático promovió tratados bilaterales con la mayoría de las naciones del subcontinente, así como también realizó grandes desembolsos de dinero para el financiamiento de obras de infraestructura, algunas de las cuales se enmarcaban en la IIRSA, sobre todo aquellas que facilitaban la salida de bienes y *commodities* hacia el Pacífico (Wegner, 2018). Esta situación implicó que muchos de los proyectos de infraestructura de la Iniciativa se reorienten y se otorgue prioridad a los corredores bioceánicos que favorecían la exportación de mercancías brasileñas.

2.3. La IIRSA bajo la órbita de UNASUR

En diciembre de 2004, en el marco del encuentro de la Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Cuzco, Perú, los presidentes de los países de la región adoptaron a la IIRSA como parte de la estrategia política y económica regional (Soldateli Paim, 2016). En esa actividad, además, se aprobaron treinta y un proyectos –que habían sido delineados por las instituciones coordinadoras de la IIRSA- considerados prioritarios y claves para la integración regional.

En el contexto de rediseño regional (Katz, 2006), fue que se creó el COSIPLAN durante la 3era Reunión de Jefes y Jefas de Estado de la UNASUR llevada adelante el 28 de enero de 2009 en Quito, Ecuador. El objetivo de este Consejo era discutir y repensar la dimensión de la infraestructura a nivel regional, incorporando los desarrollos impulsados a partir de la constitución de la IIRSA.

Entre 2000 y 2010, los resultados alcanzados por la IIRSA fueron básicamente técnicos. Por un lado, se elaboró una agenda con más de 500 proyectos de infraestructura ligados al transporte, a la energía y a las telecomunicaciones reunidos en los Ejes de Integración y Desarrollo. Por otro lado, se constituyó una cartera de implementación compuesta de 31 proyectos prioritarios.

El COSIPLAN fue constituido a partir de la participación de lxs Ministrxs de las áreas de infraestructura y/o planeamiento de los Estados miembros de UNASUR. En este marco, la Iniciativa IIRSA se incorporó al trabajo del Consejo como su foro técnico, para temas relacionados con la planificación de la integración física regional sudamericana, iniciándose una nueva etapa en el trabajo de IIRSA.

Entre los objetivos centrales que se plantearon al momento de la constitución del COSIPLAN se encuentran: (a) desarrollar infraestructura para la integración regional, dando continuidad a los avances de la IIRSA e incorporándolos a su marco de trabajo; (b) impulsar la cooperación regional en planificación e infraestructura, mediante alianzas estratégicas entre los Estados miembros de UNASUR; (c) promover la compatibilización de los marcos normativos de los países vinculados al desarrollo y operación de la infraestructura regional; y, por último, (d) identificar y propulsar la ejecución de proyectos prioritarios y evaluar alternativas posibles para el financiamiento de los mismos.

Por otro lado, en un contexto de redefinición y replanteo del regionalismo y las instancias de integración, la IIRSA comenzó a cosechar críticas por su apuesta al regionalismo abierto y a la interconexión para favorecer la extracción de *commodities* y bienes hacia los mercados internacionales. Los cuestionamientos no sólo se dieron desde movimientos sociales y asambleas socioterritoriales, sino también por parte de algunos gobiernos. Así, previamente a la realización de la Segunda Reunión de Presidentes de la CSN, la cual fue llevada adelante en la ciudad de Cochabamba en diciembre de 2006, el por entonces presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, envió una carta a lxs presidentes y pueblos de América del Sur, donde planteaba: "No podemos reducir a la Comunidad Sudamericana de Naciones a hacer proyectos de autopistas o de créditos que acaban favoreciendo a los sectores vinculados al mercado mundial"[69]. A su vez, subrayaba la

[69] Eduardo Gudynas, "Evo Morales renueva las propuestas de integración regional orientándolas al «buen vivir»", *Integración Sur*, 29/11/2006.

necesidad realizar un replanteo de la IIRSA, dado que entendía que la integración física no podía pensarse únicamente como una vía de exportación (López, 2012).

Así, el traspaso de la IIRSA a la órbita de COSIPLAN implicó debates y discusiones al interior del bloque UNASUR. Por un lado, existía una postura, liderada por el por entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que asociaban la IIRSA con un pasado neoliberal y planteaba la necesidad de una refundación de la Iniciativa a través del COSIPLAN. Por otro lado, un grupo de países impulsaba una visión que subrayaba la necesidad de retomar las herramientas desarrolladas en el marco de la IIRSA para ponerlas al servicio de este nuevo bloque. Esta última mirada fue defendida por Argentina y Brasil (Barrenengoa, 2020).

Durante la Segunda Reunión Ordinaria del COSIPLAN, realizada en Brasilia en el 2011, el COSIPLAN elaboró su Plan Estratégico 2012-2022. Entre otras cosas, este Plan delineaba la Agenda de Proyectos Prioritarios (API), la cual reemplazaba la Agenda de Implementación Consensuada 2005-2010[70], desarrollada en la etapa previa de la IIRSA, incorporando la totalidad de los proyectos que habían planteados por las instituciones financiares.

Para resolver la dimensión del financiamiento, en noviembre de 2011, se creó, en el marco de la Segunda Reunión Ordinaria de Ministros del COSIPLAN, el Grupo de Trabajo sobre Mecanismos de Financiamiento y Garantías. El objetivo de este grupo era identificar y detectar soluciones financieras para la ejecución eficiente de los proyectos a realizar en el marco de la API. En noviembre de 2012, se encargó a Brasil la coordinación de este grupo. Este hecho se daba en el marco de una profundización del financiamiento destinado a infraestructura a través del BNDES y del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño.

El traspaso de la IIRSA a COSIPLAN implicó un aumento de la cartera de proyectos en un 75%, pasando de 335 en 2004 a 600 en 2015, lo que generó que se cuadruplicara la inversión (Álvarez, 2017). Sin embargo, tal como plantea Zibechi (2016), esto no se tradujo en una mayor integración de los países sudamericanos, sino que se continuó priorizando y profundizando la interconexión con los mercados internacionales. Esto

[70] Se constituyó en el marco de la III Reunión de Presidentes de América del Sur, celebrada en Cuzco, Perú, en 2004. Presentó 31 proyectos -por un total de 7 mil millones de dólares, lo que representaba el 0,3% del PIB regional de la época- que fueron seleccionados y considerados como prioritarios (a ejecutar en un plazo de cinco años) y de gran impacto para estructurar la integración física regional (Padula, 2014).

quedó evidenciado con el impulso de los proyectos ligados a la salida hacia el océano Pacífico, tras la irrupción de China en la región.

Así, si bien este traspaso generó una mayor participación de los Estados miembros de UNASUR en torno a las decisiones de las obras a realizar -las cuales previamente estaban en manos de las instituciones financieras que ocuparon un rol central en la creación y desarrollo de la IIRSA-, el discurso en torno a la integración continuó estando ligado a las visiones vinculadas al desarrollismo y al rol central que las obras de infraestructura podían tener en términos de crecimiento económico. Los corredores regionales de la IIRSA continuaron en marcha y mantuvieron una relación directa con la demanda de transporte, energía, tierras y otros servicios vinculados a industrias extractivistas, en un contexto de aumento de precios de las *commodities* y de demanda internacional de bienes primarios, ligados al agronegocio exportador, a la megaminería y a la industria hidrocarburífera.

A su vez, permaneció vigente la práctica de avance sobre el territorio para el desarrollo de carreteras, represas hidroeléctricas y la profundización de la industria extractiva. Esta situación desató procesos de reconfiguración territorial, de menoscabo de economías regionales e los impactos sociosanitarios a las comunidades allí emplazadas, lo que generó el avance de las conflictividades y el establecimiento de luchas y resistencias en muchos espacios geográficos.

3. BRASIL Y LA IIRSA

Desde su inicio a comienzos de siglo XXI, Brasil ha sido uno de los países que más ha apostado al fortalecimiento y al desarrollo de la IIRSA. De hecho, el surgimiento de la Iniciativa estuvo ligado a la intención de Brasil de buscar la integración de su infraestructura logística y se encadenó con los planes plurianuales brasileños, cuyo principal objetivo era aumentar la competitividad a través de la reducción de lo que se conoce como el "costo Brasil" -que eran los gastos que las grandes empresas brasileñas aducían a los déficits en relación con la infraestructura física-. La idea central de avanzar con estos proyectos era facilitar la salida de las *commodities* y bienes industriales brasileños hacia los mercados globales. En los años noventa, esta idea quedó plasmada

en la estrategia brasileña desarrollada en el marco en los ejes nacionales de integración y desarrollo[71] (Chiarella Quinhoes, 2011).

A su vez, en 1996, el por entonces presidente de la minera brasileña Vale do Rio Doce, Eliezer Batista da Silva, realizó un estudio en el que planteaba la conexión que existía entre la construcción de proyectos de infraestructura en Sudamérica y la posibilidad de inserción de la región en las cadenas globales. Este estudio fue solicitado por la Corporación Andina de Fomento (Soldateli Paim, 2016) al momento de llevar adelante la agenda de proyectos.

Los intereses brasileños en la IIRSA quedaron evidenciados en su apoyo al concepto de EIDs, los cuales implicaron una redefinición logística. En esta visión, el foco se puso en las redes que se crearían, teniendo en cuenta que su integración y modernización eran una herramienta fundamental para dinamizar los centros regionales de producción, vinculando esta estrategia a la demanda de ese momento en relación al aumento de la velocidad y la eficiencia de los sistemas multimodales de transporte y comunicación (ibíd.).

En este marco, Brasil fue el principal destinatario de los proyectos de infraestructura a realizarse en el marco de la IIRSA, obteniendo el 50% de los mismos (Barrenengoa, 2019). A su vez, fue el país de la región que más apostó al desarrollo de la infraestructura en el plano subcontinental, destinando recursos e impulsando políticas públicas orientadas a este objetivo.

No sólo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se apuntó a favorecer el impulso de la IIRSA, sino también a través de otros sectores del Estado, como la Secretaría de Asuntos Estratégicos o la Agencia Brasileña de Desarrollo Industrial, entre otros. Así, desde el gobierno brasileño se apuntó a la confluencia entre la IIRSA y su estrategia de desarrollo nacional. Esto quedó plasmado en la incorporación de algunas de las obras de la Iniciativa en el marco del Programa de Aceleración del Crecimiento -el cual fue abordado en el capítulo anterior- (Franco Cerqueira, 2014).

[71] Los Planes Plurianual brasileños "Brasil en Acción" (1996-1999) y "Avanza Brasil" (2000-2003) integraban una estrategia de integración de la Amazonía al espacio productivo brasileño y de consolidación de la política de integración regional de América del Sur (Franchi y otrxs, 2016).

Brasil y la IIRSA	
Sectores del Estado Brasileño involucrados en la IIRSA	Ministerio de Relaciones Exteriores, BNDES, APEX, Ministerio de Energía, Ministerio de Hacienda, Banco de Brasil, Ministerio de Industria, Ministerio de Comercio, SAE, ABDI
Fracciones de clase favorecidas con las obras a partir de la reducción de los costos logísticos	Agronegocio, ganadería, producción de bienes intermedios, bienes industrializados, entre otros
Empresas de ingeniería beneficiadas con el desarrollo de obras de IIRSA	Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Engevix Engenharia, CNEC Engenharia, entre otras
Empresas estatales involucradas en algunos proyectos	Eletrobras, Petrobras, FURNAS

Fuente: realización propia.

Tal como se puede observar en el cuadro anterior, numerosos sectores se vieron involucrados en la estrategia brasileña de promoción de la IIRSA. A través del involucramiento de algunos sectores del Estado brasileño, se buscó favorecer a varias fracciones sociales integrantes del bloque en el poder durante los años lulistas, las cuales pueden englobarse en dos sectores. Por un lado, aquellos que iban a verse beneficiados por la mejora de las condiciones de exportación mediante obras que favorezcan la conexión con los mercados internacionales. Estos sectores estaban ligados al agronegocio, la ganadería, la minería, la industria de bienes intermedios e industrializados, entre otros.

Por otro lado, el Estado brasileño buscó beneficiar a las grandes empresas de ingeniería de bandera nacional a partir de su involucramiento en el desarrollo de algunas de las obras de la IIRSA. Así, la construcción y evaluación de muchos proyectos de infraestructura física fueron adjudicados a estas compañías, las cuales se desglosan en el cuadro anterior. Para ello, el BNDES operó como financiador, pero sólo en los casos en los que participaban estas transnacionales. En este marco, las inversiones destinadas a infraestructura por parte del Banco pasaron de un 65% en 2003 a un 95% en 2010 (Soldateli Paim, 2016).

A su vez, en muchas de las obras a realizar en el marco de la IIRSA el gobierno brasileño buscó involucrar a sus grandes compañías públicas vinculadas a los sectores de energía, con el objetivo de favorecer el proceso de transnacionalización de estas empresas. Así, en

algunos casos, Petrobras y Eletrobras se sumaron como parte de los proyectos de infraestructura impulsados.

De esta forma, Brasil logró promover la expansión de sus grandes empresas de bandera nacional hacia la región sudamericana. A través de esta política expansionista, este país buscaba resolver la situación que se da en un país que adopta una política subimperialista, en el cual, a pesar de superar algunos umbrales sin salir de su condición dependiente, el aumento de las escalas productivas se topa con límites de realización propios de una formación social, cuya base es la superexplotación, lo que hace necesaria la expansión hacia otras regiones dependientes (Martins, 2013),

Frente a esto, en el caso de Brasil, la expansión hacia la región sudamericana fue considerada como natural dado el lugar preponderante que ocupa este país. De esta forma, la internacionalización de sus empresas fue impulsada, en primer lugar, hacia los mercados sudamericanos, logrando establecer una división regional de la producción a la medida de los intereses de su burguesía interna, la cual formó parte del bloque en el poder durante los años de gobierno de Lula da Silva.

3.1. EIDs que atraviesan Brasil

Tal como se plantea en la cartera de proyectos delineada en la IIRSA, de la totalidad de las obras de infraestructura física a llevar adelante, 89 iban a atravesar el territorio brasileño. De ellas, 65 eran de carácter nacional, 21 binacional y tres multinacionales. Estos proyectos contaban con una inversión total estimada de 78107.8 millones de dólares (IIRSA, 2017).

Si bien siete de los nueve ejes de integración atraviesan Brasil, el gobierno de Lula da Silva buscó darle mayor impulso a aquellos que tenían por objetivo conectar sus principales ciudades con los puertos del océano Pacífico: el Interoceánico Central, Amazonas, Capricornio y MERCOSUR-Chile. La prioridad estaba puesta en los proyectos que facilitarían la salida de sus mercancías hacia el océano Pacífico. En el contexto actual del sistema-mundo, algunos estados del sudeste asiático, en especial la República Popular China, demandaban la importación de mayor cantidad de bienes primarios e intermedios. Durante los primeros años del nuevo siglo, China asumió un rol central en el escenario internacional, dada su expansión económica y comercial. En este contexto, este país se convirtió en el principal socio comercial de Brasil. Las exportaciones de Brasil a China pasaron de 1085 millones de dólares en el año 2000 a 10777 en el 2011. Por su parte, las

importaciones treparon de 1219 millones de dólares en el 2000 a 12596 en 2011 (Paulino, 2020).

Los ejes en los que participa Brasil fueron desarrollados teniendo en cuenta los análisis de flujos comerciales realizados por el BID, así como también las vías de conexión que se hacían indispensables facilitar. Estos EIDs fueron pensados y diagramados teniendo en cuenta las principales ramas y economías regionales que era necesario potenciar y fortalecer, buscando reducir el llamado "Costo Brasil", es decir, los costos vinculados a los déficits logísticos.

3.1.1. *Amazonas*

Este eje, que representa territorialmente el 45% de América del Sur. Incluye las regiones amazónica y nordestina junto a los estados brasileños de Goias y Tocantins; el área centro sur de Colombia; toda la superficie continental del Ecuador y la porción centro norte del Perú. Del total de la superficie, Brasil participa con el 80%, Perú el 10%, Colombia el 7%, y Ecuador el 3%.

Área de influencia del Eje Amazonas

Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Tal como se puede observar en la imagen anterior, este eje atraviesa la región norte del subcontinente conectando los océanos. Su superficie es una franja de 200 kilómetros de ancho y 20 mil kilómetros de largo de vías navegables, cuya infraestructura esta demarcada por la Cordillera de los Andes y la cuenca del Río Amazonas (zona más militarizada del subcontinente). Se trata de un EID de gran importancia no sólo porque atraviesa la selva más grande del mundo, sino también porque abre una brecha en el

continente por su parte más ancha, atravesando un área 250 veces mayor que la del Canal de Panamá.

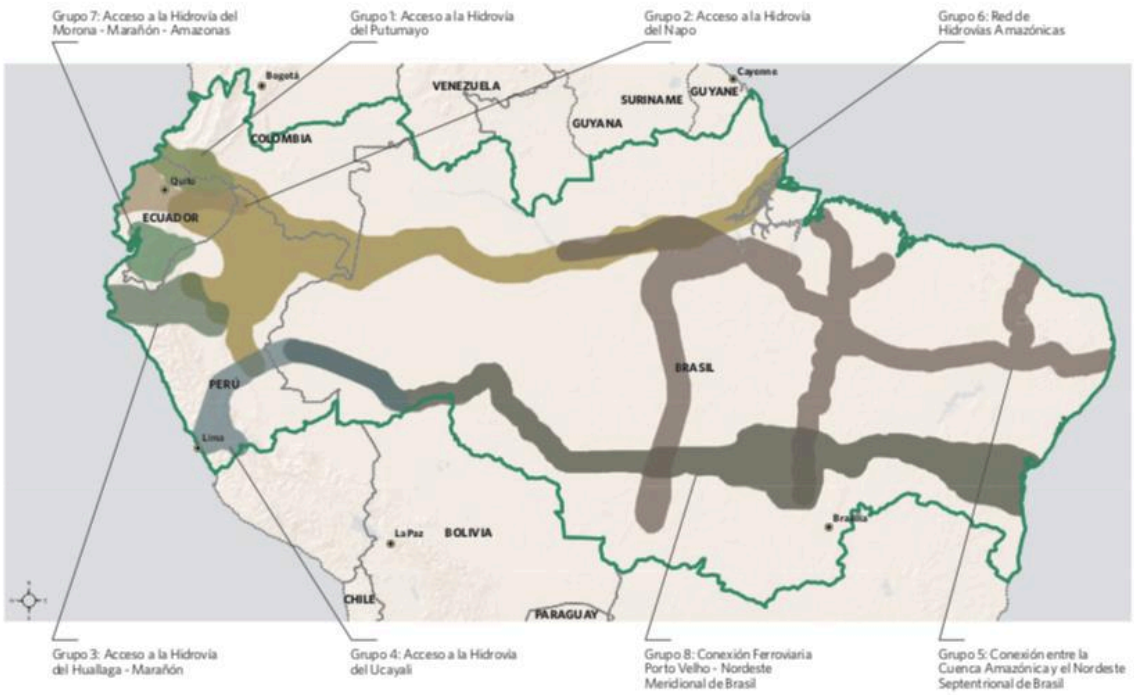
La vía de interconexión plantea la unión de los ríos a través de los puertos Tumaco (Colombia), Esmeraldas (Ecuador), Paita (Perú), Manaos, Belén y Macapá (Brasil). Esta franja concentra el 40% de la biodiversidad del planeta y entre el 15 y 20% de agua dulce no congelada. A su vez, posee grandes reservas de carbón y es una gran fuente de biomasa (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007).

Además de los bienes comunes naturales con los que cuenta, la economía de la región es muy variada, dado que posee actividades industriales (electrónica, biotecnología, química, farmacéutica, cemento, naval, aluminio, fertilizantes), agrícolas (caña de azúcar, algodón, tabaco, café, soja, sorgo), agroindustriales, forestales, pesqueras, extractivas (petróleo, gas, carbón, metales, uranio, hierro, oro, esmeraldas) y turísticas. A su vez, tiene grandes condiciones para la generación de energía mediante la instalación de represas hidroeléctricas (ibíd.).

En el marco de este eje, se incluyen los proyectos vinculados al potencial hidroeléctrico del río Madeira[72]. Estos buscan "convertir la Amazonía en una gigantesca usina hidroeléctrica, trastocando y destruyendo todo el equilibrio ambiental y regional" (FOBOMADE y CGIAB, 2007).

[72] Principal afluente sur del río Amazonas. El sistema fluvial del Madeira-Mamoré-Grande cuenta con una longitud de 4207 km, lo que lo hace uno de los principales cursos de agua de América del Sur.

Mapa de los proyectos del Eje Amazonas



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Tal como podemos observar en la imagen anterior, la cartera del Eje se divide en ocho grupos. De ellos, seis están ligados a consolidar el sistema de hidrovías en la Cuenca del Río Amazonas y dos a la creación de una Ferrovía Transcontinental en el nordeste de Brasil. Cuenta con 46 proyectos con una inversión estimada en los 20423 millones de dólares.

Los proyectos de este eje tienen una gran importancia para Brasil dado que conectan numerosas ciudades brasileñas -se inicia en Belem y Macapá, en la costa del océano Atlántico- con los puertos hacia el Pacífico en Perú y Ecuador. Se incluyen la Carretera Interoceánica Norte, la cual desemboca en el Puerto Paita (Perú), y la Centro, que llega hasta Lima.

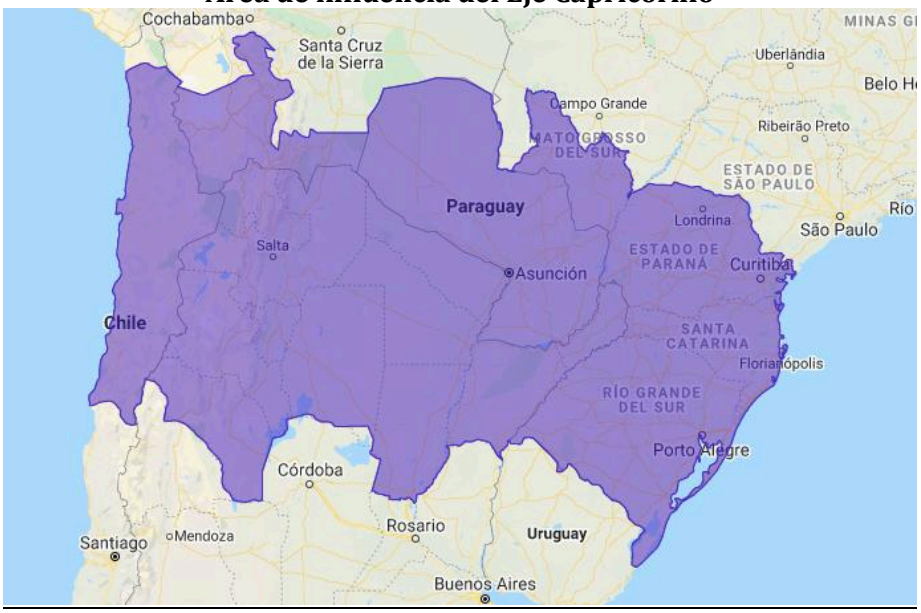
Por otro lado, el eje incluye el proyecto para el río Madeira. Este no sólo plantea la construcción de una hidrovía de una longitud de 4200 kilómetros, lo que haría posible la navegación de grandes embarcaciones, sino también el desarrollo de cuatro represas y una gran línea de conexión y transporte de energía, lo que implicaría favorecer el abastecimiento energético brasileño.

3.1.2. *Capricornio*

Este eje representa el 15,4% de la superficie de América del Sur. Tal como observamos en la imagen que se encuentra a continuación, este EID se extiende desde la costa del

océano Pacífico en las regiones de Atacama, Antofagasta y Tarapacá en Chile, atravesando la región andina de Bolivia, las provincias de Potosí y Tarija, integrando las regiones del Noroeste y Noreste de Argentina, incorporando toda la República de Paraguay y los Estados de Brasil correspondientes a Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul.

Área de influencia del Eje Capricornio



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

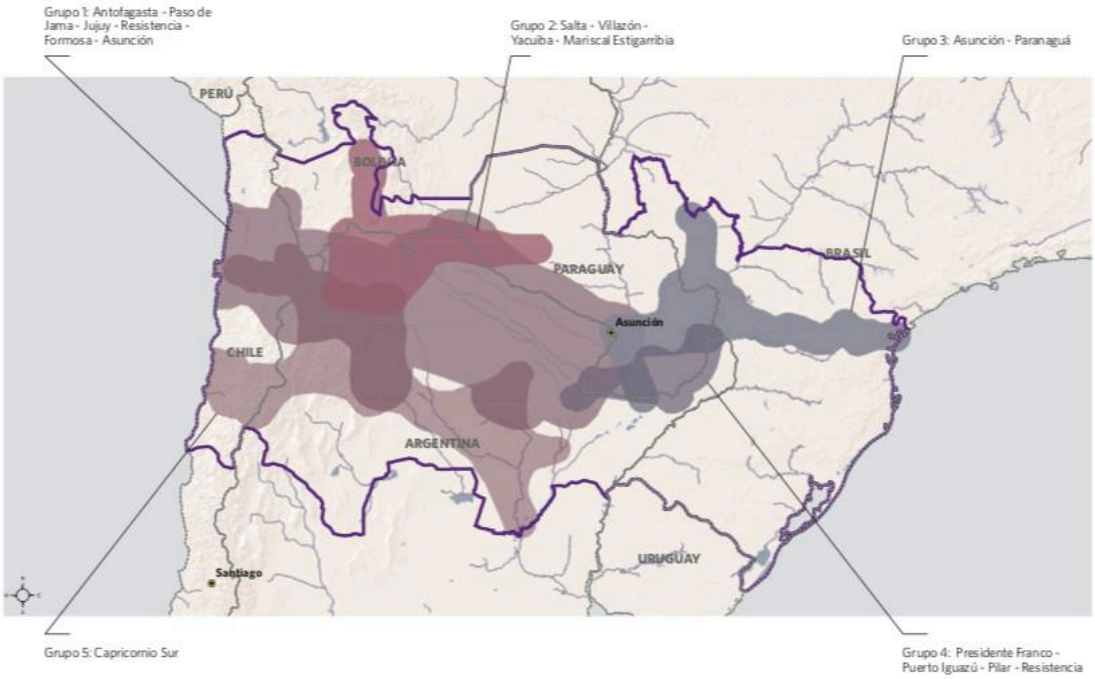
La participación varía entre los países que integran el Eje: Paraguay interviene con el 100% de su economía, mientras que los países restantes contribuyen con un porcentaje que oscila entre el 14 y el 17% de su PIB. Por otro lado, Brasil aporta el 68% del PIB agregado del Eje, Argentina el 19%, Chile el 7%, Paraguay el 4% y Bolivia el 1%.

Esta región tiene una importancia estratégica, dado que posee yacimientos de gas natural en Bolivia, los petrolíferos y de litio en el área fronteriza ubicada entre Bolivia y Argentina, y una gran parte de los metálicos emplazados en la Cordillera de los Andes en territorio chileno y argentino. Por otro lado, integra el sur industrializado de Brasil y la zona agrícola, particularmente la sojera, de Paraguay, Argentina y Brasil. Por último, cuenta con la capacidad hidroeléctrica de Itaipú y Yacyretá, y contiene el mayor acuífero del continente, el Guaraní (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007).

Tal como se plantea en la Cartera de proyectos de IIRSA, el conjunto de obras está orientado a fortalecer la conectividad de los territorios hacia el Pacífico y hacia la

Hidrovía Paraná-Paraguay. Cubre una superficie de 1798700 de kilómetros cuadrados y se ubica entre los ejes Interoceánico Central y MERCOSUR-Chile.

Mapa de los proyectos del Eje Capricornio



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

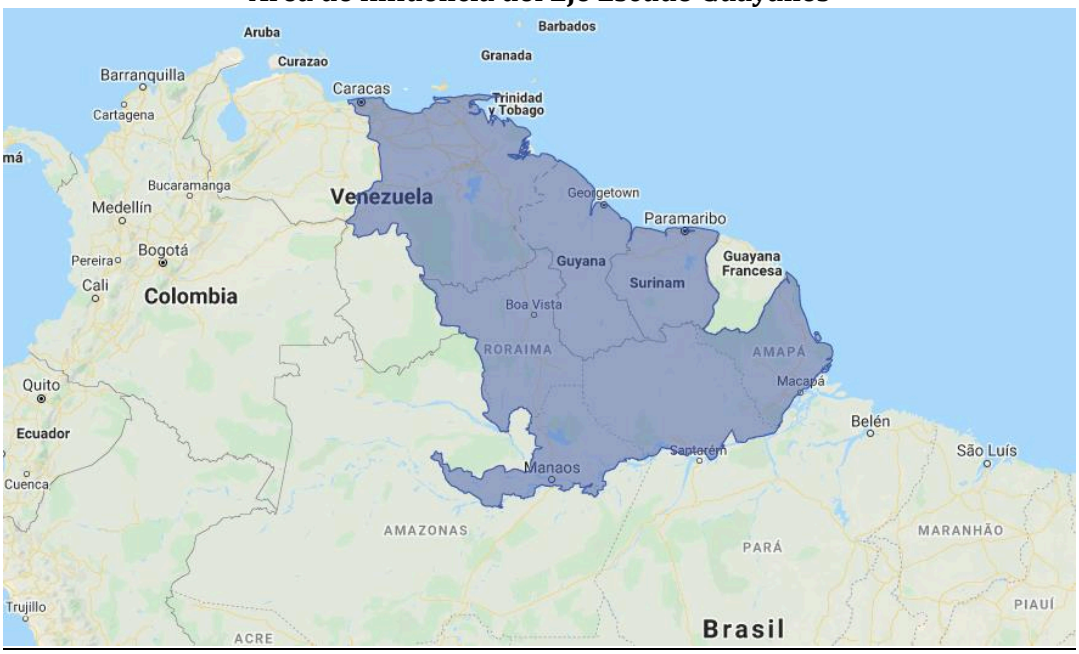
Tal como se observa en la imagen anterior, este eje también une las costas del Atlántico y el Pacífico. La Cartera cuenta con 57 proyectos, divididos en cinco grupos, con una inversión estimada de 12897 millones de dólares. La mayor parte de los proyectos están vinculados al transporte, siendo el sector de carreteras el que implica mayor cantidad de proyectos e inversión, seguido por el ferroviario.

Algunas de las obras a realizarse en este Eje tienen una clara importancia para Brasil. Tal es el caso del tramo del ferrocarril paraguayo Presidente Franco-Curupayty, el cual implica la unión entre los puertos de Brasil y los del norte de Chile por el paso Jama, en la cordillera de los Andes. Este, a su vez, conecta con el Ferrocarril Belgrano Cargas, completando así 2900 kilómetros de extensión. Esto implicaría una reducción, según las estimaciones, de un 75% del costo logístico (Álvarez, 2018), es decir, estas obras tendrían un impacto central en la reducción de lo que se conoce como el "Costo Brasil", en este caso para favorecer la salida de mercancías hacia el Pacífico.

3.1.3. *Escudo Guayanés*

Este eje se ubica en la región norte del subcontinente. Tal como podemos observar en la siguiente imagen, integra la totalidad de Guyana y Surinam; una porción de Venezuela que comprende los estados que forman parte de la cuenca del Orinoco junto al Distrito Capital de Caracas y los estados de la costa norte del país; la totalidad de los estados brasileños de Roraima y Amapá y una porción menor de los estados de Amazonas y Pará, que incluye entre otros al municipio de Manaos.

Área de influencia del Eje Escudo Guayanés



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Tal como se plantea en la cartera de proyectos, el conjunto de obras está orienta a integrar los sectores económicos con mayor potencial: el de la industria pesada, bienes durables, minería y joyería, agronegocios y turismo. Las conectividades implicadas eran: (1) Venezuela-Brasil (Caracas y Manaos, Guri y Boa Vista, Manaos y el sur de Venezuela); (2) Brasil-Guyana (Amazonas y Roarima, y Guyana); (3) Venezuela-Guyana-Surinam; y (4) Guyana-Surinam-Guayana Francesa-Brasil (en particular los estados de Amapá y Pará).

Tal como se observa en la siguiente imagen, los proyectos se dividen en cuatro grupos: uno apunta a la conexión entre Brasil y Venezuela; otro entre Brasil y Guyana; el tercero entre Venezuela, Guyana y Suriname; y el último entre Guyana, Suriname, Guayana Francesa y Brasil. De los 32 proyectos que se articulan, siete se vinculan a la generación y transmisión de energía eléctrica, cuatro al transporte fluvial y marítimo, 18 al terrestre, dos a las telecomunicaciones por fibra óptica, y un proyecto, ubicado en Boa Vista, para

el desarrollo de una planta de procesamiento de celulosa y de café (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007).

Mapa de los proyectos del Eje Escudo Guayanés

Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

La región que abarca el EID contiene petróleo, bauxita, oro, hierro, gas, maderas, biodiversidad, y abundantes reservas de agua dulce. A su vez, se encuentra atravesada por múltiples ríos, que, si bien dificultan las comunicaciones, ofrecen buenas condiciones para la generación de energía. Se trata, además, de la salida atlántica de la cuenca amazónica tanto para facilitar la extracción de recursos naturales, como para favorecer la exportación de productos industriales de la región de Manaos (Ceceña, Aguilar y Motto, 2017).

Si bien este Eje no fue una de las principales apuestas de Brasil en el marco de la IIRSA, algunas de las obras a realizarse poseían un potencial de crecimiento. En el marco de este EID se concluyó la pavimentación de la carretera Boa Vista-Bonfim, lo que mejoraría el tráfico de mercaderías. Por otro lado, se finalizó un tendido de fibra óptica entre Caracas y el norte de Brasil, lo cual permitiría mejorar la calidad de las comunicaciones internacionales en esta región brasileña. Por último, se encuentra en ejecución (según la página web oficial de IIRSA) la rehabilitación de la carretera Caracas-Manaos. Considerando que la balanza comercial con Venezuela tiene un saldo positivo de 3457964

millones de dólares (COSIPLAN, 2013), esta vía de conexión facilitaría la exportación de mercancías.

3.1.4. *Hidrovía Paraná-Paraguay*

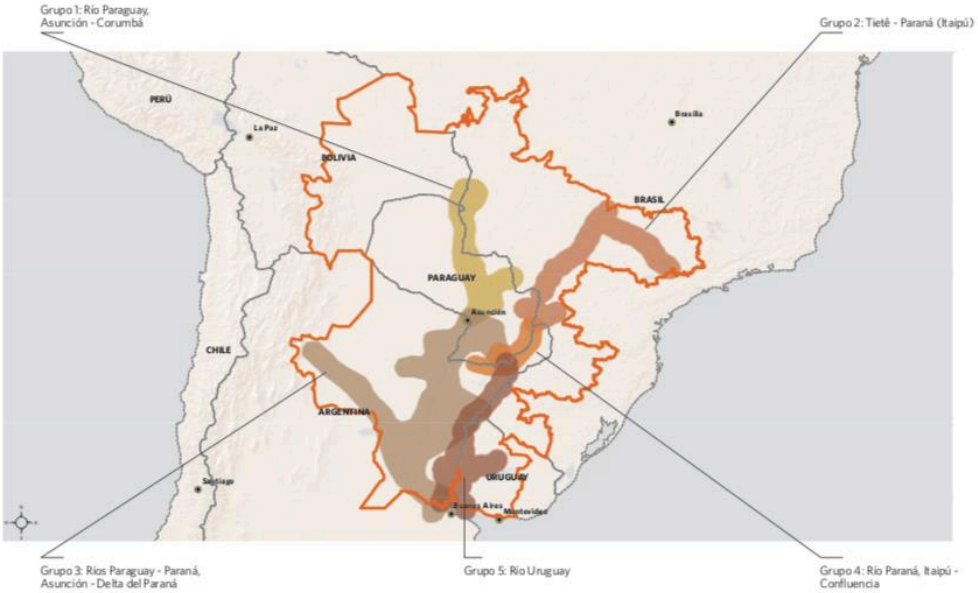
Tal como observamos en la imagen que se encuentra a continuación, este eje integra regiones de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay en torno a las cuencas de los Ríos Paraguay, Paraná, y Uruguay, todas tributarias de la gran Cuenca del Río de la Plata. Esta hidrovía, junto con la del río Madeira-Beni, representa el corte longitudinal que integra la región sudamericana central de norte a sur y que le da salida al Atlántico por el río de la Plata.

Área de influencia del Eje Hidrovía Paraná-Paraguay

Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Los proyectos vinculados a la navegación de la hidrovía se desarrollaron décadas atrás y fueron incorporados, posteriormente, a la IIRSA. Tal como se plantea en la Cartera de proyectos de la Iniciativa, los objetivos centrales de este EID son: por un lado, favorecer la competitividad de los países y regiones a través una conexión eficiente con el Atlántico; por otro lado, fortalecer y estimular la integración de las cadenas productivas y de consumo; y, por último, facilitar los flujos de habitantes.

Mapa de los proyectos del Eje Hidrovía Paraná-Paraguay



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Como se observa en la imagen anterior, la cartera se divide en cinco grupos, los cuales están integrados por 97 proyectos. De éstos, 33 se vinculan a la infraestructura portuaria, 18 a la fluvial, 16 a la ferroviaria, 20 al transporte vial, y uno al aéreo. A su vez, se planteó la construcción de una represa hidroeléctrica, dos centrales termoeléctricas, un gasoducto, una estación transformadora, un proyecto de trasposición de Itaipú; y, por último, tres se encontraban relacionados con las tecnologías de la información.

Tal como sostiene Eliezer Batista da Silva (1997), la hidrovía tiene una doble importancia. Por un lado, es una arteria de interconexiones multimodales con otros medios de transporte, lo que permite abaratar los costos logísticos vinculados a la circulación. Por otro lado, posee un potencial para generar 60 mil Megawatts[73] de energía hidroeléctrica (Álvarez, 2018).

En la dimensión económica, la región concentra la exportación de granos, cereales, madera, cargas pesadas (minerales de hierro y manganeso que va de Corumbá a Barranqueras, San Nicolás, Villa Constitución y Nueva Palmira), fertilizantes y combustibles líquidos y gaseosos (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007). En esta región, se concentra la mayor producción de soja a nivel mundial, lo que la compañía multinacional

[73] Medida de potencia que equivale a 1 millón de watts. El vatio o watt (símbolo: W) es la unidad derivada coherente del Sistema Internacional de Unidades para la potencia. Se utiliza para cuantificar la tasa a la que se transfiere la energía. Es una unidad aplicable a cualquier potencia, ya sea mecánica, eléctrica, magnética, acústica, o de cualquier otra índole.

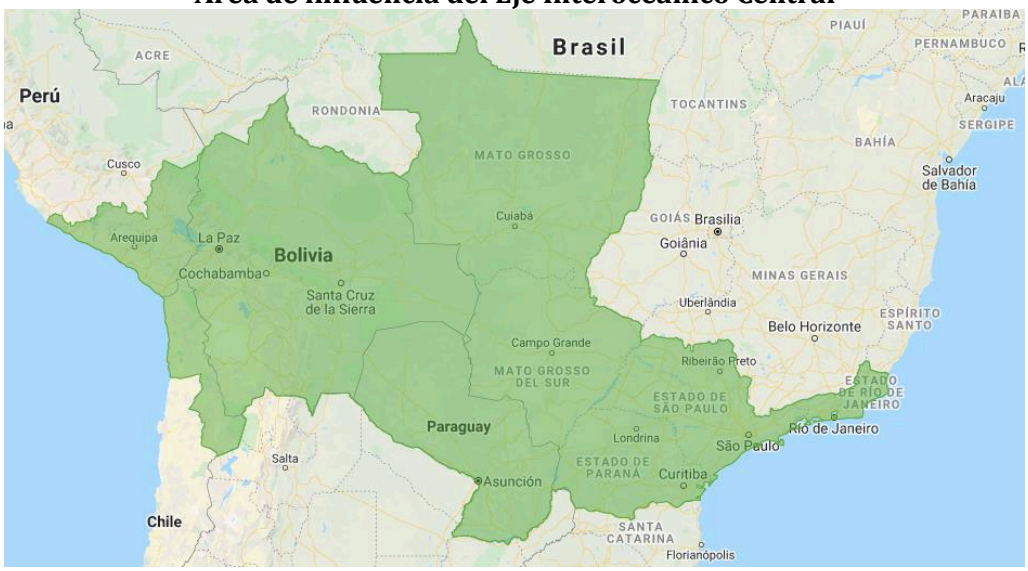
de agronegocios Syngenta ha denominado la "República Unida de la Soja", es decir, que involucra a Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.

La importancia que tienen las obras a realizarse en el marco de este eje para Brasil está centrada, sobre todo, en la exportación de algunas *commodities* producidas en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. Esto se debe a que por las obras de la hidrovía se facilitaría la extracción de parte de la producción agrícola de Mato Grosso y de mineral de hierro del yacimiento Urucum, ubicado en Mato Grosso del Sur (Álvarez, 2018).

3.1.5. *Interoceánico Central*

Como podemos observar en la imagen siguiente, este eje atraviesa la región centro de costa a costa, conectando 29 puertos del océano Pacífico y del Atlántico, así como diversos nodos de transporte que integran Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Abarca ocho de los nueve departamentos de Bolivia (con excepción de Pando), cinco estados de Brasil (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro y San Paulo), la primera región de Chile, todo Paraguay y las provincias peruanas de Arequipa, Moquegua y Tacna.

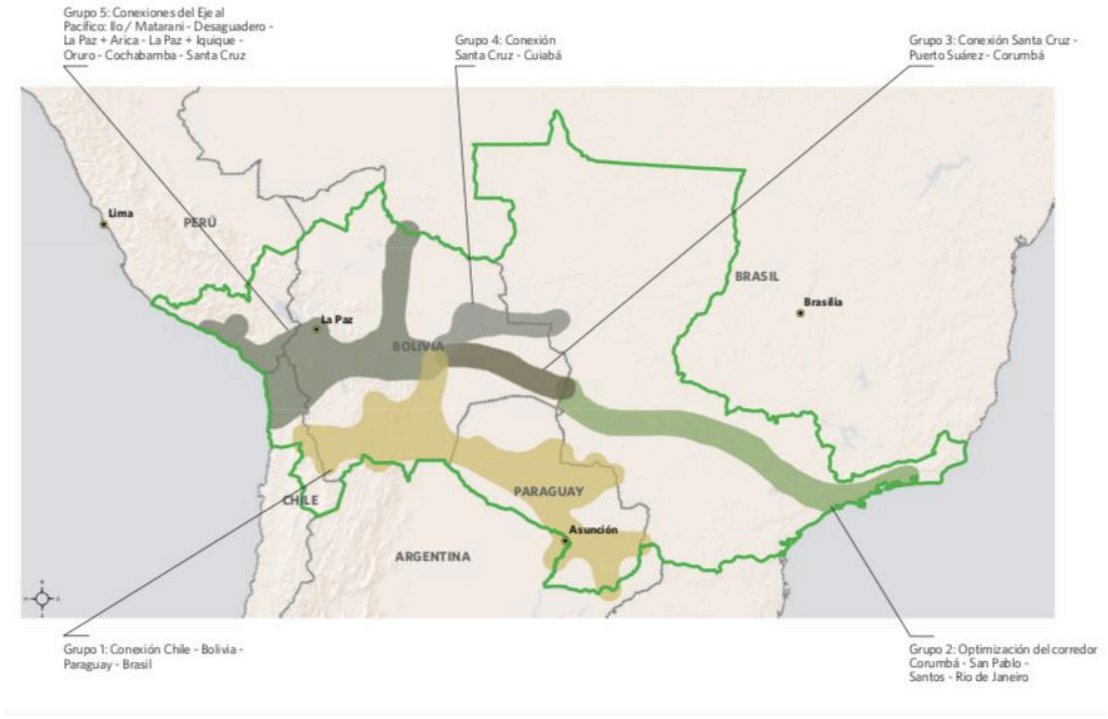
Área de influencia del Eje Interoceánico Central



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Tal como se desprende de la siguiente imagen, los 44 proyectos a realizarse se dividieron en cinco grupos. De estos, 22 corresponden a transporte carretero, tres a marítimo, siete a ferrocarriles, tres a aéreos y seis pasos de frontera; además de un proyecto de conexión energética y dos de telecomunicaciones. La inversión estaba estimada en 18815 millones de dólares.

Mapa de los proyectos del Eje Interoceánico Central



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

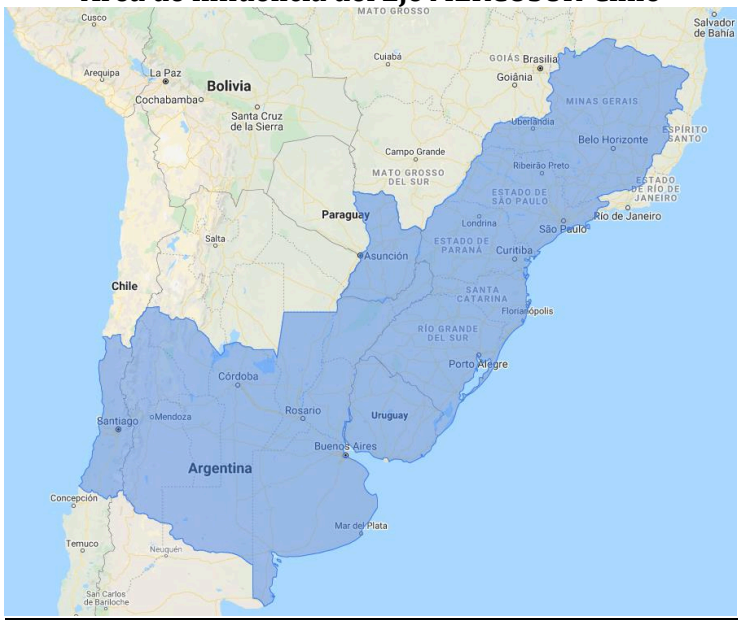
Este EID está compuesto por una región agrícola de suma importancia (centrada en la producción de soja, oleaginosas, cítricos, caña de azúcar y forrajes) y agroindustrial (cárnicos, lácteos, vinos), la cual se complementa con el corredor industrial Belo Horizonte-Río de Janeiro-São Paulo. A su vez, existe una gran disponibilidad de minerales esenciales (carbón, cobre, estaño, hierro, litio, potasio, oro, plata y zinc). En términos energéticos, existen enormes reservas de gas en el sur de Bolivia, así como también grandes represas hidroeléctricas como Yacyretá e Itaipú (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007). Este eje está integrado, hacia el Este, por el mayor núcleo industrial de América del Sur, que son los estados brasileños de San Pablo y Río de Janeiro, con desarrollo en industria textil, química, metalúrgica, metalmecánica, automotriz y de materiales de transporte, así como también con producción de petróleo y gas natural. Por su parte, la región de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul se caracteriza por el desarrollo en energía hidroeléctrica, la producción de soja, algodón, tabaco, caña de azúcar, yerba mate, cítricos, madera, productos forestales y la ganadería (Barrenengoa, 2019). De esta forma, la cartera de proyectos que integran este EID, dado su carácter bioceánico, era de vital importancia

para Brasil, frente a la creciente relación comercial establecida con los países del sudeste asiático.

3.1.6. *MERCOSUR-Chile*

Como podemos ver en el mapa que se ubica a continuación, este EID conecta parte de la región centro y sur de Brasil con los puertos chilenos. El eje integra los estados brasileños de Río de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul; la totalidad de Uruguay; la región occidental paraguaya; la Mesopotamia y la región central de Argentina; y las regiones chilenas de Coquimbo, Valparaíso, Libertador O´Higgins y Santiago.

Área de influencia del Eje MERCOSUR-Chile



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

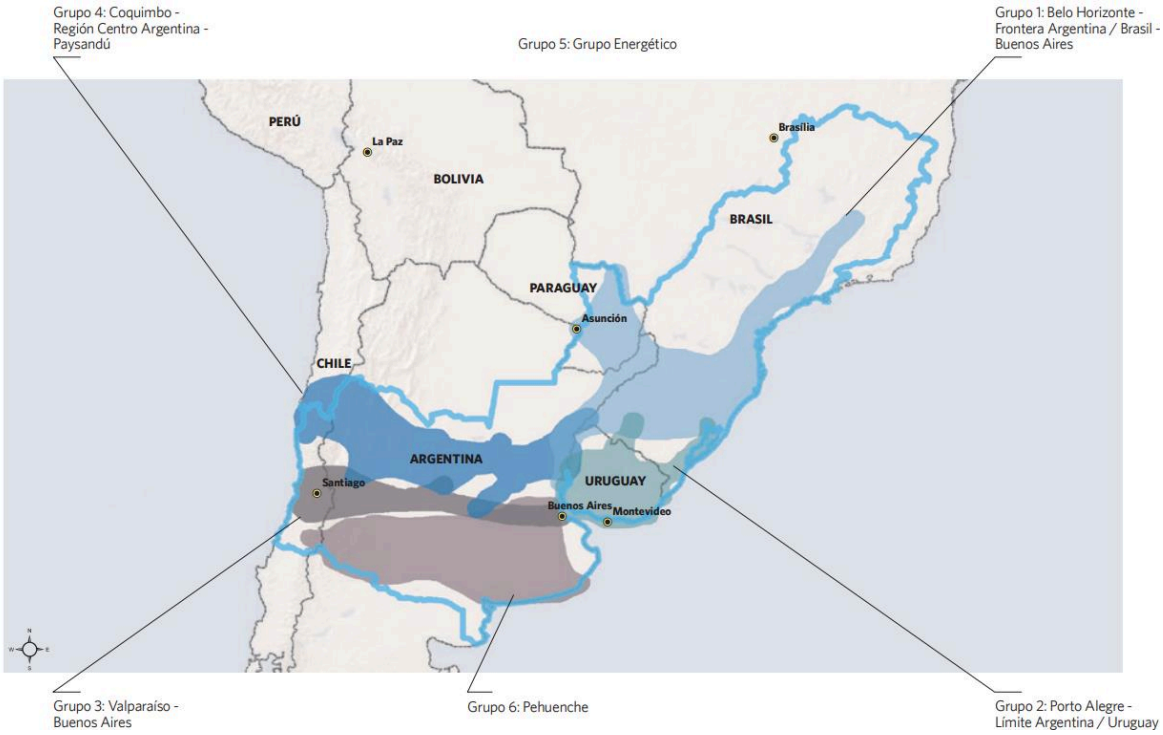
En el marco de la cartera de proyectos de la IIRSA, se definieron como objetivos centrales de este eje: (1) desarrollar infraestructura y logística para aumentar el comercio entre los mercados locales, regionales y globales; (2) incrementar la competitividad de las cadenas productivas existentes y desarrollar nuevas; (3) optimizar los flujos de bienes y servicios, promover el desarrollo del turismo y facilitar la circulación de personas; y (4) incrementar la capacidad de los sistemas eléctricos y gasíferos, y diversificar la matriz energética.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, los proyectos fueron divididos en seis grupos que conectan ambos océanos, destacándose, en relación a Brasil, el grupo 1, que

apunta a la conexión entre Belo Horizonte y Buenos Aires, y el grupo 2 que interconecta Porto Alegre con Argentina, vía Uruguay. A su vez, los grupos 3 y 4 terminan la conexión hacía el Pacífico.

De los proyectos que integran la cartera, 68 son de comunicaciones y transporte, de los cuales 39 corresponden a carreteras, ocho a vías marítimas, cuatro al transporte ferroviario, cinco a pases de frontera y dos aéreos. En relación a la dimensión energética, cinco proyectos son de interconexión (tres de interconexión eléctrica y dos a nuevos gasoductos) y cinco de generación (cuatro hidroeléctricas y una termoeléctrica).

Mapa de los proyectos del Eje MERCOSUR-Chile



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

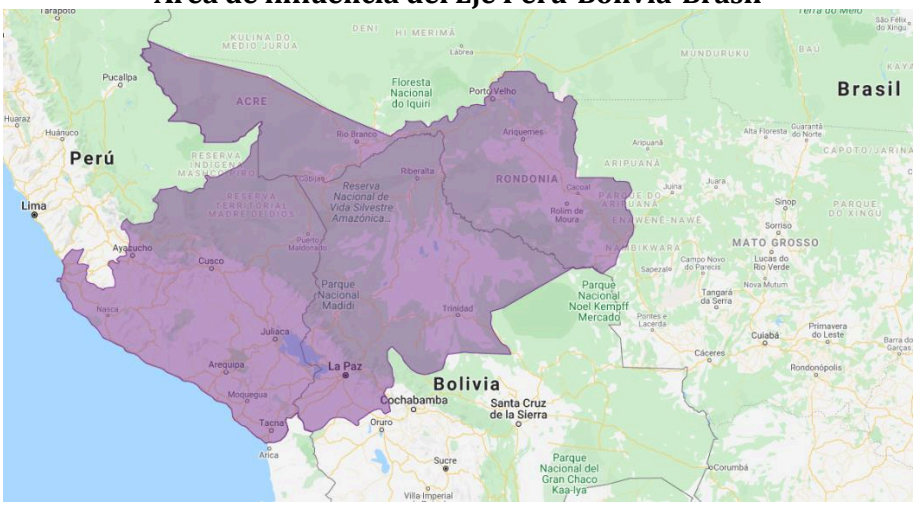
A nivel económico la región cuenta con gran nivel de exportación de bienes primarios: cereales, oleaginosas, hortalizas, frutas, carnes, soja, pieles, cueros, madera, pescados, minerales metálicos y no metálicos, petróleo y gas, algodón, tabaco y café. A su vez, concentra la producción de mercancías agroindustriales: forestal, maderera, papel, alimentos, bebidas, jugos, lácteos y vino; e industriales: aeronáutica, automotriz, metalmecánica, petroquímica, materiales de construcción, metalurgia–siderurgia y aluminio, electrodomésticos, textil, confecciones, goma y plásticos (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007).

En relación a los intereses brasileños, además de la importancia de las actividades económicas concentradas en los estados de Río de Janeiro y San Pablo -enunciadas con anterioridad-, el resto de los estados que integran el eje –Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná y Río Grande do Sul- reúnen otras actividades como el sector de alimentos, materiales de construcción, extracción de minerales, carbón y hierro, siderurgia, tecnología, agroindustria y logística, carnes, suinocultura, avicultura, cerámica, metalmecánica, material eléctrico, entre otros. Por ello, los proyectos de los grupos que facilitan la conexión hacia el océano Pacífico tienen vital importancia para Brasil, dado que muchos de estos bienes primarios, intermedios e industriales, tienen como principal destino los mercados asiáticos, sobre todo el chino y el indio.

3.1.7. *Perú-Bolivia-Brasil*

Tal como se observa en el mapa que se encuentra a continuación, este eje se extiende por los departamentos peruanos de Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurimac, Cusco, Madre de Dios y Puno; de Bolivia, Pando, Beni y La Paz; y por los estados de Brasil, Acre y Rondônia. Del total de la superficie, Bolivia y Brasil participan con un 35% cada uno, y Perú con el 30% restante.

Área de influencia del Eje Perú-Bolivia-Brasil

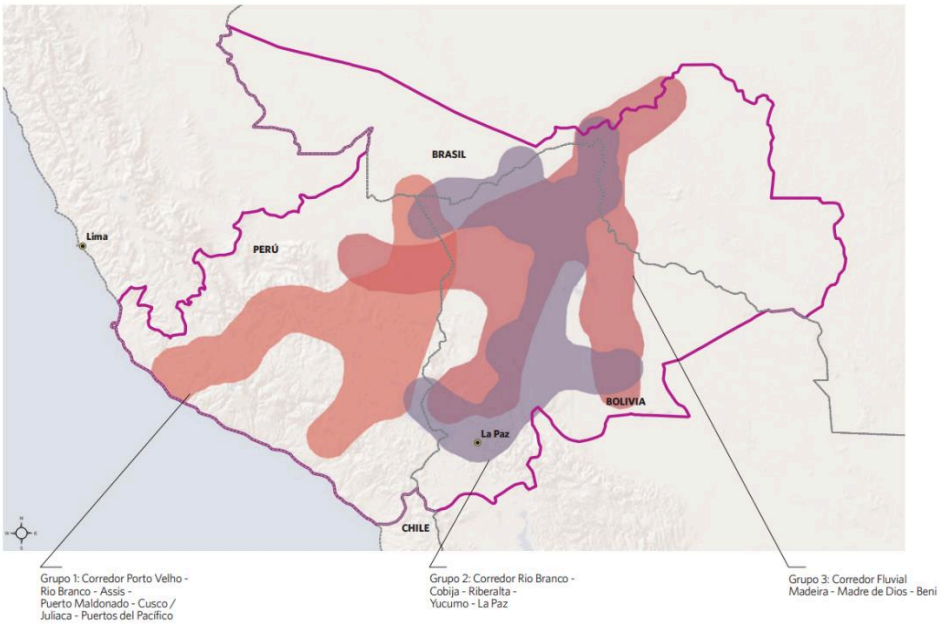


Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

El conjunto de obras de este EID tiene como objetivo la diversificación de la matriz energética y la consolidación de una vía fluvial internacional. La cartera cuenta con 18 proyectos, de los cuales seis corresponden al transporte carretero, cuatro al fluvial, uno al aéreo y tres al mejoramiento de pasos de frontera. En relación a la dimensión

energética, se contempló el desarrollo de tres microcentrales hidroeléctricas y una interconexión eléctrica.

Mapa de los proyectos del Eje Perú-Bolivia-Brasil



Fuente: IIRSA-COSIPLAN.

Tal como observamos en la imagen anterior, las obras a realizarse se dividen en tres grupos. El primero que conecta Porto Velho y Rondônia, con los puertos del Pacífico en Perú, los de Marcona, Matarani e Ilo. El segundo que enlaza el Corredor Río Branco con La Paz, Bolivia. Por último, la conexión fluvial del Río Madeira, en Brasil, hasta Beni, Bolivia.

La región cuenta con gran cantidad de diversidad genética y conocimiento ancestral en torno a la misma, lo que implica grandes posibilidades para la industria farmacéutica, biotecnológica y aquellas vinculadas con el aprovechamiento de los principios activos de las plantas (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007). A su vez, la actividad económica central está ligada a la agroindustria, la ganadería, la fruticultura, madera y derivados, piscicultura, pesca, artesanías, papel, químicos, fitofármacos, electrodomésticos, metalúrgica, termoplásticos, relojería, textiles, generación de energía eléctrica y turismo; y a *commodities* como la caña de azúcar, la soja, el gas natural, el oro y los diamantes.

La importancia de este eje para Brasil posee una doble dimensión. Por un lado, la posibilidad desarrollar hidroeléctricas que lo abastezcan de energía y el favorecer la navegación del río Madeira. Por otro lado, continuar mejorando y habilitando vías de

salida hacia el Pacífico, buscando reducir el costo logístico implicado en la exportación de mercancías.

Las actividades económicas principales del estado de Rondônia están vinculadas a la agricultura, la ganadería, la industria maderera y de producción de muebles, y la extracción de minerales, tales como casiterita, granito, arcilla, piedras semipreciosas y oro. Por su parte, el estado de Acre se caracteriza por una actividad económica centrada en la extracción de la goma y de la nuez del Brasil, así como también en extracción vegetal y agropecuaria, y un desarrollo considerable de la rama industrial, vinculado a la producción alimenticia, maderera, cerámica y de muebles (Departamento de Apoyo a los PMDER, 2005).

En el marco de este Eje, se llevó adelante la carretera Interoceánica Sur, que conecta Brasil y Perú, y que ocupa un lugar clave en uno de nuestros casos de estudio: el territorio donde se emplazaría la represa de Inambari. Esta carretera se dividió en cinco tramos, y recorre siete departamentos de la zona sur peruana (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios), llegando a la zona de Iñapari, en el límite con Brasil. Ésta vía de conexión sería inundada por el embalse que generaría la central hidroeléctrica de Inambari, lo que generó el rechazo por una gran parte de la población y desató una situación conflictiva, tal como vamos a analizar en los capítulos que se encuentran a continuación.

3.2. Financiamiento brasileño de la infraestructura

En los inicios de la IIRSA, se planteó que el financiamiento de las obras a realizarse partiría de la CAF, el BID y el FONPLATA. Por otra parte, se incluirían como entes financiadores a bancos públicos y privados, así como también los fondos públicos de los propios Estados.

Uno de los principales organismos financiadores fue el BNDES. Si bien la modificación de su reglamentación para el financiamiento de bienes y servicios brasileños en la ejecución de obras fue realizada durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, fue durante el gobierno de Lula que esta medida se profundizó y los niveles de desembolsos crecieron significativamente. Así, en el marco de un informe del propio BNDES (2004: 1), se planteaba:

> La Integración Sudamericana, uno de los principales pilares de la política exterior brasileña, pasó a formar parte de la misión del BNDES, a partir de 2003, considerando que la expansión de los mercados nacionales y el comercio entre países es fundamental para acelerar el desarrollo económico con justicia social.

> El BNDES busca reducir costos de comercio exterior, incrementar el intercambio comercial entre países sudamericanos, promover una mayor integración regional y sumar competitividad comercial.

De esta forma, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social creó tres líneas de financiamiento externo para promover la inserción internacional a través de lo que se conoce como Inversión Extranjera Directa (IED). Por un lado, el BNDES Finame, que impulsa la financiación de bienes de capital para empresas que compiten en el plano internacional. Por otro lado, el BNDES Finem, destinado a inversiones en inserción internacional. Por último, el BNDES-Exim, orientado a la financiación de las exportaciones de bienes y servicios nacionales.

A partir del desarrollo de todas estas líneas de financiamiento y de su involucramiento en obras a realizarse en el marco de la IIRSA, el BNDES se transformó en uno de los mayores prestamistas. Así, en 2010, se convirtió en el mayor banco de desarrollo del mundo, superando incluso al Banco Mundial y al BID (Clemente, 2017a). Entre 2001 y 2012, los desembolsos del Banco para infraestructura pasaron de 92 a 792 millones de dólares (Wegner, 2018).

De esta forma, el BNDES jugó un papel clave, por un lado, en la internacionalización de algunas empresas, en especial de las grandes compañías de ingeniería, financiando muchas de las obras de infraestructura llevadas adelante en la región, y, por el otro, en la viabilización y estructuración de corredores de exportación, y explotación de bienes comunes naturales. En esta línea, una circular desarrollada, en 2004, al interior de Itamaraty planteaba:

> El BNDES es el principal órgano brasileño en la implementación de la política de integración física regional, a través del financiamiento a la exportación de servicios de infraestructura. Por lo tanto, el desempeño del banco es fundamental, junto con la disponibilidad y el desembolso efectivo de recursos por parte de las instituciones financieras multilaterales (en Luce, 2007: 76).

Tal como se observa en el fragmento anterior, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se reconocía el papel que comenzó a jugar el BNDES en el marco de la política brasileña para Sudamérica. Con el correr del tiempo, el rol del Banco fue potenciándose a medida que Brasil se expandía por la región.

A su vez, desde el Programa de Financiamiento a las Exportaciones[74] (PROEX) fueron financiadas muchas empresas involucradas en obras de infraestructura física a nivel internacional. Este es un programa del Gobierno Federal, creado en 1991, para apoyar las

[74] Programa de Financiamento às Exportações.

exportaciones brasileñas de bienes y servicios, con el objetivo de posibilitar el financiamiento en condiciones equivalentes a las practicadas en el mercado internacional. Los fondos de este programa han partido del Banco de Brasil y del Tesoro Nacional.

Así, durante el discurso de Apertura de la Primera Reunión de Jefes de Estado de la CSN, llevada adelante en Brasilia en 2005, Lula destacaba la importancia del financiamiento de obras por parte de Brasil:

> Amigos míos, la casa que estamos construyendo requiere soluciones de financiación innovadoras y también exige el compromiso de nuestra comunidad empresarial. A través de BNDES y Proex, el gobierno brasileño ha financiado la exportación de bienes y servicios para realizar obras de interés directo para la integración continental. Hay 43 proyectos de infraestructura en marcha en la región con financiamiento brasileño, por un total de 4 mil millones y 300 millones de dólares. Para aprovechar aún más nuestra capacidad de financiamiento, Brasil tomó la iniciativa de convertirse en miembro de pleno derecho de la Corporación Andina de Fomento, aumentando significativamente nuestra participación en el capital de la institución (en dos Santos Honório, 2013: 79).

En efecto, en el año 2005, la cooperación entre Brasil y la CAF se transformó en una de las medidas destinadas a dinamizar el financiamiento de infraestructura en la región. Para ello, se planteó la ampliación de garantías y el aumento de aportes de capital brasileños en el marco de la CAF. A partir de esta profundización de aportes, Brasil buscó elevar su condición accionaria, pasando de accionista tipo C a miembro pleno de la CAF en 2007[75].

Así, esta medida implicaba el aumento del financiamiento de obras por parte de Brasil sin que sean destinadas directamente a través del BNDES, dado que Lula entendía que el Banco empleaba vías técnicas y pragmáticas bastante rígidas para el financiamiento de obras en el exterior (dos Santos Honório, 2013). De esta forma, las inversiones de Brasil en el marco de la CAF pasaron de 368 millones de dólares en 2003 a 1.034 millones de dólares en 2009 (Alves, 2011).

A través de todas estas líneas de crédito, el Estado Brasileño fue uno de los principales países promotores de obras de infraestructura física en el subcontinente. En un documento de balance de la Política Exterior de los gobiernos de Lula, realizado en 2011 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se subrayaba:

[75] La CAF está compuesta por Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Está compuesta por los accionistas de las series A (que serían los miembros plenos), B y C.

> Si IIRSA tuvo éxito en la implementación de una metodología y el establecimiento de una cartera de proyectos prioritarios, no se puede decir lo mismo en cuanto a la factibilidad de financiamiento de las obras (…) la mayoría de los resultados obtenidos en los últimos años en el desarrollo de la infraestructura física regional en términos de las obras ejecutadas se puede atribuir a los programas brasileños de financiamiento de exportaciones, a cargo del BNDES y BB-Proex, así como a la actuación individual de CAF. Desde 2003, Brasil ha aprobado más de US$ 10 mil millones en financiamiento para obras de infraestructura en la región (en Barrenengoa, 2019: 139).

De esta forma, mediante la implementación de estas líneas de crédito, Brasil ocupó un rol central como financiador de obras a realizarse en el marco de la IIRSA. Esto estuvo ligado a un doble objetivo: por un lado, para promover e impulsar algunas de las obras consideradas centrales por el gobierno de Lula da Silva, y, por el otro, para promover la internacionalización de algunas empresas de capitales brasileños.

4. BLOQUE EN EL PODER: LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA

Además de los sectores que se verían beneficiados por el avance de algunas obras que implicarían reducir los costos logísticos ligados a la exportación (como los que debían hacer frente las industrias del agronegocio, las mineras, la producción de bienes intermedios e industriales, entre otros sectores), algunas fracciones de clase, que fueron parte del frente neodesarrollista que integró el bloque en el poder durante los años lulistas, se vieron directamente favorecidas con el avance de algunos proyectos. El gobierno brasileño llevó adelante políticas, programas y acuerdos con otras administraciones nacionales para favorecer la acumulación de las empresas de ingeniería, impulsando y profundizando su proceso de internacionalización.

Durante la primera década del siglo XXI, las empresas de capitales nacionales ligadas a la ingeniería, construcción y siderurgia eran una de las ramas con mayor nivel de internacionalización de la economía brasileña (Pedreira Campos, 2009). Las principales compañías de este sector son: Norberto Odebrecht, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez, OAS y Camargo Corrêa.

Muchas de estas empresas surgieron en la década del cuarenta ligadas a la construcción civil, aunque con el transcurso del tiempo fueron diversificando sus actividades[76]. Algunas de estas compañías tienen un origen familiar y nacieron en la zona del nordeste del país. Esto se debe al gran número de obras de infraestructura locales que se llevaron

[76] Estas compañías se han diversificado hacia distintas ramas: textil, telecomunicaciones, petroquímica, agronegocio, financiera, entre otros (Saggioro, 2012).

adelante en la región durante las décadas del cincuenta y el sesenta, sobre todo la construcción de usinas hidroeléctricas (Pedreira Campos, 2009).

Durante el gobierno de Juscelino Kubitschek (1956-1961), se delineó el Plan de Metas, cuyo objetivo principal era modernizar y diversificar la economía brasileña. Este Plan se centraba en el desarrollo de cinco áreas clave: energía, alimentación, industria, educación y transporte. En el marco de este programa, se llevaron adelante 20 mil kilómetros de carreteras que beneficiaron a las recientemente surgidas empresas ligadas a la construcción (Camargo Corrêa en 1939, Odebrecht en 1944, Andrade Gutierrez en 1948, y Mendes Júnior y Queiroz Galvão en 1953). Esto implicó un crecimiento sustancial del nivel de estas empresas y su consolidación en el mercado interno.

Ante este crecimiento y desarrollo, las empresas tendieron a construir órganos de hegemonía que aseguren la representación y la reivindicación de los intereses del sector al interior del aparato del Estado. Así, en 1957, se creó la Cámara Brasileña de la Construcción Civil[77] (CBIC), el Sindicato Nacional de la Industria de la Construcción Pesada[78] (SINICON), en 1959, y, en mayo de 1964, la Asociación Brasileña de Ingeniería Industrial[79] (ABEMI). Este último es el organismo más importante del rubro, dado que reúne a las principales empresas constructoras y ha mantenido una relación cercana con Petrobras, que ha sido un actor central en la acumulación de estas compañías, dadas las grandes obras que la petrolera ha requerido.

Frente a la gran capacidad organizativa y el tamaño que estas compañías habían adquirido, durante el período de régimen dictatorial, que se inició en 1964, lograron negociar y presionar para conseguir la promulgación de políticas favorables a sus intereses. Así, se impulsaron programas y medidas que ofrecieron oportunidades para estas grandes empresas. Por un lado, políticas generales que favorecieron al gran capital, como el recorte del salario mínimo y las restricciones para el aumento de sueldos, la represión y silenciamiento de sindicatos, el incentivo para fusiones entre empresas, entre otras. Por otro lado, el sector de la construcción, específicamente, se vio favorecido con la creación del Banco Nacional de Vivienda[80] (BNH), cuyo objetivo principal fue la implementación de políticas de vivienda, el refinanciamiento del crédito habitacional y la

[77] Câmara Brasileira de Construção Civil.
[78] Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada.
[79] Associação Brasileira de Engenharia Industrial.
[80] Banco Nacional de Habitação.

remoción de favelas, lo que implicó la contratación de estas compañías; y con las demandas de grandes obras de ingeniería que requería la compañía semi-pública Petrobras, fundada en 1943.

Además, el gobierno de facto profundizó el modelo logístico de desarrollo de carreteras iniciado con Kubitschek, e impulsó el desarrollo de obras hidroeléctricas, de subterráneos urbanos, estadios, puentes, túneles, usinas nucleares, entre otros. Esto actuó en beneficio de las compañías ligadas al rubro de la ingeniería y la construcción. Así, para el final de la década del setenta, esta rama se consolidó como uno de los grupos monopolistas principales, en conjunto con el de bienes de producción y el financiero (Moraes y Mantegna, 1991).

Por otro lado, fue en la década del setenta cuando estas compañías iniciaron su proceso de internacionalización, consolidando su presencia, sobre todo, en América del Sur y África. Por citar algunos ejemplos: la empresa Mendes Júnior construyó la hidroeléctrica de Santa Isabel, en Bolivia, en 1969, y una carretera en Mauritania, en 1975; Odebrecht llevó adelante, en 1979, la obra de la hidroeléctrica de Charcani V, en Arequipa, Perú; Camargo Corrêa participó de la construcción y montaje, en 1978, de la usina de Guri, en Venezuela; Queiroz Galvão erigió la represa de Paso San Severino, en Uruguay, en 1984; ese mismo año, Andrade Gutierrez se involucró en el desarrollo de las carreteras Epena-Impfondo-Dongou, en Congo, y Cochabamba-Chimaré y Yapacani-Guabirá, en Bolivia.

Dada la desaceleración del mercado interno, las empresas de ingeniería comenzaron a presionar al gobierno para que favoreciera su salida hacia los mercados dependientes, entendiendo que poseían el desarrollo y los conocimientos necesarios para la construcción de obras de envergadura. A su vez, estas compañías consideraban que en el mercado externo podrían obtener mayores lucros, dado que ya habían conseguido articularse internamente para conseguir los apoyos necesarios en favor de su internacionalización (Cabral de Vasconcellos, 2014).

En relación al soporte gubernamental, durante el gobierno dictatorial existió un apoyo por parte de Itamaraty y de otros organismos estatales para la internacionalización de las empresas de este sector. Un claro ejemplo de esto fue el Decreto-Ley 141-8/75 que establecía incentivos para la exportación de servicios de ingeniería a las empresas nacionales, a las cuales se les otorgaba el derecho a reducir sus beneficios imponibles por

la venta de servicios en el extranjero. Además, el gobierno participó de proyectos internacionales e impulsó el financiamiento directo (Campos, 2008).

Mediante la implementación de estas medidas y políticas, las empresas que integraban el oligopolio de la construcción se vieron claramente beneficiadas durante el período de gobierno de facto. De hecho, varios trabajos abordan la hipótesis de la relación estrecha entre el gobierno dictatorial y el bloque conocido como "las cuatro hermanas": Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez y OAS[81] (Campos, 2012; Durand, 2019).

Tras la vuelta a la democracia en Brasil, la presencia de estas empresas de ingeniería en los mercados de América del Sur y África se mantuvo. Sin embargo, el financiamiento destinado por parte del BNDES para el desarrollo de obras de infraestructura mermó, dado que, durante los años neoliberales, las políticas estatales reconfiguraron el papel del BNDES, ligándolo fundamentalmente a la gestión de las privatizaciones (Barrenengoa, 2020).

A partir de 2003, con la llegada de Lula da Silva al gobierno, el proceso de internacionalización de estas empresas se profundizó significativamente. De hecho, cuando ocupaba el puesto de Jefa del Gabinete Civil de la Presidencia (2005-2010), Dilma Rousseff afirmó: "[Es necesaria] una estrecha relación entre el sector público y el sector privado. Íntima en el buen sentido, es decir, una relación de asociación, de cooperación, de apoyo del gobierno a sus empresas, ya sean privadas nacionales o extranjeras" (Saggioro, 2012: 2015).

Así, durante este período, numerosas políticas internas, así como la política externa fueron centrales en el proceso de internacionalización y acumulación de las empresas de ingeniería. Uno de los objetivos centrales de la Política de Desarrollo Productivo (PDP), analizada en el capítulo anterior, era el desarrollo de infraestructura física y energética, en el marco del cual la integración con América Latina y África cobró un lugar estratégico, dado que se establecieron a los países de estas regiones como consumidores o receptores de las inversiones brasileñas (Barrenengoa, 2020). En este marco, las compañías de ingeniería cobraron un papel central, desarrollando proyectos de gran escala.

Otro de los actores clave en el proceso de internacionalización y acumulación de las empresas de esta rama fue el BNDES, dado que la modificación realizada en 2002, a través de la cual se habilitaba el financiamiento de obras en el exterior, tenía como condición

[81] OAS fue creada en 1976 en Salvador y tuvo un meteórico ascenso.

que las mismas se realizaran a través de empresas de capitales nacionales. De hecho, un documento del propio BNDES, realizado en 2004, planteaba: "Los cambios en el enfoque de acción del BNDES en la primera década del 2000 se refieren principalmente al apoyo a la internacionalización de empresas brasileñas y al financiamiento de obras de infraestructura, cuyo principal destino fue América del Sur" (en dos Santos Honório, 2013: 81). Así, entre 2007 y 2014, las exportaciones de bienes y servicios de ingeniería implicó desembolsos por un total de 11.4 billones de dólares, siendo las principales empresas beneficiadas Odebrecht (7.7 billones), Andrade Gutierrez (2.6 billones), Queiroz Galvão (389 millones), OAS (354 millones) y Camargo Corrêa (259 millones) (Santos, 2015a).

Por otro lado, el proceso de desarrollo de una obra de infraestructura, implica la realización de estudios de factibilidad y de impacto socioambiental. Por ello, otro sector clave en el marco del avance de grandes proyectos es el de consultoría. Durante los años de gobierno de Lula da Silva, grandes consultoras ganaron licitaciones para la realización de obras en Sudamérica.

Una empresa que fue parte del bloque en el poder durante estos años fue Engevix Engenheria, principal consultora de Brasil. Fue fundada en 1965 con el objetivo de sortear la legislación que impedía que una compañía esté involucrada en la elaboración del proyecto y en su construcción. Esta compañía proporciona servicios para los sectores de energía (generación, transmisión y distribución), petróleo y gas, petroquímicos, siderurgia, minería, pasta de papel y papel, e infraestructura (transporte y saneamiento básico). Durante los años de gobierno de Lula, la empresa acompañó algunas comitivas presidenciales en viajes internacionales[82] que se llevaron adelante con el objetivo de captar nuevos mercados y negocios[83].

Otra de las grandes consultoras es CNEC Engenharia. Creada en 1959, por profesores de la Universidad Politécnica de la Universidad de São Paulo, e incorporada por el grupo Camargo Corrêa en el 1969. Durante la dictadura militar de 1964, tanto CNEC como Engevix se involucraron en grandes proyectos, tanto de generación de energía como de construcción de carreteras y puentes (Soldateli Paim, 2016). Durante los primeros años del siglo XXI, con el impulso que se le dio a la infraestructura física en la región

[82] Folha de São Paulo, "Empresa citada na Navalha acompanha Lula", 02/08/2007.
[83] Esta empresa también fue investigada en el marco de la Causa por el Lava Jato.

sudamericana, estas dos compañías fueron seleccionadas para la realización de los estudios necesarios para el avance de múltiples proyectos.

De esta forma, el Estado brasileño fue un actor clave en la internacionalización del sector de ingeniería. Para el 2010, de acuerdo con el ranking realizado por Sobbet/Valor, el sector más internacionalizado de la economía brasileña era el de la construcción e ingeniería. Las empresas que integraban este sector se vieron beneficiadas por obras de infraestructura física a realizarse en América Latina, alcanzando, en 2009, 8 billones de dólares en financiamiento por parte del BNDES (Saggiorno, 2013).

En este marco, fue fundamental el apoyo brindado por el Estado al avance de la IIRSA. Este impulsó buscó favorecer a dos sectores del bloque en el poder. Por un lado, aquellos que se verían beneficiados con la reducción de los costos logísticos y de traslados. Por el otro, a las empresas de ingeniería que llevarían adelante muchas de estas obras, dados los niveles de desarrollo y acumulación que estas compañías habían logrado alcanzar y que llevaban décadas de presencia en la región sudamericana.

Si bien el estallido vinculado a la operación judicial *Lava Jato* cobró dimensión pública en 2014, estos hechos se remontan al período de estudio de nuestra investigación. En el marco de esta causa, quedó demostrado el pago de coimas por parte de las grandes empresas de ingeniería brasileñas para verse favorecidas en la obtención de licitaciones de obras de infraestructura a desarrollar en Brasil y en otros países de Sudamérica. Las constructoras involucradas fueron Camargo Corrêa, OAS y Odebrecht (Cioccari, 2015).

5. PARA RESUMIR

En la etapa actual del capitalismo, tras el proceso de expansión de las cadenas globales de valor, la infraestructura comenzó a ocupar un lugar central en el desarrollo del capitalismo global, dado que el desarrollo de estos proyectos se ha asociado a la inserción y consolidación de las economías nacionales en la economía internacional. Las grandes obras de infraestructura regional poseen un sentido fuertemente geopolítico, ya que permiten articular logísticamente regiones que se encuentra fragmentadas o desconectadas entre sí.

En este marco, fue que se delineó la IIRSA, cuyo principal objetivo fue llevar adelante todo un andamiaje de obras de conexión física, de producción e interconexión energética, y de telecomunicaciones. Esta estructura tenía como objetivo principal facilitar y sostener la salida de *commodities* y bienes intermedios e industriales hacia los principales mercados

con vías a los dos océanos, consolidando de esta forma el lugar que el mercado mundial había relegado a la región sudamericana en el sistema-mundo.

Brasil fue uno de los principales países promotores del nacimiento y consolidación de la Iniciativa regional. El objetivo que perseguía este país era que el desarrollo de estas megaobras de infraestructura física le permitiría facilitar la salida logística de las mercancías, sobre todo en relación al océano Pacífico. Frente a ello, se desarrollaron los Ejes de Integración y Desarrollo que dividían el territorio de forma transversal y planteaban una batería de obras con la finalidad de sortear las barreras naturales existentes al interior del continente.

De los nueve EIDs que se plantearon, siete atravesaban alguna porción del territorio brasileño. Dentro de estos siete ejes, el gobierno brasileño impulsó, sobre todo, aquellos que implicaban el mejoramiento de su salida hacia el océano Pacífico, así como también los que favorecían las vías de conexión con algunos de los principales mercados sudamericanos, y las obras de infraestructura energética que le garantizasen el potencial energético necesario para sostener sus niveles de crecimiento.

Así, el Estado Brasileño llevó adelante algunas políticas domésticas y una política exterior que buscaron dar un impulso a la IIRSA, involucrando a diferentes organismos y ministerios en el avance de la Iniciativa. En este marco, el BNDES ocupó un rol central como uno de los principales financiadores de obras de infraestructura física a desarrollarse en la región sudamericana.

A través de la promoción de la IIRSA, el Estado brasileño buscó favorecer a varios sectores integrantes del bloque en el poder durante los años lulistas. Por un lado, aquellos que iban a verse beneficiados por la mejora de las condiciones de exportación mediante obras que favorezcan la conexión con los mercados internacionales y la consiguiente reducción de los costos logísticos. Estos estaban ligados al agronegocio, la ganadería, la minería, la industria de bienes intermedios e industriales, entre otros.

Por otro lado, el Estado brasileño buscó favorecer con el desarrollo de las obras a las grandes empresas constructoras y de ingeniería de bandera nacional. Muchas de estas fueron adjudicatarias de las obras de infraestructura física a realizar en el marco de la IIRSA. Estas compañías fueron clave en el apoyo que dio este país al avance de la integración regional.

Así, el sector brasileño que brinda servicios de ingeniería fue de los más favorecidos durante esos años, jugando un rol central en términos de desarrollo y construcción de proyectos de infraestructura física. Empresas como Odebrechet, OAS, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão desarrollaron una gran capacidad para concebir y llevar adelante obras, profundizando sus niveles de internacionalización y desarrollo. Por otra parte, consultoras como Engevix y CNEC Engenheria llevaron adelante estudios de impacto ambiental y de factibilidad.

Así, se impulsó una política de Estado basada en la promoción de determinados sectores y empresas de capitales brasileños con la premisa de que el fortalecimiento de estas compañías en el mercado internacional favorecería el desarrollo de la economía brasileña y su posición como líder regional. Esta estrategia fue promovida a través de diversas políticas implementadas por el gobierno federal, por dependencias ministeriales y, sobre todo, por el BNDES.

De esta forma, el gobierno brasileño, a partir del desarrollo de algunas políticas -interna y externa- y del impulso que le dio a la IIRSA, logró promover la expansión de sus grandes empresas de ingeniería y construcción hacia la región sudamericana. Tal como sostiene Martins (2013), en un país subimperialista, el aumento de las escalas productivas se topa con límites de realización propios de una formación social, por ello se hace necesaria la expansión hacia otras regiones dependientes. En el caso de Brasil, la región sudamericana fue considerada central. De esta forma, la internacionalización de estas compañías por Sudamérica logró establecer una división regional de la producción a la medida de los intereses de su burguesía interna, la cual integró el bloque en el poder durante los gobiernos de Lula da Silva.

CAPÍTULO 4

LA DIMENSIÓN ENERGÉTICA EN EL PROYECTO DE DESARROLLO BRASILEÑO

El objetivo de este capítulo es analizar, a partir de observar nuestros casos de estudio (es decir, los proyectos de construcción de represas Inambari y Garabí-Panambí), el interés del Estado brasileño en el desarrollo de algunas obras de infraestructura energética –a realizarse en el marco de la IIRSA-. A su vez, buscamos entender el rol que ocupa la energía en la etapa actual del capitalismo y en el proyecto de desarrollo nacional de Brasil durante la etapa de gobierno de Lula da Silva.

Para ello, recuperamos algunas de las nociones desarrolladas en los capítulos anteriores, las cuales nos permitirán abordar el objetivo propuesto. En primer lugar, retomamos los análisis en torno al lugar que ocupa la infraestructura física en la fase actual del capitalismo, para pensar –específicamente- en la dimensión energética y su lugar en las cadenas globales de producción.

Por otro lado, retomamos los desarrollos en torno a los Ejes de Integración y Desarrollo planteados en el marco de la IIRSA, cómo estos fueron pensados y cómo se traducen los mismos en los territorios. Lo esbozado nos permitirá analizar los casos que son objeto de nuestro estudio y las principales actividades económicas e intereses que existen en estos territorios donde se emplazarían las obras energéticas a abordar.

En tercer lugar, recuperamos los desarrollos en torno a la política subimperial brasileña, para pensar como ésta operó en el marco de la IIRSA, en relación con los proyectos hidroeléctricos de Inambarí y Garabí-Panambí. Por último, retomamos los análisis en torno a las empresas constructoras que fueron parte del bloque en el poder durante los años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, así como también de los organismos y entidades nacionales involucradas en la IIRSA. Estos sectores fueron parte fundamental en nuestros casos de estudio.

Este capítulo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, analizamos el lugar que ocupa la energía en la reproducción y desarrollo del capitalismo. En las últimas décadas, con el descenso abrupto de las reservas de combustibles fósiles, la necesidad de diversificación de la matriz energética y la búsqueda de nuevas fuentes de desarrollo de energía se han tornado centrales, en un contexto donde la tecnologización y la expansión de las cadenas globales de producción demandan mayor cantidad de energía disponible. En este marco, los gobiernos y Estados han comenzado a realizar una apuesta por

energías renovables, como la hidroeléctrica, con el objetivo de ir reduciendo lentamente la matriz fosilista.

En segundo lugar, analizamos los proyectos energéticos que se pensaron desde la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), no sólo en términos de generación, sino también de interconexión. Desde principios de siglo, y teniendo en cuenta el lugar que ocupa el subcontinente en la división internacional del trabajo, algunas entidades internacionales y gobiernos comenzaron a evaluar el potencial de generación energética y el impacto que implicaría invertir en mejorar la interconexión energética al interior de la región. Así, se delinearon proyectos y programas que tenían por objetivo aumentar la disponibilidad de energía y facilitar su traslado hacia los lugares clave.

En tercer lugar, abordamos el lugar que ocupó la dimensión energética, durante los años de gobierno de Lula da Silva, en el proyecto de desarrollo nacional de Brasil. Para ello, indagamos en torno a las políticas y medidas implementadas para favorecer el abastecimiento energético. A su vez, analizamos el rol que el gobierno brasileño le otorgó, durante esos años, a la empresa pública Centrales Eléctricas Brasileñas S.A.-Eletrobras[84], así como también su proceso de internacionalización.

En cuarto lugar, analizamos el caso de la represa de Inambari, la cual se localizaría en las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno, en Perú. Ésta fue una de las cinco centrales hidroeléctricas que empresas de bandera brasileña –OAS, Odebrecht y Camargo Correa- realizarían en territorio peruano bajo la órbita del proyecto de integración energética enmarcado en la IIRSA. Se decidió comenzar con esta central hidroeléctrica porque, dada su localización, era una de las que más fácilmente podrían ser conectadas con las líneas de transmisión brasileñas.

En quinto lugar, indagamos en torno al caso de la represa Garabí-Panambí, la cual se ubicaría en el margen del río Uruguay, en el límite entre Argentina y Brasil: Garabí, se emplazaría entre Corrientes, Argentina, y Rio Grande do Sul, Brasil, y Panambí entre Misiones, Argentina, y Rio Grande do Sul. Si bien el proyecto original databa de 1988, se incorporó a la IIRSA en el 2010, en el marco del Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile.

[84] Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras.

1. LA ENERGÍA COMO UNO DE LOS MOTORES DEL CAPITALISMO

La energía puede definirse como "aquello que se suministra o resta a un sistema material para moverlo o transformarlo" (Fernández Durán y González Reyes, 2018: 26). Se trata de una magnitud abstracta asignada al estado de un sistema físico. Como resultado de algunas propiedades –como pueden ser la composición química, la masa, la temperatura, entre otras- todos los cuerpos poseen energía.

La energía y sus formas

Fuente: Bertinat, Chemes y Moya, 2012.

Tal como se observa en el cuadro anterior, existen diferentes tipos de energía vinculadas a las fuentes desde las cuales se obtiene. Existen dos tipos de fuentes de energía: las primarias y las secundarias. Las primarias son las que se extraen de la naturaleza en forma directa o a través de un proceso de extracción (como la hidroeléctrica, eólica, solar, combustibles nucleares, gas natural, carbón mineral, leña, bagazo y residuos vegetales). La secundaria es aquella que implica productos energéticos que no existen en la naturaleza como tal y se obtienen a partir de energías primarias o secundarias en centros de transformación (electricidad, gas licuado, kerosene, diésel, gas oil, fuel oil, carbón residual, entre otros).

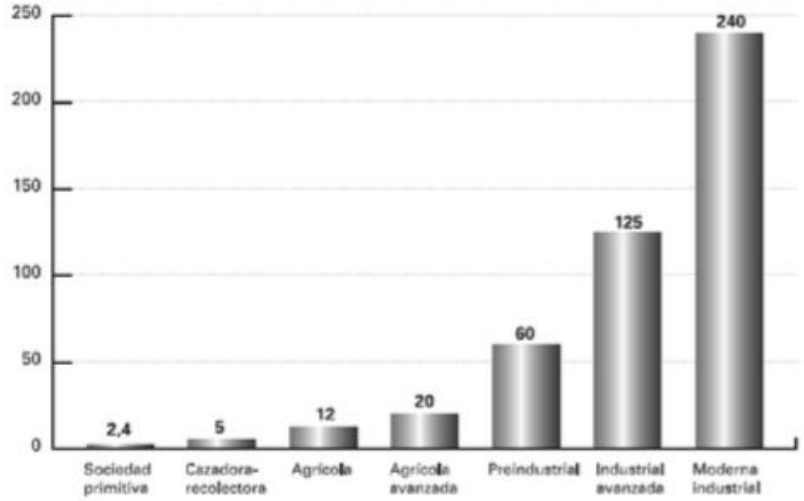
En este marco, la matriz energética de un país o territorio implica la representación cuantitativa de la composición de las distintas fuentes energéticas (Soldateli Paim, 2016).

A ello hay que sumarle la presencia de vectores energéticos –calor, electricidad y combustibles procesados- que median entre las fuentes y su uso. Además, para que una forma de energía pueda ser utilizada es necesario que se cumplan tres requisitos. Por un lado, que existan convertidores adecuados, para lo cual la tecnología ocupa y ha ocupado un rol clave. Por otro lado, que pueda ser consumida en el lugar en el que se necesita, lo que implica realizar las actividades donde se encuentran las fuentes o desarrollar medios de transporte energético. Por último, el control de la energía ha conllevado el control de las fuentes y los vectores, pero también de los medios para aprovecharlos (tecnología, transporte y almacenaje) (Fernández Durán y González Reyes, 2018).

De esta forma, la energía no es sólo un concepto físico, sino también social, político, económico y cultural, que no puede entenderse sin el contexto en que se usa (ibíd.). Hablamos, entonces, de sistema energético, dado que no tenemos en cuenta únicamente la dimensión de la producción y del consumo de los volúmenes físicos de energía, sino que también se incluyen las políticas públicas, los conflictos sectoriales, las alianzas e intereses geopolíticos, las estrategias empresariales, los desarrollos tecnológicos, la diversificación productiva, las demandas sectoriales, entre otros. Así, este sistema "se configura como un conjunto de vínculos dentro del sistema humano y entre este y la naturaleza, y determinado por las relaciones de producción existentes" (Bertinat, 2016: 6). De esta forma, la forma en que las sociedades gestionan la producción y el uso de la energía habilita y constriñe los modos de desarrollo, y a la inversa, y está estrechamente ligado con los modos de acumulación capitalista.

Con el correr del tiempo, la humanidad fue desarrollando distintos modelos energéticos y el consumo de energía aumentó en 100 veces. Tal como plantean Pablo Bertinat, Jorge Chemes y Laura Moya (2012), estos modelos históricos puedan clasificarse en pre-agrícola, agrícola, agrícola avanzado, preindustrial, industrial e industrial avanzado. En los últimos dos períodos -industrial e industrial avanzado- se dieron dos grandes transiciones energéticas: en el primer caso desde el uso de dos fuentes, el agua y el viento, hacia el carbón mineral; y, en el segundo caso, hacía el petróleo y el gas natural. De esta forma, más allá de los cambios en la matriz energética que se han llevado adelante desde el siglo XVI, la acumulación capitalista ha permanecido inalterable (Caffentzis, 2017).

Consumo de energía (miles de kcal por persona por día)



Fuente: Bertinat, Chemes y Moya, 2012.

Tal como se observa en el cuadro anterior, el crecimiento energético que se dio durante la etapa industrial, la avanzada y la moderna, ha sido superior en relación con los otros saltos previos entre modelos históricos. El desarrollo de la civilización industrial está ligado, justamente, a la capacidad de producción y uso de energía (Kerr de Oliveira, 2012). De esta forma, los procesos históricos de apropiación de la energía han estado conectados con los procesos de dominación (Fernández Durán y Gonzáles Reyes, 2018), dado que la disponibilidad de una mayor cantidad y calidad de energía ha permitido aumentar el control sobre los territorios y las personas. La necesidad de generación de energía le ha servido al capital y a los Estados como un argumento central para ampliar su control sobre los territorios y los recursos.

En particular, dentro del capitalismo mundial, la energía se ha transformado en un motor clave y la necesidad de producirla en un factor fundamental en relación con los planes de desarrollo nacionales y regionales. Tal es así que, en los últimos 150 años, la población mundial se multiplicó por 5.5 y la urbanización pasó del 15 al 50%, mientras que la producción industrial mundial y el consumo energético se multiplicaron por alrededor de 50 (Bertinat, 2016). Ello fue posible gracias a un impresionante flujo energético que se multiplicó por 12: de biomasa[85] (por 3.5), de metales (por 19), de materiales de

[85] Es la energía que se puede obtener de los compuestos orgánicos formados en procesos naturales. Se puede conseguir fundamentalmente de: cultivos vegetales; residuos forestales, agrícolas y domésticos; o transformando química o biológicamente ciertas especies vegetales.

construcción (por 35), y de minerales (por 27) (Fernández Durán y González Reyes, 2018).

Desde el advenimiento de la Revolución Industrial la energía comenzó a ocupar un lugar central, dados los notables aumentos en el consumo de energía como causa de la tecnologización de numerosos procesos industriales. En ese momento, se dio una transición desde una matriz centrada en el carbón a otra cuya principal fuente energética son los combustibles fósiles. Esto estuvo ligado a cinco factores principales: (i) la abundancia de este recurso y la accesibilidad vinculada a los precios de extracción; (ii) la alta densidad energética existente; (iii) la existencia de convertidores adecuados para permitir una amplia gama de usos; (iv) la posibilidad de consumo en el lugar requerido, como causa del desarrollo de los medios de trasporte y del uso de fuentes fácilmente trasladables; y (v) la capacidad de guardado de energía, vinculada a la posibilidad de almacenaje de los combustibles fósiles (ibíd).

Frente a los beneficios que presentaban estas fuentes, la matriz energética mundial se ha centrado en su gran mayoría en los combustibles fósiles. Con la expansión de las cadenas globales de valor, se hizo indispensable para el metabolismo del capitalismo global el consumo creciente de recursos, lo que ha implicado un descenso abrupto de la disponibilidad de combustibles fósiles. En este marco, la diversificación de la matriz de fuentes energéticas ha comenzado a ocupar un lugar importante en las agendas de los Estados, así como también la consiguiente apuesta por algunas energías renovables. Esto se ha llevado adelante sin cuestionar el desmedido consumo energético que llevan adelante algunas industrias y actividades extractivas.

En la región sudamericana, millones de personas aún no tienen acceso a energía, en un contexto donde la industria y las actividades extractivas que se emplazan en estos territorios consumen gran parte de la energía y demandan cada vez más disponibilidad energética. Frente a ello, los planes de desarrollo nacional y regional han tomado como una temática central el desarrollo de infraestructura física vinculada a la energía, así como también la diversificación de la matriz energética.

1.1. La apuesta por la energía hidroeléctrica

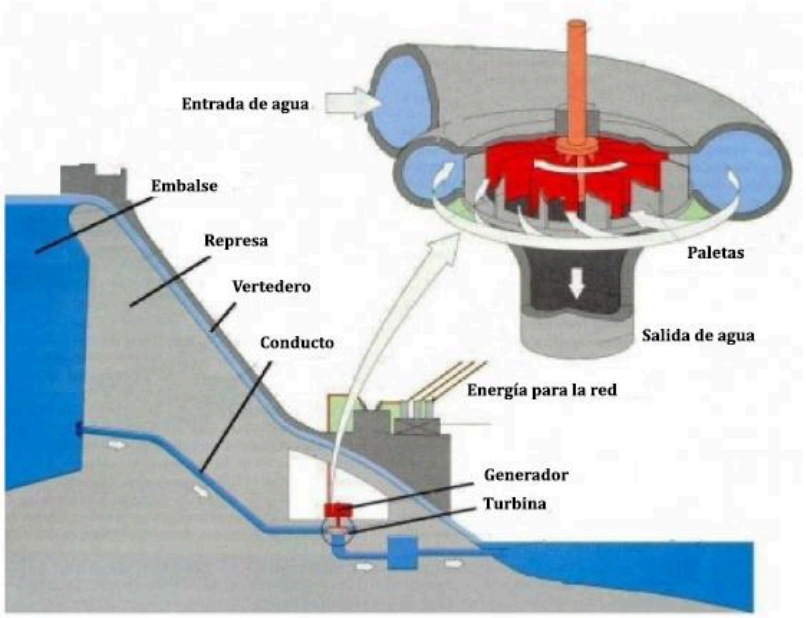
Teniendo en cuenta la creciente demanda de energía que implican los planes de desarrollo y considerando la necesidad de salir de una matriz centrada en los combustibles fósiles, en las últimas décadas la apuesta por la energía hidroeléctrica ha

ido en claro aumento. Esto ha sido, también, resultado de la presencia de grandes fuentes de agua en la región sudamericana, dado que cinco de los ríos más importantes del mundo se emplazan allí: el Amazonas, el Orinoco, el Río Negro, el Paraná y el Madera.

La energía hidroeléctrica se produce por la fuerza del movimiento del agua. Para ello, algunos factores influyen en la generación de energía eléctrica: el caudal del río; la cantidad de agua disponible en diferentes épocas del año; la topografía; y las alteraciones antrópicas o naturales, como los saltos de agua naturales, o aquellas creadas artificialmente. A su vez, existen dos tipos de centrales hidroeléctricas: las de acumulación, que sería el agua embalsada por un dique, o las de paso, el agua fluyente (Rodríguez y Bertalot, 2018).

Una central hidroeléctrica de acumulación –el tipo de central propuesta a realizar en ambos casos de estudio- está compuesta por: una represa, que interrumpe el curso normal del río y lo desvía hacia un lugar determinado, formando grandes embalses que almacenan agua y permiten la formación de cascadas; una casa de máquinas; un aliviadero; y un sistema de toma y aducción de agua, funcionando de forma integrada. Las turbinas transforman la energía cinética, producto del movimiento de las aguas, en energía eléctrica (de Queiroz y otrxs, 2013).

Modelo de una central de embalse



Fuente: de Queiroz y otrxs, 2013.

De esta forma, el funcionamiento de una represa hidroeléctrica de acumulación implica anegar grandes porciones de territorio para formar el embalse, lo que, en muchos casos

(tal como en nuestros casos de estudio), puede traer como resultado el desplazamiento de poblaciones, la contaminación de territorios y la destrucción de flora y fauna nativa. Además, este tipo de generación eléctrica interrumpe los flujos naturales del agua, lo que genera inundaciones o sequías en poblados cercanos, ya sea aguas arriba o aguas abajo de la represa. A su vez, en caso de alguna falla, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos de anegamientos o de afectación de la flora y la fauna regional (Rodríguez y Bertalot, 2018).

Este es el tipo de central hidroeléctrica que se iba a construir en nuestros casos de estudio: Inambari y Garabí-Panambí. Estas represas se llevarían adelante con el objetivo de aprovechar el potencial existente en los ríos Inambari y Uruguay. Además, en ambos proyectos, se detallaba el desarrollo de líneas que conectaran las centrales con la línea eléctrica brasileña, proporcionando así la energía necesaria para que Brasil pueda sostener sus niveles de producción y acumulación.

2. Proyectos de infraestructura energética en el marco de IIRSA

En la evaluación de la infraestructura sudamericana realizada a principios del siglo por el BID (2000), este organismo planteaba la importante capacidad de generación energética que existía en el subcontinente. Además, afirmaba que uno de los mayores problemas estaba centrado en la precaria interconexión que había al interior de la región. A su vez, este organismo subrayaba que la meta a perseguir en materia de integración energética era "la consolidación de las reformas estructurales y reguladoras emprendidas durante la primera mitad de esa década [del noventa], unificación de marcos regulatorios, apoyo al sector privado y la integración de los mercados energéticos" (Quintanar, 2013: 242).

Frente a este panorama, en el marco del Plan de Acción y de la Cartera de Proyectos, formulados por esta entidad -en conjunto con la CAF y el FONPLATA- en el puntapié inicial de la IIRSA, se propuso el avance de proyectos de infraestructura que aumentasen la disponibilidad de energía en la región. También, afirmaban la necesidad de desarrollar algunas líneas de interconexión eléctrica con el objetivo de trasladar la energía desde los lugares de generación hacia los puntos clave de consumo.

En la dimensión de la energía, la IIRSA colocó el foco en el marco normativo, con el objetivo de dar seguridad a lxs inversorxs, y en la necesidad de armonizar la legislación entre los países del subcontinente. Uno de los objetivos centrales era crear un mercado

libre regional unificado en materia energética, considerando que esto traería aparejado el aumento de inversiones en términos de conexión, generación, trasmisión y distribución (Desiderá Neto y otrxs, 2015).

Así, en el marco de la IIRSA se planteó la realización de 54 proyectos en el sector de energía. Por un lado, se impulsaron 25 proyectos de generación, con una inversión estimada de 43516.51 millones de dólares, de los cuales 11 proponían la creación de centrales hidroeléctricas –de diversos tamaños-. Por el otro, se delinearon 29 proyectos de interconexión, 28 de los cuales serían de construcción de nuevas interconexiones y uno de adecuación de una ya existente, con una inversión de alrededor de 11410.22 millones de dólares. En conjunto con el sector carretero y el ferroviario, el de generación eléctrica fue uno de los que más financiamiento recibirían, tal como podemos observar en el siguiente cuadro.

Inversión por subsector (en millones de dólares)	
Subsector	**Inversión**
Aéreo	7,6
Carretero	69,1
Ferroviario	52
Fluvial	2,9
Generación Energética	43,5
Interconexión Energética	11,4
Interconexión de Comunicaciones	0,1
Marítimo	10,4
Multimodal	0,7
Pasos de Frontera	0,9

Fuente: Web de IIRSA.

Para 2017 -momento en que se realizó el último informe de IIRSA-COSIPLAN en torno a la cartera de proyectos[86]-, de los 153 proyectos concluidos: por un lado, ocho están ligados a la generación energética, con un monto total de inversión de 21789 millones de dólares; y, por el otro, 17 están vinculados a la interconexión energética, con una inversión de 8191.4 millones de dólares (IIRSA, 2017).

Las obras de infraestructura en materia energética que se plantearon al interior de la IIRSA-COSIPLAN se complementaron con los debates desarrollados en el Consejo Energético Sudamericano -integrado por los Ministrxs de Energía de los países miembros

[86] En abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú decidieron suspender su participación en el organismo por tiempo indefinido. En este marco, si bien muchas de las obras que estaban siendo llevadas adelante en el marco de la IIRSA continuaron, los últimos informes y noticias difundidas desde la iniciativa son de 2018.

de la CSN-. Este Consejo se conformó durante la primera Cumbre Energética Suramericana realizada en el marco del encuentro de la CSN llevado adelante en Isla Margarita, Venezuela, en 2007. Finalmente, se incorporó, en 2010, a la UNASUR. El mismo tenía por objetivo principal "impulsar el desarrollo de la infraestructura energética de los países como elemento de apoyo a la sustentabilidad de la integración suramericana" (Ambiente y Sociedad y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, 2016: 1).

Más allá de que las reuniones llevadas a cabo por este Consejo eran secretas, uno de los puntos centrales de los acuerdos que se estaban intentando llevar adelante fue la constitución de un Tratado Energético Sudamericano. A pesar de la confidencialidad con la que contaba el Tratado, algunos de sus objetivos se dieron a conocer: por un lado, se buscaba estimular la asociación entre el sector público y el sector privado; y, por el otro, impulsar el desarrollo de las energías renovables y alternativas[87].

Si bien el contenido de las discusiones en torno a este acuerdo no fue difundido, trascendieron dos puntos que estaban siendo debatidos. Por un lado, existía la intención de encargar a la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)[88] un balance en materia energética para los siguientes diez años. Por otro lado, se buscaba constituir de una Empresa Grannacional de Energía Sudamericana que contase con la participación de todas las entidades estatales de los países del subcontinente y que desarrolle, de manera conjunta, los proyectos energéticos de interés para la región. Sin embargo, los acuerdos no llegaron a realizarse por la ausencia de consensos en algunos puntos (Quintanar, 2012).

La estrategia brasileña, defendida en el marco de ese encuentro de la CSN, buscaba apuntalar el desarrollo de su política interna en materia energética. Ésta tenía por objetivo principal garantizar su autoabastecimiento energético, facilitar y profundizar las conexiones con los centros de generación localizados en los países limítrofes, reforzar la seguridad jurídica para las inversiones de empresas estatales brasileñas, garantizar el acceso a fuentes fósiles y constituir una red mundial para el abastecimiento de biocombustibles (Lara, 2014).

[87] Christian Caicedo Carbonell, "Los objetivos del Consejo Energético Sudamericano parecen lejanos…", *Coalición Regional*, 05/09/2016.

[88] Organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica, de carácter público intergubernamental, creado en 1973. Su objetivo fundamental es fomentar la integración, conservación racional, aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

En este marco, Brasil buscó favorecer algunos proyectos, a desarrollar en la órbita de la IIRSA, que fortalecieran su política energética, valiéndose de los recursos de la región para abastecerse de energía. La necesidad de generación energética y su interconexión con los núcleos industriales y extractivos se tornaba fundamental para sostener sus niveles de producción y crecimiento.

3. El rol de la energía en el proyecto de desarrollo nacional brasileño

El sector energético posee un rol fundamental en los proyectos de desarrollo nacional, dado que la disponibilidad de energía es central para sostener la reproducción del capital. Así, a mediados de la década del 2000, el gobierno brasileño realizó una estimación del crecimiento de su capacidad de generación instalada en 30000 MW para la próxima década, lo que equivalía al 50% de su capacidad de ese momento. Brasil tiene un quinto de los recursos hídricos del planeta y, en la actualidad, es el segundo mayor productor hidroeléctrico del mundo, por detrás de China[89].

En las últimas décadas, a partir del desarrollo y la investigación de los llamados biocombustibles[90], Brasil impulsó el avance y corrimiento de su frontera agrícola –en muchos casos hacia sectores con gran reserva de biodiversidad genética, como la del Amazonas- para producir *commodities* genéticamente modificados, los cuales son elementos clave para la producción de este tipo de carburantes. En el 2006, Lula manifestó:

> Brasil será, dentro de 20 o 30 años, la potencia energética más grande del planeta. Alcanzamos la autosuficiencia en materia de petróleo, en dos años vamos a producir la mayor parte del gas que consumimos y somos los más competitivos en lo que hace a la producción de etanol y biodiesel. Brasil registra una revolución energética. Ya hicimos la del etanol, y ahora vamos a hacer la del biodiesel[91].

La producción de biocombustibles tenía como finalidad la exportación, con el objetivo de venderlos a los países que se vieran obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Mientras tanto, el consumo interno de energía se saldaría con la construcción de represas hidroeléctricas, y usinas nucleares y termoeléctricas (Honty, 2006).

[89] José A. Roca, "Las 10 mayores centrales hidroeléctricas de Latinoamérica", *El Periódico de la energía*, 12/09/2018.
[90] Combustibles derivados de fuentes renovables como plantas y animales.
[91] Clarín, "Brasil será dentro de unos 20 o 30 años, la potencia energética más grande del planeta", 25/05/2006.

Así, al interior de Brasil, se planteó el avance de obras hidroeléctricas, de las cuales se evaluaba que tendrían un gran potencial de generación. Tal es caso, por ejemplo, de los proyectos de desarrollo de dos grandes represas hidroeléctricas sobre el río Madeira, motorizados por un consorcio de empresas brasileñas, entre las que se encontraban Furnas[92], Eletrobras y Odebrecht.

A su vez, el gobierno de Lula da Silva negoció acuerdos para la construcción de represas hidroeléctricas en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Nicaragua, Perú, Surinam y Uruguay, algunas de las cuales se encontraban en el marco de la IIRSA. En estos acuerdos se establecía la presencia de Eletrobras en la operación de las represas, las cuales, en su gran mayoría, serían financiadas por el BNDES y construidas por empresas de capitales brasileños, como OAS, Odebrecht o Andrade Gutiérrez. Por otro lado, en algunos casos, el gobierno brasileño negociaba la compra de la energía excedente. De esta forma, se aseguraba –a precios regulados y controlados- un potencial energético que le permitiera a Brasil continuar con su desarrollo y crecimiento.

Sin embargo, tal como plantea Silvia Quintanar (2012: 278):

> es difícil afirmar si Brasil ha tenido un modelo propio de integración energética regional más allá del neoliberal subyacente en la IIRSA. Su estrategia energética más visible ha sido la internacionalización de PETROBRAS, el control y explotación de reservas existentes en otros países de la región y acuerdos bilaterales de suministro energético a bajo precio, sea de gas o electricidad.

Más allá de lo planteado por Quintanar, algunas acciones tomadas por el gobierno brasileño daban cuenta de cómo la política energética estaba ligada al proyecto de desarrollo nacional de Brasil por esos años. Por un lado, tras el proceso de internacionalización de Petrobras durante los primeros años del nuevo siglo, hacia finales de los 2000, se impulsó la internacionalización de Eletrobras, poniendo como mercado primordial a Sudamérica. Por otro lado, el gobierno brasileño buscó promover algunas obras de infraestructura energética –en el marco de la IIRSA y por fuera- que fueran fácilmente conectadas con la red brasileña de energía, abasteciéndose de este insumo central a bajos costos.

3.1. El proceso de expansión de Eletrobras

En 1954, el por entonces presidente, Getúlio Vargas, propuso la creación de la empresa nacional Eletrobras, pero el proyecto se enfrentó a una gran oposición y recién fue

[92] FURNAS Centrais Elétricas es una sociedad anónima de economía mixta federal, de capital cerrado que se encuentra bajo el control de Eletrobras. Fue creada el 28 de febrero de 1957Se dedica a la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica.

aprobado por el Congreso siete años más tarde. De esta forma, el 25 de abril de 1961, el presidente Jânio Quadros promulgó la Ley Nro. 3890 que autorizaba al gobierno federal a crear la compañía eléctrica. El 11 de junio del año siguiente, en el marco de una sesión del Consejo Nacional de Aguas y Energía Eléctrica (CNAEE)[93], la entidad fue oficialmente constituida.

Tal como establece el artículo 2 de la Ley Nro. 3890, el objetivo de Eletrobras era "la realización de estudios, proyectos, construcción y explotación de centrales eléctricas y líneas de transporte y distribución de electricidad"[94]. Así, esta empresa tuvo un rol central en el desarrollo energético de Brasil desde su nacimiento hasta la actualidad, pasando por diferentes etapas.

Años más tarde, durante las reformas neoliberales, Eletrobras no escapó de las privatizaciones de empresas públicas que se llevaron adelante. El por entonces presidente, Itamar Franco (1992-1994), inició la reorganización institucional del sector eléctrico que continuó su sucesor, Fernando Henrique Cardozo. Así, la empresa sufrió una restructuración y fue incluida en el Programa Nacional de Desestatización (PND)[95]. Durante ese tiempo, la compañía también comenzó a operar, de manera temporal, en el negocio de distribución de electricidad a través de compañías en los Estados de Alagoas, Piauí, Rondônia, Acre, Roraima y Amazonas.

Durante la época de gobierno de Lula, el papel del Estado en tanto empresario planteaba tres áreas estratégicas de actuación: petróleo y gas –con Petrobras-, las finanzas –con el BNDES- y la energía –con Eletrobras-. Por ello, en 2003, el presidente brasileño decidió excluir a Eletrobras del PND y fortalecer su papel en el sector energético.

Tras esta decisión, el gobierno brasileño convirtió a la compañía en un conglomerado empresarial. La empresa pasó a poseer una economía mixta y de capital abierto, dado que sus acciones se negociaban en la Bolsa de Valores de San Pablo (BOVESPA)[96] y en plazas internacionales, aunque el gobierno federal poseía la mayoría accionaria de la compañía -el 55%-[97] (Actis, 2013). El proceso de reforma fue comandado por la ministra de Energía y Minas, Dilma Rousseff (2003-2005), y, en julio de 2003, el Consejo Nacional de Política

[93] Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica.
[94] Ley Nro. 3890. Recuperada de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3890Acons.htm
[95] Programa Nacional de Desestatización.
[96] Bolsa de Valores do Estado de São Paulo.
[97] En junio de 2021, el Congreso brasileño aprobó la privatización de Eletrobras, aunque esto escapa al período abordado en el marco de esta tesis.

Energética (CNPE)[98] aprobó las directrices de las propuestas del nuevo modelo institucional.

De esta forma, se delinearon las principales aristas que adquiriría Eletrobras. En 2006, Lula dijo que era necesario flexibilizar las reglas administrativas de la compañía para transformarla en la "Petrobras del sector eléctrico"[99]. La petrolera de bandera nacional había empezado, por esos años, su proceso de internacionalización, lo cual quería replicarse con Eletrobras. Por ello, en abril de 2008, con la sanción de la Ley N° 11651, se autorizó a la empresa energética a participar en consorcios y sociedades empresariales tanto en Brasil como en el exterior. Los mercados considerados prioritarios para expandirse eran Sudamérica, América Central y África. Las formas de participación en el exterior han sido en materia de generación (principalmente hidroeléctrica), trasmisión/distribución, y a través de oficinas comerciales (Actis, 2013).

El desarrollo de infraestructura energética para incrementar la capacidad de generación ha contado con un rol fundamental del BNDES. De hecho, en 2008, el 11.81% del paquete accionario de Eletrobras pertenecía al BNDES, por un valor total de 1219521 millones de dólares (Golonbek y Urturi, 2010%). Así, en 2011, el BNDES destinó 5.2 billones de Reales para la construcción e implantación de centrales hidroeléctricas (BNDES, 2011). A su vez, con la modificación del reglamento del Banco en el 2002 –que permitía el financiamiento de obras que se encontrasen por fuera del territorio brasileño a través del involucramiento de compañías de bandera nacional-, el BNDES también financió obras que involucraban a Eletrobras en otros puntos del subcontinente (tal como vamos a analizar posteriormente en nuestros casos de estudio).

Tras estos desembolsos, el rol del Eletrobras en el plano energético regional fue acrecentándose. Para 2013, Eletrobras controlaba doce subsidiarias en Brasil y el exterior: Eletrobras Chesf, Eletrobras Furnas, Eletrobras Eletrosul, Eletrobras Eletronorte, Eletrobras CGTEE, Eletrobras Eletronuclear, Eletrobras Distribuição Acre, Eletrobras Amazonas Energia, Eletrobras Distribuição Roraima, Eletrobras Distribuição Rondônia, Eletrobras Distribuição Piauí y Eletrobras Distribuição Alagoas, una empresa

[98] Conselho Nacional de Política Energética.

[99] Patricia Zimmermann, "Lula quer transformar Eletrobras em 'Petrobras do setor elétrico'", *Folha De São Paulo*, 22/11/2006.

de participaciones (Eletrobras Eletropar), un centro de investigación (Eletrobras Cepel), así como también la mitad del capital de Itaipú[100] (ibíd.).

Para 2019, la capacidad de generación de la compañía ascendía a 43134 MV, de las cuales el 88% provenía de sus 48 hidroeléctricas. Esto convertía a Eletrobras en la quinta empresa del mundo por su capacidad de generación. A su vez, controlaba dos centrales nucleares, 70 usinas eólicas y 112 termoeléctricas. Por otro lado, tenía participación en el exterior con 4,7 GW de capacidad de generación, con presencia en Perú y en Uruguay (Bertinat y Kofman, 2019).

De esta forma, Eletrobras se posicionó como un actor de peso en materia energética, no sólo en la región sudamericana, sino en todo el mundo. El proceso de internacionalización que llevó adelante la empresa, hacia finales de la primera década del siglo XXI, tuvo como punto principal de apoyo Sudamérica, teniendo un rol clave en el marco de las obras a realizarse en la IIRSA y de la mano de la estrategia de desarrollo nacional implementada por los gobiernos petistas durante los primeros años del nuevo siglo.

Así, la IIRSA ocupó un papel clave en el proceso de internacionalización de Eletrobras, dado que, al ser la principal compañía de electricidad de Sudamérica, se vio involucrada en muchas de las obras a realizarse. De esta forma, la empresa estuvo involucrada, a través de diversos mecanismos, en las obras que son nuestro objeto de estudio: Inambari y Garabí-Panambí.

4. CENTRAL HIDROELÉCTRICA INAMBARI

La represa de Inambari, la cual estaría localizada entre las regiones de Madre de Dios, Cuzco y Puno, en Perú, fue una de las cinco centrales hidroeléctricas de embalse que fueron proyectadas en el país andino. Las mismas serían realizadas por empresas de bandera brasileña –como OAS, Odebrecht y Camargo Correa- y la mayor parte de estas obras serían financiadas por el BNDES. Dentro de estas cinco centrales se decidió comenzar con Inambari, dado que era la que más fácilmente podría conectarse con la línea energética brasileña.

A su vez, en el marco de los acuerdos de construcción, el gobierno peruano firmó con el brasileño un Acuerdo Energético. Si principal punto se centraba en la venta por parte de Perú de los excedentes de energía hacia Brasil, ya que su fácil conexión con las centrales

[100] Represa binacional de Paraguay y Brasil, emplazada en la frontera sobre el río Paraná.

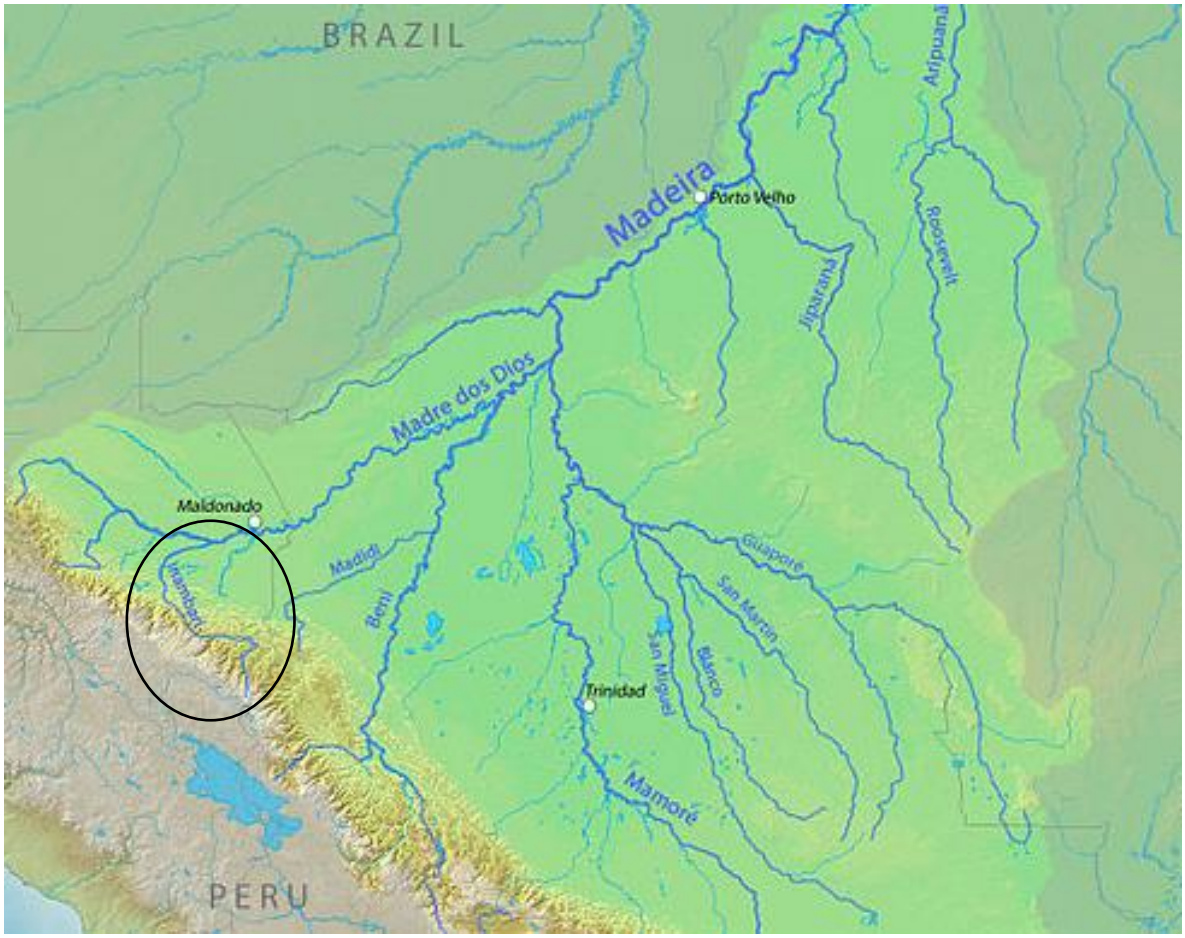
ubicadas en el río Madeira implicaba obtener energía sin la necesidad de realizar grandes inversiones.

4.1. Características del proyecto

Entre 1976 y 1979, la Dirección de Electricidad, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas de Perú, en conjunto y con el apoyo de la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)[101], realizó un estudio para evaluar y medir el potencial hidroeléctrico existente en el país. En el marco de este estudio, eligieron al río Inambari como parte de los diez proyectos prioritarios para el desarrollo de centrales hidroeléctricas, considerando que el potencial de generación de energía podría ser cercano a los 1,452 MW y, en ese momento, se trataba de una zona relativamente despoblada. Sin embargo, esta evaluación no tomaba en consideración los posibles impactos ecosistémicos que podría implicar el desarrollo de estas obras (DAR y otrxs, 2011).

[101] La Cooperación Alemana al Desarrollo es una empresa privada con presencia mundial en el campo de la Cooperación al desarrollo que pertenece al Gobierno de la República Federal de Alemania. Su principal comitente es el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).

Ubicación del río Inambari



El proyecto de Inambari planteaba la construcción de una central hidroeléctrica aguas abajo de la afluencia entre los ríos Araza e Inambari, y aguas arriba del puente Inambari, en el territorio donde se encuentra la confluencia entre Madre de Dios, Cusco y Puno. La central se ubicaría en el límite entre los distritos de Ayapata (provincia de Carabaya, Región Puno) y Camanti (provincia de Quispicanchi, Región Cusco), a unos 260 km de la frontera con Brasil.

Ubicación de la Central Hidroeléctrica Inambari

Fuente: DAR y otrxs, 2011.

Siguiendo a José Serra Vega (2011), las áreas de influencia que tendría el proyecto podrían dividirse en tres:

(a) un área que integraría la represa y el lago que se extendería por el sur hacia el distrito de San Gabán (provincia de Carabaya), y por el oeste hasta el distrito de Camanti (provincia de Quispicanchi), donde una parte de la cuenca del río Araza sería inundada. En ese sector la empresa propuso construir dos poblados, junto a la Carretera Interoceánica Sur, para reubicar a los pobladores expulsados producto de los anegamientos que generaría el embalse. Esta zona estaba dentro del área de concesión que tenía una extensión de 166326 hectáreas. En medio del lago artificial que se formaría, existiría una península donde la empresa proponía albergar a los animales salvados de los anegamientos. El eje de la represa estaría aguas arriba del puente Inambari;

(b) un área aguas abajo, en los distritos de Inambari (provincia de Tambopata) y Huepetuhe (provincia de Manu, Región Madre de Dios); el poblado más cercano, Mazuco –sobre el río Inambari-, sería utilizado de base logística para la empresa y como sector de

aprovisionamiento para lxs trabajadorxs. Durante el período de construcción, el lecho del río sufriría cambios importantes y gran parte de la fauna acuática se vería afectada;
(c) un área más distante que llegaría aguas arriba hasta las cabeceras de las cuencas del Inambari y del Araza, y hasta los ríos Madre de Dios y Madeira.

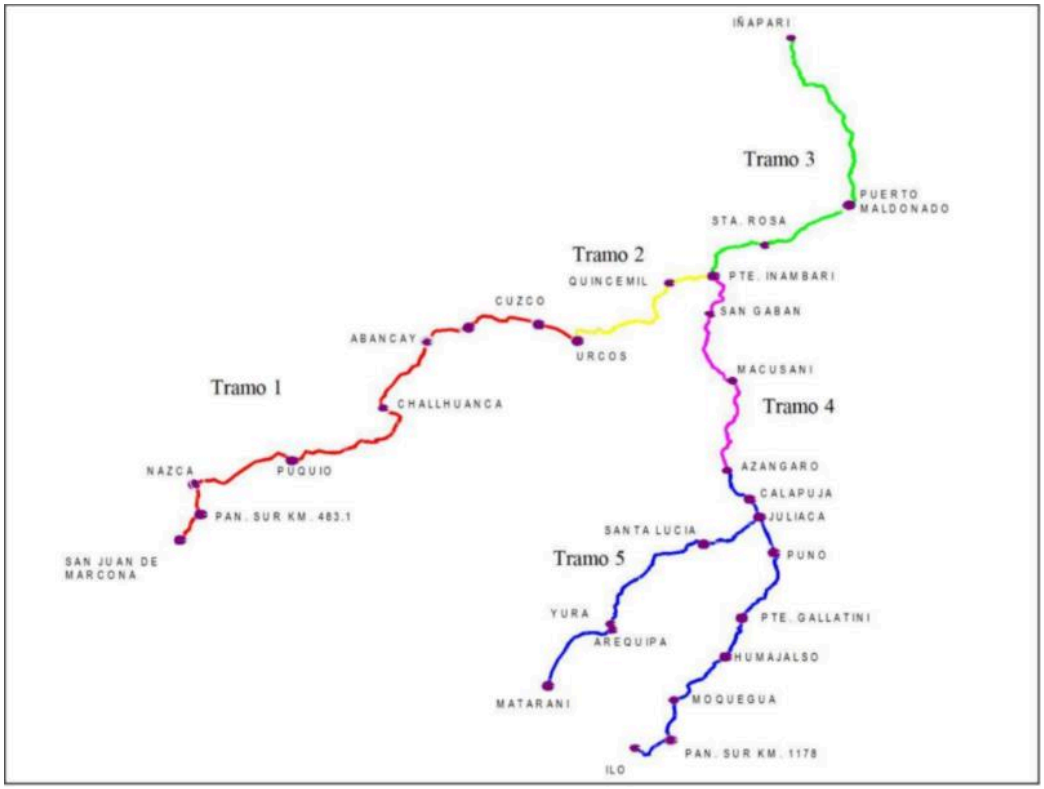
La represa, que tendría alrededor de 200 metros de alto, implicaría la interrupción del flujo del río, lo que generaría la formación de un embalse[102], es decir, un lago artificial de casi 37800 hectáreas. Las zonas que se verían afectadas por los anegamientos serían, sobre todo, las poblaciones de Puerto Manoa, Loromayo, Lechemayo, distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, y departamento de Puno. Según cálculos realizados por algunas organizaciones, casi ocho mil personas de 65 centros poblados deberían ser desplazadas de sus hogares a causa de los anegamientos que se producirían, contando con un área de inundación de 46 mil hectáreas (Canal Alata, 2017).

De esta forma, la central de Inambari sería la más grande del país y la sexta de Latinoamérica[103], contando con una línea de transmisión de más de 800 kilómetros que la conectaría con las centrales del río Madeira en Brasil, hasta el estado de Acre, y aportaría el 75 % de su energía a la parte centro–occidental de Brasil. Se calculó que la inversión para la construcción de la represa alcanzaría los 4900 millones de dólares, de los cuales 800 millones corresponderían a la línea de interconexión con Brasil (DAR y otrxs, 2011). Este presupuesto no incluía la línea de transmisión necesaria que la conectase con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional del Perú (SEIN), ya que ese costo correría por cuenta del gobierno peruano.

Por otra parte, se previó que la deforestación alcanzaría las 308 mil hectáreas, destruyendo la biodiversidad del área y alterando los sistemas acuáticos aguas abajo y aguas arriba[104]. Además, serían afectados 106,1 kilómetros de la Carretera Interoceánica -construida en el marco de la IIRSA- por el embalse de la represa, entre ellos los tramos 2 (Urcos – Puente Inambari, que abarca 43.3 km.), el 3 (Iñapari – Puente Inambari, 1.3 km.) y 4 (Azangaro – Puente Inambari, 61.5 km.), los cuales conectan los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios (Canal Alata, 2017).

[102] La función del embalse es graduar la cantidad de agua que pasa por las turbinas (Canal Alata, 2017).
[103] Se ubicaría detrás de Itaipú (14 GW, Brasil-Paraguay), Guri (10 GW, Venezuela), Tucuruí (8.37 GW, Brasil), Yacyretá (3.5 GW, Paraguay-Argentina) y Macagua (2.54 GW, Venezuela) (Serra Vega, 2010).
[104] Atlas de Justicia Ambiental, “Represa Inambari”, https://ejatlas.org/conflict/represa-inambari

Tramos de la Carretera Interoceánica



Fuente: Engevix Engenharia y S&Z Consultores, 2010.

El proyecto Inambari estaba enmarcado en el proyecto binacional de integración eléctrica entre Brasil y Perú, el cual formaba parte del Eje de Integración y Desarrollo de la IIRSA denominado Perú, Brasil y Bolivia. Este eje abarca siete departamentos del sur de Perú (Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurimac, Cusco, Puno y Madre de Dios), dos departamentos amazónicos de Bolivia (Pando y Beni) y cuatro estados del noroeste de Brasil (Acre, Rondonia, Amazonas y Matto Grosso).

El objetivo principal de este eje era unir físicamente la zona que se encuentra entre Madre de Dios, Acre y Pando con los puertos del Pacífico, a través de infraestructura vial y fluvial desarrollada en el marco de otros EIDs de la IIRSA, como el Interoceánico y el Andino. Esta área tiene una superficie de alrededor de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales el 82% pertenece a territorio brasileño, el 10% al peruano y el 8% al boliviano (Romegialli y Luchetti, 2016). Este Eje transversal, atraviesa una región en la que habitan múltiples pueblos y comunidades indígenas.

En el marco de ese mismo Eje de la IIRSA, se llevaron adelante algunos tramos de la Carretera Interoceánica Sur, que conectaba Brasil con Perú. Este proyecto ancla se dividió por tramos y planteó el desarrollo de otros proyectos de infraestructura, tales como el

mejoramiento de puertos y aeropuertos, y el avance en tendidos eléctricos. Esta carretera tiene una longitud de 2592,46 kms. y recorre siete departamentos de la zona sur peruana (Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios) y tres regiones. Las obras tenían por objetivo asfaltar o mejorar 2586 kms. de carretera entre Iñapari (Madre de Dios), localidad fronteriza con Brasil, y los puertos de la costa sur peruana (Bravo Orellana, 2013). Esta vía de conexión atravesaría la región amazónica, la cual concentra grandes cantidades de biodiversidad, producción agrícola y es habitada por comunidades de diversos pueblos originarios.

El 23 de junio del 2005, el Estado de Perú y el consorcio CONIRSA, compuesto por las compañías Odebrecht, Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) y JJC Contratistas Generales, suscribieron el contrato de concesión para los tramos 2 y 3 de la carretera. Por otro lado, el tramo 4 fue otorgado al Consorcio INTERSUR, integrado por las empresas brasileñas Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa S.A. y Queiroz Galvão S.A. Esta obra tuvo un costo de casi 2 mil millones de dólares, los cuales fueron financiados a través de un préstamo otorgado por la CAF a ser pagado por el Estado peruano[105]. De esta forma, tal como en otros proyectos a realizarse bajo la órbita de la IIRSA, fueron las empresas constructoras brasileñas integrantes del bloque en el poder durante los años de gobierno de Lula da Silva las que se vieron beneficiadas con la adjudicación de las obras. En esta línea, la ingeniera e integrante de la Sociedad Civil por la Construcción de la Interoceánica (SOCIT) de Puno –organización que participó en la lucha contra Inambari-, Rosario Linares Valderrama, plantea:

> En el año 2001 hubo una lucha fuerte, incluso hubo mucha población, más o menos 1000 puneños vinieron a marchar hasta Lima para hacer escuchar el reclamo que querían la carretera interoceánica, y fue en ese momento que aprovecharon las empresas brasileñas para ofrecerse como constructoras de la carretera y el gobierno de Toledo las favoreció. Y cuando Toledo llamó a licitación internacional asumíamos

[105] Tras el estallido en Brasil del caso de corrupción conocido como "Operación Lava Jato", que dejó al descubierto sobornos pagados por los principales grupos de construcción para obtener ventajas en los contratos con el sector público, se abrió una investigación en Perú, denominada "Caso Odebrecht", donde se investigó sobornos a funcionarixs peruanxs. El 11 de agosto de 2020, tras tres años de investigación, el fiscal José Domingo Pérez presentó al Poder Judicial de Perú la acusación por actos de corrupción en relación a la construcción de la carretera, como parte de la investigación por la Operación Lava Jato. En esta causa fueron imputados: el ex presidente Alejandro Toledo; Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Toledo; Sergio Bravo Orellana, ex presidente del comité de Proinversión; Alberto Pasco-Font, miembro del Comité de Proinversión de Proyectos en Infraestructura y Servicios Públicos; José Graña, director de Graña y Montero; Hernando Graña, director de Graña y Montero SAA y GyM SA; Fernando Camet Piccone, pues en su condición de director de la empresa JJC Contratista Generales S.A; José Castillo Dibós, director de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.; y Gonzalo Ferraro Rey, apoderado de Graña y Montero SAA.

> que se iban a presentar empresas americanas, empresas alemanas, porque era una obra bastante importante, se había decidido que iba a asfaltarse los dos ramales, tanto el trayecto de Cusco-Madre de Dios como Puno-Madre de Dios y Madre de Dios hasta la frontera con Brasil, o sea eran tres ramales, pero por sorpresa se presentaron sólo las empresas brasileñas.[106]

En ese momento, el proyecto cosechó grandes críticas. Una de las principales fue que la obra fue aprobada, financiada e iniciada sin contar con una evaluación de impacto ambiental y social. Los estudios que se presentaron fueron parciales y por trechos, no siendo evaluado en conjunto los impactos que el desarrollo de esta vía de conexión implicaría para los ecosistemas y poblados de la región (Dourojeanni, 2006).

Sin embargo, el desarrollo de esta obra de infraestructura fue bien recibido por algunos sectores sociales de las regiones por las cuales atravesaría la carretera, con la esperanza de que el proyecto promovería la exportación de papa, cebolla, aceitunas y ajo peruanos hacia Brasil. Sin embargo, las medidas proteccionistas que Brasil posee para la importación implicaron que el comercio no tenga un impacto importante para Perú. Por otra parte, las obras contribuyeron a la deforestación y al avance de la minería ilegal, la cual se expandió hacia la Reserva Nacional Tambopata, convirtiendo en una zona desértica las quebradas de La Pampa y Guacamayo, y hacia el Parque Nacional Bahuaja Sonene, lo cual implicó la destrucción de 238 hectáreas de bosque nativo en esa área de conservación (Fowks, 2017).

Por otra parte, en la región de Puno, existe una central, la de San Gaban II, emplazada sobre el río San Gabán. Sin embargo, al tratarse de una central de pasada[107], cuya característica principal es que no necesitan de una gran acumulación de agua corriente arriba de sus turbinas, no genera inundaciones de territorio, por lo cual no ha implicado el nivel de desplazamiento de población que conlleva el desarrollo de una hidroeléctrica de embalse.

A pesar de la presencia de esta central, que se encuentran operando, una gran porción de la población de la región no posee acceso a la energía. No obstante, desde algunas organizaciones no lo atribuyen a una situación de escasez de energía, sino de ausencia de inversión por parte del Estado peruano, tal como subraya Aldo Santos, integrante de la

[106] Entrevista realizada en abril del 2020.

[107] Una central hidroeléctrica de pasada tiene como característica principal el no tener un gran porcentaje de acumulación de agua "corriente arriba" de sus turbinas, sino que son movidas por la corriente natural del cauce. Las turbinas deben trabajar con el caudal disponible, con sus variaciones horarias, diarias y estacionales.

Asociación Servicios Educativos Rurales (SER) sede Puno -que integró la lucha contra la central hidroeléctrica de Inambari-:

> son comunidades pequeñas de unidades de 30 familias, de 20, dispersas, entonces el Estado peruano concibe como inversiones poco rentables abastecer de energía a esas comunidades, entonces no tenían energía eléctrica, pues no están conectadas al sistema, se abastecen con paneles solares, con velas, con lo que pueden, y tienen una hidroeléctrica que abastece a toda la región Puno y producen energía para afuera de la región.[108]

Tal como planteó Santos, ante el intento de desarrollo de la central hidroeléctrica de Inambari, algunos sectores de la población no se entusiasmaron con el proyecto. Esto se debió a una evaluación de estas poblaciones de que para poder acceder al suministro de energía eran necesarias otro tipo de inversiones por parte del Estado peruano, que implicaban la interconexión a las líneas de trasmisión energética.

4.2. Genealogía del caso

El 23 de octubre de 1997, los gobiernos de Perú y Brasil firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en el Área Energética. Algunos años después, el 9 de noviembre de 2006, en la localidad de Brasilia, se rubricó un nuevo memorándum de entendimiento entre los Ministerios de Energía de ambos países, en este caso para el establecimiento de una Comisión Mixta Permanente en Materia Energética, Geológica y de Minería.

Dentro de las funciones permanentes de esta comisión se establecieron: en primer lugar, la deliberación en torno a asuntos de carácter energético, geológico y de minería incluidos en la agenda bilateral o regional; en segundo lugar, la promoción de actividades de cooperación y asociación, así como también detectar oportunidades y promover la participación de empresas de ambos países en iniciativas y actividades comerciales y de inversión conjuntas, ya sea en sus territorios o en otros países; en tercer lugar, la determinación de acciones de apoyo, el desarrollo de instrumentos legales y regulatorios, y el estudio de formas de financiamiento que faciliten los proyectos empresariales y gubernamentales conjuntos; en cuarto lugar, el desarrollo de un programa anual de trabajo; en quinto lugar, la promoción de la integración y difusión de sistemas de información energética en América Latina; y, por último, el intercambio de información en foros de integración energética regional.

[108] Entrevista realizada en diciembre de 2019.

La primera reunión de esta comisión se llevó adelante el 28 de agosto de 2007, y en ella se definió la creación de un grupo de trabajo en relación a la integración energética. Este grupo tendría como objetivo principal la constitución de una propuesta de convenio bilateral para impulsar la realización de estudios sobre el potencial de integración en esta materia.

En el mes de noviembre de 2007, la Dirección General de Electricidad, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas del Perú, presentó el informe "Elaboración de resúmenes ejecutivos y fichas de estudios de las Centrales hidroeléctricas con potencial para la exportación a Brasil". Entre los proyectos que el informe planteaba desarrollar se encontraba el de construcción de una represa hidroeléctrica a realizarse sobre el río Inambari. Allí, se sostenía el desarrollo de una presa de enrocado[109] de 215 m de altura, con capacidad de generar una energía media anual de 10,531 GWh (Ministerio de Energía y Minas, 2007).

El 17 de mayo de 2008, los Ministerios de Energía y Minas de ambos países sudamericanos suscribieron, en la localidad de Lima, el Convenio de integración Energética. Entre los objetivos principales se incluyó el desarrollo de estudios para la integración energética, la evaluación de proyectos hidroeléctricos para la exportación de energía desde Perú hacia Brasil, el fomento y la ampliación de inversiones, y analizar la implementación de proyectos de conexiones hidroeléctricas fronterizas. Ese mismo día, en un Comunicado Conjunto entre Lula da Silva y su par peruano, Alan García Pérez, los mandatarios subrayaron que se daría prioridad a la interconexión energética en el marco de la agenda bilateral, así como también a la promoción de la integración en materia de energía.

El 28 de abril de 2009, se firmó un nuevo memorando entre los ministerios de minas y energía de ambos países. Este tenía por objeto desarrollar estudios de viabilidad para la interconexión eléctrica entre los dos Estados, para la exportación de energía desde Perú hacia Brasil y para el abastecimiento de energía eléctrica al mercado peruano, en relación con los proyectos prioritarios considerados por ambas partes y vinculados al Convenio de Integración Energética suscrito en mayo de 2008. Ese mismo día, los presidentes de

[109] Presas conformadas por un terraplenado, donde el material predominante es la roca. Estas estructuras deben contener una zona impermeable, que usualmente es obtenida mediante la aplicación de una membrana impermeable o una cobertura de concreto en el talud aguas arriba o mediante un núcleo impermeable de arcilla.

ambos países, en un comunicado conjunto, ratificaron su intención de avanzar en la integración, así como también instruyeron a los ministerios correspondientes que elaborasen un instrumento bilateral que permita establecer las condiciones necesarias para la integración e interconexión entre las localidades ubicadas en la frontera común.

El 17 de julio de 2009, el viceministro de Energía del Perú, Daniel Cámac, emitió un oficio destinado al secretario de Planeamiento y Desarrollo Energético del Ministerio de Minas y Energía del Brasil, Altino Ventura Filho. En él le planteó que el Ministerio de Energía y Minas del Perú ya no le ofrecía a Brasil construir 15 centrales hidroeléctricas (con una potencia de 19.285 MW), tal como se había evaluado, sino que las centrales que Brasil llevaría adelante sumarían un máximo total de 6000 MW de generación de energía. Además, en el oficio sostuvo la necesidad de que, tras una concesión de 35 años, las centrales y líneas de transmisión serían transferidas al Estado peruano. Por último, Cámac pidió que se garantice el cuidado del medio ambiente, sin aportar precisiones al respecto (Serra Vega, 2011).

El 22 de septiembre de ese mismo año, Ventura Filho respondió ese oficio afirmando que las propuestas planteadas por el Ministerio peruano no eran aceptables, dado que las empresas brasileñas ya habían realizado importantes inversiones destinadas a los estudios de factibilidad. En su respuesta, solicitó que las centrales sumen 20000 MW, que las concesiones sean a plazo indefinido, y que Perú se comprometa a suministrar a Brasil una cantidad firme de energía por 30 años, dado que, para ese momento, el mercado de electricidad peruano era autosuficiente. Esto último implicaría que la totalidad de la energía producida sea destinada al mercado brasileño. En términos de materia ambiental, Ventura Filho se comprometía a respetar la legislación ambiental peruana, la cual es más permisiva que la brasileña (ibíd.).

El 11 de diciembre de 2009, los presidentes asumieron el compromiso de que los ministerios competentes presentasen un proyecto de acuerdo que promoviese el desarrollo de centrales de generación hidroeléctrica en el territorio peruano para abastecer la demanda de Perú y la exportación de saldos hacia Brasil. Tras ese anuncio, el 15 de diciembre, el Congreso de la República del Perú sancionó la Moción Nro. 09273, en la que se exhortaba al Poder Ejecutivo a evitar la firma de un Acuerdo de Interconexión Eléctrica con Brasil de manera apurada, recomendando que la negociación se desarrolle

cumpliendo los parámetros técnicos y legales, con la finalidad de evitar el avasallamiento de los derechos de las comunidades indígenas.

En enero del 2010, en el marco del Seminario Internacional de Integración Energética Perú-Brasil, el viceministro de Energía peruano presentó cinco proyectos de centrales hidroeléctricas que tendrían el potencial para exportar energía hacia Brasil. Estas represas eran: Inambari, con una potencia estimada de 2000 mil MW; Pakitzapango, la cual se ubicaría en Junín y con una potencia estimada de 2200 MW; Mainique I, que se localizaría en Cusco y con una potencia estimada de 607 MW; Tambo 40, se emplazaría en Junín y con una potencia estimada de 1287 MW; y, por último, Tambo 60, que se ubicaría en Junín y con una potencia estimada de 579 MW (DAR y otrxs, 2011).

A pesar de la sanción de la Moción del Congreso Nacional Peruano exhortando al gobierno a no suscribir el tratado, el 16 de junio de 2010, los ministros de energía y minas de ambos países firmaron el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y la exportación de excedentes al Brasil", el cual fue ratificado por los presidentes Lula da Silva y Alan García ese mismo día en el marco de un encuentro llevado adelante en la localidad norteña de Manaos. El objetivo central de este acuerdo era el establecimiento de un marco legal para promover la construcción de centrales hidroeléctricas en la Amazonía peruana, así como también la determinación de las condiciones para la venta de la electricidad producida al mercado peruano y al brasileño.

En el marco de este acuerdo, se estableció que la capacidad máxima de las nuevas centrales hidroeléctricas sería de 7200 MW. En ese momento, la totalidad del consumo energético anual de Perú era de 4200 MW. De esa generación energética, se estableció un máximo para la exportación hacia Brasil de 6000 MW más una tolerancia del 20%. La distribución energética tendría el siguiente orden: en primer lugar, se priorizaría el mercado regulado peruano, en segundo lugar, el mercado libre peruano y, en tercer lugar, el brasileño.

A su vez, en el marco del acuerdo, se establecían concesiones de las centrales de producción y de las líneas de transmisión por un plazo de 30 años. Además, en los contratos de concesión de cada hidroeléctrica se fijaban los porcentajes de energía que se distribuirían entre los mercados de ambos países. Por último, se determinaba que los costos de las líneas de transmisión que conecten las nuevas centrales con Brasil serían

sustentados por las empresas brasileñas, mientras que las líneas de transmisión para el mercado peruano correrían por cuenta del Perú.

El interés brasileño detrás del acuerdo energético estaba centrado, principalmente en tres puntos. Por un lado, las ganancias que implicaría la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas para empresas de bandera nacional. Por otro lado, la necesidad de un reforzamiento hídrico para las centrales que se encuentran ubicadas en la Amazonía brasileña (específicamente en el caso de Inambari, impactaría en el complejo de San Antonio, ubicado en el río Madeira). Por último, el incrementar las fuentes de energía para el desarrollo industrial, siendo el sector de mayor demanda energética –equivalente al 41.9% del consumo total de energía en Brasil- (DAR y otrxs, 2011). Es decir, el desarrollo de esta obra de infraestructura puede ligarse con el proyecto de desarrollo nacional delineado por el gobierno petista durante los mandatos de Lula da Silva.

Tal como planteamos en el capítulo *Categorías de Análisis*, Martins (2013) sostiene que el subimperialismo se caracteriza, entre otras cosas, por el control regional de las materias-primas y del abastecimiento energético. En esta línea, sostenemos que el Acuerdo Energético entre ambos países era parte de la estrategia subimperial adoptada por Brasil durante esos años. El interés de Brasil para negociar este tratado tenía tres puntos centrales: por un lado, garantizarse energía para sostener sus niveles de crecimiento; por otro lado, controlar el potencial energético existente en Perú; y, por último, la compra de energía a precio controlado. De esta forma, Brasil establecía un marco normativo acorde a los intereses de algunas fracciones de la burguesía que integraba el frente neodesarrollista y abonar a la política de desarrollo nacional establecida por el gobierno de Lula da Silva.

Por su parte, desde organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales comenzaron a plantearse críticas al Acuerdo Energético, entendiendo que el mismo no reportaría grandes beneficios para Perú. Por ejemplo, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), basándose en el artículo 56 de la Constitución Política peruana, el cual establece que los tratados que versen sobre materia de soberanía (entre otras materias) tenían que ser aprobados por el Congreso antes de ser ratificados por el presidente, exigió que este tratado pasara por el parlamento antes de ser ratificado. Frente a esto, se presentó un proyecto para que la Comisión de Relaciones Exteriores del

Congreso tratase el texto del Acuerdo. Tras años cajoneado, en mayo de 2014, esta Comisión parlamentaria decidió archivarlo.

Por otro lado, ante las críticas que fueron surgiendo, el gobierno peruano se vio obligado a explicar el interés que representaba para el país la firma de dicho acuerdo. Las razones que expusieron para sustentar el avance de este Acuerdo fueron: por un lado, la necesidad de desarrollar hidroeléctricas, con el objetivo de satisfacer el mercado interno; por otro lado, la obtención de un beneficio al exportar energía hacia Brasil; y, por último, el fortalecimiento del sistema eléctrico peruano al conectarse con uno de mayor nivel y tamaño (Serra Vega, 2011)[110].

Otro de los puntos centrales del Acuerdo permitía que Brasil financie, construya y opere seis plantas hidroeléctricas en territorio peruano (algunas de las cuales habían sido presentadas por Daniel Cámac en el marco del Seminario Internacional de Integración Energética Perú-Brasil, realizado en enero de 2010): Inambari (2000 MW), Sumabeni (1074 MW), Pakitzapango (2000 MW), Urubamba (940 MW), Vizcatán (750 MW) y Chuquipampa (800 MW). El costo total por el desarrollo de las seis obras se estimó en un valor de 16 mil millones de dólares (Romegialli y Luchetti, 2016).

Las empresas constructoras involucradas en la construcción de estas represas eran en su totalidad de bandera brasileña. Tal como lo explica la ingeniera Rosario Linares Valderrama:

> todas esas empresas brasileñas de construcción se habían propuesto construir todo esto grupo de hidroeléctricas y se dividieron nuestro territorio, a Odebrecht le tocaba la Pakitzapango, a OAS le tocaba la Inambari, luego más arriba tenemos en la zona de Cajamarca que estaba destinada para Camargo Correa y Andrade Gutierrez, entonces como todas estas tenían la intención de un marco jurídico beneficioso, todas presionaban sobre el gobierno peruano, formaron algo así como un holding.

Dentro de estos proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas, se seleccionaron dos obras para impulsar en primer término argumentando que se trataba de las más viables y beneficiosas. Así, se decidió comenzar con la construcción de Inambari, que tendría un costo de 4800 millones de dólares. Esta decisión estaba ligada a que esta represa sería el punto de confluencia de las líneas de trasmisión del resto de las centrales y, desde allí, se conectaría con las líneas de trasmisión energética brasileña. De esta forma,

[110] Si bien las centrales hidroeléctricas no se incluyeron en las causas peruanas vinculadas a la Operación Lava Jato, dado que las mismas no fueron construidas, cabe recordar que el presidente Alan García, quien ratificó el Acuerdo, fue condenado por su participación en estas causas.

Brasil avanzaba en la construcción de esta represa que favorecía sus intereses, dado que podría surtirse de energía a menor costo de inversión.

Para llevar adelante la construcción y operación de estas centrales se constituyeron dos empresas: en Brasil, la Inambari Geração de Energia (IGESA), un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras (29,4%) y Furnas (19,6%), y por la constructora privada OAS[111] (51%); y, en Perú, la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C (EGASUR). Estas empresas anunciaron que disponían de un crédito de 2500 millones de dólares, el cual sería otorgado por el BNDES para la construcción de la central de Inambari.

Tras la difusión del estudio en torno a las centrales con capacidad de exportación de energía hacia Brasil, el 18 de junio de 2008, el Ministerio de Energía y Minas de Perú, a través de la Resolución Nro. 287, le otorgó la concesión temporal del proyecto Inambari a la compañía EGASUR. Esta concesión, establecida por un plazo de dos años, tenía por objeto el desarrollo de estudios relacionados a la actividad de generación de energía eléctrica.

Tras obtener la concesión de Inambari, en septiembre de ese mismo año, el 99.99% de las 10 mil acciones de EGASUR, así como los derechos de concesión, fueron transferidos a IGESA -conformada dos meses antes- por un monto de 688 mil dólares. El 0.01% restante fue destinado a nombre del gerente general de EGASUR, Valfredo de Assis Ribeiro Filho (Canal Alata, 2017).

Unos meses antes, entre diciembre de 2007 y enero de 2008, la compañía peruana S&Z Consultores, en asociación con Engevix Engenharia, la principal empresa de consultoría en Brasil, realizaron un Estudio Preliminar del Proyecto de la central Inambari, contratados por la constructora OAS. A su vez, entre mayo y agosto de 2008, llevaron adelante el Estudio de Prefactibilidad. Por otra parte, para el desarrollo del estudio de impacto ambiental fue contratada Ecoplaneación Civil S.A Ingenieros Consultores y Constructores (ECSA), una empresa peruana.

[111] Una de las principales empresas constructoras de bandera brasileña. Estuvo implicada en la investigación sobre el caso de corrupción conocido como "Operación Lava Jato". En Perú, se inició el Caso OAS para investigar los casos de corrupción ligados a esta compañía. Entre 2009 y 2013, OAS, ya sea de manera individual o en consorcio, consiguió seis contratos con el Estado peruano, los cuales fueron adjudicados por Ministerios de Estado, la Municipalidad de Lima y el Gobierno Regional de Cusco. La suma total de los contratos asciende a US$ 1200 millones. Por este caso están siendo investigados: el ex presidente, Ollanta Humala Tasso; su esposa, Nadine Heredia Alarcón; la ex Alcaldesa Metropolitana de Lima, Susana Villarán de la Puente; y el ex Alcalde Metropolitano de Lima, Luis Castañeda Lossio.

El 5 de marzo de 2009, se llevó adelante una reunión entre Alan García, el director de la OAS, César Uzeda, y el gerente de la empresa en Perú, Valfredo de Assis Ribeiro Filho. Tras la reunión, Uzeda afirmó a la prensa peruana que, en conjunto con Eletrobras, tenían programado invertir aproximadamente cuatro mil millones de dólares en la construcción de la central de Inambari. A su vez, anunció que ya se habían desembolsado 20 millones de dólares en diseños y planteamientos y que las obras se iniciarían en el primer trimestre de 2010[112].

Para llevar adelante la construcción de Inambari era necesario avanzar en la realización de talleres informativos que contaran con la población de la región, con el fin de informar a lxs pobladores de la zona en torno a la magnitud de las obras que se realizarían. Tal como plantea Gustavo Lins Ribeiro (1985), cuando desglosa el concepto de proyectos de gran escala, en el marco de este tipo de obras es necesario la promoción de mecanismos de legitimación que promuevan la idea –a la cual el autor denomina ideología de la redención- de que el avance del proyecto es positivo, por la creación de oportunidades para miles de personas o para sacar a una región de una situación de atraso. En esta línea, los talleres tenían por objetivo no sólo informar, sino también garantizar la licencia social en torno a la obra de infraestructura.

Estos talleres se iniciaron el 16 de abril de 2009, realizando cuatro encuentros en los cuales algunos sectores de la población de la región concurrieron a manifestarse en contra del proyecto, por lo cual dos de estos talleres debieron ser cancelados. En agosto de ese mismo año, comenzó la segunda ronda de talleres, en los que nuevamente se acercaron algunos grupos que se verían afectados por el avance de las obras para demostrar su rechazo ante el proyecto. Las principales críticas planteadas por algunos sectores de la población estaban vinculadas a la escasa información que las empresas consultoras brindaban. Así lo relata el integrante de SER, Aldo Santos:

> Cuando hacen la explicación, por ejemplo, les llaman talleres participativos para la construcción del estudio de impacto ambiental y lo que hacen las empresas es, empresas consultoras que es un servicio que las empresas tercerizan, vienen un ingeniero ambiental, un biólogo y te explican en lenguaje técnico lo que hay en el entorno, entonces yo que estaba familiarizado con el tema, tenía limitaciones para entender lo que estaba explicando el ingeniero ambiental o el biólogo, entonces no quiero pensar, no estoy minimizando a las personas de ninguna manera, pero digo yo que me he esforzado por entender el tema, por buscar información, esas personas de la comunidad, que no necesariamente están pensando en eso, porque no es prioridad en el día a día, es difícil, es un abuso, es información altamente técnica

[112] El Comercio, "Brasileños invertirán US$ 4 mil mlls en hidroeléctrica en Madre de Dios", 05/03/2009.

> compartida con comunidades que no tienen esa *expertise* o ese nivel de conocimiento técnico.

Frente a esta situación, el 20 de agosto de 2009, el gobierno provincial de Puno difundió un pronunciamiento[113] en el cual rechazaba la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari. Este rechazo se centraba en tres puntos principales. En primer lugar, el incumplimiento de la Resolución del Ministerio de Energía y Minas Nro. 535-2004, que establecía la participación ciudadana para la realización de actividades energéticas dentro de los procedimientos vinculados a la evaluación de los estudios ambientales.

El segundo punto de este pronunciamiento se centraba en las implicancias y consecuencias que traería aparejado el proyecto, el perjuicio económico en relación a la inversión estatal a través del gobierno regional y los gobiernos locales en relación a obras de infraestructura educativas y de salud, y el anegamiento de algunas partes de la carretera Interoceánica Sur. De hecho, desde la Sociedad Civil por la Construcción de la Interoceánica (SOCIT) denunciaron que las empresas a cargo del desarrollo de la carretera comenzaron a dilatar la finalización del tramo que se inundaría por el avance de Inambari.

Por último, el tercer punto, planteaba el rechazo por el desplazamiento de poblaciones que producirían los anegamientos. Por otro lado, cuestionaban los impactos ambientales que generaría el avance de la central de Inambari, tales como la eliminación de flora y fauna, la interrupción de rutas migratorias de algunos peces, los efectos sobre el régimen hídrico del río, la colmatación y sedimentación de la represa, la producción de gas metano, los derrumbes en las márgenes del embalse, así como la afectación que implicaría para el Parque Nacional Bahuaja Sonene (Serra Vega, 2010).

En octubre de ese año, en el marco de la realización del Seminario Internacional de Interconexiones y Negocios de Generación y Transmisión, organizado por la Comisión de Integración Energética Regional de Brasil, el Superintendente de Operaciones en el Exterior de Eletrobras, Sinval Gama, declaró que la compañía se encontraba evaluando el desarrollo de proyectos en ocho países, dentro de los cuales los estudios más avanzados eran los de la hidroeléctrica Inambari y la línea de transmisión que la conectaría con las centrales del Madeira, en Porto Velho (ibíd.). Además de los intereses en torno a la construcción y a la venta de energía, la represa Inambari implicaría otro beneficio para empresas brasileñas, tal como explicó Rosario Linares Valderrama:

[113] Servindi, "Perú: Puno rechaza construcción de Central Hidroeléctrica de Inambari", 13/12/2009.

> El uso que se le iba a dar al embalse, se iba a beneficiar a que las dos siguientes hidroeléctricas, digamos más abajo ya en el territorio brasileño en Pirão y San Antonio, se iban a beneficiar y eso iba a significar al año 210 millones de ingresos netos para las empresas y para el gobierno de Brasil, para las empresas hidroeléctricas, porque el embalse de Inambari iba a ser un embalse de regulación para que reciban la cantidad adecuada de agua las dos hidroeléctricas que están más abajo, o sea en tiempo de lluvia en Inambari iban a evitar que salga mucho flujo de agua y en tiempo de seca iban más abajo iban a soltarle el agua, entonces eso significaba que esas dos hidroeléctricas de más abajo no iban a tener pérdidas por falta de agua, ni tampoco iban a verse presionadas por algún rebose, o sea no iban a tener en ningún momento que parar o restringir la producción.

Ante el rechazo que estaba suscitando entre la población el avance de la central Inambari, el 19 de diciembre el 2009, el Ministerio de Energía y Minas del Perú emitió un comunicado que fue publicado en el Diario el Comercio[114]. El mismo trazaba una serie de puntos que buscaban contrarrestar la imagen negativa en torno al proyecto. En primer lugar, desde el Ministerio sostenían que, en el marco de la Resolución Nro. 287-2008, a través de la cual se le otorgó la concesión temporal a EGASUR, se planteó la evaluación de la viabilidad técnica y económica del proyecto, así como también del impacto ambiental que se pudiese generar y las formas de mitigación del mismo. En segundo lugar, afirmaban que las hectáreas que podrían llegar a verse afectadas eran 21 mil, el total de las personas que deberían ser relocalizadas serían menor a 3300 y que el Parque Nacional Bahuaja Sonene no se vería impactado. A su vez, resaltaban que se tomarían medidas para mitigar los efectos que se generan, así como también se contemplaría relocalización de las personas afectadas y se le otorgaría una compensación económica acorde a su economía de ese momento y futura. También, se comprometían a que, en caso de que se viese afectada la carretera interoceánica, se contemplaría la sustitución de esos tramos. Por último, subrayaban que el desarrollo de ese proyecto tendría beneficios para el país y que no podría ser realizado de otra forma. Además, manifestaban:

> rechazamos contundentemente la afirmación que el gobierno central tenga una actitud entreguista y priorice los intereses extranjeros sobre los nacionales. Actualmente se está sosteniendo conversaciones con los representantes de Brasil, con miras a hacer factible una interconexión eléctrica con dicho país, lo cual sin duda representa una seguridad de suministro para el Perú.

El estudio de factibilidad desarrollado por Engevix Engenharia y S&Z Consultores (2010) fue presentado para su aprobación por el gobierno peruano el 14 de enero de 2010. En él se determinó la viabilidad en términos energéticos y económicos del proyecto Inambari. Entre los datos que aportó se recoge que el área anegada por la represa sería de 377.66

[114] Ministerio de Energía y Minas de Perú, "Sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari a la Comunidad en General", *Diario el Comercio*, 19/12/2009.

kilómetros cuadrados y que los tramos 2 y 4 de la carretera Interoceánica se verían afectados por las inundaciones, planteando una relocalización de estos (tal como observamos en la siguiente imagen), lo que implicaría un costo de 377,7 millones de dólares.

Trazos alternativos propuestos por EGASUR para reemplazar los tramos inundados de la Carretera Interoceánica

Fuente: Serra Vega, 2010.

Frente a los costos y el tiempo que implicaría, el descontento de la población no cesó a pesar de esta presentación de nuevos trazos planteada por las consultoras que realizaron los estudios. Tal como explicó Rosario Linares Valderrama:

> Se iba a destrozar la carretera interoceánica y, en un principio, la empresa ni siquiera había considerado su reemplazo, cuando ya escuchó los reclamos de la población y de personas de autoridades de Puno, nos hicieron unos planteamientos que cuando seguimos analizándolos tampoco eran viables, porque hay una cosa bien clara: el trazo por Puno es insustituible, décadas pasaron para que se encuentre el mejor trazo y cualquier otro probable reemplazo será en papel, pero en la realidad no, porque toda esa zona es de una topografía tremenda, muy abrupta y además son tierras no estables, y que sigue el trayecto del río, ha hecho que toda esa zona se estabilice bastante, entonces hacer un reemplazo por cualquier otra zona eso es simplemente un engaño, entonces la gente comprendió eso y muchos que conocen la selva sabían y saben esa particularidad, así que era pues imposible que aceptemos un proyecto en toda la región Puno que sabíamos que nuestro principal medio de comunicación con Madre de Dios iba a ser destruido, la empresa cuando ya vio los reclamos propuso que no nos preocupemos porque ellos se iban a encargar de la carretera, pero se les preguntaba en los talleres por dónde iba a ser la carretera y mostraron primero un trazo, primero habían ingresado una propuesta al gobierno peruano para hacer un

> trazo que iba a cruzar un área natural protegida, el Bahuaja-Sonene, como eso no está permitido, propusieron que iban a hacer el trazo por Cusco, pero eso iba a implicar mínimo, y lo dice el estudio de impacto ambiental, 30 minutos más de trayecto, ese costo obviamente que lo iban a trasladar al usuario.

Un mes después de su presentación, el 12 de febrero de 2010, la Dirección General de Electricidad determinó que el estudio presentado no podía ser considerado como Estudio de Factibilidad. Esto se debió a dos razones, por un lado, que no se había desarrollado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y, por el otro, que no poseía un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos, tal como establece la legislación peruana.

Por otra parte, para la realización del Estudio de Impacto Ambiental se contrató a la empresa Ecoplaneación Civil S.A. Para llevarlo adelante, se destinó un presupuesto cercano al 2.3% de la inversión total, mientras que el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA) exige, para este punto, entre un 6% y un 8.5% del presupuesto total de la inversión (Serra Vega, 2010).

Meses más tarde, el 24 de septiembre de 2010, Alan García presentó un proyecto de ley que buscaba modificar el marco jurídico eléctrico vigente en el país. Entre otras modificaciones, el texto proponía eliminar la figura de concesión temporal para la realización de estudios de factibilidad, así como también los requisitos financieros y ambientales para la aprobación de la concesión definitiva. Esta alteración se aplicaría para los procedimientos que en ese momento se encontraran en trámite, por lo que esto habría permitido la otorgación de la concesión definitiva de la central de Inambari sin la necesidad de realizar el Estudio de impacto ambiental correspondiente. Este proyecto generó un fuerte rechazo por parte de organizaciones de la sociedad civil y académicas, razón por la cual fue archivado (Canal Alata, 2017).

El 19 de junio de ese mismo año, el Ministerio de Minas de Perú renovó la concesión temporal otorgada a EGASUR[115], con la finalidad de que esta empresa pudiera avanzar con los estudios necesarios para obtener la concesión definitiva. El 7 de octubre, fecha en la que vencía el plazo de la concesión temporal, EGASUR presentó el Estudio de Factibilidad, el cual incluía una evaluación ambiental, pero no un Estudio de Impacto Ambiental, obligatorio para obtener la Certificación Ambiental correspondiente tal como lo establece el marco normativo.

[115] Resolución Nro. 259-2010 del Ministerio de Energía y Minas de Perú.

En junio de 2011, en el contexto de desarrollo de elecciones nacionales, se produjeron movilizaciones masivas en Puno, en las que confluyeron los frentes de defensa y las rondas campesinas de Carabaya, ante la falta de certidumbre en torno a la continuidad del proyecto. Meses más tarde, el Ministerio de Energía de Perú declaró concluida y extinta definitivamente la concesión temporal de la central de Inambari, a pesar de que la misma había vencido meses atrás (Canal Alata, 2017).

El 5 de junio de 2011, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas resultó ganador el candidato del Partido Nacionalista Peruano, Ollanta Humala. Doce días después de su victoria, se declaró en abandono el procedimiento de participación ciudadana necesario para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de la central de Inambari[116], ya que la empresa no había fijado una nueva fecha para la realización del taller que había quedado pendiente. Frente a esta decisión, EGASUR presentó un recurso de apelación, que, el 30 de septiembre, fue declarado infundado por el Ministerio de Energía[117], confirmando así el abandono.

El 7 de mayo de 2013, se cumplió el período de validez del Convenio de Integración Energética suscripto entre Brasil y Perú en el 2008, el cual era válido por cinco años. Finalmente, el 12 de mayo de 2014, la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú decidió archivar el proyecto por el cual el Congreso aprobaría el Acuerdo Energético Perú-Brasil. Entre los argumentos esgrimidos por la Comisión señalaban que, además de los impactos negativos en términos económicos y ambientales que traería aparejados, este convenio vulneraba algunos artículos establecidos en la Constitución Nacional, dado que comprometía los recursos naturales que pertenecen al patrimonio nacional en beneficio y para uso exclusivo de un Estado extranjero.

Tras el estallido de la causa Lava Jato en Brasil, que investigaba el pago de coimas por parte de empresas de ingeniería brasileñas a funcionarixs para la obtención de licitaciones vinculadas a obras públicas, en Perú comenzó a investigarse la corrupción que ligaba a funcionarixs nacionales con estas empresas. Estas investigaciones fueron motivadas por el trato preferencial que recibieron algunas de estas compañías en Perú y que quedaron evidenciadas en la rapidez con la que se otorgaron las concesiones y la forma en que se facilitó la adjudicación de estas obras.

[116] Resolución Directoral Nro. 186-2011 del Ministerio de Energía y Minas de Perú.
[117] Resolución Viceministerial Nro. 07-12011 del Ministerio de Energía y Minas de Perú.

En este marco, la Justicia peruana constituyó dos casos centrales: por un lado, el que involucraba a la constructora Odebrecht, y, por el otro, a OAS. Por estas causas terminaron imputadas personas ligadas a estas empresas en Perú y numerosxs funcionarixs públicxs peruanxs, incluso los ex presidentes Alan García[118], Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

5. CENTRAL GARABÍ-PANAMBÍ

Otro de los proyectos que se impulsaron en el marco del sector de energía de la IIRSA fue la represa hidroeléctrica de Garabí-Panambí, que se realizaría sobre el río Uruguay, que delimita la frontera entre Brasil y Argentina. Este proyecto, si bien data de décadas anteriores, se incorporó a la IIRSA en 2010 en el marco del Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile.

En el marco del desarrollo del proyecto se incorporaron algunas empresas tanto argentinas como brasileñas. En el marco de los estudios de factibilidad e impacto ambiental, se involucró Engevix Engenheria S.A. Por otra parte, Eletrobras y la empresa argentina Emprendimientos Energéticos Binacionales (EBISA)[119] funcionarían como operadoras del proyecto. A su vez, se anunció que el BNDES financiaría gran parte del proyecto de construcción de esta represa hidroeléctrica.

5.1. Características del proyecto

El primer proyecto hidroeléctrico de Garabí fue elaborado en 1988, y planteaba la construcción de una represa ubicada 7 kilómetros aguas abajo de las ciudades de Garruchos (Argentina y Brasil poseen una ciudad con el mismo nombre), con una potencia de generación de energía de 1800 MW, una cota[120] de 9 metros y un área de inundación cercana a las 81 mil hectáreas, en porciones aproximadamente similares en ambos países. El proyecto era complementado con la represa de Roncador, localizada a la altura del municipio de Porto Vera Cruz, en Brasil, la cual contaría con una cota de 164 metros y con una potencia instalada de 2800MW (FARN, 2014).

[118] El miércoles 17 de abril de 2019 se conoció que, a solicitud del fiscal José Domingo Pérez, el Juez Juan Carlos Sánchez Balbuena del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, emitió una orden de detención preliminar por 10 días contra Alan García y otrxs funcionarixs. Ese mismo día, García se suicidó en su domicilio.

[119] Empresa estatal cuyas acciones pertenecen a la Secretaría de Energía (99%) y a Nucleoeléctrica Argentina S. A. (1%). Fue constituida en 1997, como la continuación de Agua y Energía, la cual había sido privatizada. Su propósito era acompañar y administrar los proyectos hidroeléctricos binacionales existentes en las fronteras del país (Soldateli Paim, 2016).

[120] La cota es el punto de referencia que se utiliza para medir los niveles de embalse de los diques.

En 2003, las consultoras CNEC Engenharia S.A. y Demison S.A. desarrollaron un nuevo proyecto, que retomaba el antiguo, llamado Garabí XXI. Este proponía la construcción de dos represas: la original de Garabí, sólo que a una cota de 74 mts., y la de Santa María, con una cota de 94 mts. Ambas tendrían un embalse de 20 mil hectáreas y una potencia instalada de 900 MW. Este nuevo proyecto reducía en un 60% el territorio de anegamiento, pasando de 40 mil hectáreas de inundación a 15 mil (ibíd).

Demison S.A. es una empresa argentina fundada en 1978 y cuya principal rama de actuación es la consultoría en ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente. Por su parte, CNEC Engenharia fue creada en 1959 e incorporada, tiempo más tarde, al grupo Camargo Corrêa.

En abril de 2004, la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) presentó un nuevo proyecto que disminuía la cota de inundación de Garabí a 82.5 mts. y planteaba una potencia de 900 MW. A su vez, proponía la construcción de dos represas: la de San Javier, con una cota de 110 mts. y una potencia de 900 MW, y la de Santa Rosa, con una cota de 130 mts. y una potencia de 900 MW, excluyendo, de esta forma, la de Roncador que estaba incluida en el proyecto de 1988. Así, el complejo generaría una potencia de 2700 MW y una producción de energía media anual de 13800 MW (Palacios y otrxs, 2013).

Tras estas dos presentaciones, el Foro de Municipios de las provincias de Corrientes y Misiones declaró su apoyo a Garabí XXI, por la reducción de la afectación de tierras que el mismo implicaba. A su vez, solicitaron que se contemplen algunas medidas: que el ente administrador de la central se instale en la región; que se otorgue un porcentaje mayor de regalías a los municipios afectados; que se impulse legislación para repoblar con peces y forestar bordes con especias nativas; que se plantee un costo diferenciado de energía (que los municipios más afectados paguen costos más bajos de energía); y que se desarrolle un régimen de promoción a la instalación de industrias (ibíd.).

En 2010, el proyecto de construcción del Complejo Hidroeléctrico Garabí-Panambí fue lanzado públicamente de la mano de Eletrobras y EBISA, incorporándose a la cartera de proyectos de la IIRSA en el marco del Eje MERCOSUR-Chile e introduciendo algunas modificaciones a las anteriores propuestas. La incorporación a esta iniciativa sudamericana se dio de forma desmembrada, es decir, planteando dos proyectos

diferentes, Garabí, por un lado, y Panambí, por el otro, más allá de que para la realización de los estudios de factibilidad se tomaban en conjunto.

Este eje es el que posee mayor comercio intraregional, razón por la cual se incluyen numerosos proyectos de conectividad y corredores viales. Entre la producción principal de esta región se destacan *commodities* vinculadas al agronegocio, a la minería y a la producción hidrocarburífera. A su vez, existe un gran comercio de bienes industriales vinculados al sector aeronáutico, automotriz, metalmecánico, petroquímico, materiales de construcción, metalurgia–siderurgia y aluminio, electrodomésticos, textil, confecciones, goma y plásticos, entre otros. Por último, este territorio reviste una vital importancia en términos ambientales y ecosistémicos, dada la presencia de pulmones verdes, reservorios de biodiversidad genética, fuentes de agua dulce, tierras fértiles y bosques nativos.

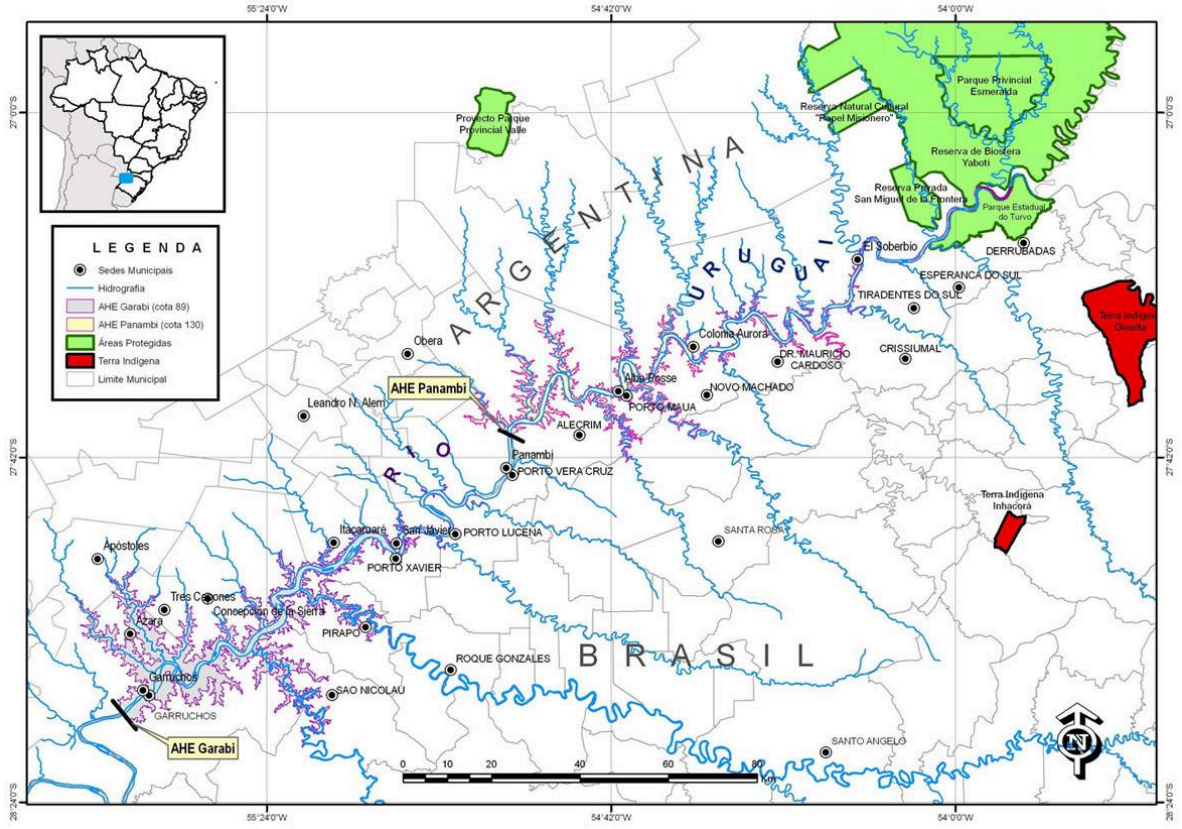
Dada la importancia que posee el comercio al interior de este territorio, tal como se planteó en un documento oficial, las obras y los objetivos de este eje se centraron en:

> desarrollar infraestructura y logística para incrementar el comercio entre los mercados locales, regionales y globales; (ii) incrementar la competitividad de las cadenas productivas existentes y desarrollar nuevas a nivel regional; (iii) optimizar los flujos de bienes y servicios, así como promover el desarrollo del turismo y facilitar la circulación de personas; y (iv) aumentar la capacidad y confiabilidad de los sistemas eléctricos y gasíferos, y diversificar la matriz energética (IIRSA- COSIPLAN, 2017: 223).

En el marco de este eje se incluyeron, en la rama de energía, cinco proyectos de interconexión: tres de interconexiones eléctricas y dos nuevos gasoductos. A su vez, se incorporaron cinco proyectos de generación de energía: cuatro hidroeléctricas y una termoeléctrica (Ceceña, Aguilar y Motto, 2007).

En este marco fue que se introdujo el proyecto de Garabí-Panambí. El mismo tenía por objetivo desarrollar dos represas (cuya ubicación se puede observar en la imagen que se encuentra a continuación). Por un lado, una se ubicaría en los saltos de Garabí, cercana a la localidad de Garruchos, Corrientes, contando con una cota de 89 mts., una potencia instalada de 1152 MW y una generación anual de 5970 GWh. Por otro lado, Panambí, que se instalaría en la zona cercana a la localidad misionera de Santa María, la cual tendría una cota de 130 mts., con una potencia instalada de 1048 MW y una generación anual de 5475 GWh.

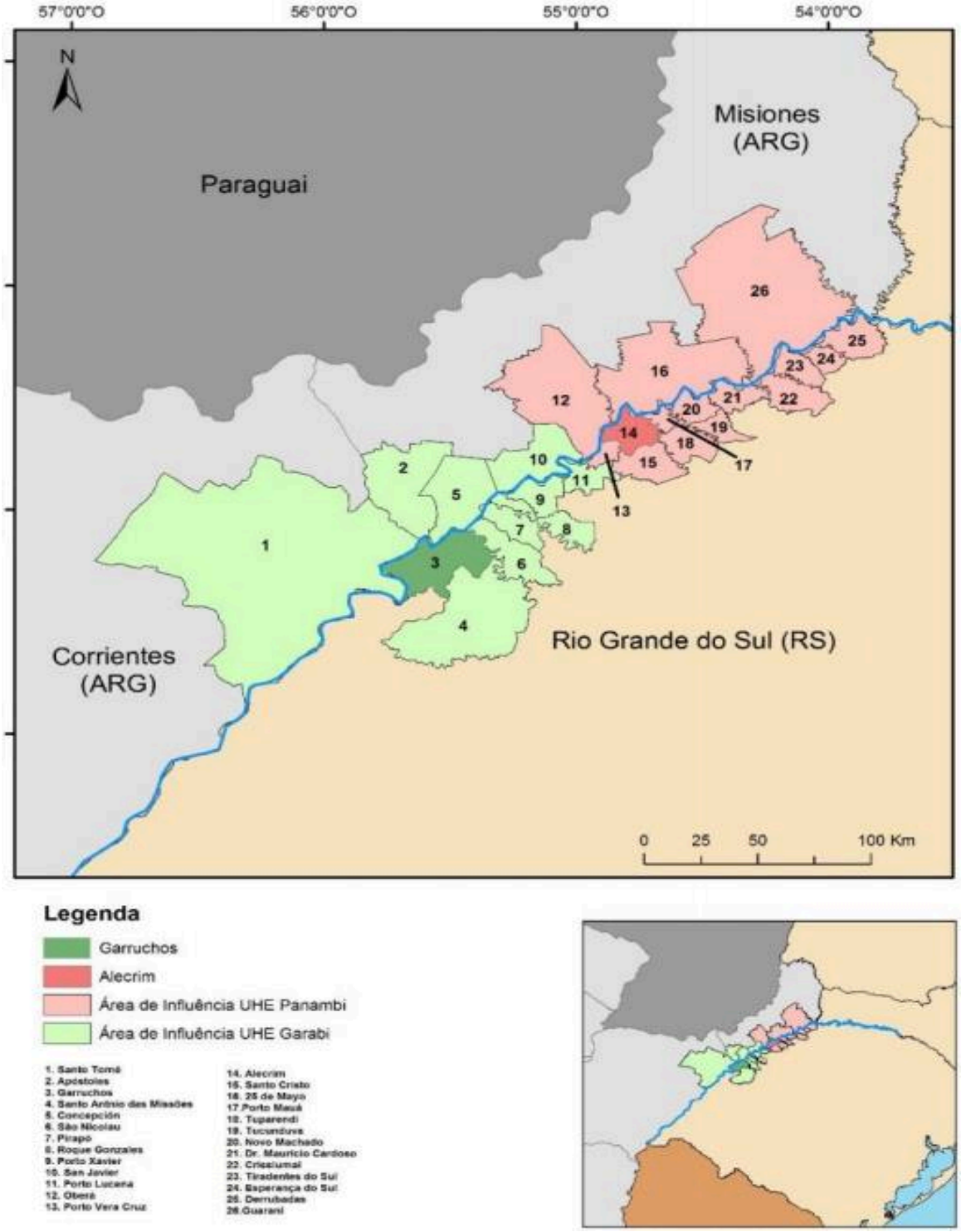
Mapa de la región y de los proyectos hidroeléctricos



Fuente: Scheibner Zimmermann, 2015.

Tal como estaba planteado, este proyecto tendría un impacto negativo a ambas orillas del río Uruguay. Tal como se aprecia en la siguiente imagen, afectaría los municipios de Santo Tomé, Apóstoles, Garruchos, Santo Antonio das Missões, Concepción, São Paulo, Pirapó, Roque Gonzales, Porto Xavier, Porto Lucena, Oberá, Porto Vera Cruz, Alecrim, Santo Cristo, 25 de Mayo, Porto Mavá, Tuparendi, Novo Machado, Dr. Mauricio Cardoso, Crissiumal, Tiradentes do Sul, Esperança do Sul, Derrubadas y Guaraní.

Mapa de los municipios que se verían afectados



Fuente: Losada, 2017.

Una de las principales preocupaciones que existían entre las poblaciones a ambos márgenes del río Uruguay se centraba en las implicancias que generaría en términos de relocalización. Si bien los estudios oficiales planteaban que el desplazamiento de población alcanzaría a 12600 personas, según estimó la Mesa Provincial contra las

Represas de Misiones -organización que llevó adelante la resistencia contra el proyecto- las familias que deberían ser relocalizadas ascenderían a 17 mil aproximadamente.

En la provincia de Misiones eran ya conocidas las consecuencias que una central de embalse de esta magnitud podía producir. Uno de los impactos socioterritoriales más importantes que se ha dado en la región son los producidos por la Central Hidroeléctrica Yacyretá, la cual se trata de un conjunto de obras realizadas entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná.

Cuando la represa fue anunciada en 1973, momento en que se firmó el Tratado de Yacyretá entre Juan Domingo Perón y Alfredo Stroessner, se produjeron movilizaciones de las poblaciones que se verían forzadas a abandonar sus hogares ante el avance de las obras. Sin embargo, no fue hasta 1994 que la represa se puso en marcha. Desde su comienzo hasta la actualidad, si bien desde la entidad binacional asumen la relocalización de 40 mil personas, algunas organizaciones sociales estiman que ese número puede ascender a los 100 mil[121]. El integrante de la Mesa Provincial No a las Represas de Misiones, Sergio Álvez, repone en torno al proceso de construcción de esta central:

> Es como un rasgo distintivo de los procesos de construcción y demás de las grandes hidroeléctricas, acá se sintió muy fuerte, los desalojos fueron muy violentos, además hubo muchas estafas a las familias en lo que les correspondía en relación a un ajuste de indemnización, los sacaban de la costa del río donde pescaban, donde eran boleros, como le decimos acá a los fabricantes artesanales de ladrillos, lavanderas, un sinfín de oficios que se vieron truncados porque a las familias las sacaban violentamente de las costas para llevarlas a barrios de relocalizados se les dice, que estaban muy lejos, donde no tenían trabajo, donde en muchos casos ni siquiera llegaba el colectivo, no había salita de salud, todo un proceso de décadas muy duro, muy difícil, pero que fue gestando una consciencia muy clara en torno a lo que significa una represa hidroeléctrica.[122]

Por su parte, del lado brasileño existen en funcionamiento cuatro represas sobre el tramo superior del río Uruguay, que son las de Itá, Machadinho, Passo Fundo y Barra Grande. Tal como se dio en el caso de Yacyretá, para la realización de estas represas también hubo procesos de desplazamiento de comunidades.

Por otra parte, el complejo Garabí-Panambí no sólo traería aparejadas consecuencias negativas en términos de desterritorialización de comunidades, sino que la región también tendría una afectación a nivel ecosistémico y ambiental. Según el propio inventario de la empresa, con el avance de la central de Garabí serían inundados 520 km^2, teniendo un impacto en el 4.4% de áreas en el Parque Ruta Costera del río Uruguay y 82%

[121] Lavaca, "Las víctimas de Yacyretá", 18/04/2007.
[122] Entrevista realizada en abril del 2020.

del área de la Reserva Privada Santa Rosa; mientras que la de Panambí afectaría aproximadamente 19 mil hectáreas de vegetación nativa (FARN, 2014). El embalse de la represa Garabí ocuparía 64200 hectáreas y el de Panambí 30 mil hectáreas[123]. A su vez, en el marco del estudio de factibilidad realizado se determinó que Garabí afectaría 11 de los 87 sitios arqueológicos identificados en la zona y ligados al pueblo indígena guaraní, que ancestralmente habita la región (EBISA y Eletrobras, 2010).

5.2. Genealogía del caso

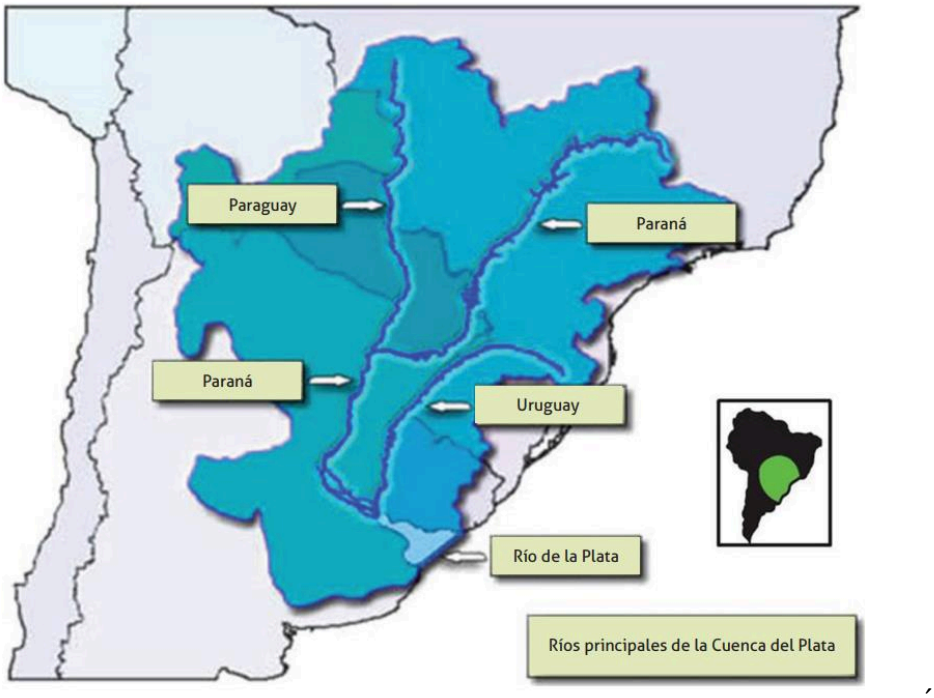
En 1967, fue realizada, en la ciudad argentina de Buenos Aires, la Primera Conferencia de Cancilleres de la Cuenca del Plata[124] (en la siguiente imagen podemos observar las regiones que integran esta cuenca). Uno de los temas principales de esta conferencia fue la construcción de represas en la región. Más allá del carácter multilateral de este encuentro, el gobierno brasileño presentó las negociaciones bilaterales llevadas adelante con Paraguay en el marco de la Comisión Técnica Brasileño-Paraguaya, creada unos días antes.

A su vez, se discutió el contenido del Tratado de la Cuenca del Plata, que tenía por finalidad institucionalizar el sistema de la cuenca y concretar esfuerzos entre los países para avanzar en la interconexión de sus áreas de influencia. Argentina propuso el principio de consulta previa, que planteaba la obligatoriedad de acuerdo entre los países que integraban la cuenca para la ejecución de cualquier tipo de emprendimiento -incluso los emplazados en territorio propio de algún país-. Por su parte, Brasil defendió el principio de responsabilidad jurídica, que determinaba el compromiso de evitar eventuales daños y, de realizarse daños, se establecía una indemnización para reparar los perjuicios generados. Sin embargo, ninguno de estos principios logró alcanzar un consenso (Soldateli Paim, 2016).

[123] Los Verdes, "Los Verdes dicen no a la represa Garabí en la marcha que comienza hoy en Misiones", 23/09/2013.

[124] El Río Uruguay integra la cuenca del Plata, emplazada en territorios de Paraguay, Uruguay, Brasil, Argentina y Bolivia.

Principales ríos de la Cuenca del Plata



Fuente: Baigun, 2015.

Finalmente, el tratado fue firmado en la I Reunión Extraordinaria de Cancilleres, realizada en Brasil en abril de 1969, entrando en vigencia el 14 de agosto de 1970. El mismo establecía que se mancomunarían esfuerzos para promover "el desarrollo armónico y la integración física de la Cuenca del Plata y de sus áreas de influencia directa y ponderable". A su vez, reconocía al Comité Intergubernamental Coordinador como el órgano encargo de

> promover, coordinar y seguir la marcha de las acciones multinacionales que tengan por objeto el desarrollo integrado de la Cuenca del Plata, y de la asistencia técnica y financiera que organice con el apoyo de los organismos internacionales que estime conveniente[125].

Tras la firma del Tratado, el 14 de marzo de 1972, se suscribió un acuerdo entre las empresas Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado[126], de Argentina, y Eletrobras, con la finalidad de llevar adelante estudios conjuntos en los tramos limítrofes del río Uruguay y su afluente, el río Pepirí Guazú. Este acuerdo se firmó teniendo en cuenta los objetivos postulados en el Tratado de la Cuenca del Plata.

[125] Tratado de la Cuenca del Plata. Disponible en https://cicplata.org/wp-content/uploads/2016/12/tratado-de-la-cuenca-del-plata.pdf

[126] Esta empresa fue creada en 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, privatizada durante los primeros años del gobierno de Carlos Saúl Menem y, en 1996, fue declarada en liquidación.

Sin embargo, al mismo tiempo se estaban llevando adelante disputas diplomáticas entre Argentina y Brasil producto de algunas consecuencias que podría traer aparejada la construcción de Itaipú[127]. En 1972, los países acordaron que, si bien Brasil no consultaría a Argentina sobre la construcción de Itaipú, sí le otorgaría información sobre el proyecto. Este acuerdo fue aprobado en la ONU. Sin embargo, años más tarde, el gobierno argentino de Héctor Cámpora cuestionó esta resolución por entender que se afectaban directamente los intereses del país (Soldateli Paim, 2016).

Años más tarde, el 17 de mayo de 1980, se rubricó un tratado entre el gobierno de Argentina y el de Brasil para el para el "Aprovechamiento de los Recursos Hídricos compartidos de los tramos limítrofes del Río Uruguay y de su afluente el Río Pepirí Guazú". Entre las acciones que se incluían en el tratado se consignó el aprovechamiento hidroeléctrico de estas fuentes de agua, el mejoramiento de condiciones de navegabilidad, la atenuación de los efectos de las crecidas extraordinarias y la utilización racional de las aguas para usos consuntivos, estableciendo que estos usos del río debían llevarse adelante teniendo en cuenta la preservación del ambiente y de los ecosistemas. A su vez, se estableció que los encargados de las obras hidroeléctricas serían Eletrobras y EBISA (Fonseca, 2017).

El 28 de agosto de 1992, se firmó el Contrato de Interconexión, suministro e intercambio de energía eléctrica entre la compañía argentina Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado, y las brasileñas Eletrobras y Centrales Eléctricas do Sul S.A. (ELETROSUL)[128]. El objetivo principal del contrato era el establecimiento de normas legales para la exportación de energía desde Argentina hacia Brasil (Organización Latinoamericana de Energía, 2016).

Posteriormente, el 9 de abril de 1996, se firmó el Protocolo de Intenciones entre Argentina y Brasil sobre integración en materia energética. Este protocolo tenía por objetivo establecer condiciones para llevar adelante transacciones de energía eléctrica y gas entre empresas de ambos países. En este marco, entre 2000 y 2002, se inauguraron dos interconexiones transfronterizas, mayores a 500 kV, entre la localidad brasileña de

[127] Construida en 1984, es una represa binacional de Paraguay y Brasil, emplazada en su frontera sobre el río Paraná.

[128] Empresa controlada por Eletrobras y vinculada al Ministerio de Minas y Energía. Opera en las áreas de generación, transmisión, comercialización de energía y también en telecomunicaciones. Con sede en Florianópolis (SC), la empresa tiene proyectos en los tres estados de la Región Sur, además de Mato Grosso do Sul, y participa como accionista en usinas hidroeléctricas en la región fronteriza de Mato Grosso y Pará, así como en Rondônia.

Garabí y Rincón Santa María, en Argentina, contando con 1050 MW de capacidad cada una (ibíd.). En el artículo 2 del Protocolo, los gobiernos subrayaron el interés en la concreción del emprendimiento hidroeléctrico de Garabí.

A inicios del nuevo siglo, los gobiernos de ambos países comenzaron a manifestar sus intenciones de avanzar en proyectos para el aprovechamiento del cauce del río Uruguay y fueron presentados dos proyectos de construcción de centrales hidroeléctricas. Frente a ello, en enero de 2004, el gobierno del estado de Río Grande do Sul decidió constituir el Grupo de Trabajo Garabí, con el objetivo principal de viabilizar proyectos de este tipo y extendió la invitación a organismos federales y a empresas privadas a participar en dicho grupo.

El 30 de marzo de 2004, el gobierno provincial de Corrientes y el estadual de Río Grande do Sul rubricaron un acta. En ella, subrayaban la voluntad de avanzar en los estudios necesarios para llevar adelante los proyectos de construcción de represas hidroeléctricas y formular reclamos de manera conjunta ante las entidades competentes para garantizar que la construcción de la represa Garabí contemple los intereses de sus gobiernos (Palacios y otrxs, 2013).

En este marco, en el 2008, los proyectos hidroeléctricos planteados décadas anteriores se reanudaron, impulsando la integración energética entre ambos países. Luiz Inácio Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner autorizaron a Eletrobras y EBISA el inicio de los estudios de factibilidad para la construcción de dos nuevas centrales en el río Uruguay. Estas empresas desarrollaron el proyecto del Complejo Hidroeléctrico Garabí-Panambí, integrándose a la IIRSA en el marco del Eje de Integración y Desarrollo MERCOSUR-Chile (Fonseca y Rückert, 2018).

El 1 de septiembre de 2008, en la ciudad de Río de Janeiro, Eletrobras y EBISA firmaron un Acuerdo de cooperación para el desarrollo de estudios de inventario relativo al tramo del río Uruguay compartido entre ambos países. Al año siguiente, el Consorcio CNEC-ESIN-PROA (CEP) -formado por empresas brasileñas y argentinas- ganó la licitación[129] para llevar adelante el inventariado. Este estudio de inventariado se dio a conocer en el año 2010. En él, se recuperaron los estudios de inventario hidroeléctrico realizados entre 1972 y 1977, así como el estudio de Proyecto Básico para el aprovechamiento de Garabí

[129] Licitación Pública Internacional Nº 1/2008.

completado en 1986, actualizando la información en torno a las capacidades hidroeléctricas del tramo.

El estudio determinaba la factibilidad en torno al avance de ambas centrales. Se explicitaba que el proyecto Garabí se ubicaría en el kilómetro 863 del río Uruguay, a unos 6 kms. aguas abajo de las localidades de Garruchos (Argentina y Brasil) y que tendría una capacidad de generación de 1152 MW. Por su parte, Panambí se localizaría a unos 10 kms. aguas arriba de las localidades de Panambí (Argentina) y Porto Vera Cruz (Brasil) y contaría una capacidad de generación de 1048 MW (EBISA y Eletrobras, 2010). Por último, se explicitaba que el costo de construcción estimado ascendería a los 5,2 billones de dólares.

Así, en 2011, se anunció la intención de avanzar con estos dos proyectos de carácter binacional, incorporándose así a la cartera de proyectos de la IIRSA. Ese mismo año, las presidentas de Brasil, Dilma Rousseff, y de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, autorizaron a las estatales EBISA y Eletrobras a iniciar los nuevos estudios de viabilidad en torno a la construcción de las represas ubicadas sobre el río Uruguay, en la zona fronteriza.

De esta forma, se llamó a un proceso de Licitación Pública Internacional para la Contratación de los Estudios de Ingeniería, Estudios Ambientales y el Plan de Comunicación Social. En marzo del 2012, la licitación para la realización de estos estudios fue pre-adjudicada al Consorcio Energético del Rio Uruguay. Este consorcio estaba conformado por las empresas argentinas Consular Consultores Argentinos Asociados S.A –consultora de ingeniería, vinculada a las áreas de infraestructura y energía-; Grupo Consultor Mesopotámico S.R.L. –con especialidad en los estudios ambientales-; Asistencia Técnica Argentina Sociedad Anónima de Servicios Profesionales (IATASA) –con experiencias en grandes obras públicas y de infraestructura, contando entre sus principales clientes a la propia EBISA y a la Entidad Binacional Yacyretá-, y Latinconsult S.A. –especialista en el área de ingeniería para infraestructura, energía y medio ambiente y responsables del anteproyecto y la licitación del proyecto hidroeléctrico Garabí-Panambí-. Por parte de Brasil, lo integraban las empresas brasileñas Intertechne Consultores S. A. –activo en el área de infraestructura, energía, petróleo y gas- y Engevix Engenharia S.A. –la cual también estuvo involucrada en algunas instancias del proyecto de represa en Inambari- (Losada, 2017).

El 15 de diciembre de 2011, se anunció la apertura de sobre para la licitación pública en torno a la realización de los estudios. En ese acto, el por entonces ministro de Obras Públicas de Argentina, Julio De Vido, planteó que para el financiamiento de las obras a realizar estaban en negociaciones con el BNDES, la CAF y el BID[130].

Dado el carácter binacional del proyecto, debían realizarse talleres informativos con las poblaciones de la región a ambas orillas del río Uruguay. Sin embargo, los talleres fueron interrumpidos, tal como plantea Sergio Álvez:

> Empezaron a abrir oficinas y ahí creció la angustia de la gente que estaba en la costa del río Uruguay viviendo hace décadas sin saber que le estaban diciendo (…) empezamos a participar de las charlas abiertas que daba la gente del consorcio, iban los vecinos y al hacer las consultas no tenían ninguna respuesta concreta y, por lo general, se terminaba pudriendo la reunión y en un momento dejaron de hacer esas reuniones.

Ante los cuestionamientos llevados adelante por los movimientos socioterritoriales en lucha contra el avance de las represas, el gobierno argentino planteaba la necesidad de generación energética como uno de los argumentos centrales para el avance del proyecto, dado que algunas regiones de la zona misionera aún no tienen acceso a la energía. Sin embargo, desde la Mesa Provincial No a las Represas realizaban otro tipo de análisis, tal como lo expone su integrante Eduardo Luján:

> Se habla de la falta de generación y en realidad lo que está faltando son infraestructuras para transporte de energía. Y después toda la discusión, Energía para qué, para quién, cómo generarla y bueno, y enmarcada dentro de qué modelo productivo.[131]

A pesar de que los estudios fueron iniciados en 2010, para 2014 sólo habían sido realizados los estudios de ingeniería y del medio biótico de la región. A finales de 2014, se llevaron adelante reuniones de tipo informativo con las poblaciones que se verían afectadas en el margen brasileño. Sin embargo, para el 2015 sólo habían podido entrevistar al 10 % de lxs pobladorxs del lado brasileño, dado que muchxs se negaban a hablar con la empresa conociendo los impactos que generaría la obra.

Por otro lado, los estudios de factibilidad técnica y ambiental de la central Panambí fueron suspendidos por causa de una medida cautelar interpuesta en el del 1er. Juzgado Federal de Santa Rosa (municipio de Río Grande do Sul), derivada de una acción civil pública ambiental impulsada por el Ministerio Público Federal en Santa Rosa y el Ministerio Público de Río Grande do Sul contra el Instituto Brasilero de Medio Ambiente

[130] Casa Rosada, "Inversión de u$s 4.200 millones para el desarrollo de la represa Garabí: Conferencia de prensa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido", 15/12/2011.
[131] Entrevista realizada en octubre del 2020.

y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y Eletrobras[132]. Está decisión se basó en que los estudios de inventariado realizados en la cuota Pabambí podrían tener un impacto negativo en el Parque Estatal de Turvo, el cual se trata de una unidad de conservación de plena protección de la naturaleza brasileña ubicada en el noroeste del estado de Río Grande del Sur, municipio de Derrubadas por el río Uruguay, en la frontera del estado de Santa Catarina y la provincia de Misiones. La constitución de esta zona protegía busca preservar el bioma del bosque atlántico y fauna en peligro de extinción. La ley del Sistema Nacional de Conservación (SNUC) de Brasil impide la autorización de proyectos que provoquen inundación en áreas de este tipo (IBAMA, 2013). Frente a esta situación, se decidieron suspender también los estudios de factibilidad en torno a la central hidroeléctrica de Garabí (Losada, 2017).[133]

A pesar de la paralización de las obras, algunos sectores se vieron beneficiados con algunas instancias que llegaron a realizarse. Tal como lo expone Sergio Álvez:

> Hacer represas ya es un gran negocio en sí mismo, incluso no hacerlas porque si nos ponemos a pensar en la experiencia de Garabí-Panambí es una represa de la cual no se puso ni un solo ladrillo, no se llegó a ejecutar absolutamente nada, no se hizo movimiento de suelo, tardaría tres o cuatro años en construirse, sin embargo se han gastado millones de dólares, pero las licitaciones se realizaron, se ha pagado a estas empresas para que realicen supuestos estudios que además nunca conocimos, se ha ejecutado un plan de comunicación muy costoso, entonces ya hay un negocio independientemente de que se hagan o no.

Así, las empresas vinculadas a la realización de los estudios de factibilidad se vieron beneficiadas con una represa que no llegó a construirse. En Brasil, la consultora Engevix Engenharia S.A. ha sido parte del entramado de empresas vinculadas al desarrollo de este tipo de obras de infraestructura, siendo la principal consultora brasileña e integrando el frente neodesarrollista que integró el bloque en el poder durante los años de gobierno de Lula da Silva.

6. PARA RESUMIR

En la etapa actual del capitalismo, la dimensión energética ocupa un rol central. A comienzos del nuevo siglo, la necesidad de generación de energía para poder hacer frente al desarrollo industrial, a la extracción de *commodities* y a la exportación de bienes

[132] Argentina Forestal, "En Brasil inician acción civil pública ambiental para paralizar el proyecto de la represa Garabí-Panambí", 27/01/2015.

[133] Más allá de la paralización en la que se encuentra el proyecto, en junio de 2019, el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció en una visita que realizó a Argentina su intención de avanzar con la central de Garabí.

intermedios e industriales adquirió un lugar fundamental en los planes de desarrollo regional y, sobre todo, en la política de desarrollo de Brasil. Frente a ello, los proyectos de integración regional no pueden dejar de esbozar y plantear proyectos en torno a esta dimensión.

Por ello, una parte importante de los proyectos de infraestructura de la IIRSA se orientaron hacia la generación e interconexión energética, entendiendo que existía un gran potencial en la región para producir energía en algunos puntos y conectarlos con otros lugares donde la necesidad de energía fuera mayor. En el marco de la UNASUR, se impulsó un Consejo Energético Sudamericano y se intentó constituir un Tratado Energético Sudamericano, el cual finalmente no prosperó, pero plasmó la importancia que adquirió la materia energética en el plano de la integración regional.

Gran parte de los proyectos energéticos planteados en el marco de la IIRSA estaban ligados a la necesidad de energía existente en Brasil, que le permitiese sostener los niveles de crecimiento económico que este país experimentó durante la primera década del 2000. De hecho, en el marco de los planes de desarrollo realizados durante el gobierno de Lula se planteaba la necesidad de aumentar la disponibilidad energética en un 50%.

Tal como sostiene Martins (2013), el subimperialismo tiene como una característica central no sólo el control regional de las materias primas, sino también el control de la energía y el abastecimiento energético. Por ello, el gobierno de Lula da Silva negoció acuerdos para la construcción de represas en algunos países de Sudamérica. Estos acuerdos incluían la presencia de Eletrobras en la operación de dichas represas, lo cual se enmarcaba en el objetivo de avanzar en la internacionalización de la empresa brasileña de energía, tal como antes había sucedido con Petrobras.

Por otra parte, muchos de estos proyectos buscarían ser financiados por el BNDES, incluyendo en la construcción a las principales compañías de ingeniería que fueron parte del bloque en el poder durante la etapa de gobierno lulista. Además, para el caso peruano, el gobierno brasileño negoció un acuerdo de venta de la energía excedente a un precio fijo por un plazo de 30 años. De esta forma, se aseguraba –a precios regulados y controlados- un potencial energético que le permitiera a Brasil continuar con su desarrollo y crecimiento.

Tal es el caso de la represa de Inambari, en Perú. En el avance de este proyecto jugó un rol central el gobierno brasileño, dado que se llevaron adelante numerosos acuerdos

entre los ministerios de Energía de ambos países. Por otro lado, se negoció un Acuerdo entre los presidentes Lula da Silva y Alan García para la construcción de centrales hidroeléctricas y donde se determinaba la venta de la electricidad producida al mercado peruano y al brasileño. A su vez, se establecían concesiones de las centrales de producción y de las líneas de transmisión por un plazo de 30 años, y se ratificaba que Brasil construiría, financiaría y operaría seis plantas hidroeléctricas en territorio peruano.

El proyecto de Inambari contaba con la participación del BNDES como financiador, de Eletrobras y Furnas como operadores, y de la compañía brasileña OAS como responsable de la construcción de la central. Este proyecto fue seleccionado como el primero que se realizaría, dada la facilidad de conectarlo con las centrales brasileñas ubicadas sobre el río Madeira. A su vez, la represa Inambari funcionaría como un regulador de aguas en dichas centrales brasileñas.

A diferencia del caso de Inambari, en el proyecto de Garabí-Panambí se involucraron tanto empresas argentinas como brasileñas. Esto se debió no sólo a la relación histórica entre Brasil y Argentina, sino también a causa de que la correlación de fuerzas entre estos países no es la misma que en el vínculo entre Brasil y Perú.

Entre las empresas brasileñas que se incorporaron se encontraba Engevix Engenharia, la principal empresa en consultoría de Brasil y que participaba de obras de generación de energía. Por otro lado, cuando se llevó adelante la apertura de sobres para la licitación de las obras se anunció que los gobiernos de ambos países se encontraban en negociaciones con el BNDES, la CAF y el BID para resolver el financiamiento de las obras.

En el caso de Garabí-Pabambí, y dadas las relaciones -muchas veces de tensión- entre Argentina y Brasil, no sólo empresas argentinas fueron parte del Consorcio que ganó las licitaciones, sino que también se incorporó a EBISA como parte de la operación de las obras. En este punto se puede establecer una diferencia con el caso de Inambari, en el cual Eletrobras y Furnas iban a estar encargadas de la operación, sin participación de empresas peruanas del sector, lo cual también implicaba una repartición desigual en términos del consumo de la energía que se generase.

De esta forma, en ambos casos podemos observar cómo operó el gobierno brasileño, durante los años de gobierno de Lula, para favorecer la transnacionalización de sus empresas y la acumulación de las compañías de bandera nacional. A su vez, estos casos

evidencian los modos en los que Brasil buscó garantizarse un potencial energético que le permita avanzar con su programa de desarrollo nacional.

CAPÍTULO 5

LAS RESISTENCIAS DESDE ABAJO

El objetivo de este capítulo es analizar las resistencias socioterritoriales que se dieron en los lugares en los que los proyectos Garabí-Panambí e Inambari se emplazarían. Pondremos el foco en analizar las territorialidades en pugna que existieron en estas regiones, los actores y grupos implicados en las luchas, la genealogía de la resistencia, la productividad social de estos conflictos y los repertorios de acción colectiva implementados.

Para ello, recuperamos, en primer lugar, la noción de territorio y de movimiento socioterritorial, presentadas en el capítulo *Categorías de Análisis*, dado que para poder profundizar en torno a la dimensión de la conflictividad social -en el marco de los dos proyectos de construcción de represas hidroeléctricas que retomamos-, es indispensable problematizar la dimensión del territorio, de qué manera las cadenas globales de valor se traducen en el espacio y las disputas que se generan en torno a los modos de producción de dicho territorio. De esta forma, el territorio se configura como un espacio de lucha. En él conviven diferentes lenguajes de valoración en torno al ambiente, modos de apropiación del territorio, identidades, y territorialidades en pugna. Es por esta razón que entendemos que los movimientos que se constituyen en defensa de los territorios que habitan deben ser considerados como socioterritoriales, dado que la disputa en torno al espacio y los proyectos de desarrollo que lo reconfiguran se establecen como su núcleo central.

Por otro lado, recuperamos la descripción, plasmada en el capítulo *La expansión regional desde arriba*, en torno a los Ejes de Integración y Desarrollo (EIDs) delineados en la IIRSA. Esta descripción nos posibilita no sólo analizar los intereses detrás del avance de las obras, sino también la composición económica y social implicada en las regiones en las que se emplazarían las obras de infraestructura, sectores que fueron quienes presionaron para el impulso de determinadas obras.

Por último, retomamos el análisis de los casos de Inambari y Garabí-Panambí realizado en el capítulo anterior. Estos nos permitirán analizar y contextualizar las resistencias llevadas adelante en cada uno de los conflictos territoriales y cómo las decisiones y el accionar de los gobiernos y empresas se fue entrelazando con los repertorios de acción llevados adelante.

El capítulo se estructura de la siguiente forma. En primer lugar, analizamos el concepto de territorio y las territorialidades en disputa en el marco de los proyectos de infraestructura. Esto se hace indispensable para poder abordar nuestros casos de estudio, poniendo el foco en las territorialidades en pugna y los procesos de desarrollo de la territorialidad capitalista y la consiguiente desterritorialización ante este avance.

En segundo lugar, realizamos una genealogía de las resistencias en las regiones que son parte de nuestros casos de estudio. En este punto, nos interesan analizar las conflictividades territoriales previas a la de Inambari y Garabí-Panambí, para poder detectar cómo estas operaron e influyeron en el desarrollo de la lucha socioterritorial, cómo esta historia se recupera en los relatos de lxs entrevistadxs, para, posteriormente, vincularla con los repertorios de acción en el marco de la resistencia a ambos proyectos de infraestructura.

En tercer lugar, analizamos la composición social y los sectores que integraron los movimientos socioterritoriales que resistieron al avance de estos proyectos de gran escala. Estos sectores sociales se construyeron como un actor político clave en el territorio donde se emplazarían las obras, informando a la población y promoviendo su opinión en torno al proyecto, más allá de la falta de consulta por parte de las empresas, los consorcios y los gobiernos nacionales involucrados en las obras de la IIRSA.

Por último, analizamos los repertorios de acción colectiva llevados adelante por los movimientos socioterritoriales que resistieron ante el avance de estos proyectos de infraestructura. Estos repertorios son guiones de acciones aprendidos, seleccionados para la concreción de un fin determinado. A su vez, constituyen elementos centrales en la construcción de la identidad de estos movimientos, así como también en el devenir de los conflictos y en los efectos que estos generan.

1. TERRITORIALIDADES EN DISPUTA EN EL MARCO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Tal como repusimos en el capítulo *Categorías de* análisis, para entender las resistencias que se tejieron en nuestros casos de estudio se hace indispensable plantear el lugar desde el cual entendemos al territorio y a las conflictividades que se desarrollan en torno a su uso y apropiación. Tal como plantea Milson Betancourt (2021), la conflictividad social no es solo social, ni la económica solo económica, ni la ambiental únicamente ambiental, estas pueden englobarse bajo la noción de conflictividades territoriales, ya que en este concepto confluyen las múltiples dimensiones del conflicto.

El concepto de territorio habilita pensar el espacio construido como producto de vínculos de poder, dominación y resistencia (Torres, 2011), es el lugar donde se sintetizan relaciones de poder espacializadas (Manzanal, 2007), en un proceso dinámico y relacional (Halvorsen y otrxs, 2019). Es resultado de la apropiación del espacio a través de diferentes estrategias políticas, las cuales coexisten, superpuestas e intrincadas (Halvorsen, 2020). Allí, se contraponen diferentes formas de entender la apropiación y uso de este territorio, es decir, las territorialidades. De esta forma, los conflictos que se desatan surgen por la tensión entre territorialidades contrapuestas: por un lado, de dominación (Ceceña, 2007), y, por el otro, de resistencia.

En el contexto actual, el capitalismo avanza sobre los territorios transformando aspectos del territorio anterior, es decir, territorializándose. Así, se solapan procesos concomitantes de avance de la territorialización capitalista, de desterritorialización, y de reterritorialización; dándose, de esta forma, lo que Rogério Haesbaert (2013) denomina multiterritorialidad.

En América Latina, el avance de la territorialidad capitalista se da a través de un proceso de despojo para la acumulación (Rodríguez Wallenius, 2019) -retomando y reactualizando el concepto de acumulación por desposesión del geógrafo inglés David Harvey (2004)-, en el que grupos económicos se apropian de bienes naturales y comunitarios –tales como el suelo, bosques, agua, fuentes de energía, entre otros-, y bienes públicos –mediante la privatización de servicios, infraestructuras, salud, entre otros-. Estos grupos capitalistas obtienen ganancias extraordinarias al momento en que estos bienes son incorporados y valorizados como mercancías en los mercados internacionales. Así, la lógica de estos grupos es transterritorial, dado que su poder se estructura mediante la organización de una articulación de territorios, desde los espacios en que construyen la infraestructura de sus bases productivas hasta la conexión en red alrededor del mundo (Haesbaert, 2016).

En la misma línea, el concepto de colonialidad territorial (Betancourt, 2021) plantea que la devastación, dominación y explotación social, económica, política, ambiental y cultural está ligada a una matriz de subalternización de personas y territorios de manera diferenciada. El avance del extractivismo y la dominación sobre los territorios afecta con mayor fuerza y violencia a los sectores y regiones más vulnerables. Esta matriz de

subalternización se ha aplicado no sólo a muchas personas, sino también a la naturaleza y sus elementos esenciales.

En América Latina, ante el avance de estas nuevas formas de colonialidad capitalista impulsadas en las últimas décadas, comenzó a darse un proceso denominado giro ecoterritorial (Svampa, 2012). Este puede entenderse como la emergencia y surgimiento de un lenguaje común que da cuenta de la confluencia entre una matriz indígena-comunitaria, la defensa del territorio y un discurso ambientalista. En este marco, se construyen marcos comunes de la acción colectiva, que funcionan no sólo como esquemas de interpretación, sino como productores de una subjetividad colectiva.

Los movimientos que se articulan en defensa de los espacios geográficos pueden denominarse socioteritoriales, ya que el territorio es su razón de ser, su característica definitoria (Halvorsen, Mançano Fernandes y Torres, 2021). Así, para alcanzar sus objetivos estos movimientos

> construyen espacios políticos, se espacializan y promueven espacialidades. La construcción de un tipo de territorio significa, casi siempre, la destrucción de otro tipo de territorio, de modo que la mayor parte de los movimientos socioterritoriales se forman a partir de procesos de territorialización y desterritorialización (Mançano Fernandes, 2005: 24).

En la etapa actual del capitalismo, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura se vuelve fundamental para conectar los puntos de producción con los mercados internacionales, favoreciendo así la circulación de los flujos de producción. Estos proyectos a gran escala avanzan apropiándose de grandes porciones de territorio y enfrentándose así a las territorialidades allí existentes. De esta forma, muchos de los proyectos englobados en la IIRSA han avanzado desterritorializando comunidades y destruyendo lazos comunitarios y economías regionales. Así, la IIRSA ha promovido una integración desde arriba para una exclusión de los de abajo (Betancourt, 2014).

Así, frente al avance de la territorialidad capitalista por sobre los espacios geográficos donde se instalarían las centrales hidroeléctricas de Garabí-Panambí e Inambari, se articularon movimientos socioterritoriales. Sus territorialidades de resistencia configuraron un proceso de disputa por el territorio (Sobreiro Filho, 2016).

De esta forma, en el marco de la resistencia contra megaproyectos de infraestructura a gran escala, los movimientos que se articulan buscan defender sus modos de uso y apropiación del territorio, es decir, la forma en el que traducen sus vidas en los espacios geográficos. El avance del capital sobre estos territorios implica la reconfiguración de

estos espacios, la destrucción de las territorialidades existentes y la construcción de una nueva espacialidad ligada a la territorialidad capitalista. En muchos casos, estos movimientos ponen en cuestión los modelos de desarrollo existentes e implican un freno ante el avance de la colonialidad territorial.

A su vez, la resistencia que llevan adelante estos movimientos se traduce en repertorios de acción colectiva (Tilly, 2002). Estos repertorios son entendidos como un conjunto de rutinas que son aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado. A través de estas rutinas, determinados grupos sociales formulan colectivamente reclamos al Estado (Auyero, 2002), en su rol como mediador en las conflictividades sociales.

Estos repertorios de acción son creaciones culturales que surgen de la lucha y de la resistencia. Quienes participan en la acción colectiva adoptan guiones que ya han actuado, o al menos observado previamente. Estos modos de accionar colectivamente constituyen la forma en la cual estos movimientos son vistos y leídos por "lxs otrxs". Al mismo tiempo, estas acciones colectivas responden a la historia particular de cada grupo (Tokichen Tricot, 2012).

Así, estos repertorios de acción generan efectos, es decir, tienen una productividad social. Patrice Melé (2016) afirma que existen tres dimensiones de la productividad de los conflictos: la territorial, la jurídica y la política. La primera permite abordar los efectos, en relación con la producción de representación, que revalorizan el espacio y que establecen lazos sociales entre los colectivos movilizados y el territorio que estos habitan; se exponen socialmente los desacuerdos vinculados con el uso adecuado del espacio geográfico y se pueden generar transformaciones en los modos de control territorial (Azuela y Mussetta, 2015). La jurídica está conectada con el proceso mediante el cual un determinado conflicto se transfigura en un litigio ante instancias públicas que deben actuar conforme a derecho. Por último, la política permite analizar las dinámicas de transacción entre los movimientos socioterritoriales y los poderes públicos que derivan en una especie de cierre, aunque quizás provisorio, de dicha disputa (Merlinsky y otrxs, 2018).

2. GENEALOGÍA DE LA RESISTENCIA SOCIOTERRITORIAL

Plantear el concepto de genealogía, tal como lo desarrolla Michel Foucault (2003), supone pensar la historia no como algo lineal, ni como un proceso de búsqueda de un origen. La

tarea fundamental que debe desarrollar la genealogía implica percibir la singularidad de los sucesos, captar su retorno, no para trazar una evolución, sino para reencontrar las escenas en las que dichos sucesos han jugado diferentes papeles.

Tomando este concepto, nos interesa observar cómo las luchas socioterritoriales previas se conectan e interrelacionan con la conflictividad desatada por el intento de avance de las represas de Garabí-Panambí e Inambari, y cómo se recuperan en los relatos de quienes se involucraron en nuestros casos de estudio. Específicamente, nuestro énfasis está puesto en analizar e indagar en torno a cómo esta historia es releída y relatada, cómo puede haber servido para tejer lazos sociocomunitarios previos, y cómo se vinculan estas resistencias pasadas con los repertorios de acción involucrados en ambos proyectos de infraestructura, es decir, cómo esta historia vuelve cada vez que se narra el presente.

2.1. Una historia signada por la lucha contra represas

La provincia de Misiones tiene una historia social ligada a la lucha contra represas hidroeléctricas. Esto se debe a que uno de los impactos socioterritoriales más importantes que se ha dado en la región son los producidos por la Central Hidroeléctrica Yacyretá, la cual se trata de un conjunto de obras realizadas entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná.

La construcción de esta represa fue anunciada en 1973, momento en que los entonces presidentes de Argentina y Paraguay, Juan Domingo Perón y Alfredo Stroessner respectivamente, firmaron el Tratado de Yacyretá[134]. Tras el anuncio, se produjeron algunas movilizaciones de las poblaciones de la provincia argentina de Misiones que se verían forzadas a abandonar sus hogares ante el avance de las obras.

Recién en 1994, la represa se puso en marcha. La misma está ubicada en la cuenca del río Paraná, en un tramo del Alto Paraná -que va desde Confluencia hasta Puerto Iguazú en territorio argentino-, a dos kilómetros aguas abajo de los rápidos de Apipé, y próxima a las localidades de Ayolas, Paraguay, e Ituzaingó, Argentina. En febrero de 2011, la represa alcanzó la cota definitiva de 83m. Para Argentina, representa la represa de mayor envergadura, con una potencia instalada de 3200 MW, mientras que para Paraguay es la segunda luego de Itaipú, la cual genera 14 mil MW (Carrizo y Brunstein, 2010).

[134] El 23 de enero de 1958 ambos Gobiernos, suscribieron un Convenio con el cual quedó constituida la Comisión Técnica Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (COMIP), cuyo objetivo era impulsar el aprovechamiento del río para la realización de los estudios técnicos tendientes a obtener energía eléctrica del Río Paraná, a la altura de las islas de Yacyretá y de Apipé, y a mejorar las condiciones de navegabilidad de dicho río.

Mapa de Yacyretá

Fuente: Web Entidad Binacional Yacyretá[135].

Desde su construcción hasta la actualidad, producto del avance de Yacyretá se ha dado un profundo proceso de desterritorialización de comunidades costeras, es decir, el forzado abandono del territorio por parte de familias ubicadas en las márgenes del río ante el avance de la territorialización capitalista (Haesbaert, 2011). Si bien desde la entidad binacional que se encarga de la operación de la represa reconocen la relocalización de 40 mil personas, algunxs estiman que ese número puede ascender a los 100 mil (Lavaca, 2007).

Las consecuencias y los impactos socioterritoriales que produjo la construcción y desarrollo de Yacyretá han dejado una huella en la historia reciente de la población misionera. En palabras de Eduardo Luján, integrante de la Mesa provincial No a las Represas en Misiones:

> Se vio fuerte impacto de Yacyretá en varios aspectos, en lo ambiental, en la formación del río, en tema salud cuando empezaron a aparecer enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue fundamentalmente y creo que en ese momento lo que más impactó fue la parte social, el desarraigo de miles y miles de pobladores que vivían y trabajaban a orillas del río, lugares de esparcimiento de los lugareños que fueron totalmente inundados, que los perdimos totalmente, industrias que había a la vera del río, muchas madereras que estaban al lado del puerto, al lado del ferrocarril llegaba acá había un ferry que cruzaba a Paraguay. Todo eso quedó bajo agua y eso impactó mucho, sobre todo porque la ciudad dependía mucho de esa mirada al río.[136]

Tal como observamos en los dichos de Luján, el avance de la construcción de esta represa tuvo impactos en múltiples dimensiones. A nivel ambiental, se perdieron numerosas especies protegidas y población ictícola, la calidad del agua disminuyó y se produjeron cambios en la dinámica hídrica (Carrizo y Brunstein, 2010). En la dimensión económica,

[135] Disponible en https://www.eby.gov.py/ubicacion/
[136] Entrevista realizada en octubre del 2020.

implicó la destrucción de algunos modos de subsistencia, como la pesca, la ganadería y la agricultura, así como también la afectación de infraestructura de transporte, como carreteras, caminos y redes ferroviarias. En el aspecto socioterritorial, los efectos negativos no solo se tradujeron en la desterritorialización de miles de familias que habitaban las márgenes del río, sino también en el menoscabo de lazos comunitarios, de modos de reproducción de la vida en esos territorios y en la identidad de quienes, tal como planteó el integrante de la Mesa No a las represas, "dependían de esa mirada al río". Por otro lado, los procesos de desterritorialización de las comunidades se llevaron adelante a través de algunos mecanismos violentos. Tal como plantea Sergio Álvez, integrante de la Mesa No a las Represas en Misiones:

> Los desalojos por Yacyretá fueron muy violentos, además hubo muchas estafas a las familias en lo que les correspondía en relación a un ajuste de indemnización, los sacaban de la costa del río donde pescaban, donde eran boleros, lavanderas, un sinfín de oficios que se vieron truncados, porque los sacaban violentamente de las costas para llevarlas a barrios de relocalizados, que estaban muy lejos, donde no tenían trabajo, donde en muchos casos ni siquiera llegaba el colectivo, no había salita de salud, todo un proceso de décadas muy difícil, pero que fue gestando una consciencia muy clara en torno a lo que significa una represa hidroeléctrica y esas consecuencias.[137]

Así, este proceso de traslado y relocalización de comunidades fue gestando un conocimiento social en torno a lo que implicaba la construcción y operación de una represa hidroeléctrica de embalse, el cual se activó ante los sucesivos intentos de impulsar obras de este tipo en la región. Como explica Álves: "ahí hubo algo incipiente, un germen de lo que luego sería el movimiento anti represas en la provincia".

Años más tarde, otra lucha importante que se dio en la región fue la que se llevó adelante contra Corpus Christi, un proyecto hidroeléctrico binacional, que se localizaría sobre el río Paraná, entre Argentina y Paraguay. Los primeros proyectos datan de la década del setenta, aunque posteriormente fueron siendo actualizados y reevaluados.

Entre 1975 y 1983, el Consorcio Lahmeyer-Harza y Asociados, de origen paraguayo, fue designado para analizar el potencial hidroeléctrico del tramo superior del río Paraná -la región que se encuentra entre la desembocadura del río Iguazú y la sección Encarnación–Posadas-. En ese momento, se evaluaron dos localizaciones posibles: Itacurubí (que se emplazaría sobre el kilómetro 1642, en las cercanías de la ciudad de San Ignacio); y la isla Pindoí (en el kilómetro 1658, en el municipio de Corpus). La primera opción, si bien

[137] Entrevista realizada en abril del 2020.

implicaba menor inversión inicial, fue descartada por las características de su subsuelo, dado que se evaluó que no podrían soportar la cimentación que implicaba una infraestructura de esa magnitud, por lo que se decidió avanzar con Pindoí.

Sin embargo, a finales de la década del setenta, se decidió evaluar una tercera localización, dado que la cota de llenado que se utilizaría en Pindoí sería menor que lo proyectado. De esta forma, surgió el tercer proyecto, ubicado sobre el kilómetro 1597 del río Paraná, a poca distancia de las ciudades de Posadas y Encarnación y denominado Itacuá (podemos observar las tres localizaciones en la imagen que se ubica a continuación). Los gobiernos argentino y paraguayo decidieron avanzar con este tercer proyecto, a pesar de que el costo de inversión sería mayor.

Ubicación proyecto Corpus Christi

Fuente: COMIP.

De esta forma, el proyecto fue elevado en 1984 para su avance, tras ser analizado por la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del río Paraná (COMIP). En él se planteó que la represa tendría una potencia instalada de 4600 MW y una producción energética media anual de 20100 GW. Sin embargo, la crisis hiperinflacionaria desatada en Argentina durante finales de la década del ochenta, hizo que la construcción de Corpus Christi se frenara.

Durante la década del noventa, con el impulso de las políticas de privatización y desregulación, y ante el desarrollo de nuevas reservas de combustibles fósiles que implicaron la reducción de los precios de la energía, los gobiernos paraguayo y argentino decidieron que la obra se llevaría adelante a través de la forma jurídica de concesión, con

inversión de capital privado. Esta determinación hizo necesaria la readecuación del proyecto con el objetivo de volverlo más atractivo para posibles inversorxs. La actualización del proyecto estuvo dirigida a reducir el número de turbinas, hasta alcanzar una potencia de 2880 MW. Este cambio implicaba que las otras dos localizaciones resultaran atractivas nuevamente (COMIP, 2020).

Ante el masivo rechazo social que el proyecto generó, en 1995, el gobierno de Misiones, por ese entonces en manos del justicialista Ramón Puerta, sancionó la ley Nº 3220, que establecía la participación social –de toda la provincia- en la decisión en torno a la instalación de Corpus Christi "cualquiera fuere el lugar de su emplazamiento en territorio misionero, sobre el Río Paraná". La legislación planteaba que el plebiscito sería de carácter obligatorio y vinculante, y fijaba como fecha para su realización el mes de enero de 1996.

Los sectores que pujaban por el rechazo al proyecto eran grupos y asambleas socioambientales, partidos políticos y diversas organizaciones sociales, con el acompañamiento de referentes como el obispo Joaquín Piña y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Estos grupos iniciaron una campaña de difusión, a través de folletos, pasacalles y afiches, brindando información en torno a los efectos que la construcción de la represa acarrearía. Para costearlos, vecinxs y comerciantes realizaron aportes económicos que cubrieron los gastos. Por su parte, algunas iglesias y partidos políticos evidenciaron su posición por el No a Corpus Christi en diferentes eventos (Wagner, 2019).

Meses más tarde, el gobierno provincial sancionó la Ley Nº 3263, en la cual se prorrogaba la realización del plebiscito. Entre los argumentos esgrimidos plantearon que la población pudiese acceder a una mayor información sobre el proyecto, que hubiese más difusión en torno a la consulta, algunas razones presupuestarias y que el período de vacaciones podría afectar la participación popular en dicha decisión (ibíd.).

Finalmente, el 14 de abril de 1996, se realizó el plebiscito que definía el futuro del proyecto Corpus Christi. El rechazo a la construcción de la represa se impuso con el 88,63% de los votos -266.372-, habiendo votado el 62,5% del padrón electoral. Este resultado fue confirmado por el gobierno provincial, a través de la sanción de la Ley N° 3294.

A pesar de la confirmación de la ausencia de licencia social para el avance de Corpus Christi, a inicios de la década del 2000, hubo un nuevo intento de reactivar el proyecto. En el 2002, la COMIP actualizó los Estudios de Impacto, sólo que esta vez priorizando el emplazamiento de Pindoí. Esta represa se emplazaría entre las de Itaipú y Yacyretá, y produciría el 90% de la energía que en ese momento producía Yacyretá. Los estudios realizados por la COMIP plantearon que la central tendría un embalse de 14 mil hectáreas y serían relocalizadas 600 familias (Carrizo y otrxs, 2009).

El gobierno de Misiones propuso realizar una nueva consulta popular alegando que con las modificaciones realizadas al proyecto se reducía significativamente el impacto ambiental. Sin embargo, los movimientos socioterritoriales se negaron, argumentando que en la consulta de 1996 se había rechazado el proyecto sin importar el lugar de su emplazamiento.

Frente a la resistencia popular ante los intentos de avance de represas, en 2011 fue presentado un proyecto de ley, a nivel provincial, que establece la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable de la provincia sobre sus bienes naturales hídricos, la consulta a lxs misionerxs (a través del mecanismo de Plebiscito obligatorio, vinculante e irrenunciable) y la intervención activa del Estado provincial ante el avance de alguna nueva represa hidroeléctrica, e instituye una nueva coparticipación económica para Misiones. El 30 de octubre de ese mismo año, la ley fue promulgada[138].

De esta forma, así como los impactos de Yacyretá gestaron una conciencia en torno a los efectos que puede acarrear una central de embalse, la consulta popular en relación a Corpus Christi y la sanción de la Ley que establece la realización de un plebiscito ante el avance de una hidroeléctrica generaron en lxs misionerxs la idea de que una obra de estas características no puede avanzar sin licencia social. Esto fue uno de los puntos principales que articularon la lucha contra Garabí-Panambí y la exigencia central.

2.2. Conflictividades territoriales en Madre de Dios, Cusco y Puno

A diferencia de lo que ocurrió en la provincia de Misiones, en la región de Perú en la que se emplazaría la represa Inambari -es decir, Cusco, Madre de Dios y Puno- no existía una tradición de resistencia socioterritorial contra represas hidroeléctricas. Esto implicaba que tampoco se conocían los impactos que podía llegar a acarrear el avance de una

[138] Ley Nº 56. Nueva coparticipación económica para Misiones: la soberanía energética. Proceso decisional del patrimonio natural de los misioneros.

megaobra de infraestructura de esa escala y magnitud. Esta situación implicó que, en un primer momento, se llevaran adelante procesos de difusión de la información en torno a los efectos que se generarían, para que lograr que algunos sectores sociales se involucren en la resistencia.

En la región de Puno, se encuentra operativa, desde 1999, la hidroeléctrica de San Gaban II, ubicada sobre el río San Gaban, y que implicó el desarrollo de la Línea de Transmisión San Gabán-Azángaro y sus correspondientes subestaciones. La construcción de esta obra estuvo a cargo de la transnacional brasileña de ingeniería Odebrecht.

Si bien se habían propuesto alrededor de 16 proyectos en la región, este fue el único que siguió su curso. Se trata de una central de pasada, cuya característica principal es que no tiene una gran acumulación de agua corriente arriba de sus turbinas, sino que esta es movida por la corriente natural del cauce. Esta característica implica que no se genere un embalse, por lo que no acarrea inundaciones y, por lo tanto, no implica el nivel de desplazamiento de población que genera una central de embalse.

Sin embargo, una de las mayores críticas a esta hidroeléctrica era la ausencia de acceso a luz eléctrica en algunas regiones de la zona. Tal como lo relata Aldo Santos, integrante de SER Puno:

> Tenemos San Gaban acá y no tenemos energía eléctrica, acá tenemos una hidroeléctrica y nosotros no tenemos luz, entonces esa era la queja y `tú quieres hacer la más grande y ¿para qué?, si igual no me va a servir para nada, sino tengo luz´, ese fue el argumento también que esgrimieron en ese momento, lo cual es cierto porque claro son comunidades pequeñas de unidades de 30 familias, de 20, dispersas, entonces el Estado peruano concibe como inversiones poco rentables abastecer de energía a esas comunidades, entonces no tenían energía eléctrica, pues no están conectadas al sistema, se abastecen con paneles solares, con velas, con lo que pueden, y tienen una hidroeléctrica que abastece a toda la región Puno y producen energía para afuera de la región.

Tal como podemos observar en el relato de Santos, las mayores críticas han estado destinadas a la falta de inversión del Estado peruano para conectar a lxs pobladorxs de la región a la red de electricidad. Este fue uno de los puntos que se retomaron en el caso de Inambari, cuestionando el desembolso de dinero para nuevas represas, cuando no se había invertido para proveer de electricidad a la totalidad de la población.

Por otro lado, en la región donde se emplazaría Inambari y en sus alrededores, han existido resistencias socioterritoriales ante el avance y operación de emprendimientos mineros. En los últimos 20 años, está actividad tuvo un exponencial crecimiento en América Latina, producto de varios factores: la necesidad de incremento de las reservas

de minerales en el plano global; los aumentos en la demanda por parte de Asia y de otras zonas emergentes, lo que se tradujo en una escalada de las cotizaciones de los principales metales; la existencia de mercados financieros dispuestos a respaldar grandes inversiones; y el impulso de reformas estructurales en los países donde se extraen los minerales, tal como fue el caso de Perú (De Echave, 2016).

De esta forma, la minería comenzó a tener un gran peso en la economía peruana. Este crecimiento se dio en todos los estratos de la producción minera: en la gran minería, en la mediana, en la pequeña y en la artesanal. A su vez, aumentó también la minería ilegal; de hecho, en los últimos años, se comprobó que existe en 21 de las 25 regiones, siendo muy importante en Madre de Dios, Puno, La Libertad y la zona del Sur Medio (las provincias de Palpa y Nazca en Ica, Caravelí y Chala en Arequipa y Lucanas en Ayacucho). A medida que iba avanzando la actividad minera, fueron incrementándose las resistencias socioterritoriales en las regiones afectadas. Según algunos informes emitidos periódicamente por la Defensoría del Pueblo de Perú, aproximadamente la mitad de los conflictos sociales que tienen lugar en el país se originan por problemáticas ambientales y, de estos, alrededor del 64% están ligados a la minería (De Echave, 2016).

Un evento clave en la lucha social en Perú fue el denominado "aymarazo", ocurrido en mayo del 2011, cuando el gobierno de Alan García Pérez, promulgó el Decreto Supremo Nº 083, en el que se autorizaba a la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation a avanzar con el proyecto minero de plata Santa Ana. Este se ubicaría en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, departamento de Puno. Una de las principales críticas que se plantearon al proyecto es que podría afectar al sistema hídrico del Lago Titicaca.

Tras semanas de convulsión social, donde se llevaron adelante múltiples reclamos y movilizaciones, el 26 de mayo de 2011 fue el punto más álgido. Ese día, lxs manifestantes, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales y nacionales, incendiaron los locales de la Contraloría General de la República, la Gobernación de Puno y Aduanas.

Así, esta lucha fue de gran importancia para la región. Tal como lo repone Aldo Santos, esta resistencia fue

> un episodio que cambió la dinámica por completo, fue finales de gobierno de Alan García, que había tenido una política bastante represiva y además poco amigable con los pueblos indígenas, por utilizar un término bastante laxo (…) bloqueó la frontera con Bolivia durante cuatro meses, y en la zona norte, aprovechando esa coyuntura,

> los dirigentes que estaban en contra de Inambari también salieron a protestar, entonces esto ayudó a debilitar al gobierno.

Tal como relata Santos, la lucha contra el avance megaminero, sobre todo en la región de Puno, se enlazó con la lucha contra la represa de Inambari. Sin embargo, no todos los sectores realizan una evaluación positiva en torno a los repertorios de acción implementados por lxs manifestantes del Aymarazo, como podemos observar en el relato que realiza la integrante de la Sociedad Civil por la Construcción de la Carretera Transoceánica y Desarrollo de Puno (SOCIT), Rosario Linares Valderrama:

> Fue con cierta violencia, que yo no estoy de acuerdo, porque dañó a la ciudad de Puno, porque en los actos de lucha que hubo, en un momento se desbordó, no creo que hayan sido planificados, y se sitió la ciudad de Puno, quizás hasta ese punto todavía no era tan desesperante, pero se atentó contra locales públicos y privados, contra turistas, lastimosamente en un mes donde el turismo en Puno es una actividad muy fuerte, que es el mes de junio, eso ha significado que muchísimas empresas del exterior que tenían a Puno como lugar de destino lo anularan de sus programas. Puno ha perdido muchísimo con esa asonada aymarista, con el aymarazo, sí se logró que no se realice la mina.

Así, tal como podemos reponer del relato de Rosario, más allá del apoyo de algunos sectores que luchaban contra el avance de Inambari, otros no se plegaron a la lucha o buscaron distanciarse. De hecho, la entrevistada planteó:

> No queríamos identificar como primer daño el ambiental, porque en ese momento había muchos proyectos que tenían resistencia en el Perú, básicamente mineros, que enarbolaban como primer motivo de su rechazo lo ambiental, entonces el nuestro no era solamente lo ambiental, había varias razones, por eso no quisimos enarbolar en primer lugar lo ambiental.

A su vez, otra gran lucha que algunos sectores –como el SOCIT- han llevado adelante ha sido para que se construya una carretera que conecte la región de Puno y Madre de Dios con Brasil. Si bien el proyecto data de muchas décadas atrás, no fue hasta el 2004, cuando este proyecto se incorporó a la IIRSA, que la carretera fue motorizada.

En el marco de la construcción de la carretera, se organizaron grupos de trabajo compuestos por sectores de la sociedad civil, que tenían por objetivo monitorear el avance de la misma para controlar la mitigación de los efectos negativos que la obra podía generar. La región amazónica atravesada por la carretera posee una de las mayores concentraciones de biodiversidad y es habitada por numerosas comunidades indígenas. Tal como lo explica Vanessa Cueto La Rosa, Coordinadora del programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la labor de estos grupos de trabajo estaba vinculada con:

> Un programa de mitigación de impactos financiado por la CAF. Entonces, habíamos visto varios incumplimientos por parte del gobierno para la implementación de este programa de mitigación de impactos, habíamos visto que la minería ilegal era un

> tema que se estaba teniendo gran apertura en Departamentos como Madre de Dios, que ahora justamente vemos las consecuencias, veíamos el tema de Puno también, todos los riesgos que había en esta carretera y los impactos indirectos los estaban generando en la zona, y veíamos que la CAF en ese momento que quería poner más plata para otro nuevo programa de mitigación que fuera la continuación de eso, y en ese momento estábamos con la sociedad civil monitoreando la Carretera Interoceánica, en el monitoreo de las áreas nos damos cuenta bueno, de que también se estaba generando todo este proceso de la concesión de la Hidroeléctrica en Inambari.[139]

Así, a pesar del control por parte de la sociedad civil, el desarrollo de la carretera acarreó algunos impactos sociales y ambientales. Entre los primeros, encontramos la invasión de los territorios de algunos grupos indígenas, el incremento de cultivos y actividades ilegales, el aumento de la migración, la destrucción de sitios con valor arqueológico, entre otros. Entre los segundos, el crecimiento de los niveles de deforestación, la degradación del recurso forestal, el incremento de incendios forestales, el avance sobre áreas protegidas, entre otros (Guillén Balbín, 2015). Sin embargo, esto no implicó grandes manifestaciones ni resistencias abiertas ante el impulso de esta obra de infraestructura.

Esto se dio por dos razones principales. Por un lado, se trataba de un proyecto que se venía gestando desde hacía décadas y generando expectativas en torno a la profundización de las exportaciones hacia Brasil. Sin embargo, tal como plantea Linares Valderrama, esto no sucedió así:

> La idea era y es que la carretera sea la base de un corredor económico, es decir, que alrededor de la carretera se generen proyectos de diversa magnitud (…) lastimosamente no hemos tenido mucho éxito porque cuando se construyó la Carretera Interoceánica la idea era un comercio fluido entre el Brasil y el Perú, no habíamos contado que Brasil tenía demasiadas restricciones para que esto se viabilice, mucha sobreprotección a su producción nacional, entonces fue imposible generar un comercio fluido.

Por otro lado, y a pesar de los impactos que acarreó para algunas regiones, esta obra de infraestructura logró conectar territorios que se encontraban bastante desarticulados entre sí. Así lo explica Aldo Santos:

> La parte de la Amazonía siempre se ha visto como algo bastante lejano, por la distancia también, sólo a partir de la Interoceánica es que ha empezado a ser cercano, porque antes llegar a la Amazonía te podía demorar 12 horas, 13 horas, por una carretera totalmente peligrosa, ahora con la Interoceánica eso ha cambiado un poco, pero como había esta visión la Amazonía siempre se vio lejana.

De esta forma, más allá de que la carretera no ha tenido un impacto positivo en términos de aumentar el comercio con Brasil, dadas las restricciones a las importaciones que este país posee, sí ha implicado una mejora en términos de conectividad. Esto llevó a que uno

[139] Entrevista realizada en marzo de 2020.

de los principales argumentos para la oposición ante el avance de la represa de Inambari sea el anegamiento y relocalización de algunos tramos de la carretera. Esta situación no sólo acarrearía nuevos impactos ambientales, sino también aumentar el tiempo necesario para la conexión entre las regiones.

3. AQUELLXS QUE LUCHAN

En este apartado buscamos analizar la composición social de los sectores que conformaron los movimientos socioterritoriales que lucharon contra el avance de ambas centrales hidroeléctricas. Indagamos, sobre todo, en cómo estos se articularon y conformaron una lucha conjunta.

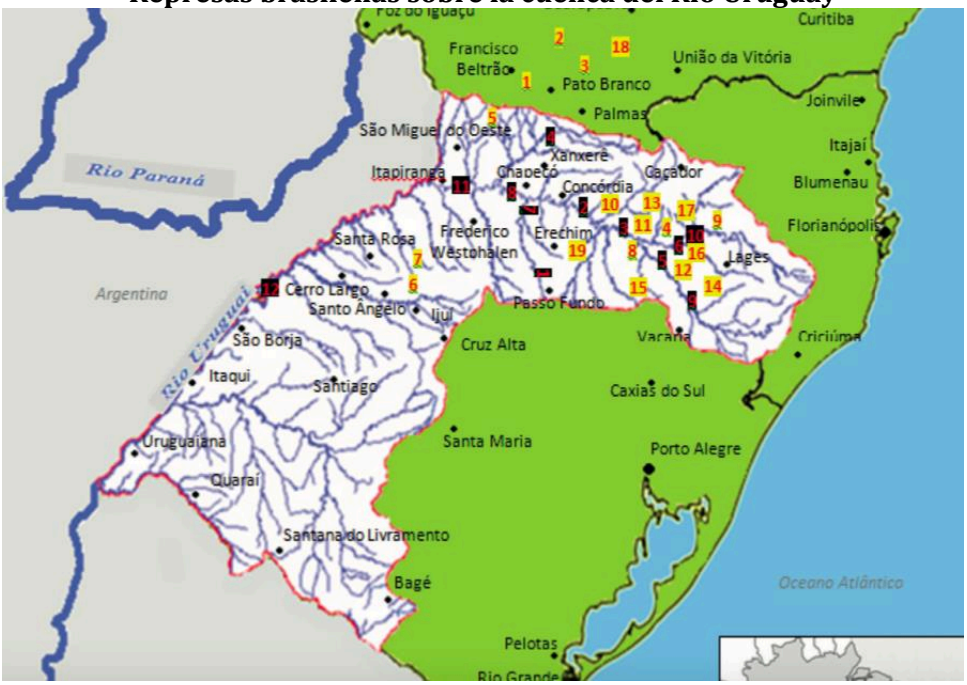
Más allá de la falta de consulta a la población en torno a la promoción de estos proyectos y la escasa información que brindaron tanto las empresas y consorcios involucrados como los gobiernos nacionales, estos sectores se colocaron como un actor político relevante en el territorio y buscaron promover su mirada no sólo acerca de los proyectos, sino también de los usos del espacio geográfico. Estos movimientos sociales se articularon no sólo en un plano regional, sino que también buscaron tejer alianzas más allá de sus regiones.

3.1. La lucha en ambas orillas

Dada la historia de resistencia contra el avance de represas hidroeléctricas que posee la provincia de Misiones –y que repusimos en el apartado anterior-, la conflictividad en torno a Garabí-Panambí logró aglutinar rápidamente a múltiples sectores de la sociedad. En esta región, las luchas socioterritoriales se han ido masificando a causa de los impactos que algunas actividades, entre ellas la energética, han generado.

Con el paso del tiempo, el territorio de la región fue siendo reconfigurado, no sólo por el avance de Yacyretá, sino también de otras represas que se llevaron adelante sobre la cuenca del río Uruguay del lado brasileño (como podemos observar en la imagen que se encuentra a continuación). Estas centrales hidroeléctricas tuvieron impactos regionales e implicaron la expulsión de familias que debieron abandonar sus viviendas y relocalizarse, tanto en Argentina como en Brasil –aunque no en la misma medida-. Es decir, el avance de la territorialidad capitalista sobre estas regiones, se encontró con las territorialidades allí existentes y dio lugar a procesos de desterritorialización de distinta índole.

Represas brasileñas sobre la cuenca del Río Uruguay



1- Passo Fundo, 2- Itá, 3- Machadinho, 4- Quebra-Queixo, 5- Barra Grande, 6- Campos Novos, 7- Monjolinho, 8- Foz do Chapecó, 9- Pai Querê, 10- Garibaldi, 11- Itapiranga (número rojo con fondo negro).
Fuente: Pase y otrxs, 2016.

De esta forma, se fueron tejiendo resistencias que integraban a aquellas personas que directamente se vieron afectadas ante el avance e instalación de represas hidroeléctricas, es decir, aquellxs pobladorxs que fueron desplazados de sus territorios y hogares. Tal como lo describe el integrante de la Mesa No a las Represas, Eduardo Luján:

> Originalmente cuando Brasil comienza a construir represas sobre el Río Uruguay cambia totalmente el panorama, ellos tienen que abandonar las islas, venirse a la costa y bueno, y ahí empieza toda una lucha para poder tener los títulos de esas tierras, que eran fiscales. Y en medio de esa lucha, después de haber avanzado, hemos conseguido tener una escuela y el dispensario, aparece el proyecto de Garabí-Panambí con lo cual esas tierras quedarían inundadas. Por eso es que ellos son los que, de alguna manera, impulsan este movimiento.

Estas relocalizaciones constituyeron el germen de la lucha contra el avance de represas hidroeléctricas y fueron gestando territorialidades de resistencia. A su vez, muchas de las personas que sufrieron estos procesos de desterritorialización no sólo perdieron sus hogares, sino también, en muchos casos, sus medios de subsistencia, dado que gran parte de estos sectores dependían de la conexión con el río para reproducir su vida.

Con el paso del tiempo, la resistencia contra el avance de represas hidroeléctricas no sólo aglutinó a afectadxs directxs, sino también a otros sectores sociales. En la provincia de Misiones, tras la lucha contra Corpus Christi, se conformó la Mesa Provincial No a las

Represas en Misiones. Este espacio logró convocar a asambleas socioambientales, organizaciones sociales, indígenas, sindicales, iglesias, estudiantiles, barriales, periodistas y personas independientes que no sólo habitaban las regiones costeras, sino a otrxs que entendían que los impactos ambientales vinculados al avance de las centrales de embalse afectarían a una región más amplia.

Cuando se conoció la intención de avanzar con el proyecto de Garabí-Panambí este espacio de articulación se hallaba ya constituido y en una situación de alarma permanente ante la posibilidad de instalación de nuevas represas. De esta forma, con el inicio de acciones por parte de las empresas y los gobiernos, este espacio de articulación se reactivó con una gran fuerza. Así lo explica su integrante, Sergio Álvez:

> Empezaron a abrir oficinas y ahí creció la angustia de la gente que estaba en la costa del río Uruguay viviendo hace décadas sin saber que le estaban diciendo, qué iba a pasar y ahí hubo una demanda muy grande de organización y de salir a resistir, entonces un espacio que ya estaba conformado previamente fue la Mesa Provincial No a las Represas, cerca de 50 organizaciones sociales, sindicales, algunas iglesias, organizaciones estudiantiles, barriales, conformando esa mesa, empezaron a darle cierta formalidad a las acciones, en conjunto con el movimiento de afectados de Brasil.

En los momentos más álgido de la resistencia contra Garabí-Panambí la Mesa llegó a convocar a más de 50 organizaciones. En la actualidad, si bien la presencia mermó continúan con este espacio de articulación, reuniendo a las siguientes organizaciones: Ríos de Vida, de 25 De Mayo; Misiones Sin Represas, de Oberá; Asociación De Trabajadores Del Estado – ATE Misiones; Central De Trabajadores Del Estado – CTA Misiones; Servicio De Paz Y Justicia (SerPaJ); Asociación Civil Nativos, de Puerto Rico; Instituto Nacional de Estudios Sociales (INDES), de San Pedro; Barrios de Pie, de Posadas; Asociación de Comunidades Del Pueblo Guaraní (ACPS), de San Ignacio; Grupo Ecologista Cuñá Pirú, de Aristóbulo Del Valle; Autoconvocados De Puerto Azara; Centro De Estudios Municipales Y Provinciales (CEMuPro); Jóvenes Del Alto Uruguay (JAU), de El Soberbio; Red De Agricultura Orgánica De Misiones (RAOM); Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JuPIC); Asamblea Ciudadana Misionera; Asociación Nee Porá, de San Ignacio; y Madre Tierra, de Eldorado.

Uno de los lineamientos más importantes de la Mesa desde su inicio fue la prohibición de la adscripción de partidos políticos como integrantes formales, más allá de la participación de algunxs integrantes con filiación partidaria. Así lo explica Eduardo Luján:

> Si bien era una cuestión política e incluso muchos partidos apoyaban, por lo menos locales, y algunos funcionarios políticos sobre todo de la oposición en ese momento

> en la provincia, también acompañaban, pero bueno, no oficialmente como un partido dentro del movimiento. Se siguió y se sostiene hasta el día de hoy el funcionamiento asambleario totalmente.

A partir de la construcción horizontal y asamblearia, estos sectores sociales constituyeron una posición política de resistencia contra el avance de Garabí-Panambí una vez que se conoció el impacto que esta represa iba a generar. En la provincia de Misiones se verían afectados los municipios de 25 de Mayo, Apóstoles, Concepción, San Javier, Oberá y Guaraní.

Sin embargo, a pesar de que la central de Garabí-Panambí no avanzó, muchos municipios se vieron afectados. Tal como lo explica Sergio Álvez:

> Acá en Misiones hay afectados por represas de una represa que no se construyó, ¿por qué digo esto? porque todas las personas que viven en algunos pueblos y parajes de Misiones, en donde bajo la hipótesis de que se iba a construir la represa, el Estado se ha ido replegando de tal forma que, a lo largo de esos años, estos pueblos quedan como en zonas de no innovar, entonces no se construyen caminos, no se asfaltan los caminos, no se invierte debidamente en salud y educación, hay algunos pueblos donde no se han abierto escuelas porque decían `para qué vamos a abrir una escuela en lugar que se va a inundar y se van a tener que ir´, no hay fomento de ningún tipo, la propia gente no sabe si invertir o no en sus casas o qué hacer al respecto, hay como una situación de abandono del Estado que los convierte en afectados por represas que no se han construido.

De esta forma, en el relato de Álvez, vemos cómo en estas regiones se produjo la retirada del Estado que planteaba Lins Ribeiro (1985) al momento de analizar cómo se llevan adelante los proyectos de gran escala. Así, estos territorios se transforman en economías de enclave, cuya característica principal es que el Estado evita, de forma deliberada, suplir los servicios institucionales habituales (Álvarez Mullally y otrxs, 2017).

Por otro lado, si bien Garabí se ubicaría en las cercanías de la localidad de Garruchos, en la provincia de Corrientes, esta región tendría un nivel de afectación menor que Misiones. De hecho, la única ciudad que podría tener algún tipo de impacto por el avance de la represa sería Santo Tomé.

Así, la sociedad de la provincia de Corrientes no se plegó a la lucha contra Garabí-Panambí, excepto algunos grupos pequeños. Así explica la articulación con la población de Corrientes, Eduardo Luján:

> El vínculo que tenemos con Corrientes es, más por ahí, por otras problemáticas. Lo que pasa que Corrientes sería la provincia beneficiada con la represa porque si bien el arroyo está en la provincia de Corrientes, está a 10 kilómetros del límite con Misiones. La superficie sería 99,9% en la provincia de Misiones, Corrientes no sería afectada por la represa en cuanto a inundación. Lo que pasa es que hay un debate que falta, o, mejor dicho, no es un debate, sino que falta esa información que a veces es responsabilidad nuestra también, de los impactos de las represas aguas abajo. Se habla muy poco y casi nada. Normalmente se habla de la zona de afección por el agua,

> las zonas inundadas, el cambio climático, entonces Corrientes no tenía prácticamente ese problema, no lo veía como un problema y los funcionarios, por supuesto, sí están viéndolo como un beneficio porque le generaría energía a ellos y el vínculo viene más que nada porque parte de esa energía Corrientes la necesita porque tiene proyectos de instalación de pasteras.

De esta forma, dada la poca articulación existente con organizaciones de la provincia Corrientes, la Mesa se apoyó en mayor medida en vínculos con organizaciones ecologistas y de derechos humanos de otros puntos del país para acompañar sus acciones. En este marco, buscó fortalecer su participación en la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC) –antes denominada Unión de Asambleas Ciudadanas-, un encuentro nacional de asambleas, organizaciones y colectivos ecologistas vinculados a múltiples problemáticas ambientales en diferentes latitudes.

La articulación más fuerte en la lucha contra la central de Garabí-Panambí se dio con el Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) de Brasil. Este es un movimiento nacional con una historia centrada en la lucha contra represas hidroeléctricas. Nació en la década del ochenta, a través de experiencias de organización local y regional de afectadxs por represas, y, con los años, ha ido aumentando su margen de influencia.

Ante el intento de avance de Garabí-Panambí, del lado brasileño existió una fuerte resistencia. Esto fue resultado de que se vería afectada una importante región, que integra los municipios de Garruchos, Santo Antônio das Missões, Pirapó, São Nicolau, Roque Gonzales, Porto Xavier, Porto Lucena, Porto Vera Cruz, Alecrim, Santo Cristo, Porto Mavá, Tuparendi, Tucundava, Novo Machado, Dr. Mauricio Cardoso, Crissiumal, Tiradentes do Sul, Esperança do Sul y Derrubadas.

De esta forma, la articulación para resistir al avance de esta nueva represa se conjugó rápidamente. Esto se debe a que, al igual que en el caso de Misiones, en la orilla brasileña del río Uruguay, existe una historia de lucha ligada al avance de represas, dado que en el sur brasileño se encuentran emplazadas siete centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, en estas regiones hay un amplio conocimiento en torno a los impactos que generan el avance de estas obras de infraestructura no sólo en términos ambientales, sino también de relocalización de familias.

Por otro lado, en la región se dio un proceso de retirada del Estado ante el avance de estos emprendimientos, tal como sucedió en Argentina –como repuso en su testimonio Sergio Álvez-. Así lo describe Mariana Zabot, integrante del MAB:

> En la región de la frontera noroeste es una región mucho menos desarrollada, mucho más olvidada por el Estado, en aportes del Estado, entonces la educación es más

> precaria, la salud es más precaria, (…) Y en las márgenes del río, existen pequeños agricultores campesinos, que sobreviven de lo que plantan.[140]

Así, el vínculo entre el MAB y la Mesa se articuló rápidamente, coordinando acciones en ambos lados de la frontera. Esta relación se estableció a partir de entender que la afectación y la desterritorialización sería similar independientemente de la frontera política que divide Brasil y Argentina, tal como lo explica Sergio Álvez:

> Estamos separados por un río, o sea que a unas pocas brazadas o en cinco minutos de cualquier canoa estamos conectados con las familias de pueblos como Porto Mauá, Alecrim, Vera Cruz y otros pueblos que están acá nomás y que iban a ser afectados y que si bien tienen realidades por ahí diferentes, producen cosas distintas, es otra política, etc., fue muy natural encontrarse con ellos, primero en asambleas de uno y otro lado de la orilla, reconocernos digamos en la afectación y en la situación que estábamos viviendo, y luego, además de las asambleas, de las reuniones.

De esta forma, las acciones llevadas adelante fueron coordinadas no sólo desde la Mesa, sino también desde el MAB, apostando fuertemente a la integración de ambas regiones en una lucha conjunta, con una mirada regional. Así lo explica Mariana Zabot: "somos una región ahí en la frontera, porque es apenas un río de hecho que divide (…) el MAB siempre tuvo la intención de construir una cosa colectiva, internacionalista".

3.2. La articulación ante Inambari

Tal como vimos en el apartado anterior y a diferencia del caso de Garabí-Panambí, en la región donde se emplazaría la central de Inambari no existía una historia previa de lucha contra la construcción u operación de represas, ni se conocían profundamente los impactos que podía acarrear una hidroeléctrica de embalse, en relación a la cantidad de población desplazada de sus territorios, a los impactos socioambientales y a la afectación de economías regionales y lazos comunitarios. Esta situación llevó a que la resistencia socioterritorial no se aglutinara tan rápidamente como en el caso de Misiones.

A su vez, y tal como ya repusimos, los territorios que sufrirían impactos negativos con la construcción de la represa no se encontraban muy articulados entre sí, dada la dificultosa conectividad existente entre dichas regiones -previamente a la finalización de la Carretera Interoceánica Central-. Tal como se puede apreciar en la imagen que se encuentra a continuación, los principales lugares que se verían afectados por el desarrollo de Inambari serían:

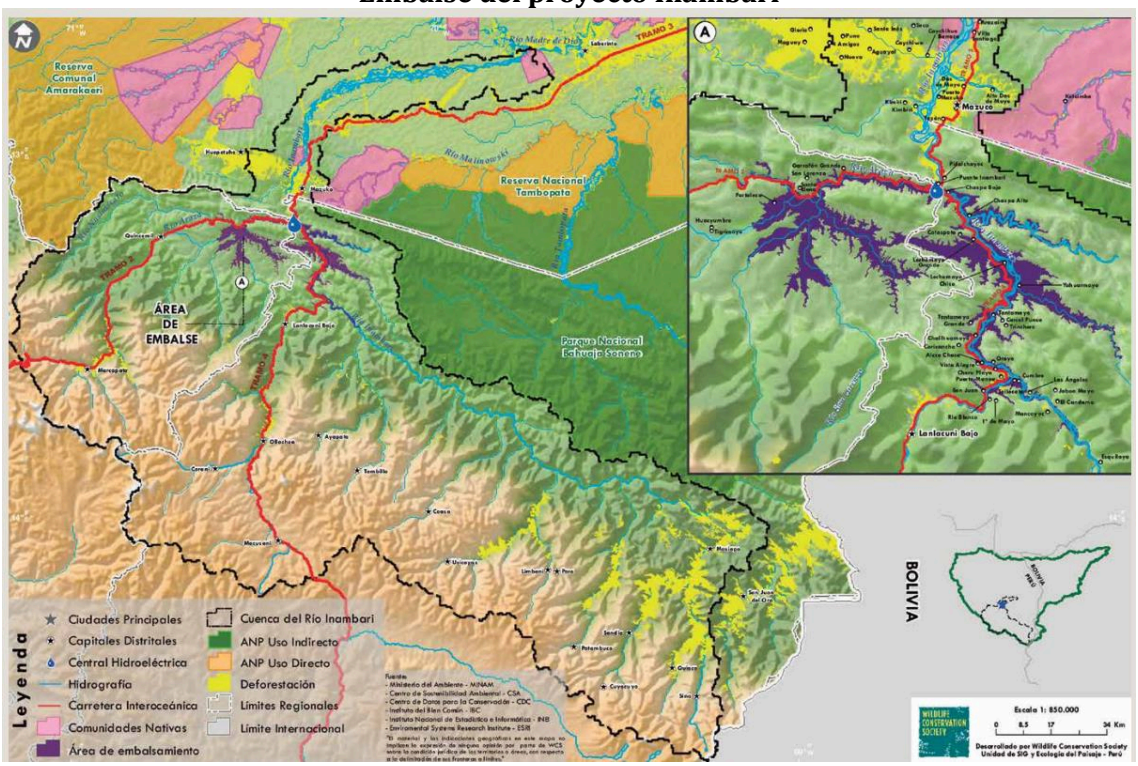
- en la región de Puno (provincia de Carabaya, distrito de San Gabán): Loromayo, Tazón, Carmen, Chaspa Alto, Chaspa Bajo, Cuesta Blanca, Lechemayo, Salimayo, Yahuarmayo, Depertar Quechenio, Puerto Leguía, Nueva Esperanza, Trinchera, Challhuamayo, La Oroya, Puerto Manoa, Tantamayo, 1 de Mayo, Choroplaya, San Juan/Lilos, Cajatire, Pradocarpa, Mancayoc;

[140] Entrevista realizada en marzo del 2021.

- en Madre de Dios (provincia de Manu, distrito de Huepetuhe): el Puente Inambari;

- en Cusco (provincia de Quispicanchi, distrito de Camanti): Media Luna, Fundo Villanubia, Puente Fortaleza, Esperanza, Santa Elena, Asanamayo Chico, Puente Golondrina, San Agustín, Piñalchayoc, Otorongo Grande, Otorongo Chico, San José, Garrafón Grande, Garrafón Chico, Tigrimayo, Comandante, Quebrada Azulmayo, Chunchusmayo, Balceadero, Quebrada Seca, Machiche, San Lorenzo, Huadjumbre y Limonchayoc (Canal Alata, 2017).

Embalse del proyecto Inambari



Fuente: DAR, 2013.

En toda esta región, alrededor de 5216 personas sufrirían impactos aguas abajo y 3782 serían desplazadas de sus hogares. Además, se produciría un perjuicio ambiental en el área protegida Parque Nacional Bahuaja Sonene, ubicado en la región este del embalse (como se observa en la imagen), en la provincia de Tambopata, en el departamento de Madre de Dios, y en las provincias de Carabaya y Sandia, en el departamento de Puno.

Para controlar el avance de la carretera realizada en el marco de la IIRSA se conformó el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil sobre la Interoceánica Sur (GTSC), integrado por ONGs, instituciones académicas y personas particulares[141]. El objetivo de este grupo –que

[141] Integran estos grupos las organizaciones SER, SUMA MARKA, SOCIT, OGD, el Instituto Sur Andino de Derechos Humanos y Medio Ambiente, el Instituto Sur Andino de Derechos Humanos, Manuela Ramos, la

se subdividió en tres respetando la división política de las regiones involucradas- era la búsqueda de minimización de perjuicios y la maximización de beneficios en el ámbito de la Interoceánica. De esta forma, estos subgrupos funcionaron como uno de los espacios catalizadores de la resistencia contra la central hidroeléctrica. Así lo explica Vanessa Cueto La Rosa, de DAR:

> Existían tres grupos de trabajo, uno que era Puno, uno de Madre de Dios y uno de Cusco. Entonces habíamos trabajado y estábamos monitoreando de esa manera y ya con las comunidades locales fue un tema de intercambio de información, alianzas, apoyos.

De esta forma, tras tomar conocimiento de la existencia del proyecto de construir una central hidroeléctrica de embalse sobre el río Inambari y luego de informarse en torno a los impactos que la represa acarrearía, estos grupos sirvieron como vías de comunicación entre la población de la región. Tal como lo explica Aldo Santos:

> Primero, fue la etapa de incidencia, porque el proyecto fue muy sorpresivo, acá en Perú el mecanismo de concesiones es bastante oscuro, opaco, las comunidades se enteran que hay una concesión minera o hidroeléctrica en su comunidad sólo porque va un ingeniero cuando ya tiene la concesión, no es que le preguntan, no es que le informan, la ley dice que debe publicarse en el diario de mayor circulación regional, pero para que algún diario impreso llegue a esas comunidades tendrían que ser bastante afortunados, un anuncio pequeño, chiquito, que nadie lo va a leer, entonces es un mecanismo bastante oscuro.

Así, el primer paso llevado adelante por parte de estos grupos fue empezar a informarse en torno a lo que generaría regionalmente un proyecto de infraestructura de esta magnitud. A medida que EGASUR empezó a realizar los estudios de impacto ambiental, desde los grupos y organizaciones comenzaron a consultar especialistas que les brinden información que pueda difundirse entre otros grupos. Como lo explica Santos:

> Llevamos el tema de la hidroeléctrica como una preocupación, `miren señores, señoras acá hay un proyecto hidroeléctrico que eventualmente traería impactos sociales y ambientales grandes, entonces hay que investigar sobre el particular, pongámoslo en la agenda del desarrollo regional´ (…) entonces no había mucha información sobre el proyecto y justamente a partir de ese grupo de trabajo de la Interoceánica Sur, que estaba conformada por ONGs, comenzamos a hacer un seguimiento a este proyecto (…) En esos grupos de trabajo había muchos expertos, muchos biólogos, muchos ingenieros ambientales también, que tienen la misma expertise, o quizás mejor, que los ingenieros que hacían el Estudio de Impacto Ambiental, entonces ellos comenzaron a mandar información técnica, `esto es alarmante, esto es preocupante, este proyecto puede afectar tal ecosistema, puede ser perjudicial a futuro para la salud, para el medio ambiente´, entonces con esa información, nosotros comenzamos a traducirla en lenguaje más sencillo y

Coordinadora Rural, la Mesa temática del Medio Ambiente, la Cámara de Comercio de Puno, MIM, REMURPE, el Colegio de Antropólogos, de Sociólogos, de Arquitectos, de Biólogos, de Ingenieros y la Cámara de Comercio de Juliaca.

> comenzamos a difundir los potenciales impactos negativos que podría este proyecto. Así que se realizó una suerte de conciencia regional sobre el tema.

Tal como relata el entrevistado en el fragmento anterior, el trabajo informativo llevado adelante a través de estos grupos logró ir reuniendo paulatinamente a sectores de la sociedad civil de las diferentes regiones que serían afectadas. Así, se fueron aglutinado tanto personas independientes como organizaciones de Madre de Dios, Cusco y Puno. Entre los espacios regionales que se sumaron a la lucha encontramos a: la SOCIT de Puno, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) -que integra y nuclea a 32 comunidades nativas de la región-, el Frente de Defensa de los Intereses de Inambari, el Frente de Defensa de San Gaban, Frente de Defensa de Puerto Carlos, la Central de Barrios y Urbanizaciones de Puno, y las Rondas Campesinas de Puno.

Las Rondas Campesinas son un actor fundamental en Perú. Las primeras rondas surgieron en la década del setenta, como respuesta a la ausencia estatal en torno a los derechos de las personas que habitan las zonas rurales. De hecho, el gobierno peruano reconoció, a través de la Ley Nº 27908, sancionada en 2003, su personalidad jurídica. Esta legislación establece que lxs ronderxs "tienen derecho de participación, control y fiscalización de los programas y proyectos de desarrollo que se implementen en su jurisdicción comunal de acuerdo a ley". Ante lo que ocurriría en la región con el avance de la central hidroeléctrica, se plegaron las Rondas Campesinas de Loromayo, Lechemayo, del Carmen, Puerto Manoa, Tantamayo, las Rondas Femeninas de Lechemayo y el Comité de Ronderos de Cuesta Blanca.

Por otro lado, la economía regional de esta área está ligada, sobre todo, a la cosecha y producción de piña, cacao, café, yuca y coca, y a la minería tradicional. Frente a la afectación que implicaría el avance de Inambari por sobre estos emprendimientos, tanto la Asociación de Mineros, como la de Cafetaleros de Carabaya y Sandia se sumaron a la resistencia contra la represa (Rodríguez-Olórtegui, 2018).

De esta forma, el comercio intraregional jugó un papel importante en la articulación de la resistencia socioterritorial. Así lo explica Rosario Linares Valderrama:

> Mucha gente de la zona y los puneños nos trasladamos por diversas cuestiones de la vida y sobre todo por el comercio de un lugar a otro, o sea la población de Puno se traslada continuamente hacia el Cusco, hacia Arequipa, hacia Madre de Dios, y los de la zona tienen mucho nexo con la población de Madre de Dios, por la actividad de venta de sus excedentes productivos, en ese momento todavía podían vender a los acopiadores de oro el oro artesanal que recolectaban (…) y comenzaron pues a llevar las noticias y comenzaron también básicamente en Madre de Dios a haber personas que informarse mejor y a constatar de que no era beneficioso, luego tuvieron muy

> labor las organizaciones de base de Madre de Dios, como por ejemplo los fonderos y las asociaciones de productores de piña, de coca también, y Madre de Dios fueron las organizaciones de la población nativa los que, al informarse y conocer las particularidades del proyecto, vieron como una amenaza hacia ellos.

Por otro lado, dado que la central de Inambari se enmarcaba en un proyecto que tenía por objetivo el avance de cinco represas hidroeléctricas que se construirían en diferentes territorios peruanos, en muchos casos se realizó una campaña conjunta con otros sectores de la sociedad peruana. Así, se integraron Organizaciones No Gubernamentales, como Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental y la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER).

Por otro lado, también fue clave la participación y apoyo de algunos gobiernos regionales a esta resistencia socioterritorial. El gobierno regional de Puno y de Madre de Dios se mostraron abiertamente en contra al avance de la central hidroeléctrica, así como también los de los municipios de Carabaya, Tambopata y San Gabán. De hecho, Nancy Rosell Angles, por entonces alcaldesa de la provincia de Carabaya, aportó los medios de traslado para una de las movilizaciones que se realizaron.

Sin embargo, el proyecto logró cosechar algunos apoyos entre grupos que habitaban la región, tal como lo explica Aldo Santos:

> EGASUR, que era la empresa que llevaba adelante el proyecto, sí logró apoyos de pequeños grupos de rondas campesinas, de autoridades locales en Madre de Dios, de periodistas en el caso de Puno, de comunicadores y de algunas personas que se pusieron a favor del proyecto, y fueron cooptando gente, eso es lo que fueron haciendo, publicaron un libro de hecho, hicieron dossiers, pusieron oficina en las localidades.

A pesar de la existencia de sectores que se mostraron favorables al avance del proyecto, esto no se tradujo en movilizaciones para apoyar el desarrollo de la Central de Inambari. Por el contrario, los apoyos más importantes se dieron a partir de la participación en medios de comunicación nacional o en los talleres que EGASUR fue realizando en la región.

A su vez, la Cámara de Comercio y Producción de Puno realizó una encuesta y sondeo de opinión entre algunos de sus integrantes. Para llevarlo adelante entrevistaron a 200 empresarixs puneñxs, 50 autoridades y 30 periodistas. Entre los resultados obtenidos encontramos que el 61% de lxs empresarixs se mostraron de acuerdo con la construcción de la represa, así como también el 31% de autoridades (locales y regionales) y el 31% de lxs periodistas (Rodríguez-Olórtegui, 2018).

Sin embargo, estos apoyos no se tradujeron en una movilización para promover el avance de la obra. Quienes ocuparon el espacio público para demostrar su postura ante Inambari fueron quienes rechazaban el desarrollo de la central, aquellas personas que buscaron visibilizar que no existía licencia social para la construcción de la represa hidroeléctrica y que hicieron escuchar sus voces no sólo en Madre de Dios, Cusco y Puno, sino que lograron colocar la conflictividad en la agenda nacional, tal como veremos en el siguiente punto.

4. REPERTORIOS DE ACCIÓN COLECTIVA

Tal como planteamos al comienzo de este capítulo, los repertorios de acción colectiva son un conjunto de rutinas aprendidas, compartidas y ejercitadas mediante un proceso de selección relativamente deliberado (Tilly, 2002). Mediante la implementación de estas rutinas, los movimientos sociales realizan reclamos al Estado.

Quienes participan en las luchas adoptan guiones que ya han actuado, o al menos vivenciado previamente. Por ello, nos parece central recuperar las luchas previas que se han dado en las regiones que son nuestros casos de estudio, porque las mismas no solo configuran las territorialidades allí emplazadas, sino también nos brindan información sobre estas rutinas previas de actuar colectivamente. A su vez, estos repertorios adoptados configuran los modos en los que los movimientos son vistos y leídos por "lxs otrxs".

4.1. Ríos libres de represas

Tras conocer el intento de avance de la represa Garabí-Panambí, las primeras acciones llevadas adelante por la Mesa No a las Represas buscaron visibilizar la problemática entre la sociedad civil y poder incidir en la agenda mediática provincial. De esta forma, durante los primeros momentos se llevaron adelante acciones, como marchas, movilizaciones y festivales, sobre todo en la capital provincial, Posadas.

Tras la apertura de las licitaciones de los estudios de factibilidad, llevada adelante el 7 de marzo de 2012, la Mesa difundió un comunicado donde planteó:

> Desde la Mesa una vez más exigimos que las Autoridades Provinciales y los Legisladores Nacionales exijan las explicaciones correspondientes al Gobierno Nacional respecto a esto. Temas como la minería a cielo abierto, las pasteras, las megas represas, los glaciares, etc. son realidades que se tratan desde hace ya muchos años sin recibir ninguna respuesta, derivando indefectiblemente en conflictos sociales.
> En Misiones, y particularmente en la Mesa Provincial, hemos manifestado nuestra voluntad de agotar todas las instancias de diálogo. Asimismo, planteamos que

> nuestros reclamos se resuelvan a través de las vías que marcan las leyes vigentes en nuestra provincia y nuestro país.[142]

Más allá de este intento por establecer canales de diálogo con las instancias gubernamentales, no obtuvieron ningún tipo de respuesta por parte del Estado provincial, ni del nacional. Esto llevó a que la Mesa continué con sus acciones en las calles, movilizando y realizando festivales para difundir la situación en la que se encontraba el avance de Garabí-Panambí. También de la otra orilla del río Uruguay, en Brasil, se llevaron a cabo manifestaciones para exigir la paralización de los estudios necesarios para la realización de la obra.

A su vez, los múltiples comunicados que se realizaban por parte de la Mesa apuntaban directamente hacia ambos gobiernos nacionales, exigiendo que no continúen avanzando con los estudios sin contar con la licencia social de los pueblos que se verían afectados. Así lo vemos en el comunicado difundido el día 17 de marzo de 2012 a través de la página de Facebook oficial de la Mesa:

> Desde la Voz de los Pueblos, la unión, la búsqueda del Bien Común, el respeto a los Derechos Humanos, a las ganas de vivir en libertad de conciencia y acción en el marco del respeto mutuo, Hermanas y Hermanos de Argentina y Brasil decimos: "Así NO Cristina!!, Así NO Dilma"!!. Las respetamos, las estamos mirando y las ayudaremos a tomar el camino de la verdadera sustentabilidad evitando la construcción de grandes represas y no viendo a nuestros Ríos vivos como combustible que mueven turbinas y generadores de dinero sino como Bienes que son fuente de alimento y Vida.[143]

Mientras tanto, la Mesa iba formándose en torno a lo que implicaba la IIRSA. Se realizaron charlas informativas en torno al modelo de desarrollo detrás del avance de estos proyectos de infraestructura a gran escala, ligándose con otras luchas que se articulaban a través de los Ejes de Integración y Desarrollo y los corredores de conexión que se planteaban en el marco de la Iniciativa. Así lo relata Eduardo Luján:

> Uno de los principios que sostiene el funcionamiento, de alguna manera, de la Mesa es entender de que el tema de la represa no es un tema aislado, que responde a esto que tanto hablamos a veces en la UAC sobre un modelo productivo, generador energético, extractivista, que responde, de alguna manera, al proyecto COSIPLAN o IIRSA (…) Venían unos compañeros a dar algunas charlas sobre el tema del proyecto IIRSA, porque no teníamos conocimiento y nunca se habló. Nunca se habló y eso es lo llamativo, porque en la provincia hay obras que dependen de IIRSA. El puerto que existe en Posadas es una obra que está dentro del proyecto IIRSA. Tal es así que nosotros siempre nos preguntamos para qué se hizo el puerto porque nunca fue utilizado y ya fue inaugurado hace 2 años. Lo que pasa es que está dentro de ese Proyecto que va mucho más allá de la represa.

[142] Disponible en https://www.facebook.com/MesaProvincialNoALasRepresas/
[143] Ibíd.

La reconversión del Puerto de Posadas se incorporó a la IIRSA en el marco del Eje de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en un proyecto conjunto con la reconversión del Puerto de Santa Ana. El objetivo era

> Adaptar las infraestructuras de los puertos a los procesos operatorios modernos, la adopción de tecnología de transporte, condiciones de operatoria hidrológicas con dragado permanente y balizamiento para permitir la navegación de mayor calado. Con conexiones con carreteras, comunicaciones y obras públicas. Desarrollando el área circundante ribereña al río Paraná.[144]

Las obras para la reconversión del puerto de Posadas fueron llevadas adelante, mientras que las del Puerto Santa Ana fueron abandonadas. En este marco general, desde la Mesa se fue informando a la población en torno a la IIRSA, los efectos que traerían las obras a realizar en la provincia y los intereses detrás del avance de determinados proyectos.

Además de las charlas informativas en torno a la IIRSA y a los efectos que acarrearía la construcción de Garabí-Panambí, una de las principales acciones llevadas adelante por la mesa, en múltiples ocasiones, fueron las "remadas" por los ríos. El objetivo de estos eventos era plantear la defensa de los cursos de agua, su uso popular en términos de navegabilidad y la identidad regional ligada al río Uruguay. El mensaje de estos encuentros era plantear a la sociedad que el represamiento de las fuentes de agua implicaría una pérdida también en términos recreativos para la población.

Siguiendo a Melé (2016), en el plano de la dimensión política del conflicto, se buscó establecer un diálogo con el gobierno provincial. Para ello, el día 8 de agosto de 2012, representantes de la Mesa tuvieron una cita con Maurice Closs, por entonces gobernador de la provincia de Misiones; con el presidente de la empresa Energía de Misiones (Emsa), Sergio Ferreyra; el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Luis Jacobo; y el subsecretario de Ciencia y Tecnología, Carlos Galián. En este encuentro la Mesa presentó el documento "Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2030", que planteaba el desarrollo energético alternativo a las mega-represas y las centrales nucleares. Ese mismo día, se realizó un encuentro abierto a la comunidad en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, donde informaron a la sociedad civil en torno a esta plataforma y a las múltiples alternativas energéticas existentes.

De esta forma, la Mesa buscaba no sólo quedarse en una posición de rechazo a la construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, sino también poder plantear sus visiones y lineamientos en torno al desarrollo energético futuro. Más allá de esta

[144] Disponible en http://www.iirsa.org/proyectos/detalle_proyecto.aspx?h=760&x=9&idioma=PO

presentación, la Plataforma no fue considerada por el gobierno, que siguió manteniendo la postura de avanzar con Garabí-Panambí, apelando a diferentes argumentos para tratar de obtener licencia social, tal como explica Eduardo Luján:

> El mensaje era de las bondades de la organización, de las viviendas nuevas, de los porcentajes de indemnización que iban a tener, que iban a ser elevados, que sus hijos no iban a pasar necesidad. El mismo mensaje que se hizo en Yacyretá.

Frente a esto, la Mesa buscaba recordar a la población misionera que los mismos argumentos fueron utilizados para promover el avance de Yacyretá y muchos de ellos fueron incumplidos. Otro de los puntos centrales de sus comunicados y exposiciones fue plantear que, a pesar de que esta represa se encuentra operando, existen lugares en la provincia que aún no cuentan con el acceso a la energía eléctrica. Con este último punto, se buscaba cuestionar también el interés real detrás de la producción energética y los sectores a los que se destinarían los excedentes.

Por otro lado, la Mesa presentó un proyecto de Ley en la Legislatura provincial para que se realice la consulta popular que establece la Ley Nro. 56 ante el avance de represas. Se fijaba el día 14 de abril de 2014 como fecha límite para la realización del plebiscito. Sin embargo, este proyecto no recibió tratamiento por parte del poder legislativo.

Frente a ello, se decidió llevar adelante la Marcha por los Ríos Libres, que constituyó uno de los hitos de la lucha socioterritorial. Esta se realizó entre el 23 y el 29 de septiembre de 2013. Muchxs integrantes de la Mesa y de otras organizaciones recorrieron a pie 150 kilómetros, desde Panambí hacia Posadas, con el objetivo de exigirle al gobierno provincial que realice la consulta popular que debe hacerse ante el avance de una represa hidroeléctrica, tal como establece la Ley Provincial Nro. 56 (aplicada para el caso de Corpus Christi). En relación a la importancia de dicha marcha, Sergio Álvez plantea:

> Fueron casi seis días de caminata y sirvió como para concientizar acerca de lo que estaba pasando a una escala un poco más importante de lo que se venía haciendo en ese momento, la modalidad la verdad que fue muy exitosa, porque en cada pueblo la gente salía a recibir a los manifestantes, a quienes nos estábamos movilizando y el último día, al llegar a la ciudad de Posadas, a la casa de gobierno, a la plaza central, con un reclamo conciso que era que se convoque a un plebiscito nuevamente para ver si el pueblo quería realmente o no está represa, había más de cinco mil personas ese día y la verdad que fue un hecho político muy importante, que dio resultados en el sentido que mediáticamente y socialmente fue efectivo, es decir se empezó a visibilizar ese reclamo con mucha más fuerza y claridad, que era lo que se necesitaba, porque había también mucha confusión.

Esta marcha constituyó uno de los primeros eventos realizados por la Mesa que logró llegar a algunos medios de comunicación de carácter nacional[145], tal como lo explica Eduardo Luján:

> Teníamos la suerte también de que siempre nos acompañaron mucho los medios de comunicación, fundamentalmente por medios independientes, pequeños y medianos medios con total independencia, se animan a enfrentar a los sectores de poder, pero bueno, después todavía al resto no le fue quedando mucha alternativa y tuvieron que empezar a dar espacio.

A pesar de la importancia que tuvo esta marcha en relación a la visibilización de la problemática y de la masiva participación social, Maurice Closs aseguró -el 30 de octubre en el marco de una entrevista realizada por la radio Tupa Mabaé- que no tenía intenciones de realizar la consulta popular durante el 2014. A pesar de que su mandato finalizaba en 2015, Closs afirmó que "probablemente no la haga hasta 2018 o 2020"[146].

Tras las declaraciones del gobernador, la Mesa difundió un comunicado en el que se planteaban cuatro puntos centrales. Por un lado, se instaba a la Legislatura a dar tratamiento al proyecto de Ley presentado por la Mesa. En segundo lugar, se exigía la instalación de oficinas de informes, en las que se comunicará a lxs vecinxs de la provincia sobre los daños que generarían las construcciones y donde se advirtiera a la población que no debían firmar ningún papel a pedido de representantes del Consorcio Río Uruguay ni de las empresas consultoras contratadas para la realización de los estudios, hasta tanto los mismos no sean revisados por un equipo jurídico. En tercer lugar, se demandaba al Estado provincial la colocación de carteles indicativos señalando el alcance de la inundación prevista, ya que las compañías responsables no difundían esta información. Por último, planteaban "De no mediar un tratamiento urgente de nuestro proyecto, la Mesa Provincial por el No a las Represas convocará a una "CONSULTA POPULAR", donde mostraremos la voluntad de los ciudadanos a hacer valer sus derechos"[147].

A pesar del planteo de estos reclamos, la Mesa continuó sin recibir respuestas por parte del gobierno y la empresa continuó operando. En mayo de 2014, el Consorcio Energético del Río Uruguay comenzó a realizar el censo necesario para llevar adelante los estudios de factibilidad. Desde la Mesa se convocó a no responder a esas encuestas y no brindar

[145] Darío Aranda, "Marcha por los ríos libres", *Página /12*, 28/09/2013.
[146] Inforber, "Closs aseguró que no tiene intenciones de convocar un plebiscito por Garabí – Panambí", 30/10/2013.
[147] Disponible en https://www.facebook.com/notes/650638995631274/

información[148]. En la orilla brasileña del río Uruguay, algunos pueblos se declararon en rebeldía contra los relevamientos y no respondieron a los censos.

El día 28 de mayo de 2014, algunas familias de Alecrim, en Brasil, que se verían afectadas por Garabí-Panambí, tomaron la oficina del Consorcio Energético Río Uruguay. El objetivo de esta acción fue reclamarle a las empresas el cese de los estudios de viabilidad y la cancelación de las charlas informativas que el Consorcio se encontraba llevando adelante. En el marco de la acción, Anacleto Reistoff, vecino y agricultor de la zona, manifestó:

> El método de reuniones que la empresa viene realizando no esclarece lo que la población realmente quiere saber; solo nos quieren convencer de un montón de falsedades, que las represas nos traerán progreso y todo eso. Es el mismo discurso que se usó antes de la construcción de otras represas, y que acabaron dejando a miles de familias sin tierra y a comunidades enteras destruidas. Ya no creemos ese discurso y no nos vamos a dejar engañar.[149]

Así, a ambas orillas del río, la movilización iba creciendo a medida que avanzaban los estudios de factibilidad y los censos realizados por el Consorcio. Frente a esto, ante la ausencia de respuesta por parte del gobierno de Misiones a los reclamos realizados, en marzo de 2014 la Mesa decidió convocar a una consulta popular autogestiva para el 20 de octubre de ese mismo año[150]. Durante esos meses, informaron a la población en torno a lo que implicaba la participación en el plebiscito y cómo poder emitir su voto.

De esta forma, entre el 20 y el 26 de octubre se llevó adelante la consulta popular, que buscaba responder a la pregunta "¿Estás de acuerdo o no con la construcción de nuevas represas?". Para ello, se fijaron mesas con urnas en plazas, centros culturales, escuelas, universidades, centros barriales y sindicatos de diferentes puntos de la provincia. Tal como recupera Eduardo Luján:

> Nosotros garantizamos la presencia de urnas en toda la provincia, o sea, que fue una movilización muy muy importante porque cada una necesitaba tener por lo menos un par de personas que estén permanentemente, aparte algunas eran móviles, otras se colocaban un día, otro día, las colocábamos en las plazas, en las escuelas, en la Iglesia, haciendo una movilización impresionante de gente, en toda la provincia. Anécdotas infinitas de gente que salió por las colonias, rutas de tierra, para que la gente pueda votar.

Para la realización de la consulta popular, la Mesa estudio las normas vigentes en relación a la realización de un plebiscito de estas características, buscando darle el marco de

[148] Disponible en https://www.facebook.com/MesaProvincialNoALasRepresas/photos/a.392211714125206/799432480069792/

[149] Disponible en https://www.facebook.com/MesaProvincialNoALasRepresas/

[150] Disponible en https://www.facebook.com/notes/665362241032613/

legalidad necesario para que sea reconocido por el gobierno provincial. Así lo explica Luján:

> Nosotros abrimos e hicimos público el anuncio de que se iba a llevar la consulta e invitamos a quién quiera sumarse de veedores, nosotros trajimos veedores de otros lugares del país, vinieron periodistas de España, enviaron la adhesión eurodiputados de Alemania y de España. Tuvimos el acompañamiento de Nora Cortiñas, de mediadores de la Universidad de Buenos Aires, de CONICET [Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina], de Buenos Aires, de Córdoba, estuvo como veedor un ex Ministro de Medio Ambiente de Paraguay de la época de Lugo, cuando fue presidente Lugo, su Ministro de Medio Ambiente vino a acompañar y a oficiar como veedor de la consulta. Vino Pérez Esquivel, el Nobel de la Paz, también estuvo acompañando. En fin, otras personalidades, no me estoy acordando de todas, e instamos a quiénes estaban a favor de la construcción de la represa que hagan lo mismo, que traigan a sus veedores, que pongan sus fiscales.

A pesar del proceso de organización y articulación de sectores alrededor de las resistencias a la represa Garabí-Panambí, ni el Consorcio Energético río Uruguay, ni el gobierno provincial, ni sectores que se mostraban favorables al proyecto, participaron como veedores en la consulta popular. De hecho, el propio gobierno provincial decidió desconocer la consulta llevada adelante, no considerándola vinculante.

Finalmente, el 6 de noviembre de 2014, lxs integrantes de la Mesa presentaron, en el marco de una conferencia de prensa realizada en Posadas, los resultados definitivos del escrutinio. Tal como informaron, 120418 personas participaron de la consulta, de las cuales 116598 votaron en contra del avance de nuevas represas (96%), 3506 por el Sí (2.91%) y debieron ser anulados 323 votos (0.27%).

La realización de esta consulta popular fue un hito importante en la lucha contra Garabí-Panambí y los resultados que arrojó le brindaron un marco de legitimidad a la lucha anti-represas llevada adelante en numerosos puntos de la provincia. Tal como plantea Sergio Álvez:

> Esa consulta popular sobre represas de 2014 fue un poco la respuesta a eso también, decir `bueno ustedes no cumplen con la ley, no dan la participación necesaria a la ciudadanía, lo vamos a hacer nosotros´, esa movida fue muy contundente también, terminó ese año y ya después a partir de ahí se empezó a desactivar, el Consorcio Energético del río Uruguay desapareció de la provincia, cerró las oficinas que tenía.

Por otro lado, el 8 de julio de 2015, la Mesa presentó un proyecto de Ley en la legislatura provincial. Este proyecto, denominado de Ríos Libres, declara a la provincia de Misiones libre de nuevas obras de represamiento sobre el río Paraná, Uruguay e Iguazú. A su vez, establece a estas fuentes de agua como "bienes de la naturaleza y recursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, en particular a lo referido a la calidad de aguas, cantidad y distribución y uso jerarquizado,

así como el sustento de la biodiversidad". Sin embargo, el proyecto nunca fue tratado y perdió estado parlamentario.

Otra de las dimensiones de la productividad del conflicto que plantea Melé (2016) es la jurídica. Así, al otro lado de la orilla del río Uruguay, el MAB avanzaba en términos judiciales para poder frenar el desarrollo del proyecto. El Ministerio Público Federal de Santa Rosa y el Ministerio Público de Río Grande do Sul iniciaron una acción civil pública ambiental contra el Instituto Brasilero de Medio Ambiente y de Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y Eletrobras por la construcción de la central de Panambí.

El 27 de enero de 2015, el 1er Juzgado Federal de Santa Rosa dictó una orden judicial, suspendiendo la continuidad de los estudios de factibilidad técnica y ambiental de la central Panambí en cota 130 metros e impidiendo al IBAMA el otorgamiento de licencias ambientales a la empresa (Franck Thies y Ebenau, 2021). El argumento para esta decisión era el impacto que se iba a generar en el Parque Estatal do Turvo. El Consorcio apeló varias veces la decisión de no innovación, pero la medida cautelar se mantuvo, tal como explica Mariana Zabot, integrante del MAB:

> Los estudios de impacto ambiental no podían continuar por basar todos esos estudios en el espacio de la cota de 130 metros, y qué pasa con esa cota de 130 metros que anegan partes de un parque brasileño, que no pueden, porque es un parque estadual, no puede ser inundado, fue contestado varias veces por las empresas y por el IBAMA, pero se mantuvo en primera instancia ese dictamen, que hizo que el proyecto no pueda continuar por causa de la cuestión ambiental, pero eso no fue por la cuestión social, por los afectados, fue la cuestión ambiental.

Tal como expone la integrante del MAB, a pesar de que las movilizaciones en ambas orillas del río Uruguay ponían como uno de sus puntos centrales la afectación que implicaría Garabí-Panambí en términos de expulsión de poblaciones, esta medida no fue tomada en consideración por la Justicia. Así, el argumento para frenar el avance de las obras estuvo puesto en la afectación a una reserva natural, sin tener en cuenta los impactos sociales que esta obra de infraestructura generaría.

De esta forma, el proyecto logró ser congelado, a pesar del avance de los estudios de factibilidad y de la inversión realizada para la realización de estos y del plan de comunicación. Hasta el día de hoy, Garabí-Panambí no fue retomado, a pesar de que, posteriormente, hubo intentos por parte de ambos gobiernos nacionales, durante la administración de Mauricio Macri en Argentina y de Jair Bolsonaro en Brasil, de reactivarlo. Frente a esto, tanto el MAB como la Mesa se han mantenido en estado de alerta, y manifestándose contra el avance de nuevos represamientos en la región.

4.2. Lucha nacional contra represas

Dado el desconocimiento que existía en torno a los efectos que generaría una central hidroeléctrica de embalse, el primer paso en la resistencia consistió en conocer el proyecto e informarse sobre lo que implicaría su avance. Al ver las condiciones y los impactos que generaría, fueron las propias organizaciones y algunos pobladores los que comenzaron a dar a conocer a la sociedad civil de la región lo que podría suceder. Tal como expone Rosario Linares Valderrama:

> En realidad, no fue nada planificado, fue algo que las circunstancias hicieron que indistintamente diversas personas que recibimos cierto tipo de información comenzáramos a analizar el asunto, personalmente yo creo que sí logró algo en todo esto es gracias al conocimiento del territorio que tiene la gente del lugar.

De esta forma, gracias al conocimiento territorial de las comunidades allí emplazadas y de la participación de ONGs y organizaciones sociales, la información en torno al proyecto y sus consecuencias comenzó a ser difundida en la región, lo que permitió ir articulando la resistencia ante Inambari. Así lo explica Aldo Santos:

> Primero fue el enterarse del proyecto, luego fue buscar información por parte de las ONGs, traducirla a lenguaje sencillo, y luego comenzamos a organizar foros, conversatorios, reuniones, dimos entrevistas a medios locales, generamos una corriente de opinión en el sentido de decir `eso es lesivo para el Perú´ y es positivo solamente para Brasil, generamos esta corriente de opinión, y afortunadamente tuvimos eco local, porque el eco local era más concreto en todo caso, las comunidades locales eran `pero oye si me van a inundar, ¿dónde me van a reubicar?, ¿a qué costo?, ¿cómo?´, a nivel local esa era la preocupación, era más concreta, más real en todo caso porque los afectaba directamente, y a nivel regional era como la amenaza de este proyecto que va a afectar el medio ambiente, a las comunidades que viven en la zona y además también lesivo para el interés peruano y así fue creciendo.

Así, tal como podemos ver en el relato de Santos, a diferencia de lo que sucedió en el caso de Garabí-Pabambí, uno de los cuestionamientos principales no estaba puesto en la IIRSA –considerando que Inambari hacía parte del proyecto de interconexión energética entre Brasil y Perú que se enmarcaba en el Eje de Integración y Desarrollo denominado Perú, Brasil y Bolivia (Romegialli y Luchetti, 2016)-, sino en los intereses y el accionar de Brasil en Perú. De hecho, uno de los puntos de mayor conflictividad del proyecto era que Inambari iba a inundar dos tramos de la Carretera Interoceánica Central -la cual se había construido en el marco del mismo Eje de la Iniciativa-.

Los tramos de la Carretera que se verían afectados serían el 2 y el 4. El primero fue construido por el consorcio CONIRSA, compuesto por las compañías Odebrecht, Graña y Montero, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. y JJC Contratistas Generales; mientras que el segundo por el Consorcio INTERSUR, integrado por las empresas

brasileñas Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão. Estas compañías fueron consultadas en torno al proyecto de la central hidroeléctrica Inambari, tal como relata Rosario Linares Valderrama:

> SOCIT se acercó a estas empresas a preguntarles si conocían el proyecto de Inambari, el consorcio a cargo de la Interoceánica, que estaba en construcción, nos dijo que no, que no conocían nada, en la práctica nosotros notábamos que no querían avanzar justo con el trecho que se iba a inundar, a pesar de que ya tenían un cronograma de obras definido, aprobado por las instancias nacionales, ellos siempre buscaban alguna justificación para no asfaltar justo ese trecho, estaban en contratos con la OAS.

Tal como hemos expuesto, Inambari era parte de un conjunto de cinco represas hidroeléctricas que las empresas de ingeniería brasileñas Odebrecht, OAS, Queiroz Galvão y Camargo Correa construirían en Perú. El convenio que habilitaba a estas compañías a construir las obras era parte de la estrategia subimperial del gobierno de Lula da Silva para promover la acumulación de estas empresas que fueron parte del bloque en el poder durante esos años y, así, colocar a Brasil como un actor de peso global. En este marco, las campañas comunicacionales que realizaron organizaciones como SER, DAR y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, en conjunto con algunos sectores de la sociedad civil, pusieron el foco en estos cinco proyectos, buscando visibilizar los intereses brasileños en las obras y, sobre todo, en Inambari, dado que, por su ubicación, era la que más fácilmente podría conectarse con el sistema eléctrico brasileño. Así lo expone Vanessa Cueto La Rosa:

> Es que el caso local de la central se uniera a otros casos que iban a un acuerdo internacional que era mucho más político, entonces eso nos muestra los impactos que puede tener cuando tu unes un caso que tal vez solito es más difícil de generar cambios o de que ese proyecto lo vemos inviable sólo y cuando se junte con una estrategia más amplia (…) A su vez, era ver el tema político internacional más de la planificación de proyectos energéticos en la Amazonía, sin una visión a largo plazo por parte del gobierno peruano. Sin embargo, el gobierno brasilero sí tiene una visión a largo plazo, pero el gobierno peruano no lo tenía. Entonces esa diferencia de miradas a largo plazo o de qué queremos con la energía, más la presión social que terminó que estos cinco proyectos se estancaran.

Esta campaña conjunta que incluía las cinco represas hidroeléctricas logró introducirse en la agenda mediática de Perú. Medios nacionales -como La Mula- y regionales -como el Diario Los Andes, Exégesis y Las Burbujas- se posicionaron abiertamente en contra del proyecto, mientras que otros tomaron el tema, pero sin adoptar un posicionamiento -como el Diario El Comercio, la radio Pachamama y el Diario Correo Puno-, o directamente a favor del avance de las represas –como el Blog Infraestructura Peruana y el Blog Desarrollo Peruano- (Rodríguez-Olórtegui, 2018).

A su vez, tras la realización del estudio de prefactibilidad, por parte de S & Z Consultores del Perú, en agosto del 2009 comenzó la ronda de talleres necesarios para la realización del Estudio de Impacto Ambiental por parte de Ecoplaneación Civil S.A Ingenieros Consultores y Constructores (ECSA). Las organizaciones y los sectores sociales involucrados en la resistencia contra Inambari comenzaron a participar de estos talleres con el objetivo de poder realizar cuestionamientos a las empresas y buscar respuestas en torno al proyecto. Ante las preguntas, ECSA propuso hacer un nuevo trazado del tramo de la carretera que iba a inundarse y relocalizar a las familias que serían desplazadas de sus territorios. Tal como relata Aldo Santos:

> La estrategia de las comunidades fue no dejarlos ingresar ya a sus comunidades, de hecho cuando lo hicieron alguna vez, las rondas campesinas los capturaron y los hicieron caminar descalzos en medio de la arena, los retuvieron más o menos una noche, por poco le prenden fuego la camioneta que habían utilizado para llegar, ya no podían entrar al lugar, estaban prohibidos, pero también es cierto que sí fueron convenciendo a las localidades de a poco, hicieron un trabajo de convencimiento, colocaron personal que se acercaba a las comunidades y ganaron algunos apoyos, pero no les bastó para conseguir la aprobación final del estudio de impacto ambiental.

Melé plantea que la dimensión territorial de los efectos que un conflicto produce se vincula a las formas de apropiación simbólica del espacio que suelen reforzarse o modificarse en el proceso (Merlinsky, 2015). Este concepto nos permite analizar por qué las propuestas realizadas por la empresa consultora –contratada para llevar adelante los estudios de Inambari- se encontraron con una gran oposición de una buena parte de la población de la región. En términos de los caminos alternativos de la carretera interoceánica, lxs pobladorxs no aceptaban ese nuevo trazado, porque implicaba un desplazamiento mayor y el menoscabo de la conexión entre Madre de Dios y Puno, puntos que se habían acercado entre sí a partir del desarrollo de la carretera. En relación a las relocalizaciones, no existía un proyecto concreto para otorgarles a las familias una porción de territorio que les habilite mantener sus actividades de subsistencia. En palabras de Linares Valderrama:

> La empresa proponía dos cosas: `o le damos una compensación en dinero o vamos a darle la vivienda donde usted escoja´, y en realidad eso significaba que le iban a dar una compensación monetaria para que se ubiquen en Lima, en Arequipa, en Puno, pero de ninguna manera iba a ser un monto que les permita si quiera adquirir un inmueble en otro lugar, y la segunda posibilidad que les daban era bueno a tanto reclamo de la gente la empresa hizo un proyecto de lugares donde se iba a asentar la población, asentamiento compensatorios, o sea pequeños pueblos, pero cuando analizamos el asunto era que esos lugares iban a estar distribuidos, no iban a estar en un lugar junto, o sea que se iba a romper la conexión familiar y afectiva, y, por otro lado, las casas que les iban a dar no les aseguraban que iban a seguir con una

> actividad de agricultura y sobre todo quienes se dedican a la minería artesanal sabían a la perfección que no le iba a haber una actividad que compense o que restituya.

Esta situación incrementó la disconformidad en torno al proyecto de gran parte de la población de la región. Ante esto, el Frente de Defensa de la región Puno decidió convocar a una movilización para el 11 de diciembre de 2009, en la que se bloqueó y sitió el puente Inambari durante dos días consecutivos. Alrededor de 50 efectivos policiales reprimieron a lxs manifestantxs, dejando como resultado tres personas heridas. A su vez, lxs ronderxs detuvieron, durante algunas horas, a un hombre que se presentó con un arma y dijo pertenecer a una empresa llamada "AsPerú". Finalmente, se decidió levantar la medida de fuerza a pesar de no haber obtenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado[151].

El 13 de diciembre, se difundió un pronunciamiento público, firmado por integrantes del SOCIT; el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes Guzmán; el Gerente Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno, Hugo Quintanilla Jara; integrantes del SER Puno; Municipalidades Provinciales, Distritales y Centros Poblados, Rondas Campesinas y Organizaciones de Base. En el documento se exigía al gobierno nacional que derogue la Resolución Ministerial Nº287-2008 que otorgaba la concesión a favor de EGASUR. A su vez, se planteaba la afectación que generaría al Parque Nacional Bahuaja Sonene y que inundaría

> las viviendas de más de 15 mil personas, 19 centros educativos, 3 establecimientos de salud, decenas de puentes peatonales y vehiculares, desplazando a estas poblaciones a zonas indeterminadas y desconocidas, cambiando su hábitat, su derecho a una mejor calidad de vida, sumiéndolas en la incertidumbre, desocupación y pobreza.[152]

Por otro lado, entre el 16 y el 18 de enero de 2010, se llevó adelante el XV Congreso Regional de la Federación Nativa de Madre de Dios (FENAMAD), que contó con la participación de unas treinta comunidades nativas de Madre de Dios. Tras el encuentro, difundieron una proclamación en la que se oponían al avance de Inambari y exigían la paralización de las actividades de implementación del proyecto, planteando que este generaría "migraciones masivas forzadas de los centros poblados y comunidades indígenas aledañas al área de influencia directa del embalse"[153].

El día 3 marzo de 2010, el viceministro de Energía y Minas de la Nación, Daniel Cámac, llevó adelante una audiencia pública en San Gabán, frente a 700 personas, donde intentó sembrar calma a la población de la región en torno a Inambari. En esa audiencia, Cámac

[151] Los Andes, "Protesta en contra de Hidroeléctrica de Inambari terminó sin resultados", 14/12/2009.
[152] Servindi, "Perú: Puno rechaza construcción de Central Hidroeléctrica de Inambari", 13/12/2009.
[153] Investing, "Comunidades indígenas rechazan proyecto de hidroeléctrica en Inambari", 29/01/2010.

dijo: "La construcción de esta central requiere, en cierto modo, de la autorización de los pobladores del área de influencia. Este proyecto debe tener la viabilidad social y ambiental"[154]. Sin embargo, la población no quedó muy tranquila con las declaraciones de Cámac y se convocó una movilización para el día siguiente.

De esta forma, el 4 de marzo de 2010, el Frente de Defensa de Puno convocó a una nueva movilización. Durante 48 horas, las principales vías de conexión en Yanamayo, Salcedo, Ichu, entre otras, fueron bloqueadas, por lo que el servicio de transporte terrestre urbano, interurbano, interprovincial e interdepartamental se vio restringido. Por otro lado, en la provincia de Carabaya, organizaciones de la sociedad civil, las Rondas Campesinas, el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, lxs miembrxs del comité de lucha de la zona sur, trabajadorxs de la Municipalidad Provincial de Puno, e integrantes del Gobierno Regional Puno marcharon en el centro de Alto Puno. A su vez, estudiantes de la Universidad del Altiplano tomaron sus instalaciones, e impidieron el ingreso de estudiantes, docentes y personal administrativo[155]. Tras la represión desatada por parte de las fuerzas de seguridad, lxs manifestantxs apedrearon la gobernación de Puno y un patrullero, e intentaron tomar una comisaría para liberar a los detenidos (Zibechi, 2012).

El día 12 de marzo de 2010, ONGs, organizaciones y académicxs[156] difundieron una carta destinada al presidente donde realizaban un cuestionamiento al Acuerdo energético que se estaba por firmar con Brasil. En ella planteaban:

> Estamos a favor del desarrollo y de la integración con Brasil con equidad y reciprocidad; por ello este Acuerdo debe asegurar los mayores beneficios para el Perú, en lugar de concentrar costos y riesgos en nuestro territorio (…) No debemos embarcarnos en megaproyectos inciertos, que generarán grandes deudas y causarán severos daños sociales y ambientales, sin un debate nacional previo e informado sobre nuestras proyecciones y opciones energéticas en un contexto de cambio climático (…) Señor Presidente, no debemos embarcarnos en proyectos de gran envergadura sin un diálogo público donde participen los ciudadanos y ciudadanas amazónicos, sus organizaciones representativas y la sociedad civil en general. La

[154] Actualidad Ambiental, "Cámac: construcción de hidroeléctrica requiere autorización de los pobladores", 03/03/2010.

[155] Los Andes, "La región Puno protesta contra hidroeléctrica del Inambari", 5/3/2010.

[156] Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza; Instituto del Bien Común; DAR; Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; SER; Centro de Conservación, Investigación y Manejo de Áreas Naturales; Asociación para la Conservación del Patrimonio de Cutivireni; Asociación Civil Labor; Acción Ciudadana Camisea; Grupo de Trabajo sobre Infraestructura; Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica; Marc Dourojeanni, profesor Emérito UNALM; Mariano Castro, Decano Facultad de Derecho Universidad Científica del Sur; Jorge Caillaux Zazzal; Avecita Chicchon, antropóloga; Carlos Cañas, biólogo; Carlos Loret de Mola; Hernán Ortega, biólogo; Mariana Varese, economista; Gustavo Guerra García, director CDE; Alfredo Novoa Peña, Doctor Honoris Causa UNI; Max Hidalgo, biólogo; y Carlos Llerena, profesor principal UNALM.

> integración armoniosa, equitativa y de común desarrollo con el Brasil, sólo será posible con el acceso oportuno a la información y total transparencia del proceso de negociación del Acuerdo.[157]

De esta forma, se ponía en cuestionamiento que el Acuerdo y la integración con Brasil fueran beneficiosas para los intereses nacionales. El comunicado dejaba en evidencia que la relación asimétrica entre Brasil y Perú resultaría nociva para la nación andina, dado que la correlación de fuerzas entre ambos obturaba el margen de negociación peruano.

A pesar de la oposición de muchos sectores, el 16 de junio de 2010, se firmó el "Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y la exportación de excedentes al Brasil". En este acuerdo se ratificaba la promoción de cinco proyectos hidroeléctricos a realizar en Perú por parte de las empresas de ingeniería brasileñas que fueron parte del bloque en el poder durante el gobierno de Lula da Silva. A su vez, se establecía la venta de los excedentes energéticos hacia Brasil a precios fijos por 30 años y concesiones, también por 30 años, a Brasil para la operación de las nuevas centrales.

Este acuerdo generó el rechazo de gran parte de la sociedad que entendía que era lesivo para los intereses peruanos. En este marco, uno de los repertorios de acción utilizados, y caracterizado por Vanessa Cueto La Rosa como "una campaña de disidencia comunicacional", fue enviar masivamente a la población que habitaba la región de Lima unos papeles que simulaban ser un recibo de luz. En ellos se consignaba la energía que iba a perder el Estado peruano ante el avance del acuerdo energético con Brasil.

De esta forma, muchos sectores, en el plano nacional, se fueron sumando al repudio ante el avance de dicho acuerdo. Así describe Aldo Santos ese proceso:

> Duró aproximadamente como año y medio o dos años, fue un proceso largo, de discusiones, de marchas y contramarchas, y finalmente se logró colocar en la agenda nacional por lo menos la amenaza que implicaba un acuerdo energético, porque lo que hizo el gobierno, en ese momento, porque Inambari no era solo, era un conjunto de hidroeléctricas, y gran parte de ellos cruzaban comunidades nativas, indígenas, en la Amazonía. Entonces eso logró colocar en la agenda del Congreso, la discusión en torno a la amenaza de ese acuerdo energético.

Durante los primeros meses de 2011, la agenda mediática y la política nacional estuvo centrada, en gran parte, en las elecciones nacionales que se realizarían en abril. En el marco de la campaña electoral, el conflicto por el proyecto de Inambari tiñó gran parte

[157] Actualidad Ambiental, "Comunicado: aseguremos el mayor beneficio para el Perú en el Acuerdo de "Integración" Energética a punto de firmarse con Brasil", 12/03/2010.

de los debates y la pregunta a lxs candidatxs a presidente de la República en torno a la suerte del proyecto en caso de ganar las elecciones se tornó en algo central.

De hecho, en el marco de la campaña se sucedieron denuncias de influencia brasileña. Se planteó que asesores cercanos al PT fueron una herramienta clave en el diseño de la estrategia electoral y se apuntaron a empresas brasileñas como financistas del Partido Nacionalista Peruano (Dargent y Muñoz, 2012), que llevaba a Ollanta Humala como candidato, quien terminó imponiéndose como ganador ante Keiko Fujimori.

Previo a las elecciones, el gobierno de Alan García había establecido una tregua con algunos sectores de la sociedad que se encontraban en conflicto: en la región Huancavelica por la creación de una controvertida universidad; en la región del altiplano de Puno, por la expansión de las actividades mineras y petroleras; y por el avance de la central de Inambari[158]. Tras las elecciones, las resistencias sociales estallaron nuevamente. En Puno, se produjeron masivas movilizaciones, que incluyeron la participación de los frentes de defensa y las rondas campesinas de Carabaya.

Por otra parte, en junio de 2011, algunas ONGs, como DAR, SER, la Central Asháninca del Río Ene y la Asociación Civil Labor, lanzaron la campaña "Tigre de los Buenos Negocios". El objetivo de esta campaña era realizar acciones para que Perú deje de resultar perjudicado al momento de hacer negocios de mediano y largo plazo con algunas empresas transnacionales, que impliquen la realización de inversiones e involucre los bienes comunes naturales peruanos[159]. Así la describe Vanessa Cueto La Rosa: "poníamos ejemplos de Inambari, de Pakitzapango, de que Perú está lleno de malos negocios en la historia y que por qué los peruanos vamos a perder o qué ganamos, que ya no podemos repetir la misma historia".

En este contexto de presión social, el Ministerio de Energía y Minas declaró concluida definitivamente la concesión temporal otorgada a EGASUR. Sin embargo, esta concesión se encontraba vencida desde hacía algunos meses ante el incumplimiento del Consorcio en torno a la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. A pesar de esto, desde las organizaciones entendieron a esta medida como una victoria política popular (Canal Alata, 2017).

[158] Jaime Cordero, "Las protestas sociales se multiplican en Perú antes de la llegada de Humala al poder", *El País*, 26/06/2011.

[159] Inforegión, "Grupo de ONGs lanza campaña `Tigre de los buenos negocios´", 27/06/2011.

5. PARA RESUMIR

Como afirmamos antes, el territorio es el lugar donde se sintetizan relaciones de poder espacializadas. Es resultado de la apropiación del espacio a través de diferentes estrategias políticas, que coexisten superpuestas. En la etapa actual del capitalismo, el territorio se ubica como un elemento central, dado que el poder de los grupos capitalistas se estructura mediante la organización de una articulación de territorios. De esta forma, el capitalismo se hipermaterializa tejiendo redes y creando flujos.

En este marco, la infraestructura física se transforma en un elemento central para conectar los puntos de producción con los mercados internacionales, favoreciendo así la circulación de los flujos de producción. Estos proyectos a gran escala se desarrollan apropiándose de grandes porciones de territorio y desterritorializando comunidades. Así, la territorialidad capitalista avanza imponiéndose por sobre otras formas de entender el uso y apropiación de este territorio, dándose dos territorialidades contrapuestas: de resistencia y de dominación. De esta forma, la territorialidad capitalista avanza jerarquizando territorios y comunidades por sobre otros, llevando adelante procesos de colonialidad territorial.

De esta forma, se desatan conflictos, centrados en los modos de uso y apropiación de estos espacios geográficos. Así, en el territorio se construye la identidad y la subjetividad política de estos movimientos, y se generan las oportunidades y las limitaciones para su potencial de movilización (Halvorsen, Fernandes y Torres, 2021).

En nuestros casos de estudio, el avance de los proyectos de infraestructura energética desató conflictos por el uso del territorio y activaron territorialidades de resistencia que enfrentaron las territorialidades capitalistas. El avance de represas hidroeléctricas de embalse, dados los niveles de inundación que generan, implica el desplazamiento y la desterritorialización de comunidades, destruyendo economías regionales, modos de subsistencia y reproducción de la vida, lazos comunitarios y espacialidades allí existentes. Estos modos de habitar y defender los territorios, así como las identidades que allí se construyen, son históricos y culturales. Por ello, recuperar la genealogía de las resistencias previas se transforma en algo central para entender los movimientos socioterritoriales que se articularon ante el avance de las centrales de Inambari y de Garabí-Panambí.

Tal como hemos recuperado en el punto que aborda las genealogías de las resistencias, en el caso de Garabí-Panambí, tanto en la provincia de Misiones, Argentina, como en la región de Río Grande do Sul, Brasil, existía una historia de lucha contra el avance y el accionar de represas hidroeléctricas. Esto permitió que las resistencias se articulen rápidamente y que cuenten con un piso de información previo en torno a los efectos que puede generar una central de embalse.

En el caso de Argentina, la historia vinculada a la construcción de Yacyretá vuelve en los relatos de lxs integrantes de la Mesa Provincial No a las Represas y fue uno de los principales elementos que logró conjugar y articular la lucha no sólo para el caso de Garabí-Panambí, sino también para el de Corpus Christi. Del mismo modo, el MAB ha resistido y sufrido los impactos del avance de las múltiples centrales hidroeléctricas emplazadas en el sur brasileño. Entendiendo que los efectos serían igual en ambas orillas del río Uruguay se llevó adelante una lucha articulada entre estos espacios.

De esta forma, uno de los sectores principales que impulsaron la lucha contra este proyecto de infraestructura, fueron quienes en el pasado habían sido desplazados de sus hogares, viendo destruidos lazos comunitarios y, en muchos casos, sus medios de subsistencia. Con el paso del tiempo, la resistencia contra el avance de represas hidroeléctricas no sólo aglutinó a afectadxs directxs, sino también a otros sectores sociales. En la provincia de Misiones, se conformó la Mesa Provincial No a las Represas en Misiones, que logró convocar a asambleas socioambientales, organizaciones sociales, indígenas, sindicales, iglesias, estudiantiles, barriales, periodistas y personas independientes que no sólo habitaban las regiones costeras, sino a otros sectores que entendían que los impactos socioambientales vinculados al avance de las centrales de embalse afectarían a una región más amplia.

Para llevar adelante la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico, la Mesa se articuló fuertemente con el MAB, realizando acciones conjuntas, movilizaciones e informando a la población en torno a Garabí-Panambí a ambas orillas del río Uruguay. A su vez, la Mesa buscó profundizar lazos con espacios ecologistas de carácter nacional, como la UAC, entendiendo que la conexión con otras luchas socioambientales era un elemento clave en términos de acompañamiento y de trabajo conjunto.

A diferencia del caso de Garabí-Panambí, en la región donde se emplazaría Inambari no existía una lucha previa en torno a la construcción de centrales de embalse. En Puno,

existe una central hidroeléctrica, pero es de pasada, cuya característica principal es que no tiene una gran acumulación de agua corriente arriba de sus turbinas, sino que esta es movida por la corriente natural del cauce. Esta característica implica que no se genere un embalse, por lo que no acarrea inundaciones y, por lo tanto, no implica el nivel de desplazamiento de población que genera una central de embalse. Por esta razón, no se conocían los efectos que podría acarrear una obra de infraestructura como la represa de Inambari, por ello, en un primer momento, la acción llevada adelante por organizaciones sociales y grupos de trabajo se centró en informar a la población en torno a los impactos que esta central generaría. De esta forma, se fueron articulando distintos sectores en una lucha conjunta.

Por otro lado, si bien no existían resistencias socioterritoriales ante el avance de represas hidroeléctricas, en la región estudiada sí han surgido luchas contra el impulso de la actividad minera. Un ejemplo claro ha sido el conflicto ligado al proyecto minero de plata Santa Ana, en Puno, el cual se desató en el mismo momento en que se estaba llevando adelante la resistencia contra Inambari. De hecho, estas luchas, en algunos casos, se entrelazaron. Sin embargo, no todos los sectores realizaron una evaluación positiva en torno a los repertorios de acción implementados por lxs manifestantes antimineros, ya que desde SOCIT han cuestionado el uso de la violencia y han buscado diferenciarse, planteando que los hechos violentos tuvieron un impacto negativo en términos económicos en relación al turismo.

Otra de las luchas llevadas adelante en la región fue para que se concretara la construcción de la carretera Interoceánica Central, que conecta la región de Puno y Madre de Dios con Brasil. Sin bien el avance de esta vía de conexión implicaba algunos efectos negativos en términos socioambientales, su desarrollo generaba expectativas por parte de la población en dos sentidos. Por un lado, la profundización del comercio con Brasil, situación que no sucedió dadas las restricciones para la importación que existen en Brasil. Por otro lado, esta obra de infraestructura lograría conectar territorios que se encontraban bastante desarticulados entre sí. Esto último permitió que algunas regiones de la de la Amazonía peruana comenzaran a considerarse más cercanas. El avance de la central de Inambari implicaría el anegamiento de dos tramos de la carretera, lo cual se convirtió en uno de los ejes principales de los movimientos socioterritoriales para oponerse a la represa.

Ante la construcción de la carretera Interoceánica, se constituyeron grupos de trabajo cuyo objetivo era el monitoreo de las obras para la mitigación de los impactos que pudiese generar el desarrollo de esta vía de conexión. Así, estos grupos funcionaron como catalizadores de la información en torno al intento de construcción de esta central de embalse, y de los efectos que la misma generaría, entre la sociedad civil.

En la lucha contra Inambari fueron claves algunas ONGs regionales y nacionales, los Frentes de Defensa regional, la Asociación de Mineros y la de Cafetaleros de Carabaya y Sandia, y, sobre todo, las Rondas campesinas. A su vez, también fue importante la participación y apoyo de algunos gobiernos regionales a esta resistencia socioterritorial. El gobierno regional de Puno y de Madre de Dios se mostraron abiertamente en contra al avance de la central hidroeléctrica, así como también los de los municipios de Carabaya, Tambopata y San Gabán.

Por otro lado, si bien EGASUR logró cosechar algunos apoyos de periodistas y de miembros de la sociedad civil, esto no se tradujo en movilizaciones sociales para promover el avance de la represa. Estos sectores manifestaron su apoyo en algunos de medios de comunicación y en los talleres que el Consorcio realizó para el avance de la central hidroeléctrica.

A su vez, dado que Inambari era parte de un proyecto mayor de construcción de cinco represas hidroeléctricas -por parte de las empresas de ingeniería brasileñas OAS, Odebrecht, Andrade Gutiérrez y Camargo Correa-, se aglutinó la lucha en el plano nacional, buscando plantear los efectos negativos que tendría el avance de estas represas. Esto llevó a que la resistencia lograra llegar a los medios de comunicación en el plano nacional, así como también que permeara las elecciones nacionales de 2011.

Por otro lado, la crítica principal estaba destinada al accionar de Brasil en Perú, y a evidenciar los modos en que la relación asimétrica entre ambos países afectaría los intereses peruanos. En este marco, el rechazo ante el avance del Acuerdo de Integración Energética buscó visibilizar la estrategia subimperial llevada adelante por Brasil. Los sectores de la sociedad civil denunciaban que se buscaba avanzar con Inambari en primer término debido a la facilidad de conexión con el mercado eléctrico brasileño y que el Acuerdo tenía como objetivo el abastecimiento brasileño de energía a precios fijos por treinta años y la concesión para la operación de las represas.

A su vez, las principales críticas estaban puestas en el desplazamiento de la población cuyos hogares sufrirían anegamientos, pero también en la relocalización de dos tramos de la carretera Interoceánica. Esto implicaría un desmedro a la conexión alcanzada con algunos sectores de la Amazonía peruana. Ante esta situación, las campañas realizadas en medios de comunicación, se entrelazaron con grandes movilizaciones que buscaban dar cuenta de que en la región no existía licencia social para el avance de esta obra de infraestructura.

A diferencia de Inambari, una de las principales críticas en el caso de Garabí-Panambí estaba puesta en la IIRSA y en el modelo de desarrollo que esta Iniciativa promovía. Así, las campañas llevadas adelante por la Mesa apelaban a que los gobiernos nacionales tengan en cuenta la posición de las poblaciones y promuevan otro tipo de desarrollo nacional.

De esta forma, se buscó establecer canales de diálogo con el gobierno de Misiones y trascender la mera crítica al avance de la represa. Para ello, la Mesa provincial No a las Represas constituyó una plataforma en torno a los escenarios energéticos futuros y a las alternativas a la energía hidroeléctrica y nuclear, la cual fue presentada al gobierno provincial.

Sin embargo, ante la falta de respuestas y recepción por parte del gobierno, la Mesa comenzó a realizar múltiples actividades para buscar visibilizar la ausencia de licencia social para el avance de la represa. Además de los festivales y las movilizaciones, se realizaron remadas que buscaban dar cuenta de la conexión que tienen las poblaciones con el río.

Por otro lado, se llevó adelante la Marcha por los ríos libres, la cual tuvo como objetivo realizar una demanda puntual al gobierno provincial: la realización de la consulta popular en torno al avance del proyecto. En el marco de esta movilización, se fueron plegando poblaciones de diferentes lugares, e informando a las poblaciones en torno a los efectos que generaría Garabí-Panambí.

Ante la negativa del gobierno a realizar esta consulta, la Mesa llevó adelante una consulta popular autogestiva, garantizando urnas para la votación en numerosos puntos de la provincia y con veedores nacionales e internacionales para asegurar la transparencia de los resultados. Estas acciones llevaron a que algunos medios de comunicación nacional tuvieran que tomar el tema de Garabí-Panambí.

El golpe final al proyecto se dio cuando, el 27 de enero de 2015, el 1er Juzgado Federal de Santa Rosa dictó una orden judicial, suspendiendo la continuidad de los estudios de factibilidad técnica y ambiental de la central Panambí en cota 130 metros e impidiendo al IBAMA el otorgamiento de licencias ambientales a la empresa. Esta decisión se entrelazó con toda la lucha popular llevada adelante a ambas orillas del río Uruguay, que dieron cuenta de que no existía licencia social para el avance de otra central hidroeléctrica en la región.

Así, tal como recuperamos en nuestros casos de estudio, la IIRSA y las obras de infraestructura enmarcadas en esta Iniciativa promovían un proyecto centrado en la integración desde arriba y una desintegración de lxs de abajo (Betancourt, 2014). En este marco, las poblaciones pusieron el eje en denunciar el avasallamiento de las territorialidades allí emplazadas, los impactos sociales y ambientales que implicaría el avance de algunas obras, en términos de desplazamiento de familias, de ruptura de lazos comunitarios y de destrucción de algunas actividades de subsistencia. De esta forma, los conflictos que se desataron buscaron cuestionar la idea de desarrollo detrás del avance de estos megaproyectos.

REFLEXIONES FINALES

En esta tesis nos propusimos analizar los intereses del Estado brasileño en el impulso a la infraestructura física sudamericana durante el período de gobierno de Lula da Silva (2003-2011). En particular, tomamos los proyectos de construcción de las represas hidroeléctricas Garabí-Panambí e Inambari, e indagamos en los conflictos y resistencias socioterritoriales que se dieron en los lugares donde estas obras se emplazarían.

Para llevar adelante este objetivo, partimos de un enfoque multiescalar y multidimensional (Fernández y Dundas, 2008), teniendo en cuenta que nuestro objeto de estudio está atravesado por múltiples escalas imbricadas entre sí. La primera escala de nuestro análisis la constituyó el Estado brasileño durante la etapa de gobierno de Lula da Silva, que buscó establecerse como un actor de peso global y favorecer la acumulación de algunos sectores que fueron parte del bloque en el poder (Poulantzas, 1978) durante esos años, a partir de la implementación de la política de desarrollo nacional, la recuperación y profundización de una estrategia subimperial, y su política de expansión hacia la región sudamericana.

En la órbita de esta primera escala, entendemos que el Estado brasileño, durante el período de gobierno de Lula, adoptó una configuración logística (Cervo, 2012). Este tipo de Estado se caracterizó por dar apoyo a las empresas de capitales nacionales para su proyección internacional por dos vías: a través de la inclusión de la producción local en emprendimientos internacionales; y mediante el crecimiento de las inversiones en el exterior, sobre todo en países vecinos. Esta configuración se dio por causa de tres factores principales: en primer lugar, porque la sociedad se encontraba en un nivel avanzado de organización, con federaciones de clase articuladas sectorialmente; en segundo lugar, por la estabilidad económica y política alcanzada; en tercer y último lugar, por el nivel avanzado de los agentes económicos y sociales en términos de organización empresarial y competitividad sistémica.

En este marco, durante el período de gobierno de Lula, se retomó y profundizó la estrategia subimperialista impulsada desde la década del sesenta en el contexto del golpe de Estado de 1964, la cual no fue sólo producto de un fenómeno económico, sino parte del proceso de la lucha de clases. Durante los primeros años del siglo XXI, esta estrategia se tradujo en el establecimiento de algunas políticas en el plano interno (como la creación de la APEX, el desarrollo de la PAC, la PITCE y la PDP) y de la política de expansión

brasileña hacia la región sudamericana y africana. Esta se llevó adelante con el objetivo de favorecer a algunos sectores de la burguesía interna que fueron parte del frente neodesarrollista (Berringer, 2015) durante esos años y de posicionar a Brasil como líder regional.

Tal como ya repusimos, la modificación del reglamento del BNDES –para permitir la adquisición de activos e inversiones realizadas por empresas de capital nacional en el exterior, y para la exportación de productos y servicios- fue una medida clave en la expansión brasileña hacia Sudamérica y África. Esta decisión sirvió para financiar la transnacionalización de algunas empresas, tanto de ingeniería como energéticas.

En este marco, la política exterior fue considerada una herramienta clave para consolidar el modelo de desarrollo brasileño impulsado por esos años. Esta política estuvo centrada en la participación de Brasil en múltiples instancias en el plano internacional, y perseguía dos objetivos estrechamente vinculados entre sí. Por un lado, favorecer la acumulación de las clases y fracciones de clase que fueron parte del bloque en el poder, a través del aumento del crédito, la expansión de la inversión en infraestructura, la conquista de nuevos mercados para la exportación, y el apoyo y el financiamiento a la internacionalización de sus empresas (Berringer, 2015). Este objetivo se basó en la idea de que, en una etapa caracterizada por los monopolios generalizados (Amin, 2018), para obtener mayores cuotas de mercado internacional era fundamental que existan empresas de suficiente tamaño y grado de internacionalización (Bachiller Cabria, 2014).

El segundo objetivo estaba centrado en consolidar el papel de Brasil como jugador de peso global. De esta forma, en el marco de la política exterior, Brasil buscó ahondar su participación en múltiples instancias internacionales, tales como el Foro IBSA, el G-20 y el bloque BRICS. A su vez, apuntó a profundizar su relación comercial con China, que se transformó en su principal socio comercial, en un contexto de declive relativo de Estados Unidos. Además, reforzó su presencia en países africanos, en especial en aquellos que eran ex colonias portuguesas, a partir de la presencia de sus grandes empresas en términos de exportación y de desarrollo de grandes obras de infraestructura.

En el plano regional, la política exterior adoptada por Lula estuvo ligada a la actualización y profundización de la estrategia subimperialista, la cual le adjudicó a la integración regional un papel instrumental vinculado a la expansión de los mercados para la profundización del desarrollo industrial y de apertura gradual de la economía nacional a

la economía mundial. En este marco, Brasil buscó impulsar instancias centradas en Sudamérica, dado que esto le permitiría consolidar su posición de líder regional al excluir a Estados Unidos y a su adversario latinoamericano, México.

Así, la apuesta brasileña a la integración regional estuvo centrada en el comercio, la seguridad, la infraestructura física y la energía. Estos últimos dos puntos (la infraestructura y la energía) son claves en la etapa actual del capitalismo, en el marco de un sistema-mundo (Wallerstein, 2004).

Por ello, durante el gobierno de Lula da Silva se impulsó y se profundizó la IIRSA y el desarrollo de proyectos de infraestructura al interior de Sudamérica. De esta forma, la segunda escala de nuestro análisis está dada por el lugar que ocupa la infraestructura física en la etapa actual del capitalismo y en el modelo de desarrollo impulsado por el Estado brasileño durante nuestro período de estudio.

Tras el proceso de expansión de las cadenas globales de producción, la infraestructura física ha comenzado a ocupar un lugar central en el desarrollo del capitalismo global. En esta nueva etapa, la integración de la infraestructura puede ligarse con la proliferación, inserción y consolidación de las economías nacionales en la economía internacional. Así, estas obras poseen un poder infraestructural (Herrera Santana, 2019), dado que permiten articular territorios que se encuentran desarticulados, así como también habilitan la apropiación territorial de diversos capitales en áreas o regiones de alto valor estratégico para su reproducción.

En este marco, la estrategia subimperialista brasileña se tradujo en la promoción de la IIRSA y de la integración de la infraestructura física. Esta estrategia se llevó adelante con dos objetivos centrales. Por un lado, las obras de conexión física que facilitan la salida de mercancías brasileñas hacia los mercados internacionales reducirían el llamado "Costo Brasil" que debían afrontar las empresas exportadoras, es decir, los gastos vinculados a la precaria red de conexión en la región. Por otro lado, dados los niveles de desarrollo que habían alcanzado algunas empresas de ingeniería brasileña, estas podrían ser adjudicatarias de las obras a realizar y de los estudios ambientales y de factibilidad, favoreciendo así el proceso de internacionalización de estas compañías que fueron parte del bloque en el poder durante el gobierno de Lula.

De esta forma, durante el período de estudio, estas empresas aumentaron sus niveles de acumulación y transnacionalización a partir de la expansión hacia la región

sudamericana. Estas empresas de ingeniería (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, OAS y Camargo Corrêa), en conjunto con las consultoras Engevix Engenheria y CNEC Engenharia, fueron parte de uno de los sectores que más se beneficiaron con el impulso que el Estado brasileño decidió darle a la IIRSA y al desarrollo de la infraestructura regional. A su vez, algunas de estas compañías estuvieron involucradas en nuestros casos de estudio: Garabí-Panambí e Inambari.

Por otro lado, otra empresa que se involucró en estos casos que seleccionamos para llevar adelante nuestro análisis, fue Eletrobras, cuyo proceso de transnacionalización se llevó hacia finales de la década del 2000. En este proceso, la IIRSA ocupó un papel clave, dado que, al ser ésta la principal compañía de electricidad de Sudamérica, se vio involucrada en la operación y desarrollo de muchas de las obras a realizarse.

De esta forma, llegamos a la tercera escala de nuestro análisis, la cual está dada por el lugar que posee la energía en el capitalismo global, en la IIRSA y en el modelo de desarrollo brasileño, analizados a partir del intento de construcción de las represas hidroeléctricas que son nuestro caso de estudio. En este marco, la energía se ha transformado en un motor clave para sostener el desarrollo industrial y mantener en actividad los flujos de producción.

Dados los niveles de crecimiento alcanzados por Brasil durante la primera década del nuevo siglo, asegurarse un potencial energético que le permitiera sostener su desarrollo económico y productivo se transformó en un factor fundamental. Por ello, el gobierno brasileño buscó favorecer algunos proyectos, a desarrollar en la órbita de la IIRSA, que fortalecieran su política de desarrollo energético nacional, valiéndose de los recursos de la región para abastecerse de energía, en estrecha vinculación con su política de desarrollo nacional y de expansión hacia la región sudamericana.

Por un lado, en el marco de la IIRSA, se impulsó un proyecto binacional de integración energética entre Brasil y Perú. En él, se planteó la construcción de seis centrales hidroeléctricas en territorio peruano desarrolladas por compañías de ingeniería de capitales brasileños, que involucraban a Eletrobras y cuyo financiamiento estaría dado por parte del BNDES. El objetivo central de este acuerdo era la definición de las condiciones para la venta de la electricidad producida al mercado peruano y al brasileño, y las concesiones –a empresas brasileñas- para la operación de las centrales por un plazo de 30 años.

El interés brasileño detrás del acuerdo energético estaba centrado principalmente en tres puntos. Por un lado, las ganancias que implicaría la construcción y operación de las centrales hidroeléctricas para empresas de bandera nacional. Por otro lado, el incremento del abastecimiento energético para sostener el desarrollo industrial. Por último, para este aprovisionamiento energético, Brasil se aseguró el establecimiento de precios fijos por un período de 30 años.

Inambari fue la primera hidroeléctrica con la que se definió avanzar por dos motivos. En primer lugar, por la necesidad de un reforzamiento hídrico para las represas que se encuentran ubicadas en la Amazonía brasileña. En segundo lugar, porque esta represa sería el punto de confluencia de las líneas de trasmisión del resto de las centrales y, desde allí, se conectaría con las líneas de transmisión energética brasileñas.

El desarrollo de Inambari estaría ligado a OAS, Eletrobras y su subsidiaria Furnas, sin contar con ninguna empresa peruana en el desarrollo y la operación. De esta forma, vemos claramente cómo operó la estrategia subimperialista de Brasil, dado que logró establecer una división regional del trabajo, en este caso en Perú, a escala de sus intereses y de los de su burguesía interna.

A diferencia del caso de Inambari, en el proyecto de Garabí-Panambí la estrategia subimperialista brasileña se enfrentó a algunas limitaciones. Esto se dio como resultado no sólo de la relación histórica existente entre Brasil y Argentina, sino también de que la correlación de fuerzas entre estos países no es la misma que en el vínculo entre Brasil y Perú. Esta situación está vinculada a que, si bien Argentina no alcanzó una composición orgánica media en la escala mundial de los aparatos productivos nacionales, sí se configuró como un país de importancia en la escala regional y cuenta con algunas empresas que, a pesar de no tener el mismo nivel de transnacionalización que las brasileñas, cuentan con un importante peso relativo.

En este marco, Argentina logró la incorporación en el proyecto Garabí-Panambí de EBISA y de algunas de sus grandes consultoras de ingeniería y ambientales. A su vez, el financiamiento partiría del BNDES, la CAF y el BID.

Sin embargo, a pesar del avance de la estrategia subimperial de Brasil y del impulso a determinadas obras, estos proyectos de infraestructura no avanzaron sin resistencias socioterritoriales, por lo que tuvieron que enfrentarse a conflictividades en múltiples territorios. Aquí se introduce la cuarta escala de nuestro análisis, que busca recuperar los

conflictos territoriales que surgieron en las zonas donde se emplazaría Inambari y Garabí-Panambí.

Estos conflictos estuvieron ligados al uso y apropiación del territorio, es decir, las respuestas sociales y comunitarias ante el avance de la territorialidad capitalista por sobre estos espacios geográficos. El desarrollo de represas hidroeléctricas de embalse, dados los niveles de inundación que generan, implica el desplazamiento y la desterritorialización de comunidades, destruyendo, a su vez, economías regionales, modos de subsistencia y reproducción de la vida, lazos comunitarios y espacialidades allí existentes.

En el caso de Garabí-Panambí, tanto en la provincia de Misiones, como en Río Grande do Sul, existía una genealogía de lucha ligada al avance de represas hidroeléctricas, lo cual determinó que la resistencia se aglutinara rápidamente, llevando adelante una lucha conjunta entre la población emplazada a ambas orillas del río Uruguay. En cambio, en el caso de Inambari, al no existir una central de embalse en la región, no se conocían los efectos que esta generaría, por lo cual el primer tiempo del conflicto estuvo ligado a informar y concientizar a la población en torno a sus impactos e implicancias.

A su vez, las resistencias que se tejieron en ambos territorios buscaron llevar sus críticas y visiones más allá del propio proyecto hidroeléctrico. En el caso de Inambari, uno de los cuestionamientos principales estuvo puesto en la estrategia subimperialista desplegada por el Estado brasileño, la cual tenía la intención de favorecer su política de desarrollo energético y la acumulación de sus grandes empresas, avasallando así los intereses peruanos. En cambio, en el caso de Garabí-Panambí, la lucha se llevó adelante poniendo en el centro del debate el proyecto de desarrollo e integración regional impulsado por la IIRSA y por los gobiernos nacionales de ambos países, entendiendo que la resistencia tenía que realizarse de forma conjunta y en conexión con otras obras de la IIRSA.

Si bien las consignas no tenían la misma orientación, los repertorios de acción colectiva buscaron evidenciar la falta de licencia social en los espacios públicos. En el caso de la Mesa Provincial No a las represas, el eje estuvo puesto en exigir la realización de una consulta popular para determinar el futuro del proyecto, y plantear el descreimiento de los argumentos esgrimidos a favor del avance del proyecto. En el caso de Inambari, el foco se centró en dar cuenta que las poblaciones no estaban dispuestas a ser desplazadas de

sus territorios en beneficio de los intereses brasileños, ni de perder la vía de conexión existente con la región de la Amazonía peruana, es decir, la carretera Interoceánica.

De esta forma, en este trabajo de sistematización y análisis de las genealogías de lucha y de los repertorios de acción colectiva implementados por los movimientos socioterritoriales que se involucraron en la lucha contra estos proyectos, pudimos ver cómo se activaron territorialidades de resistencia que enfrentaron el avance de la territorialización capitalista y de la estrategia del subimperialismo brasileño. Estos movimientos buscaron poner un freno a las transformaciones territoriales ligadas a la traducción de las cadenas globales de valor en los espacios geográficos donde desarrollan y reproducen sus vidas.

Para finalizar, en el proceso de realización de la tesis se abrieron interrogantes que no fueron saldados en el marco de este trabajo, por el enfoque propio de la misma, pero los cuales pueden ser indagados y profundizados en próximas investigaciones. Uno de ellos, es analizar lo ocurrido con la integración regional y, específicamente, en el plano de la infraestructura frente al contexto de reconfiguración política que se dio durante los años posteriores a nuestro recorte temporal. En este marco se abren dos aristas posibles. Por un lado, pensar cómo continuaron los proyectos de IIRSA tras la partida de seis naciones de la UNASUR, sobre todo teniendo en cuenta que algunos proyectos continuaron su curso y otros permanecen aún en las agendas. Por otro lado, a partir de la irrupción -con aún mayor fuerza- de China en el subcontinente, las inversiones que este país realizó en materia de infraestructura, y la adhesión al proyecto de la Nueva ruta de la seda por parte de algunos países sudamericanos.

Otra de las líneas que podemos continuar es pensar cómo se reconfiguró la política subimperialista de Brasil en estos años, tras el cambio de orientación política. Con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno, si bien se dio nuevamente un alineamiento con Estados Unidos, Brasil no dejó de participar en instancias como el bloque BRICS y continuó manteniendo su vínculo con China.

Por último, podríamos indagar en cómo se articulan los conflictos sociales y los movimientos territoriales ante las nuevas avanzadas de la territorialización capitalista en el actual contexto. A su vez, podemos analizar las resistencias presentes en torno a algunas obras de infraestructura de IIRSA que aún permanecen activas, muchas de las cuales, en los discursos oficiales, no se ligan a esta Iniciativa.

Para finalizar, reflexionando en torno a los conocimientos situados y la investigación militante (que desarrollamos en el marco del capítulo 1 *Encuadre teórico-metodológico*), nos interesa pensar en los modos en los que los planteos realizados en el marco de la tesis pueden constituir un aporte para los movimientos socioterritoriales que se enfrentan al avance de estos proyectos de infraestructura. Esperamos que el análisis llevado adelante en este trabajo, articulando las múltiples escalas y la dimensión de estas obras pensadas "desde arriba" y "desde abajo", puedan nutrir las resistencias y sean un insumo para aquellas personas que resisten ante las avanzadas de la territorialización capitalista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Acselrad, H. (2004). *A Re-volta da Ecologia Política. Conflitos Ambientais no Brasil*. Rio de Janeiro, Brasil: Relume-Dumará.

Aguirre Sala, J.F. y Infante Bonfiglio, J.M. (2018). Vanguardia, vigencia y viabilidad de la accountability societal concebida por Guillermo O'Donnell. *Revista IUS*, 12 (42), 131-160.

Álvarez, A. (2018). *La Iniciativa para la Integración en Infraestructura Regional Suramericana. Estudio del Eje Hidrovía Paraguay-Paraná a partir del proyecto de reconversión del puerto de Santa Fe* (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Álvarez, A. (2019). La transformación de los macrosistemas de transporte en América del Sur. Aportes para el estudio del Corredor Bioceánico Central. *Cardinalis*, 12, 10-32.

Álvarez Mullally, M.; Arelovich, L.; Cabrera, F. y di Risio, D. (2017). *Megaproyecto Vaca Muerta. Informe de externalidades*. Buenos Aires, Argentina: Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur.

Alves do Carmo, C. (2012). O projeto integracionista bolivariano de Hugo Chávez e o pragmatismo da política externa Brasileira. En A. Serbin, L. Martínez y H. Ramanzini Júnior (Coords.) *El regionalismo "post–liberal" en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012* (pp. 301-320). Buenos Aires, Argentina: CRIES.

Amin, S. (2004). Geopolítica del imperialismo contemporáneo. En A. Hart Dávalos (Ed.) *Nueva hegemonía mundial. Alternativas de cambio y movimientos sociales*. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

Amin, S. (2013). Transnational capitalism or collective imperialism. *Pambazuka News*. Recuperado de https://www.pambazuka.org/global-south/transnational-capitalism-or-collective-imperialism

Amin, S. (2018). *A implosão do capitalismo contemporáneo. Outono do capitalismo, primavera dos povos?*. Río de Janeiro, Brasil: UFRJ.

Amorim Neto, O. y Malamud, A. (2015). What Determines Foreign Policy in Latin America? Systemic versus Domestic Factors in Argentina, Brazil, and Mexico, 1946–2008. *Latin American Politics and Society*, 57 (4), 1-27.

Andrade, P. (2010). Brasil: elementos básicos para entender a la superpotencia Sudamericana. *Comentario Internacional*, 10, 49-61.

Arroyo, M. (1999). Notas sobre los cambios de final de siglo XX (A propósito de la globalización y su "irreversibilidad"). *Revista Cátedra*, 2.

Astarita, R. (2010). *Economía política de la dependencia y el subdesarrollo*. Bernal, Argentina: Universidad Nacional de Quilmes.

Auyero, J. (2002). Fuego y barricadas. Retratos de la beligerancia popular en la Argentina democrática. *Nueva Sociedad*, 179, 144-162.

Azuela, A. y Mussetta, P. (2015). Algo más que el ambiente. Conflictos sociales en tres áreas naturales protegidas de México. *Revista de Ciencias Sociales. Segunda Época*, 1 (16), 191-206.

Bachiller Cabria, J.V. (2014). Multilatinas y estrategias de desarrollo. El papel del estado en la internacionalización de los grupos empresariales en Brasil y México. *Estudos internacionais*, 2 (2), 343-364.

Bambirra, V. (1978). *Teoría de la dependencia: una anticrítica*. México D.F., México: Ediciones Era.

Bambirra, V. (1999). *El capitalismo dependiente latinoamericano*. México D.F., México: Siglo XXI.

Barreda, A. (2005). Geopolítica, recursos estratégicos y multinacionales. *Revista Pueblos*. Recuperado de http://www.revistapueblos.org/old/spip.php?article311

Barrenengoa, A. (2017). El proceso de integración latinoamericana desde la experiencia de la UNASUR. *Revista Realidad Económica*, 305.

Barrenengoa, A. (2019). *"¿Mudar para valer?" Estado y clases dominantes en los entramados de la integración suramericana. Brasil en el COSIPLAN-UNASUR (2003- 2011)* (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Barrenengoa, A. (2019). La relación Estado-empresas durante los gobiernos de Lula da Silva, 2003-2011. *Ciclos*, XXVII (55), 185-210.

Batista Jr., P.N. (2005). *O Brasil e a economia internacional. Recuperação e defesa da economia nacional*. San Pablo, Brasil: Elsevier.

Beigel, F. (2006). Vida, muerte y resurrección de las `teorías de la dependencia´. En F. Beigel, A. Falero, J.G. Gandarilla Salgado, N. Kohan, L. Landa Vásquez, C.E. Martins, C. Mahón, C. Rodríguez Enríquez y M. Schorr *Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano* (pp. 287-326). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Berg-Schlosser, D. (2004). The quality of democracies in Europe as measured by current indicators of democratization and good governance. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 20, 1, 28-55.

Bernal, C. (2010). *Metodología de la Investigación*. Bogotá, Colombia: Pearson.

Bernal-Meza, R. (2009). El Regionalismo: Conceptos, paradigmas y procesos en el Sistema Mundial Contemporáneo. *Revista Aportes para la Integración Latinoamericana*, 21, 1-29.

Bernal-Meza, R. (2013). Modelos o esquemas de integración y cooperación en curso en América Latina (UNASUR, Alianza del Pacífico, ALBA, CELAC): una mirada panorámica'. *Ibero Online*, 12. Recuperado de http://209.177.156.169/libreria_cm/archivos/pdf_1393.pdf

Bernal-Meza, R. y Masera, G. (2008). El retorno del regionalismo. Aspectos políticos y económicos en los procesos de integración internacional. *Revista Aportes para la Integración Latinoamericana*, 18, 1-18.

Berringer, T. (2014). *Bloco no poder e política externa nos governos FHC e Lula* (Tesis de Doctorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.

Berringer, T. (2015). *A burguesía brasileira e a política externa nos governos FHC e Lula.* Curitiba, Brasil: Appris.

Bertinat, P. (2016). *Transición energética justa. Pensando la democratización energética*. Friedrich Ebert Stiftung.

Bertinat, P.; Chemes, J. y Moya, L. (2012). *Energía y sociedad. Módulo 1: ¿Qué es la energía?*. Rosario, Argentina: Taller Ecologista y Fundación Heinrich Böll.

Betancourt, M. (2014). Geopolítica de la integración suramericana vía IIRSA: Conflictos y desafíos en la Amazonía. En *Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território* (p. 445-457). Rio de Janeiro, Brasil: REBRAGEO.

Betancourt, M. (2021). Colonialidad territorial, relaciones sociedades-naturaleza y violencias a escala global-local: desafíos para la paz territorial en Colombia (y el Mundo). En P. López y M. Betancourt (Coords.) *Conflictos territoriales y territorialidades en disputa: Re-existencias y horizontes societales frente al capital en América Latina* (pp. 145-173). Buenos Aires, Argentina: CLACSO

Bieler, A. y Morton, A.D. (2013). Hegemonía, orden mundial y cambio histórico: siguiendo el camino de la teoría crítica. Perspectivas neogramscianas en las relaciones internacionales. En J. Kan y R. Pascual (Comps.) *Integrados (?) Debates sobre las relaciones*

internacionales y la integración regional latinoamericana y europea (pp. 23-42). Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Boito Jr., A. (2006). A burguesia no Governo Lula. En. E.M. Basualdo y E. Arceo (Comps.) *Neoliberalismo y sectores dominantes. Tendencias globales y experiencias nacionales* (pp. 237-263). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Bond, P. (2005). El imperio norteamericano y el subimperialismo sudafricano" En L. Panitch y C. Leys (Eds.) *Socialist Register 2005: El imperio recargado* (pp. 251-276). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Bond, P. (2015). BRICS and the sub-imperial location. En P. Bond y A. García (Eds.) BRICS. *An Anti-Capitalist Critique* (pp. 15-26). Londres, Inglaterra: Pluto Press.

Bonefeld, W. (1992). La reformulación de la teoría del estado. En E. Lucita, R. Pedace, A.J. Plá y C. Suárez (Eds.) *Los estudios sobre el estado y la reestructuración capitalista* (pp. 51-96). Buenos Aires, Argentina: Tierra del Fuego.

Bonnet, A. (2015). ¿Qué es el estado? La forma – estado revisitada. En A. García Vela, J. Holloway y S. Tischler (Eds.) *Antagonismo y forma social*. México.

Borón, A. (1998). Los nuevos leviatanes y la polis democrática. En A. Borón *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo* (pp. 68-88). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Bravo Orellana, S. (2013). *Carretera Interoceánica Sur del Perú. Retos e innovación*. Caracas, Venezuela: CAF.

Bresser-Pereira, L.C. (2007). Burocracia pública e classes dirigentes no Brasil. Revista Sociología Política, 28, 9-30.

Bresser-Pereira, L.C. (2017). La nueva teoría desarrollista: una síntesis. *ECONOMIAunam*, 14 (40), 48-66.

Briceño Ruiz, J. (2014a). Del regionalismo abierto al regionalismo poshegemónico en América Latina. En W. Soto Acosta (Ed.) *Política Internacional e Integración Regional Comparada en América Latina* (pp. 23-33). San José, Costa Rica: FLACSO.

Briceño Ruiz, J. (2014b). O regionalismo latino-americano depois do regionalismo aberto: novos eixos, novas estratégias, modelos diversos. En C. Alves do Carmo, E. Winand, I.R. Barnabé y L. Miranda Pinheiro (eds.) *Relações Internacionais Olhares cruzados* (pp. 193-238). Brasilia, Brasil: Fundação Alexandre de Gusmão.

Bringel, B. y Falero, A. (2016). Movimientos sociales, gobiernos progresistas y Estado en América Latina: transiciones, conflictos y mediaciones. *Caderno CRH*, 29 (3), 27-45.

Bueno, F. y Seabra, R. (2010). A teoria do subimperialismo brasileiro: notas para uma (re)discussão contemporânea. *Caderno de debates. Rumo à IV assembleia nacional "Carlos Marighella"*. México D.F., México: Consulta popular.

Burnham, P. (2013). Hegemonía neogramsciana y el orden internacional. En J. Kan y R. Pascual (Comps.) *Integrados (?) Debates sobre las relaciones internacionales y la integración regional latinoamericana y europea* (pp. 71-87). Buenos Aires, Argentina: Imago Mundi.

Caballero Santos, S. (2011). Brasil y la región: una potencia emergente y la integración regional sudamericana. Revista Brasileira de Política Internacional, 54 (2), 158-172.

Cabral de Vasconcellos, P.M. (2014). As Construtoras Brasileiras e o Processo de Integração Regional na América do Sul. *Polis, Revista Latinoamericana*, 13 (39), 151-172.

Çağlı, E. (2009). On Sub-imperialism: Regional Power Turkey. *Marksist Tutum*. Recuperado de http://en.marksist.net/sites/mtw7/files/pdf_zip_docs/On%20Sub-imperialism-%20Regional%20Power%20Turkey_brochure.pdf

Calcagno, D.L. y Masera, G.A. (2012). Paradigmas de Estado en Brasil según Amado Cervo. Una perspectiva desde el Sur Global. *Estudios Sociales Contemporáneos*, 7 (8), 161-182.

Campos, Pedro H.P. (2010). A transnacionalização das empreiteiras brasileiras e o pensamento de Ruy Mauro Marini. *III Conferência Internacional em História Econômica* y *V Encontro de Pós-Graduação em História Econômica*. Conferencia realizada en Brasilia, Brasil.

Canal Alata, R.V. (2017). *El derecho ambiental en el sistema democrática peruano. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Inambari* (Tesis doctoral). Universidad del País Vasco, Vizcaya, España.

Cardoso, F.H. (1975). *Autoritarismo e democratização*. Río de Janeiro, Brasil: Paz e Terra.

Carrizo, S.C., Forget, M. y Velut, S. (2009). Transformaciones en las redes de electricidad en Argentina. Nuevos actores, nuevas complejidades. *III Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales*. Jornadas llevadas adelante en Mendoza, Argentina.

Carrizo, S.C. y Brunstein, F. (2010). La represa de Yacyretá en el desarrollo energético y territorial. *Ci. & Tróp.*, 34 (2), 389-406.

Castel, R. (2001). Presente y genealogía del presente: Pensar el cambio de una forma no evolucionista. *Archipiélago: Cuadernos de crítica de la cultura*, 47, 67-75.

Castells, M. (1999). *Globalización, Identidad y Estado en América* Latina. Santiago de Chile, Chile: PNUD.

Ceceña, A.E.; Aguilar, P. y Motto, C. (2007). *Territorialidad de la dominación. Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)*. Buenos Aires, Argentina: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

Cervo, A.L. (2001). *Relações internacionais da América Latina. Velhos e novos paradigmas*. Brasilia, Brasil: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais y FUNAG.

Cervo, A.L. (2012). O Brasil na atual ordem mundial. *Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais*, 1 (2), 37-59.

Chapoy, A. (2012). Las empresas multinacionales y América Latina. *Clásicos*, 11, 116-149.

Christensen, S.F. (2012). El impacto de China sobre el desarrollo económico de Brasil y su estrategia de desarrollo. En R. Bernal-Meza y S.V. Quintanar (Eds.) *Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa, China* (pp. 345-369). Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.

Clemente, D. (2017). *Las estrategias IIRSA-COSIPLAN y "Campeones Nacionales" en el proyecto regional de Brasil: la construcción de una hegemonía (2002-2016)* (Tesis de Maestría). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.

Codato, A. (2008). *Elites e instituições no Brasil: uma análise contextual do Estado Novo* (Tesis de Doctorado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.

Codato, A.; Perissinotto, R.; Bolognesi, B.; Domingos Costa, L.; Massimo, L. y Costa, P. (2018). La sociología política de las élites políticas y estatales de Brasil: un balance de cincuenta años de estudios. En G. Bommaro y M. Gené (Comps.) *Las élites políticas en el Sur: un estado de la cuestión de los estudios sobre la Argentina, Brasil y Chile* (pp. 21-89). Los Polvorines, Argentina: Ediciones UNGS.

Coleti, J.; Gava, G. y Oliveira, A. (2015). Programa de Aceleração do Crescimento (PAC): análise aplicada em uma perspectiva keynesiana. *Espacios*, 36.

Conte Cornetet, J.M. (2014). La política externa de Dilma Rousseff: contención en la continuidad. *Revista Conjuntura Austral*, 5 (24), 111-150.

Cordeiro Pires, M. (2015). Notas Sobre A Parceria Estratégica Brasil – China. En A. Bonilla Soria P. Milet García (Eds.) *China en América Latina y el Caribe: Escenarios estratégicos Subregionales* (pp. 249-274). San José, Costa Rica: FLACSO y CAF.

Cornejo, R. y Navarro García, A. (2010). China y América Latina: recursos, mercados y poder global. *Nueva Sociedad*, 228, 79-99.

Costa, E.; Guedes, J.P.; Baruco, G.; Saludjian, A.; Balanco, P.; Schonerwald, C. y Nogueira, I. (2016). A economia política dos governos Dilma: acumulação, bloco de poder e crise. *Texto para discussão 004/2016*.

Cox, R. (1992). Global perestroika. *The socialist register: New World Order?* (pp. 26-43). Londres, Inglaterra: Merlin Press.

Cox, R. (1993). Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: Más allá de la teoría de las Relaciones Internacionales. En A. Morales (Comp.) *Poder y orden mundial* (pp. 119-196). San José, Costa Rica: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Cox, R. (1996). Gramsci, hegemony, and international relations: an essay in method (1983). En R. Cox y T.J. Sinclair *Approaches to world order* (pp. 124-143). Cambridge, Inglaterra: Cambridge University Press.

Cruz, A.; Reyes, M.J.; y Cornejo, M. (2012). Conocimiento situado y el problema de la subjetividad del investigador/a. *Cinta moebio*, 45, 253-274.

Cueva, A. (1979). El desarrollo del capitalismo en América Latina y la cuestión del Estado. *Ciclo Capitalismo e Imperialismo en América Latina*. Sección Colombia-Ecuador.

Cueva, A. (2008). Problemas y perspectivas de la teoría de la dependencia. En A. Cueva *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana* (pp. 83-115). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Da Motta, P. y Ríos, S. (2007). O Regionalismo pós-liberal na América do Sul: origens, iniciativas e dilemas. *Serie comercio internacional*, 62, 5-48.

Dargent, E. y Muñoz, P. (2012). Perú 2011: Continuidades y Cambios en la Política sin Partidos. *Revista de Ciencia Política*, 32 (1), 245-268.

DAR. (2013). *El otro peritaje. Análisis al EIA de Inambari y a la Gestión Ambiental*. Lima, Perú: DAR.

DAR, SER y CARE. (2011). *El acuerdo energético Perú-Brasil. Los casos de Inambari y Pakitzapango*. Lima, Perú: DAR, SER y CARE.

Dauvergne, P. y Farias, D. (2012). The Rise of Brazil as a Global Development Power. *Third World Quarterly*, 33 (5), 903–917.

De Cordier, B. (2016). The Interaction Between Pakistan and the Countries of the Gulf Cooperation Council: 'Sub-Imperialism by Complementarity'?". *Journal of Conflict Transformation & Security*, 5 (1), 7-29.

De Echave, J. (2016). La minería ilegal en Perú. Entre la informalidad y el delito. *Nueva Sociedad*, 263, 131-144.

Delgado Caicedo, J. y Sáenz Peñas, A. (2010). Cooperación sur-sur: nuevas estrategias para repensar la dependencia. *Revista Latinoamericana Surmanía*, 4, 22-36.

de Medeiros, C.A. (1986). Industrialización y desarrollo en el Brasil. Perspectivas y ajuste. En E. Torres Rivas y E. Oeutscher (Eds.) *Industrialización en América Latina. Crisis y perspectivas* (pp. 108-144). San José, Costa Rica: FLACSO y Fundación Friedrich Ebert.

de Moura Fernandes, F. (2007). *De Golpe a Golpe: política exterior e regime político no Brasil e no Chile (1964-1973)* (Tesis de Maestría). Universidade de Brasilia, Brasilia, Brasil.

de Oliveira Ribas, M. (2006). A "cooperação necessária" como idéia-força na política exterior do Brasil (1958-2005) (Tesis de Maestría). Universidade de Brasilia, Brasilia, Brasil.

de Queiroz, R.; Grassi, P.; Lazzare, K.; Koppe, E.; Rampon Tartas, B.; y da Cunha Kemerich, P.D. (2013). Geração de energia elétrica através da energia hidráulica e seus impactos ambientais. *Revista Eletronica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*,13 (13), 2774- 2784.

de Souza Telles, H. (2008). Estado y representación política en Brasil. *Etat et Nation II*, 16.

Dias Carcanholo, M. y Saludjian, A. (2013). Integración latinoamericana, dependencia a China y subimperialismo brasileño en América Latina. *Mundo Siglo XXI*, 8 (29), 43-62.

Diniz, E. (2010). Empresariado industrial, representação de interesses e ação política: trajetória histórica e novas configurações. *Política & Sociedade*, 9 (17), 101-139.

Dos Santos Neto, M.J. (2016). Hidropolítica e hegemonía na bacia do pata: o caso do complexo hidrelétrico binacional Garabí-Panambí. *3º Seminário de Relações Internacionais da ABRI*. Seminario llevado a cabo en Florianópolis, Brasil.

Dos Santos, T. (1986). *Imperialismo y dependencia*. México D.F., México: Ediciones Era.

Dos Santos, T. (1998a). La teoría de la dependencia un balance histórico y teórico. En F. López Segrera (Ed.) *Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio Dos*

Santos. Caracas, Venezuela: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Dos Santos, T. (1998b). La teoría de la dependencia y el sistema mundial. *Herramienta*, 8. Recuperado de https://www.herramienta.com.ar/articulo.php?id=927

Dourojeanni, M.J. (2006). Estudio de caso sobre la carretera Interoceánica en la amazonía sur del Perú. Lima, Perú: Conservación Internacional, DAR, Racimos de Ungurahui y Bank Information Center.

Dupuy, H.A.; Morgante, M. y Margueliche, J.C. (2014). La República de Sudáfrica: los desafíos de la globalización y del desarrollo africano. *Cardinalis. Revista del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba*, 2 (3).

Durand, F. (2019). *Odebrecht: la empresa que capturaba gobiernos*. Lima, Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú y Oxfam.

Ely, R. (1987). La formulación e instrumentación de la política exterior del Brasil 1964-1985. *Secuencia*, 7, 157-172.

Fajnzylber, F. (1990). *Industrialización en América Latina: de la "caja negra" al "casillero vacío". Comparación de patrones contemporáneos de industri*alización. Santiago de Chile: CEPAL.

Faoro, R. (2001). *Os donos do poder. Formaçao do patronato político brasileiro*. Porto Alegre, Brasil: Globo.

Féliz, M. (2011). ¿Neo-desarrollismo: más allá del neo-liberalismo? Desarrollo y crisis capitalista en Argentina desde los 90. *Theomai*, 23, 72-86.

Féliz, M. (2013). El neodesarrollismo y la trampa de la renta extraordinaria. El caso de Argentina, 2002-2012. En AA.VV. *Bienes comunes, saqueo y resistencias* (pp. 113-129). Montevideo, Uruguay: Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo y Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la República.

Féliz, M. y Melón, D.E. (2018). El PT y la razón sub-imperialista. El capital brasileño y la integración suramericana en los 2000. *Onteaiken*, 26, 73-87.

Fernandes, B.M. (2005). Movimentos socioterritoriais e movimentos socioespaciais: contribução teórica para uma leitura geográfica dos movimentos sociais. *Revista Nera*, 8 (6), 14-34.

Fernandes, B.M. (2008). Sobre a tipologia de territórios. En M.A. Saquet y E. Savério Sposito (Orgs.) *Territórios e territorialidades: teorias, processos e conflitos* (pp. 197-215). San Pablo, Brasil: Expressão Popular.

Fernandes, B.M. (2012). Disputas territoriales entre el campesinado y la agroindustria en Brasil. *Cuadernos del Cendes*, 29 (8), 1-22.

Fernández Durán, R. y González Reyes, L. (2018). *En la espiral de la energía. Volúmen I: Historia de la humanidad desde el papel de la energía (pero no solo)*. Madrid, España: Libros en Acción.

Figueiredo Barros do Prado, D. y Miyamoto, S. A. (2010). A política externa do governo José Sarney (1985-1990). *Revista de Economia & Relações Internacionais*, 8 (16), 67-80.

FOBOMADE y CGIAB. (2007). *El norte amazónico de Bolivia y el complejo del río Madera*. La Paz, Bolivia: FOBOMADE Y CGIAB.

Fonseca, L.L. (2017). *O complexo hidrelétrico Garabí-Panambí (RS): A inserção do COSIPLAN-IIRSA em territorio histórico missioneiro* (Tesis de Maestría). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.

Fonseca, L.L. y Rückert, A.A. (2018). IIRSA-COSIPLAN and the Garabí-Panambí hydroelectric complex in the historical missionary territory. En A.P. Cargnin, A.A. Rückert y B. de Oliveira Lemos (Eds.) *Territorial planning and La Plata Basin borders* (pp. 192-208). Porto Alegre, Brasil: Editora Letra1.

Fontes, V. (2010). *O Brasil e o capital-imperialismo. Teoria e histór*ia. Río de Janeiro, Brasil: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio y Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Fortes, A. y French, J. (2012). A 'era Lula', as eleições presidenciais de 2010 e os desafios do pós-neoliberalismo. *Tempo Social*, 24 (1).

Foucault, M. (2008). *Segurança, Território e População*. San Pablo, Brasil: Martins Fontes.

Foucault, M. (2003). *Microfísica del poder*. México D.F., México: Octaedro.

Fowks, J. (2017). Perú: negocios ilegales y promesas incumplidas. El caso de la Carretera Interoceánica Sur. *Nueva Sociedad*.

Franchi, T.; Lopes, R.H. y Viana Cavalcante, E. (2016). Ejes de Integración Nacional y Regional: El caso Amazónico. *Revista Estudios en Seguridad y Defensa*, 11(21), 5-12.

Franco Cerqueira, D. (2014). Brasil en el proceso de integración con América del Sur: una política destinada a consolidar la lógica de acumulación del capital. *XIV Jornadas de Economía Crítica.* Jornadas llevadas a cabo en Valladolid, España.

Frank, A.G. (1967). El desarrollo del subdesarrollo. *Pensamiento Crítico*, 7, 159-172.
Fundación M'Biguá. (2009). *IIRSA. El doble rostro de los planes de infraestructura*. Paraná, Argentina: Fundación M'Biguá.
Galindo Hernández, C. (2007). La teoría del Estado en la era de la globalización: algunas aproximaciones y problemas pendientes. En G. Hoyos Vásquez (Comp.) *Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía* (pp. 157-178). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
Ghiotto, L. (2005). El ALCA, un fruto de la relación capital-trabajo. En J. Estay y G. Sánchez Daza (Comps.) *El ALCA y sus peligros para América Latina* (pp. 167-196). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.
Giacalone, R. (2006). La Comunidad Sudamericana de Naciones: ¿una alianza entre izquierda y empresarios?. *Nueva Sociedad*, 202, 74-86.
Giusiano, J.E. (2013). IBSA: ¿Una alternativa para la defensa de los intereses del Sur en la OMC?. En L.L. Bogado Bordazar y L.M. Bono (Coords.) *Anuario en Relaciones Internacionales/2013*. La Plata, Argentina: Instituto de Relaciones Internacionales.
Gomes Saraiva, M. (2011). A América do Sul na política externa do governo Lula: ideias e mudanças. En L.P. Adriano Freixo (Org.). *A política externa brasileira na era Lula: Um balanço* (pp. 119-144). Rio de Janeiro, Brasil: Apicuri.
Gomes Saraiva, M. (2012). La política exterior de Dilma Rousseff hacia América del Sur: Continuidad en estrategias y ajustes en prioridades. En A. Serbin, L. Martínez y H. Ramanzini Júnior (Coords.) *El regionalismo "post–liberal" en América Latina y el Caribe: Nuevos actores, nuevos temas, nuevos desafíos. Anuario de la Integración Regional de América Latina y el Gran Caribe 2012* (pp. 289-300). Buenos Aires, Argentina: CRIES.
González, E.; Sáez, K. y Lago, J. (2008). *Atlas de la energía en América Latina y el Caribe. Las inversiones de las multinacionales españolas y sus impactos económicos, sociales y ambientales*. Madrid, España: Observatorio de Multinacionales en América Latina y Asociación Paz con Dignidad.
Gudynas, E. (2006). Los fantasmas de la integración regional. *Revista del Sur*, 166, 3-25.
Guillén Balbín, M.C. (2015). *Impactos de las obras de infraestructura de la IIRSA: El caso de la Carretera Interoceánica en la Amazonía Sur del Perú* (Trabajo final de curso). Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Foz de Iguazú, Brasil.
Haesbaert, R. (2004). *O mito da desterritorializaçao: do "fim dos territórios" á multiterritiralidade*. Río de Janeiro, Brasil: Bertrand.

Haesbaert, R. (2011). *El mito de la desterritorialización: del "fin de los territorios" a la multiterritorialidad*. México D.F., México: Siglo XXI.

Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. *Cultura y representaciones sociales*, 8, 9-42.

Haesbaert, R. (2016). De la multiterritorialidad a los nuevos muros: paradojas contemporáneas de la desterritorialización. *Locale*, 1, 120-134.

Hale, C. (2006). Activist Research v. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology. *Cultural Anthropology*, 21 (1), 96-120.

Halvorsen, S. (2020). El Territorio en disputa: estrategias políticas y movimientos socioterritoriales. *Punto Sur*, 3, 131-152.

Halvorsen, S., Fernandes, B.M. y Torres, F. (2019). Mobilizing Territory: Socioterritorial Movements in Comparative Perspective. *Annals of the American Association of Geographers*, 109: 5.

Halvorsen, S., Fernandes, B.M. y Torres, F. (2021). Movimientos socioterritoriales. Casos de América Latina y Europa. *Geograficando*, 17 (2).

Haraway, D. (1997). *Modest_Witness@Second_Millennium.FemaleMan_Meets_OncoMouse: Feminism and Technoscience*. Nueva York, Estados Unidos: Routledge.

Harvey, D. (1998). *La condición de la posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio cultural*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.

Harvey, D. (2004). El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión. En L. Panicht y C. Leys (Eds.) *Socialist register 2004* (pp. 99-129). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Herrera, J. (2017). *La investigación cualitativa*.

Herrera Santana, David. (2019). Geopolítica de la fragmentación y poder infraestructural. El Proyecto One Belt, One Road y América Latina. *Geopolítica(s)*, 10 (1), 41-68.

Hiratuka, C. (2018). Chinese infrastructure projects in Brazil: two case studies. En E. Dussel Peters, A.C. Armony y S. Cui (Eds.) *Building development for a new era. China's infrastructure projects in Latin America and the Caribbean* (pp. 122-143). México D.F., México: Asian Studies Center, Center for International Studies, University of Pittsburgh, y Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China.

Hirsch, J. (1978). The state apparatus and social reproduction: elements of a theory of the bourgeois state. En J. Holloway y S. Picciotto (Eds.) *State and capital. A marxist debate* (pp. 57-107). Londres, Inglaterra: Edward Arnold.

Hirsch, J. (1995). Interpretaciones de la interrelación entre capital, Estado y mercado mundial desde la teoría de la regulación. En E. Lucita, R. Pedace, A. Plá y C. Suárez (Eds.) *Globalización y Estados-nación. El monetarismo en la crisis actual* (pp. 119-136). Buenos Aires, Argentina: Homo Sapiens Ediciones y Editorial Tierra del Fuego.

Hirsch, J. (1997). ¿Qué es la globalización?. *Cuadernos del Sur*, 24, 9-20.

Hirsch, J. (1999). Globalización del capital y la transformación de los sistemas de Estado: del `Estado de seguridad´ al `Estado nacional competitivo´. *Cuadernos del Sur*, 28, 71-81.

Hirsch, J. (2005). ¿Qué significa Estado? Reflexiones acerca de la Teoría del Estado capitalista. *Revista Sociología Política*, 24, 165-175.

Hirst, M. (1981). La época de Vargas: 1930/1945. Crítica & Utopía. *Latinoamericana de Ciencias Sociales*, 5.

Hirst, M. (2006). Los desafíos de la política sudamericana de Brasil. *Nueva Sociedad*, 205, 131-140.

Holloway, J. (1993). La reforma del Estado: capital global y Estado Nacional. *Perfiles Latinoamericanos*, 1, 7-32.

Hurtado, S. (2016). Investigación y militancia: una propuesta de antropología enraizada. *QueHaceres*, 3, 82-95.

Honty, G. (2006). Energía en Sudamérica: una interconexión que no integra. *Nueva Sociedad*, 204, 119-135.

Jessop, B. (1999a). Desarrollos recientes en la teoría del Estado. Enfoques, problemas y agendas. En R. Jessop *Crisis del Estado de Bienestar. Hacia una nueva teorización del Estado y sus consecuencias sociales* (pp. 99-133). Bogotá, Colombia: Siglo XX.

Jessop, B. (1999b). *The strategic selectivity of the state: reflections on a theme of Poulantzas*. Journal of the Hellenic Diaspora, 25 (1-2), 1-37.

Jessop, B. (2002). *El futuro del Estado capitalista*. Madrid, España: Catarata.

Jessop, B. (2014). *El Estado y el poder. Utopía y Praxis Latinoamericana*, 19 (66), 19-35.

Jessop, B. (2016). *El estado. Pasado, Presente, Futuro*. Madrid, España: Catarata.

Kan, J. (2009). Discutiendo el liderazgo de Brasil en el contexto actual de la integración regional. *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología* y *VIII Jornadas de*

Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Congreso llevado adelante en Buenos Aires, Argentina.

Kan, J. (2010). ¿La región verdeamarelo? Algunas consideraciones sobre el liderazgo regional de Brasil en el contexto actual de la integración latinoamericana. *Contextualizaciones latinoamericanas*, 1 (2).

Kan, J. (2013). *Integrarse desde arriba. La relación entre la clase dominante, los gobiernos y los proyectos de integración regional MERCOSUR y ALCA en la Argentina reciente* (Tesis de Doctorado). Universidad de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Kan, J. (2014). Relaciones internacionales, integración regional y política exterior: elementos para un abordaje desde la teoría crítica y esbozo de análisis del escenario latinoamericano reciente. *Globalización*, 12, 1-13.

Kan, J. (2015). Y los empresarios también. El cuestionamiento al ALCA de las clases dominantes locales durante la reciente reconfiguración política regional. Un análisis de las fracciones industriales de Argentina y Brasil. *e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos*, 13 (52), 34-59.

Kan, J. y Pascual, R. (2011). Integración regional en América Latina y Argentina: ¿Solamente una cuestión de Estados. En A. Bonnet (Comp.) *El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente* (pp. 45-79). Buenos Aires, Argentina: Peña Lillo-Ediciones Continente.

Katz, C. (2006). *El rediseño de América Latina. ALCA, MERCOSUR y ALBA*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Luxemburg.

Katz, C. (2009). América Latina frente a la crisis global [Mensaje en un blog]. *La Haine*. Recuperado de http://www.cadtm.org/IMG/pdf/claudio_K_AMERICA_LATINA_FRENTE_A_LA_CRISIS_GLOBAL_Febrero2009-1.pdf

Katz, C. (2016a). La teoría de la dependencia y el sistema-mundo. *Rebelión*. Recuperado de https://www.rebelion.org/noticia.php?id=217961

Katz, C. (2016b). *Neoliberalismo, Neodesarrollismo, Socialismo*. Buenos Aires, Argentina: Batalla de Ideas.

Katz, C. (2018). *La teoría de la dependencia, cincuenta años después*. Buenos Aires, Argentina: Batalla de Ideas.

Khalil, S. (2013). Brasil y los países en desarrollo entre 1961 y 1969: institucionalización y práctica. *Relaciones Internacionales*, 44, 83-113.

Kimchi, J.; Polivka, B.; y Stevenson, J.S. (1991). Triangulation: Operational Definitions. Metodology Corner. *Rev. Nursing Research*, 40 (6).

Kupfer, D.; Ferraz, J.C. y Carvalho, L. (2009). El largo y sinuoso camino del desarrollo industrial de Brasil. *Boletín Informativo Techint 330*, 45-72.

Kraychete, G. (1995). El "Plan Real" de Brasil y las trampas de las políticas de estabilización de América Latina. *Revista de Fomento Social*, 50, 377-396.

Lasso González, G. (2019). *La disputa de territorios en torno al sistema agroalimentario ecuatoriano. Estrategias de poder y resistencia, procesos de territorialización y desterritorialización* (Tesis de Doctorado). Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España.

Leal Buitrago, F. (2003). La Doctrina de Seguridad Nacional: materialización de la Guerra Fría en América del Sur. *Revista de Estudios Sociales*, 15, 74-87.

Lechini, G. (2008). O Brasil na África ou a África no Brasil? A construção da política africana pelo Itamaraty. *Nueva Sociedad*, 35, 55-71.

Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. *Papers: Revista de Sociología*, 3, 219-229.

Leopoldi, M.A. (1999). Estratégias de ação empresarial em conjunturas de mudança política. En D. Pandolfi (Org.) *Repensando o Estado Novo* (pp. 115-133). Río de Janeiro, Brasil: Fundação Getulio Vargas.

Lins Ribeiro, G. (1985). Proyectos de gran escala: hacia un marco conceptual para el análisis de una forma de producción temporaria. En L.J. Bartolomé (comp.) *Relocalizados: Antropología Social de las Poblaciones Desplazadas* (pp. 23-47). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del IDES.

Luce, M. (2008). La expansión del subimperialismo brasileño (La política de integración del gobierno Lula en América Latina). *Patria Grande*, 1 (9).

Luchetti, J. (2012). La Unión de Naciones Sudamericanas como instancia de diálogo político regional. En R. Bernal-Meza y S.V. Quintanar (Eds.) *Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa, China* (pp. 285-300). Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.

Luxemburg, R. (1913). *La acumulación del capital*. Barcelona, España: Edicions Internacionals Sedov.

Maciel, D. (2008). *De Sarney a Collor: reformas políticas, democratização e crise (1985-1990)* (Tesis de Doctorado). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Brasil.

Manzanal, M. (2007). Territorio, poder e instituciones. Una perspectiva crítica sobre la construcción del territorio. En M. Manzanal, M. Arqueros y B. Nussbaumer (Comps.) *Territorios en construcción. Actores, tramas y gobiernos: entre la cooperación y el conflicto* (pp. 15-50). Buenos Aires, Argentina: CICCUS.

Marini, R.M. (1969). *Subdesarrollo y revolución*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Marini, R.M. (1971). El subimperialismo brasileño. *Documento de Trabajo*. Centro de Estudios Socio-económicos, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Chile. Santiago de Chile.

Marini, R.M. (1977). La acumulación capitalista mundial y el subimperialismo. *Cuadernos Políticos*, 12.

Marini, R.M. (1978). Las razones del neodesarrollismo (respuesta a F. H. Cardoso y J. Serra). *Revista Mexicana de Sociología*, 40, 57-106.

Marini, R.M. (1992). *América Latina: dependência e integração*. San Pablo, Brasil: Brasil Urgente.

Marini, R.M. (1993). Los caminos de la integración. En R.M. Marini *América Latina: integración y democracia* (pp. 87-120). Caracas, Venezuela: Editorial Nueva Sociedad.

Marco, L. (2004). El imperialismo colectivo desarrolla un proyecto concreto de los Estados Unidos: el control militar del planeta. *Rebelión*. Recuperado de http://www.rebelion.org/noticia.php?id=9313

Martínez Allier, J. (2004). Los conflictos ecológico-distributivos y los indicadores de sustentabilidad. *Revibec: revista iberoamericana de economía ecológica*, 1, 21-30.

Martínez Alier, J. (2008). Conflictos ecológicos y lenguajes de valoración. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*, 26, 24-34.

Martins, C.E. (2013). El pensamiento de Ruy Mauro Marini y su actualidad para las ciencias sociales. *Argumentos*, 26 (72), 31-54.

Massey, D. (1993). Power-geometry and a progressive sense of place. En J. Bird, B. Curtis, T. Putnam, G. Robertson and L. Tickner *Mapping the futures* (pp. 59-69). Londres, Reino Unido: Routledge.

Mastronardi, R. (2015). *Plano Brasil Maior: Análise de Medidas de Redução do Custo de Fatores de Produção, Capital e Comércio Exterior* (Tesis de Grado). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.

Melé, P. (2016). ¿Qué producen los conflictos urbanos?. En F. Carrión y J. Erazo (Coords.) *El derecho a la ciudad en América Latina. Visiones desde la política* (127-157). México D.F., México: PUEC-UNAM, International development research center y IDRC/CRDI.

Merlinsky, G.; Toledo López, V.; Schmidt, M.; Fernández Bouzo, S.; Tobías, M. Langbehn, L.; Pereira, P. y Capalbo, T. (2018). *Defender lo común: qué podemos aprender de los conflictos ambientales*. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires.

López, R. (2012). Nuevo instrumento de regionalismo sudamericano. Resultados de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). En R. Bernal-Meza y S.V. Quintanar (Eds.) *Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa, China* (pp. 217-239). Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.

Medizábal, N. (2006). Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. En I. Vasilachis de Gialdino (Coord.) *Estrategias de investigación cualitativa* (pp. 65-106). Barcelona, España: Gedisa.

Merlinsky, G. (2015). Los conflictos ambientales y el debate público sobre el desarrollo en Argentina. *Ciencia e Investigación*, 65 (3), 5-17.

Merlinsky, G.; Toledo López, V.; Schmidt, M.; Fernández Bouzo, S.; Tobías, M.; Langbehn, L.; Pereira, P. y Capalbo, T. (2018). *Defender lo común: qué podemos aprender de los conflictos ambientales*. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires.

Míguez, P. (2010). El debate contemporáneo sobre el Estado en la teoría marxista: su relación con el desarrollo y la crisis del capitalismo. *Estudios Sociológicos*, XXVIII (84), 643-689.

Míguez, P. (2017). Capital global, Integración regional y Estados Nacionales en el siglo XX. Más allá de las teorías del Imperialismo y de las Relaciones Internacionales. *Revista Estado y Políticas Públicas*, 8, 41-57.

Milani, J.R.S; Echart Muñoz, E.; Duarte, R. de S. y Klein, M. (2014). *Atlas da política externa brasileira*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Molina, S.; Cerdas Veja, G.; Jarrín Hildalgo, S.; Torres, V. y Rivasplata Cabrera, F. (2015). *De IIRSA a COSIPLAN: Cambios y continuidades*. La Paz, Bolivia: Coalición Regional.

Morasso, C.M. (2013). Los intereses de Sudáfrica como BRIC. Revista Conjuntura Austral, 4 (18), 11-26.

Motta Veiga, P., Rios, S. (2007). O regionalismo post-liberal na América do Sul: origens, iniciativas e dilema. *CEPAL, Serie Comercio Internacional*, 82, 3-48.

Observatorio de la Deuda en la Globalización. (2012). *Impunidad S.A. Herramientas de reflexión sobre los "súper derechos" y los "súper poderes" del capital corporativo*. Barcelona, España: ODG.

O'Donnell, G. (2001). Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política. *Isonomía*, 14, 7-31.

Oliveira, F. (2003). *A Crítica da Razão Dualista. O ornitorrinco*. San Pablo, Brasil: Boitempo.

Oliver, L. (2009). *El Estado ampliado en Brasil y México. Radiografía del poder, las luchas ciudadanas y los movimientos sociales*. México D.F., México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Oliver, L. (2018). Ciclos de Estado y ecuación Estado-sociedad civil en Brasil y México. En H. Ouviña y M. Thwaites Rey (Comps.) *Estados en disputa: auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina* (pp. 265-299). Buenos Aires, Argentina: El Colectivo.

Organización Latinoamericana de Energía. (2016). *Fortalecimiento de la Integración Energética subregional y mejora del acceso a los mercados de energía*. Buenos Aires, Argentina: Organización Latinoamericana de Energía.

Ortega Reyna, J. y Pimmer, S. (2010). Movimientos sociales en el Estado ampliado. Una lectura desde Gramsci. *Sociológica*, 25 (72), 185-199.

Osorio, J. (2007a). Entre la explotación redoblada y la actualidad de la revolución: América Latina hoy. *Argumentos*, 20 (54), 11-34.

Osorio, J. (2007b). América Latina, entre la explotación y la actualidad de la revolución. *Herramienta*, 35.

Osorio, J. (2009). *Explotación redoblada y actualidad de la revolución. Refundación societal, rearticulación popular y nuevo autoritarismo*. México D.F., México: Itaca y Universidad Autónoma Metropolitana.

Osorio, J. (2014). *Estado, reproducción del capital y lucha de clases. La unidad económica/política del capital*. México D.F., México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Osorio, J. (2015). El sistema-mundo de Wallerstein y su transformación. Una lectura crítica. *Argumentos*, 28 (77), 131-153.

Padula, R. (2014). Da IIRSA ao COSIPLAN da UNASUL: a integração de infraestrutura na América do Sul nos anos 2000 e suas perspectivas de mudança. En W.A. Desiderá Neto (Org.) *O Brasil e novas dimensões da integração regional* (pp. 291-351). Rio de Janeiro, Brasil: Ipea.

Palacios, E.; Sabatino, J. y Villalba, V. (2013). *Movimientos socio-ambientales y lucha social en torno a la instalación de la represa Garabí en Misiones* (Trabajo Final del Seminario de Investigación "Pobreza, hábitat y gestión ambiental"). Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Palermo, V. (2004). Brasil. El gobierno de Lula y el PT. *Nueva Sociedad*, 192.

Pase, H.L.; Da Rocha, H.J.; Dos Santos, E.R.; y Dupuy Patella, A.P. (2016). The sociopolitical conflict in hydroelectric enterprises. *Ambiente & Sociedade*, 19 (2), 45-66.

Pasquariello Mariano, K.L. (2015). *Regionalismo na América do Sul: um novo esquema de análise e a experiência do Mercosul*. San Pablo, Brasil: Cultura Acadêmica.

Paulino, L. (2020). Las relaciones Brasil-China en el Siglo XXI. *Relaciones Internacionales*, 29 (59), 156-180.

Pedreira Campos, P.H. (2009). As origens da internacionalização das empresas de engenharia brasileiras. En Instituto Rosa Luxemburg Stifung *Empresas transnacionais brasileiras na América Latina: um debate necessário* (pp. 103-114). San Pablo, Brasil: Expressão Popular.

Pereira, A.W. (2012). Continuity is not lack of Change. *Critical Sociology*, 38 (6), 777–787.

Pereira Carneiro, C. y Meneghetti Bruhn, M. (2017). *Brasil y la integración sudamericana*. Madrid, España: Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo.

Petras, J. (2014). The foundation of the US Empire: axes of evil. *La Haine* [Mensaje en un blog]. Recuperado de https://petras.lahaine.org/foundation-of-the-us-empire-axes-of-evil/

Pimmer, S. (2016). La autonomía relativa en la periferia: reflexiones en torno al Estado en la obra de Nicos Poulantzas, René Zavaleta y Luis Tapia. *De Raíz Diversa*, 3 (6), 157-185.

Piovani, J.I. (2007). La entrevista en profundidad. En A. Marradi, N. Archenti y J.I. Piovani *Metodología de las Ciencias Sociales* (pp. 215-226). Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.

Porto Gonçalves, C.W. (2003). A geograficidade do social; uma contribuçao para o debate metodológico sobre estudios de conflicto e movimentos sociais na América Latina. En J. Seoane (Comp.) *Movimientos Sociales y Conflicto em América Latina* (pp. 126-134). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Poulantzas, N. (1978). *Poder político y clases sociales en el Estado Capitalista*. México D.F., México: Siglo XXI.

Poulantzas, N. (1977). *Las clases sociales en el capitalismo actual*. México D.F., México: Siglo XXI.

Poulantzas, N. (1979). *Estado, poder y socialismo*. Buenos Aires, Argentina: Siglo XXI.

Prado Jr., C. (1987). *Evolução política do Brasil*. San Pablo, Brasil: Brasiliense.

Prebisch, R. (1949). *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*. Santiago de Chile, Chile: CEPAL.

Prieto, C. y Monedero, J.C. (26 de abril de 2017). La renovación del pensamiento de Gramsci: entrevista con Bob Jessop. *Público.es*. Recuperado de https://www.publico.es/opinion/renovacion-pensamiento-gramsci-entrevista-bob.html

Pulido, L. (1996). Introduction: Enviromental Racism. *Urban Geography*, 17 (5), 377-379.

Quintanar, S.V. (2012). Convergencias y divergencias en las estrategias de integración y cooperación energética regionales de Venezuela y Brasil. En R. Bernal-Meza y S.V. Quintanar (Eds.) *Regionalismo y orden mundial: Suramérica, Europa, China* (pp. 241-283). Buenos Aires, Argentina: Grupo Editor Latinoamericano.

Rada Aragol, Y. (2014). *El capitalismo dependiente: una propuesta teórica latinoamericana*. Caracas, Venezuela: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos.

Ramanzini Júnior, H.; Fuccille, L.A. y Ribeiro de Almeida, R.A. (2014). O Brasil e integração sul-americana: a UNASUL e as novas dimensões da integração. 38ª Encontro Anual da ANPOCS. Encuentro realizado en Caxambu, Brasil.

Riggirozzi, P. y Tussie, D. (2018). Claves para leer al regionalismo sudamericano: fortaleciendo el estado, regulando el mercado, gestionando autonomía. *Perspectivas, Revista de Ciencias Sociales*, 3 (5), 6-21.

Ríos Vera, J.L. (2018). Tres etapas del golpe 'blando' en Brasil. Hacia una rearticulación social del capital. *Revista de Ciencias Sociales*, 31 (43), 183-204.

Rodríguez, M.L. y Bertalot, F. (2018). La situación energética argentina: herramientas para el debate en las organizaciones populares. En F. Gutiérrez y D. di Risio (comps.) *Soberanía energética, propuestas y debates desde el campo popular* (pp. 19-53). Buenos Aires, Argentina: Ediciones del Jinete Insomne. Rodríguez-Olórtegui, M. (2018). *Propuesta estratégica para el licenciamiento social: caso central hidroeléctrica Inambari* (Tesis de grado). Universidad de Piura, Piura, Perú.

Rodríguez Wallenius, C.A. (2019). Proyectos campesinos desde las luchas socioterritoriales en México. En G. Espinosa Damián y A. Meza Velarde (Comps.), *Reconfiguraciones socioterritoriales. Entre el despojo capitalista y las Resistencias Comunitarias* (pp. 23-38). Xochimilco, México: Mundos rurales, Universidad Autónoma Metropolitana y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Romegialli, M. y Luchetti, J. (2016). La exportación de electricidad peruana a Brasil: la seguridad energética de Perú comprometida. *VIII Congreso de Relaciones Internacionales*. Congreso realizado en La Plata, Argentina.

Rozas, P. y Sánchez, R. (2004). *Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual*. Santiago, Chile: CEPAL.

Sader, E. (1999). Brasil: una historia de pactos entre elites. En A. Borón, J. Gambina y N. Minsburg (Comps.) *Tiempos violentos. Neoliberalismo, globalización y desigualdad en América Latina* (pp. 66-73). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Saggioro Garcia, A.E. (2012). *A internacionalização de empresas brasileiras durante o governo Lula: uma análise crítica da relação entre capital e Estado no Brasil contemporáneo* (Tesis de Doctorado). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Brasil.

Samuels, D. (2004). Las bases del PT: ideología versus personalismo en su apoyo electoral. *América Latina Hoy*, 37, 63-80.

Sanahuja, J.A. (2011). Multilateralismo y regionalismo en clave suramericana: el caso de UNASUR. *Revista Pensamiento Propio*, 16 (33), 115-158.

Sanahuja, J.A. (2012). Post-liberal regionalism in South America: The case of UNASUR. *EUI Working Papers*.

Sanahuja, J.A. (2015). Los desafíos de la teoría crítica de las relaciones internacionales. En C. del Arenal y J.A. Sanahuja (Coords.) *Teorías de las relaciones internacionales* (pp. 157-188). Madrid, España: Tecnos.

Santandreu, A. y Gudynas, E. (1998). *Ciudadanía en movimiento. Participación y conflictos ambientales*. Montevideo, Uruguay: FESUR, CLAES y Trilce.

Santiso, J. (2007). *The Emergence of Latin Multinationals*. Frankfurt: Deutsche Bank Research.

Santos, M. (1986). *Espacio y método*. Barcelona, España: Geocrítica.

Santos, M. (1993). Los espacios de la globalización. En *Anales de Geografía de la Universidad Complutense Nro. 13* (pp. 69-77). Madrid, España: Editorial Complutense.

Santos, M. (1996). *Metamorfosis del espacio habitado*. Barcelona, España: Editorial Oikos-Tau.

Santos Pinho, C.E. (2013). Cooperación Sur-Sur para el desarrollo: las relaciones Brasil-África en la promoción de las políticas públicas (2003-2012). *América Latina Hoy*, 63, 91-112.

Sassen, S. (2004). El Estado y la ciudad global: notas para una concepción de gobierno localmente concentrado. En S. Sassen *Los espectros de la globalización* (pp. 219-243). Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Económica.

Sautu, R. (2001). Acerca de qué es y no es investigación científica en Ciencias Sociales. En C. Weinerman y R. Sautu (Comps.) *La trastienda de la investigación* (pp. 181-197). Ciudad de Buenos Aires, Argentina: Ediciones Lumiere.

Scheibner Zimmermann, M. (2015). *Impactos socioambientais do Complexo Hidrelétrico Garabi-Panambi no Município de Porto Mauá/RS* (Tesis de Grado). Universidade Regional do Noroeste do Rio Grande do Sul, Río Grande do Sul, Brasil.

Schulz, J.S. (2020). Diez Años del BRICS: crisis de hegemonía occidental y construcción de un orden mundial multipolar. *Revista tempo do mundo*, 22, 189-216.

Schutte, G.R. (2012). Neodesenvolvimentismo e a busca de uma nova inserção internacional. *Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais*, 1 (2), 61-97.

Sennes, R. (2010). Un nuevo presidente para un mismo Brasil. *Política Exterior*, 24 (138), 118-30.

Serbin, A. (2011): Regionalismo y soberanía nacional en América Latina: los nuevos desafíos. En F. Rojas Aravena (Ed.) *América Latina y el Caribe: Multilateralismo vs soberanía* (pp. 49-98). Buenos Aires, Argentina: Teseo y FLACSO.

Serra Vega, J. (2010). *Inambari: La urgencia de una discusión seria y nacional. Pros y contras de un proyecto hidroeléctrico*. Santiago de Surcos, Perú: Pronaturaleza.

Serra Vega, J. (2011). *Inambari. La urgencia de una discusión seria y nacional. Pros y contras de un proyecto hidroeléctrico*. Lima, Perú: Pronaturaleza.

Simón González, M.Á. (2004). *Más allá de las mesas separadas: el desarrollo del concepto de Autonomía Política en las tradiciones estructuralista y pluralista contemporáneas* (Tesis de Doctorado). Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

Sorj, B. y Fausto, S. (2013). Brasil: actor geopolítico regional y global. En B. Sorj, y S. Fausto (Orgs.) Brasil y América Latina: ¿qué liderazgo es posible? (pp. 23-68). Buenos Aires, Argentina: Plataforma Democrática.

Sotero, P. (2013). *Brazil and the BRICS: A space for relevance and reform of an obsolete world order – But the country has yet to develop a BRICS strategy*. Washington, Estados Unidos: Wilson Center.

Stoessel, S. (2017). *Estado y representación política durante el ciclo postneoliberal: el vínculo entre poder gubernamental y transportistas en Argentina, Bolivia y Ecuador* (Tesis de Doctorado). Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

Suzigan, W. y Furtado, J. (2006). Política industrial y desarrollo. *Revista de la CEPAL*, 89, 75-91.

Svampa, M. (2008). *Cambio de época. Movimientos sociales y poder político*. Buenos Aires Argentina: Siglo XXI.

Svampa, M. y Viale, E. (2014). *Maldesarrollo: la Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires, Argentina: Katz editores.

Tavares Almeida, M.H. (1995). O sindicato no Brasil: novos problemas, velhas estruturas. *Debate e crítica*, 6.

Therborn, G. (2012). *El mundo. Una guía para principiantes*. Madrid, España: Alianza.

Thwaites Rey, M. (2004). *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*. Buenos Aires, Argentina: Prometeo.

Thwaites Rey, M. (2010). Después de la globalización neoliberal. ¿Qué Estado en América Latina?. *OSAL*, 27, 19-62.

Thwaites Rey, M. y Ouviña, H. (2012). La estatalidad latinoamericana revisitada. Reflexiones e hipótesis alrededor del problema del poder político y las transiciones. En M. Thwaites Rey *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas* (pp. 51-92). Santiago de Chile, Chile: Editorial Arcis y CLACSO. ´

Tilly, C. (2002). Repertorios de acción contestataria en Gran Bretaña: 1758-1834. En M. Traugott (Comp.) *Protesta social. Repertorios y ciclos de la acción colectiva*. Barcelona, España: Editorial Hacer.

Tokichen Tricot, V. (2012). Movimiento de estudiantes en Chile: Repertorios de acción colectiva ¿algo nuevo?. *Revista F@ro*, 15.

Torres, F. (2011). Territorio y lugar: Potencialidades para el análisis de la constitución de sujetos políticos: El caso de un movimiento de desocupados en Argentina. *Geograficando*, 7 (7), 209-238.

Traspadini, R. (2017). Breve genealogía del capitalismo dependiente latinoamericano: la superexplotación como combustible del neodesarrollismo. En M. Féliz y M.O. Pinassi (Comps.) *La farsa neodesarrollista y las alternativas populares en América Latina y el Caribe* (pp. 15-31). Buenos Aires, Argentina: Herramienta.

Tussie, D. y Riggirozzi. P. (Eds.). (2012). The Rise of Posthegemonic Regionalism. Springer Netherlands.

Tussie, D. y Trucco. P. (2010). *Nación y región en América del Sur. Los actores nacionales y la economía política de la integración sudamericana*. Buenos Aires: Teseo.

Valladão de Carvalho, M.I. (2010). Condicionantes internacionais e domésticos: O Brasil e o G-20 nas negociações agrícolas da Rodada Doha. *Dados - Revista de Ciências Sociais*, 53 (2), 405-445.

Valverde Da Silva, A.L. (2016). El golpe militar brasileño y su herencia en los problemas sociales del país. *Revista F@ro*, 2 (24), 85 a 110.

Vasilachis de Gialdino, I. (2006). Prólogo. En I. Vasilachis de Gialdino (Coord.) *Estrategias de investigación cualtitativa* (pp. 17-22). Barcelona, España: Gedisa.

Väyrynen, R. y Herrera, L. (2014). Subimperialism: from dependence to subordination. *Instant Research on Peace and Violence*, 5 (3), 165-177.

Vigevani, T. y Passini Mariano, M. (2005). A ALCA e a política externa brasileira. *Cadernos CEDEC*, 74.

Vigevani, T. y Ramanzini Júnior, H. (2011). The Impact of Domestic Politics and International Changes on the Brazilian Perception of Regional Integration. *Latin American Politics and Society*, 53 (1), 125–55.

Visentini, P.F. (2013). *A projeção internacional do Brasil 1930-2012*. Rio de Janeiro, Brasil: Elsevier.

Vitelli, M. (2015). La identidad estratégica de Brasil: polític de defensa para un jugador global. *Colombia internacional*, 85. Recuperado de https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.7440/colombiaint85.2015.05

Vuyk, C. (2013). *Subimperialismo brasilero y dependencia paraguaya: análisis de la situación actual*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Wallerstein, I. (2004). *World-systems analysis. An introduction*. Durham, Inglaterra: Duke University Press.

Wallerstein, I. (2012). *Capitalismo histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis de sistemas-mundo*. Madrid, España: Akal.

Walter, M. (2009). Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental...Reflexionando sobre enfoques y definiciones. *Boletín ECOS*, 6.

Wegner, R.C. (2018). Integração e desenvolvimento econômico: estratégias de financiamentodo investimento de infraestrutura sul-americana. *Economia e Sociedade*, 3 (64), 909-938.

Zanini, F. (2017). *Euforia e fracaso do Brasil grande. Política externa e multinacionais brasileiras na era Lula*. San Pablo, Brasil: Contexto.

Zavaleta, R. (2009). Problemas de la determinación dependiente y la forma primordial. En R. Zavaleta Mercado *La autodeterminación de las masas* (pp. 291-320). Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Zeolla, N.H. y Telechea, J.M. (2014). El pensamiento económico latinoamericano del desarrollo y la industrialización: estructuralistas y neoestructuralistas ¿giro o actualización?. *Revista del CCC*, 8 (21).

Zibechi, R. (2006). IIRSA: la integración a la medida de los mercados. *Revista Ecología Política*, 31, 19-25.
Zibechi, R. (2012). *Brasil potencia. Entre la integración regional y un nuevo imperialismo*. Bogotá, Colombia: Ediciones Desde Abajo.
Ziebell de Oliveira, G. (2015). Política africana do Brasil: mudança entre Lula e Dilma?. *Conjuntura Austral*, 6 (29), 33-47.

OTROS DOCUMENTOS

ABDI, BNDES, Ministerio de Hacienda, y Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio. (2008). *Política de Desenvolvimento Produtivo. Inovar e investur para sustentar o crescimento*. Brasilia, Brasil: ABDI, BNDES, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio.
BID. (2000). *Un nuevo impulso a la integración de la infraestructura regional en América del Sur*.
BNDES. (2004). *Integração da América do Sul: o BNDES como agente da política externa brasileira*.
CAF. (2003). *Financiamiento privado de infraestructura*.
CECLA. (1969). *Consenso Latinoamericano de Viña del Mar*.
CEPAL. (1994). *El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad*. Santiago, Chile: CEPAL.
CEPAL. (2015). *Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe, 2015. Pactos para la igualdad territorial*. Santiago, Chile: CEPAL.
CNI. (2002). *A indústria e o Brasil: uma agenda para o crescimento*. Brasilia, Brasil: CNI.
CNT. (2014). *Boletim Estatístico*. Brasilia, Brasil: Confederação do Transporte Nacional.
Egevix. (2010). *Central Hidroeléctrica Inambari – Estudio de factibilidad – 2ª etapa*.
FIESP. (2012). *Carga Extra na Indústria Brasileira*. San Pablo, Brasil: FIESP.
FIESP. (2014). *Plano Brasil Maior: resultados e obstáculos à Política Industrial Brasileira*. San Pablo, Brasil: FIESP.
IBAMA. (2013). *Processos Licenciamento Ambiental Garabi*. Brasilia, Brasil: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.
IIRSA. (2011). *IIRSA 10 años después: sus logros y desafíos*. Buenos Aires, Argentina: BID-INTAL.

IIRSA-COSIPLAN. (2016a). *Caracterización socioeconómica y ambiental. Eje Perú, Brasil, Bolivia*.
IIRSA-COSIPLAN. (2016b). *Caracterización socioeconómica y ambiental. Eje Mercosur-Chile*.
IIRSA-COSIPLAN. (2017). *Cartera de Proyectos 2017*.
Ministerio de Energía y Minas. (2007). Elaboración de resúmenes ejecutivos y fichas de estudios de las Centrales hidroeléctricas con potencial para la exportación a Brasil. Lima, Perú: Ministerio de Energía y Minas.